



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

United Nations Convention against Corruption

Self-assessment Name: Argentina check list 2do ciclo

Country: Argentina

Date of creation: 22/10/2019

Assessor: Ecuador y Sudán

Assessor Position: xx

Release: 3.0.0.0

Comments:

Completed self-assessment checklists should be sent to:

Corruption and Economic Crime Section
Division for Treaty Affairs
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
PO Box 500
1400 Vienna, Austria

Attn: KAMBERSKA Natasha

Telephone: + (43) (1) 26060-4293
Telefax: + (43) (1) 26060-74293
E-mail: uncacselfassessment@unodc.org

A. Disposiciones generales

A. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales

Coordinador

Oficina Anticorrupción de la Nación. Presidencia de la Nación

Instituciones consultadas

Organismos consultados:

- Oficina Anticorrupción de la Nación - Presidencia de la Nación
- Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Decomisados - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Sindicatura General de la Nación
- Secretaría de Asuntos Políticos Ministerio del Interior Obras públicas y Vivienda,
- Dirección General de Cooperación Regional e Internacional - Procuración General de la Nación
- Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes - Procuración General de la Nación
- Defensoría General del Ministerio Público
- Consejo de la Magistratura de la Nación
- Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
- Agencia de Acceso a la Información Pública
- Secretaría de Empleo Público
- Secretaría de Innovación Pública - (ex Secretaría de Gobierno de Modernización)
- Unidad de Información Financiera
- Banco Central de la República Argentina
- Dirección Nacional de Sumarios Administrativos - Procuración del Tesoro de la Nación
- Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de Jefatura de Gabinete de Ministros
- Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
- Dirección de Consejería Legal Ministerio de Relaciones Exteriores Y Culto

Proporcione información sobre el proceso de ratificación/aceptación/

La República Argentina, a través de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ha trabajado intensamente en las negociaciones y en la redacción definitiva del texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ver, en este sentido, las tareas desarrolladas por la OA en su página web, www.argentina.gob.ar/anticorrupcion ingresando en “actuación internacional” / “ONU” o, asimismo, en “informes de gestión”). En Diciembre de 2003, 140 países - incluyendo la República Argentina - firmaron en la ciudad de Mérida, México, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En el año 2005 el Poder Ejecutivo envió al Honorable Senado de la Nación el Proyecto de aprobación legislativa del texto de la Convención, habiéndose tratado y aprobado en dicha cámara en el mes de noviembre de ese mismo año. La OA impulsó su ratificación en la Cámara de Diputados y colaboró asimismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la organización del Seminario Regional de Alto Nivel para la Ratificación e Implementación del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevó a cabo del 7 al 9 de diciembre de 2005.

Dicho proyecto fue sancionado como Ley Nº 26.097 el 10 de mayo de 2006, previa concurrencia e informe del Titular de la Oficina Anticorrupción a las Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados a las que había sido girado el proyecto.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm>

Describa brevemente el sistema jurídico e institucional de su país.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO - INSTITUCIONAL:

El sistema jurídico - institucional argentino, de acuerdo con su ordenamiento constitucional.

La República Argentina ha adoptado en su Constitución Nacional (CN) la forma representativa, republicana de Gobierno, y la forma Federal para la organización del Estado (artículo 1º CN). Como consecuencia de esto último, coexisten un Gobierno Federal y 24 distritos, éstos últimos integrados por 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el nivel del gobierno federal, existe un régimen presidencialista con una clásica división de poderes entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), un Poder Legislativo bicameral (PL), integrado por una Cámara de Diputados y otra de Senadores, y un Poder Judicial (PJ).

La Constitución Nacional distribuye una serie de competencias entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Provinciales, dejando en mano de estos últimos todo el poder que no haya sido delegado al Gobierno Federal (artículos 121 y 126 CN). El Poder Legislativo de la Nación es el encargado de dictar las leyes generales de la Nación (Códigos Civil, Comercial, Penal, Legislación Laboral, y otros temas que son competencia del Gobierno Federal), que rigen en todo el territorio del país, mientras

que la legislación de forma o procesal, y temas propios de las Provincias, son de competencia de los Gobiernos Provinciales.

Asimismo, el PEN interviene en la formación y sanción de Leyes, al otorgarle la Constitución el poder de veto, tanto total como parcial, con el consiguiente reenvío a las Cámaras Legislativas para la reconsideración de las propuestas legislativas que no hayan sido promulgadas.

En el ámbito del Poder Legislativo se encuentra la Auditoría General de la Nación, que tiene a su cargo el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos (artículo 85 CN) y la Defensoría del Pueblo, cuya misión es la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía tutelados por la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes contra hechos, actos u omisiones de la Administración (artículo 86 CN).

El Poder Ejecutivo tiene facultades para dictar reglamentos o decretos de carácter delegado -en aquellas materias de administración o de emergencia pública que expresamente le delegue el Congreso (artículo 76 CN) o por necesidad y urgencia - cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos (artículo 99, inciso 3 CN). Estos Decretos son materialmente normas generales, aunque se las pueda considerar normas inferiores a las leyes.

El PEN también tiene facultades de dictar los Decretos Reglamentarios que sean necesarios para la ejecución de las Leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (artículo 99, inciso 2 CN), y Decretos de carácter autónomo, que rigen únicamente dentro del ámbito del PEN, y que el Presidente los dicta en su carácter de responsable político de la Administración del país (artículo 99, inciso 1).

Con relación al lugar que ocupan los Tratados Internacionales en el orden jerárquico normativo se debe señalar que existe un bloque de legislación federal, superior al ordenamiento normativo de los Gobiernos Provinciales, constituido de la siguiente manera:

1. Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional (artículos 31 y 75, inciso 22 CN)
2. Tratados Internacionales sin jerarquía constitucional, inclusive los de integración regional y las normas dictadas en su consecuencia -en este nivel se ubica la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)- (artículos 31 y 75 incisos 22 y 24 CN).
3. Leyes del Congreso de la Nación (artículos 31 y 75 incisos 22 y 24 CN)
4. Decretos Delegados del Poder Ejecutivo de la Nación (artículo 76 CN)
5. Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo de la Nación (artículo 99, inciso 3 CN).

El Presidente de la Nación cumple las funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y responsable político de la administración del país y Jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 99, inciso 1 y 12 CN). Por debajo de él, existen en la actualidad 20 Ministerios y una Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas áreas de competencia son

dispuestas por Ley del Congreso de la Nación. En el ámbito de la Administración Pública Nacional, por debajo de la estructura de los Ministerios, existen numerosos organismos de carácter administrativo que integran el denominado Sector Público Nacional (artículo 8 de la Ley Nº 24.156) y que llevan adelante la gestión, administración y control de gobierno.

En cuanto al Poder Judicial de la Nación, éste tiene como misión dirimir conflictos que se suscitan en causas judiciales y custodiar la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad de las leyes es ejercido de manera difusa, por todos los jueces de la Nación, inclusive los jueces provinciales. Sus decisiones sobre la constitucionalidad de una norma no tiene efectos derogatorios de aquélla, sino que sus decisiones afectan únicamente a las partes en el litigio.

Ligados al Poder Judicial, se encuentran el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (artículos 114 y 115 CN). El Consejo tiene por función primordial la intervención en el proceso de selección de los candidatos a jueces inferiores de la Nación, la administración del Poder Judicial, y las facultades disciplinarias y de acusación de los jueces, esto último ante el Jurado de Enjuiciamiento recién mencionado, que tiene por misión el juzgamiento en los procesos de remoción de jueces inferiores nacionales.

Asimismo, existe un Ministerio Público integrado por la Procuración General y la Defensoría General que tiene por función promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (artículo 120 CN).

BREVE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PENAL ARGENTINO:

Tal como se describe anteriormente, la República Argentina está organizada territorialmente de acuerdo a un esquema federal de gobierno, donde las provincias que la componen se reservan todos aquellos poderes no expresamente delegados al gobierno nacional (art. 121 CN). Una nota característica del régimen federal argentino es que el establecimiento de los delitos y las penas corresponde al Congreso Nacional, quedando reservada su aplicación, mediante el dictado de los códigos de procedimiento, a las autoridades provinciales (art. 75, inc. 12 CN).

Esto significa que cada provincia habrá de establecer la manera en que se hará efectiva la persecución y el juzgamiento por los delitos previstos en el Capítulo III de esta Convención, sobre todo porque los casos de corrupción que involucran a autoridades provinciales no afectan intereses federales. Una mención especial corresponde hacer en relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mientras continúe siendo Capital Federal, tiene asegurada su autonomía en cuanto al juzgamiento de algunos delitos leves, aunque la persecución de los delitos contra la Administración Pública de incidencia local, continúa a cargo de jueces nacionales con competencia local.

Sin perjuicio de profundizarse algunos aspectos en el análisis que se efectuará a continuación, a nivel federal, los delitos abarcados por esta Convención son juzgados por jueces y fiscales federales, que tienen su asiento no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también se encuentran distribuidos a lo largo del territorio del país.

La investigación de estos delitos se inicia por denuncia, tanto de organismos públicos como de particulares, en cuyo caso debe existir una actividad de impulso por parte del Ministerio Público Fiscal -a través de los fiscales que lo componen- que es el titular de la acción pública que nace del delito, y sin cuyo requerimiento no es posible que el juez dé inicio a un proceso por esta clase de delitos. También los procesos penales pueden iniciarse por la actividad preventiva de las fuerzas de seguridad, pero no es algo usual en los delitos englobados dentro del fenómeno de la corrupción.

Nuestro sistema procesal federal prevé que el juez de instrucción sea el director del proceso quien a tal efecto puede llevar adelante aquellas medidas que estime conducentes para el descubrimiento de la verdad (allanamientos, intervenciones telefónicas, pedidos de informes, etc.). Éste puede, a su criterio, delegar en los fiscales la investigación de estos delitos, pudiendo reasumir su investigación cuando lo estime conveniente.

En casos de delitos, pudiendo reasumir su investigación cuando lo estime conveniente. En casos de corrupción administrativa existe un organismo dentro del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que también lleva adelante investigaciones relativas a hechos de corrupción y subsidiariamente puede intervenir en aquellos procesos en donde el fiscal interviniente estime que no existe mérito para continuar la investigación.

Por otro lado, nuestro sistema procesal admite que el particular damnificado por el delito pueda constituirse como parte querellante en el proceso, sugiriendo medidas o apelando aquellas decisiones que no le sean favorables, pudiendo asumir tal rol tanto el organismo público afectado por el caso de corrupción en concreto, como la Oficina Anticorrupción, organismo especializado en este tipo de casos, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Una vez llevada adelante la investigación del delito, cuando el fiscal o el juez estimen que existen motivos suficientes para vincular a una persona a un hecho delictivo, será el juez quien citará al o los imputados para que brinden explicaciones sobre el caso, en el marco de una declaración indagatoria. Una vez escuchados, y sin perjuicio de evacuar sus citas o llevar adelante las medidas de prueba que a tal efecto se propongan, el juez deberá resolver su situación procesal, disponiendo su auto de procesamiento, que será dictado cuando existan elementos de convicción suficientes que permitan vincular a esa o esas personas a un delito determinado. Este llamado auto de procesamiento también podrá disponer la prisión preventiva del imputado, cuando existan elementos de juicio que hagan presumir que intentará evadir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Si no existen pruebas o el hecho imputado no constituye delito, el juez podrá sobreseer en la causa o, si dispone la realización de medidas de prueba, disponer su falta de mérito para procesar o sobreseer.

Contra dicha decisión, y de acuerdo a lo resuelto, tanto el imputado como el fiscal pueden interponer recurso de apelación, que será resuelto por las distintas Cámaras Federales de Apelaciones del país.

La conclusión de la etapa preliminar de investigación es efectuada cuando el juez de instrucción estima que la investigación está completa, y remita las actuaciones al fiscal del caso, o a la parte querellante en su caso, a los efectos de que formulen

requerimiento de elevación a juicio. Posteriormente la defensa del imputado puede oponerse a ello, quedando la decisión final a cargo del juez instructor.

El juzgamiento propiamente dicho de estos delitos está a cargo de los tribunales orales federales, compuestos por tres magistrados, en donde actúan fiscales específicos que intervienen en esta etapa y la querrela si ha asumido ese rol. Luego de la celebración de un juicio oral y público, y siempre y cuando el fiscal o la querrela formulen una acusación, estos tribunales tendrán la última palabra respecto de la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. Contra la decisión que absuelva o condene a una persona, podrá interponerse recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, que es un tribunal colegiado dividido en cuatro salas establecido para revisar las decisiones de dichos tribunales y es la máxima instancia de interpretación de las leyes criminales a nivel federal de nuestro país. Solamente cuando se encuentre controvertida de manera directa la interpretación de la Constitución, tratados internacionales o leyes federales, podrá interponerse recurso extraordinario federal, a los efectos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación conozca en esos asuntos y establezca la interpretación final de las cláusulas de dichas normas decidiendo el caso sometido a su consideración.

En una comunicación aparte dirigida y enviada por correo electrónico a la secretaría (uncac.cop@unodc.org), proporcione una lista de leyes, políticas y/o demás medidas pertinentes que se citen en las respuestas a la lista de verificación para la autoevaluación junto con un hipervínculo a cada documento, en caso de que esté disponible en línea, así como resúmenes de esos documentos, si procede. En el caso de los documentos que no están disponibles en línea, incluya los textos correspondientes y, si procede, los resúmenes de esos documentos como anexo del correo electrónico. En caso de estar disponibles, proporcione asimismo un vínculo a toda versión de esos documentos en otros idiomas de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso) o los textos pertinentes. Una vez que termine su autoevaluación, vuelva a esta pregunta y asegúrese de que todas las leyes, políticas y/o demás medidas que haya citado en la autoevaluación aparecen en la lista.

Documento con la lista de leyes, políticas y/o demás medidas pertinentes es enviada en comunicacion aparte, tal como se solicita.

Proporcione un hipervínculo o una copia de toda evaluación disponible de las medidas de lucha contra la corrupción y de los mecanismos para el examen de la aplicación de esas medidas que su país haya puesto en práctica y que desee compartir como buenas prácticas.

●Actuación internacional de la Oficina Anticorrupción:
www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/actuacion-internacional

●Mecanismo de Seguimiento de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)

En el marco de las reuniones del Comité de Expertos de MESICIC, la República Argentina presentó durante 3 años consecutivos (2017 - 2019) ejemplos de buenas prácticas:

-2019: Plan Nacional anticorrupción(2019-2023):
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/bp2019_sem2_arg_ppt.pdf // ANEXO
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 1.
Institución: Nombre de la institución que está

-2018: Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos y Registro de Viajes de

Funcionarios Públicos Financiados por Terceros

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/bp2018_arg_form_prevsob.pdf

-2017: Compras y Contrataciones Públicas. Durante 2017 la OA presentó el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones (COMPR.AR) en el marco de los Temas de Interés Colectivo del Mecanismo. El sistema COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.

Informes MESICIC:

*Rondas 1 a 5: disponibles en

<http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/documentos.html>

*Informes de avance país <http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/paises-pais.html?c=Argentina>

•Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales

Informe presentado por Argentina sobre el progreso en la implementación de las recomendaciones del Reporte Fase 3 bis que evalúa la implementación de la Convención de la OCDE sobre la lucha contra el soborno transnacional.
www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Argentina-3bis-follow-up-report-Eng.pdf

•Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina

Producto del acuerdo firmado entre la Oficina Anticorrupción y la OCDE se confeccionó el "Estudio de OCDE sobre Integridad en la Argentina: Lograr un cambio sistemático y sostenido" (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018_0.pdf), que fue publicado en 2019. Dicho acuerdo contemplaba la realización de una fase de monitoreo que dio comienzo en el mes de octubre de 2020, para lo cual se llevó a cabo un proceso de entrevistas virtuales con los responsables de los organismos que tienen a su cargo la implementación de dichas recomendaciones. Como resultado de este proceso, la OCDE elaborará un "Informe de seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina" que será publicado en la web del Organismo.

•Grupo de los Veinte (G20)

Compendios de buenas prácticas y documentos de trabajo con participación/iniciativa Argentina:

-2017: COMPENDIUM OF GOOD PRACTICES ON THE USE OF OPEN DATA FOR ANTI-CORRUPTION

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/g20_acwg-oecd_compendium_on_open_data.pdf //

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/grupo-trabajo-g20>

-2018: G20 HIGH-LEVEL PRINCIPLES FOR PREVENTING AND MANAGING CONFLICT OF INTEREST IN THE PUBLIC SECTOR

www.argentina.gob.ar/sites/default/files/adopted_hlps_on_coi.pdf //

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/grupo-trabajo-g20>

-2019: G20 COMPENDIUM OF GOOD PRACTICES FOR PROMOTING INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_g20_compendium_of_good_practices_for_promoting_integrity_and_transparency_in_infrastructure_development.pdf

-2020: G20 GOOD PRACTICES COMPENDIUM ON COMBATING CORRUPTION IN THE RESPONSE TO COVID-19

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/grupo-trabajo-g20>

G20 HIGH-LEVEL PRINCIPLES FOR PROMOTING PUBLIC SECTOR INTEGRITY THROUGH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICT)
<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/grupo-trabajo-g20>

Proporcione la información relacionada con la preparación de sus respuestas a la lista de verificación para la autoevaluación.

El 14 de noviembre de 2017 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tuvo lugar el Taller sobre Convenciones Internacionales de lucha contra la Corrupción organizado por la Oficina Anticorrupción para representantes de diversos organismos públicos. Este taller se focalizó en la descripción de las Convenciones Internacionales ratificadas por nuestro país y frente a las cuales tenemos obligaciones internacionales que cumplir en materia de investigación, control y sanción de la corrupción y sus respectivos mecanismos de seguimiento. Dicha actividad permitió a todos los funcionarios participantes el acceso a información detallada y especializada sobre estos instrumentos y su nivel de implementación, a fin de garantizar un mayor y mejor cumplimiento de los mismos.

Por otro lado, en el mes de agosto de 2018 la Oficina Anticorrupción llevó a cabo dos talleres de sensibilización con los organismos involucrados en el presente proceso de evaluación. El objetivo fue que pudieran contar con toda la información necesaria sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento a la hora de avanzar con el proceso de respuestas que tenían a su cargo, según estuvieran involucrados en los artículos de los Capítulos 2 y/o 5, en evaluación.

En particular, el 22 de agosto se realizó la reunión informativa sobre el **Capítulo 5: Recupero de activos**, de la cual participaron funcionarios de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y la Dirección General de Consejería Legal (DICOL) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Dirección de Bienes Decomisados y la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia; la Dirección de Recuperación de activos y Decomiso de bienes del Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Fiscal (UIF); la Procuraduría General de la Nación (PGN); Consejo de la Magistratura, el sector de

Informaciones y Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina.

Por su parte el 23 de agosto se realizó el segundo taller, en este caso sobre el **Capítulo 2: Medidas preventivas**. En esta ocasión, el espacio fue compartido con los siguientes organismos: SIGEN, la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Procuración del tesoro de la Nación, la Oficina Nacional de Contrataciones y la entonces Secretaría de Fortalecimiento Institucional, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Además, se compartió documentación de utilidad para que pudieran responder el formulario de autoevaluación: el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, una Guía Legislativa, una Guía Técnica y una Guía Orientativa (con información relevante para la elaboración de las respuestas al checklist).

Por último, del 17 al 20 de abril de 2018, en la ciudad de Panamá, tuvo lugar el curso de capacitación para los enlaces y los expertos gubernamentales que participarían en el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El curso de capacitación abarcó los aspectos sustantivos y metodológicos del proceso de examen. Además, durante éste los participantes pudieron familiarizarse con la metodología del examen, la versión revisada de la lista de verificación para la autoevaluación y compartir experiencias sobre cómo fortalecer estrategias de prevención y control de la corrupción.

Durante el transcurso del año 2019, se continuó relevando información de varios organismos públicos de los tres poderes. A partir del mes de diciembre ocurrió en la Argentina un cambio de administración y una consecuente modificación en varias estructuras que conforman el mapa del estado, sumado a las modificaciones en las prioridades estratégicas y de varios organismos.

A esta situación se sumó que en marzo de 2020, debido a la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud del Covid-19, que alcanzó al mundo entero con consecuencias todavía impredecibles, el trabajo de recolección y actualización se vio ralentizado, afectando la preparación del presente informe y postergando algunos plazos. Ante la situación de emergencia sanitaria y en virtud del **Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020** -y sus prórrogas- que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO); la Acordada 4/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inhábiles los días 16 a 31 de marzo; la Acordada 6/20 del Alto Tribunal que dispuso la feria extraordinaria para todos los tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación; la que fue prorrogada mediante Acordadas 8/2020 y 10/2020.

De todos modos, cabe señalar que en el marco de esta situación de emergencia, se implementaron acciones para para retomar gradualmente el contacto con organismos cuya labor está alcanzada por las disposiciones de la Convención en pos de finalizar el registro de sus implementaciones.

Describe tres prácticas que considere buenas prácticas en la aplicación de los capítulos de la Convención que son objeto de examen.

En relación al Capítulo II. Medidas Preventivas se describen las siguientes:

- A partir de diciembre de 2019, la Oficina Anticorrupción se planteó hacer foco en la prevención de la corrupción, posicionándose como organismo de consulta y referencia para la implementación de políticas de transparencia y en la construcción transversal de una gestión transparente y participativa. En este sentido, la transversalización de la transparencia en todo el Estado Nacional surgió como uno de los objetivos fundamentales de la Oficina, esto es, que se convierta en un atributo en todos los espacios en los que se tomen decisiones, se implementen políticas y se gestionen recursos. A estos fines, se destacan las siguientes acciones:

- Reestructuración del Plan Nacional Anticorrupción contemplando los cambios institucionales, sociales y económicos e incorporando una mirada estratégica sobre los desafíos futuros con instancias de medición claras y precisas. Tomando como antecedente el Plan Nacional Anticorrupción se está desarrollando una Estrategia Nacional de Integridad que privilegiará una visión integral, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos de ilícitos contra la administración pública.
- Fortalecimiento de la Red Nacional de Enlaces y Áreas de Integridad (Decreto 659/2019). En la actualidad, cuentan con Enlace de Integridad la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los 20 Ministerios del Gobierno Nacional. Por su parte, de los 174 organismos descentralizados que conforman la administración nacional (excluyendo a la Oficina Anticorrupción) 109 han designado un enlace propio, mientras que 15 “comparten” enlace con otro organismo de la misma Jurisdicción. En total, 146 organismos cuentan con un referente sobre la temática. Vale aclarar que a octubre de 2019 tan solo 65 organismos tenían designado enlace de integridad.
- Desarrollo de una serie de recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia por el COVID-19. A través de la Resolución 5/20, se aprobó un conjunto de buenas prácticas que surgen del análisis de varios procesos de contrataciones públicas. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-32057444-apn-oapte_-_recomendaciones.pdf. En línea con esas recomendaciones, se realizaron además talleres virtuales para fomentar su aplicación. Asimismo, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, se publicaron las compras y contrataciones en el marco de la emergencia por COVID-19 en formatos abiertos. Experiencia similar se dio en el Ministerio de Transporte, con la publicación de las compras y contrataciones gestionadas en emergencia.
- Publicación de la “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública” (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyep_-_septiembre_2020.pdf) es el resultado de un trabajo en conjunto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGEP), que tiene el objetivo de fortalecer una cultura organizacional basada en la integridad, ética pública y transparencia en la Administración Pública Nacional. Esta Guía contiene definiciones breves y prácticas, a efectos de que los y las agentes del Estado Nacional puedan aplicar estas normas en la gestión cotidiana.
- Publicación de la “Guía para la Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Integridad y Transparencia en Jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales”

(<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-51883774-apn-ssiyt-oa.pdf>). El documento recorre experiencias sobre integridad y transparencia de organismos estatales en los tres niveles, y repasa las funciones que pueden desarrollar estas áreas (programas de capacitación, control de declaraciones juradas, normativas sobre compras y contrataciones). El Poder Ejecutivo Nacional, en la actualidad, cuenta con 24 áreas de Integridad y Transparencia. Las 6 que se encuentran en la administración centralizada fueron creadas desde diciembre de 2019 y otras 4 se encuentran en formación. Asimismo, hay un total de 14 organismos que poseen programas de integridad.

-Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: que insta por políticas de prevención y prevención de la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas implementen Programas de Integridad. Con el fin de fomentar la colaboración entre el sector privado y el sector público en la prevención e investigación de la corrupción, se elaboraron los “Lineamientos de Integridad para el Mejor Cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas” :

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_para_la_implementacion.pdf (aprobados por Resolución N° 27/2018). También se desarrolló una Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_pymes.pdf, la cual constituye un paquete de herramientas que busca brindar a esas empresas consejos e instrumentos prácticos para que puedan analizar en qué medida cuentan con programas de integridad adecuados con relación a sus riesgos, dimensión y capacidad económica; o bien para que incorporen programas nuevos o mejoren los existentes.

-La Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y protección de los datos personales; fortaleciendo los mecanismos en materia de prevención y control de la corrupción.

-En lo que respecta a cooperación internacional, se coordinó la participación en procesos de cooperación internacional para el recupero de activos (Iniciativa StAR del Banco Mundial).

-En los esfuerzos que del Ministerio Público Fiscal de la Nación para incrementar la eficiencia de las investigaciones de criminalidad compleja y el dictado de resoluciones específicas en materia de investigación patrimonial y de inmovilización temprana de activos, se publicó la “Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos” en el marco de su función orientada a impulsar una política activa tendiente a identificar, localizar, cautelar y decomisar bienes y fondos ilícitos. Esta guía se presenta como una herramienta de trabajo con el objetivo de desplegar las particularidades de la etapa del recupero de activos vinculada con la adopción temprana de medidas cautelares destinadas a asegurar bienes durante el proceso penal, a la vez que se incorpora en el documento un análisis teórico y práctico de los múltiples desafíos que importa esta crucial etapa de la estrategia de recupero.

Describa (cite y resuma) las medidas que debería adoptar su país, si procede, al igual que el plazo correspondiente, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de los capítulos de la Convención que son objeto de examen, e indique en concreto a qué artículos de la Convención se refieren esas medidas.

-Aprobación de un proyecto de reforma integral de la Ley de Ética, con el objeto de adecuar sus disposiciones a los nuevos tiempos y tecnologías, procurando mejorar las herramientas destinadas a prevenir infracciones éticas o malas conductas que puedan derivar en hechos de corrupción.

-Coordinación interinstitucional en la formulación de políticas preventivas de la corrupción con municipios y provincias de Argentina.

Los puntos mencionados se plantean como una labor a desarrollarse en los próximos 18 meses y refieren al *Artículo 5 (Políticas y prácticas de prevención de la corrupción)*, como estrategias generales en el marco de la formulación y aplicación de políticas y prácticas de prevención de la corrupción.

-Además, se identificó la necesidad de coordinación con organismos de control conformando un espacio interinstitucional que permita avanzar en la aplicación, supervisión y difusión de las políticas preventivas de la corrupción y de integridad. Este punto se refiere al *Artículo 6 (Órgano u órganos de prevención de la corrupción)* y su ejecución se visualiza en el plazo de 12 meses, durante 2021.

II. Medidas preventivas

5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

2. Párrafo 1 del artículo 5

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tomando como antecedente el Plan Nacional Anticorrupción, la Argentina se encuentra desarrollando una nueva Estrategia Nacional de Integridad, con el fin de construir un estado transparente, abierto y participativo; desde un enfoque estructural y con una mirada integral; que incluya el carácter federal del país; que defienda el interés público y el patrimonio del Estado; con apego a los derechos de todos sus ciudadanos.

Dicha Estrategia se propone fortalecer las capacidades estatales para mejorar la posibilidad de respuesta y poner el Estado al servicio de un proyecto de desarrollo con justicia social, a través de una gestión estratégica, eficaz y transparente para resolver las demandas de los ciudadanos. La ética de la solidaridad o el carácter federal de las políticas son aspectos que aparecen como prioridades de la gestión a las cuales debe incorporarse la profundización de la democracia y la transparencia.

Para ello, la Argentina considera necesario construir instituciones fuertes y efectivas; desarrollando márgenes de autonomía de la decisión pública y preservando el interés común ante los intereses particulares; incorporando la dimensión ética al modelo de gestión pública. También, se orienta a consolidar políticas públicas que promuevan la transparencia e integridad en la relación entre el sector público y privado.

Teniendo en cuenta estos propósitos, las agencias del Poder Ejecutivo Nacional implementan diversas líneas de acción, proyectos e iniciativas, muchas de ellas de alcance transversal a toda la administración, tales como:

-Decreto N° 54/19, le otorgó a la Oficina Anticorrupción mayor jerarquía institucional concediéndole carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación. Asimismo, el artículo 2° elevó el rango y jerarquía del titular de la Oficina Anticorrupción equiparándolo al de Ministro y estableció que gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional, manteniendo su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta nueva normativa, la

Oficina Anticorrupción adquirió mayor independencia para ejecutar sus funciones, pudiendo, entre otras cuestiones, elaborar su propio Plan de Acción y dictar su reglamento interno sin requerir la aprobación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, requisito necesario antes de la sanción del mencionado Decreto.

Complementariamente, el Decreto 885/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 13 de noviembre de 2020, aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Oficina Anticorrupción. Dicha normativa modificó la estructura aprobada mediante la Decisión Administrativa N° 312/18, por la cual se crearon las Direcciones Nacionales y simples y las Coordinaciones existentes, y crea la Dirección de Asuntos Jurídicos.

-Plan Nacional Anticorrupción - Decreto 258/19 - Estrategia Nacional de Integridad: iniciativa del gobierno nacional, elaborada y coordinada por la Oficina Anticorrupción (OA) y la actual Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de Jefatura de Gabinete, a fin de planificar coordinada y estratégicamente las políticas en materia de integridad y lucha contra la corrupción de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, a ser implementadas en el próximo quinquenio. Consolida los objetivos prioritarios planteados por el Poder Ejecutivo Nacional en línea con las Convenciones Internacionales contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero de la ONU, la OEA y la OCDE. Actualmente, se está trabajando en la actualización y fortalecimiento del Plan Nacional Anticorrupción. Dicha labor, coordinada por la OA y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, se desarrolla junto al Consejo Asesor y organismos especializados en la temática con el fin de fortalecer la transversalización de las políticas de transparencia contemplando los cambios ocurridos a nivel institucional sobre la administración pública nacional así como también aquellos sucedidos a nivel social y económico, especialmente frente al actual y futuro escenario de pandemia mundial. Fortalecer algunas variables del Plan implicará arribar a una Estrategia Nacional de Integridad articulada con todos los sectores y organismos, a partir de la revisión de las iniciativas en función de la nueva realidad institucional contemplando incorporar medidas que atiendan los desafíos existentes. Para ello, se desarrolló una nueva metodología que permite establecer criterios, elaborar indicadores de impacto y plazos de cumplimiento que faciliten su seguimiento y monitoreo por parte de la ciudadanía. Asimismo, entre las principales acciones a realizar se encuentran la necesidad de reforzar el Consejo Asesor Ad-Honorem, de modo que refleje una representación de diversos sectores, con perspectiva federal y de género, acorde a lo establecido en la Resolución 21/2019 que le da origen.

-La Resolución 20/2020 establece que “El CONSEJO estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con interés y/o reconocida trayectoria en la temática. Se procurará una representación equilibrada de cada uno de estos sectores y que exista diversidad federal y de género en la integración del CONSEJO. En el caso de las personas jurídicas, se les requerirá que designen una persona para que las represente en el CONSEJO, la que deberá tener facultades suficientes para decidir en nombre de la institución, y un suplente para el caso de que el representante titular deba ser reemplazado. Se invitará a participar de las reuniones del CONSEJO a los organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en materia de control, transparencia y/o lucha contra la corrupción”. Además, la OA, en coordinación con la

SFI, podrá incorporar nuevos miembros al Consejo.

-Proyecto de Ley de Ética Pública: proyecto de reforma integral de la Ley de Ética, con el objeto de adecuar sus disposiciones a los nuevos tiempos y tecnologías, procurando mejorar las herramientas destinadas a prevenir infracciones éticas o malas conductas que puedan derivar en hechos de corrupción. Este proyecto es el resultado de un proceso de elaboración participativo y consensuado y contó con diversas instancias de participación pública. Actualmente, en virtud de la pandemia por COVID-19, el proyecto perdió estado parlamentario. La Oficina Anticorrupción se encuentra trabajando en un nuevo proyecto en base a su antecedente, que incorpore nuevos fenómenos ocurridos en los últimos años, tales como la puerta giratoria y la captura de la decisión pública, contemplando siempre la perspectiva de derechos humanos y género. Asimismo, incluirá instancias de participación pública propiciando un consenso más amplio.

-Estudio sobre Integridad en Argentina de la OCDE: con el propósito de contribuir a la consolidación de un diagnóstico certero y un análisis de áreas de riesgo en el sector público, la OCDE realizó el “Estudio sobre Integridad en Argentina: Lograr un cambio sistémico y sostenido” el que sirve de insumo para el diseño de estrategias generales y políticas públicas. Desde el mes de octubre de 2020 se está llevando adelante la fase de monitoreo relacionada con la implementación de las recomendaciones efectuadas en el mencionado estudio.

-Ley 27.401: Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017. Busca prevenir la corrupción a través de la implementación de programas de integridad y permite sancionar a las empresas por delitos de corrupción, estableciendo la posibilidad de lograr acuerdos con las empresas a cambio de información que permita identificar a las personas físicas que cometieron los delitos. Según datos obtenidos del Sistema COMPR.AR de bienes y servicios, entre febrero y septiembre de 2019, más de 150 empresas declararon tener Programa de Integridad en 100 procedimientos de contratación. Asimismo, en el Sistema CONTRAT.AR de obra pública, para el mismo período, más de 30 empresas declararon tener Programa de Integridad en 15 procedimientos.

-Decreto N° 277/2018: normas reglamentarias para la adecuada implementación de las previsiones de los artículos 22, 23 y 24 de la citada Ley N° 27.401.

-Lineamientos de Integridad para el Mejor Cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: aprobado por la Resolución 27/2018 de la OA

-Decreto 93/18: prohibición de designación de personas con algún vínculo de parentesco con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

-Ley 27.275 - Ley de Acceso a la Información Pública: el 29 de septiembre de 2017 entró en vigencia la ley de Acceso a la Información Pública que estableció, como órgano garante de la correcta aplicación de la norma en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

-Ley 27.304 - Ley del Arrepentido: sancionada en octubre de 2016, aplica para casos

de corrupción y permite reducir la pena a aquellas personas que participaron de un determinado delito, pero que dan información importante para la causa, permitiendo agilizar la investigación. Tanto la elaboración de la Ley del Arrepentido, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, junto a otras, fueron el resultado de procesos de consulta pública en la que participaron instituciones y expertos de diversos sectores de la sociedad y el gobierno.

-Nuevas herramientas de investigación para delitos complejos: Ley 27.319 (Ley del Informante-Cooperador), Ley 27.308 (Ley de unificación de los fueros de instrucción criminal), Ley 27.272 (procedimiento para casos de flagrancia) Ley 27.307 (Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico; facilitar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los delitos más complejos).

-Decreto 117/16 - Apertura de Datos: instruye a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, a elaborar y presentar un "Plan de Apertura de Datos", que contiene los activos de datos bajo jurisdicción. El mencionado Decreto N° 117/16 crea el "Portal Nacional de Datos Públicos" a través del cual las distintas jurisdicciones y secretarías publican en formato abierto la información allí detallada.

-Normativas para la simplificación y desburocratización: Ley N° 27.444 (para el desarrollo productivo de la Nación), Ley N° 27.445 (para el desarrollo de la infraestructura), Ley N° 27.446 (simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional. Establece, entre otras medidas, la validez probatoria de los documentos oficiales firmados digitalmente en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica (GDE) y en el Sistema de Administración de Documentación Electrónica (SADE), Decreto N°891/17 (buenas Prácticas en materia de Simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones).

-Sistema electrónico de compras y contrataciones COMPR.AR y CONTRAT.AR: Argentina ha diseñado y puesto en marcha nuevos desarrollos digitales que aceleran los procedimientos y tiempos en que estos procesos se han manejado y resuelto. Dichos desarrollos no solo simplificaron los tiempos de administración y los hicieron más eficientes, sino que también hicieron transparente las operaciones entre el gobierno y otras entidades privadas, y proporcionaron a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil herramientas para controlar estos procesos, reduciendo la existencia de irregularidades y la corrupción.

-Plan Nacional de Gobierno Abierto: el Plan es impulsado por el gobierno nacional y contiene iniciativas de apertura estatal vinculadas a la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación y uso de las tecnologías. El III Plan de Acción Nacional se elaboró a partir del trabajo colaborativo liderado por el equipo de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (ex Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización), junto a organizaciones de la sociedad civil y con la participación de los tres poderes del Estado. Se formularon 44 compromisos de reforma que resultaron del trabajo en conjunto entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos de control externo. El

IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2021 está conformado por 18 compromisos que buscan desarrollar políticas transformadoras para solucionar problemáticas concretas de agenda pública. Los compromisos son resultado de un proceso de cocreación entre gobierno y sociedad civil y serán implementados por instituciones nacionales en un plazo de 3 años, con prórrogas consensuadas producto de la pandemia del COVID-19. Además, el Plan cuenta con un anexo por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con recomendaciones para transversalizar la perspectiva de género y diversidad en la implementación de los compromisos (disponible a partir de octubre del 2020).

Link a la web: <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/plangobiernoabierto>.

Link al documento del Cuarto Plan:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

-Declaraciones Juradas Abiertas: las declaraciones juradas se encuentran publicadas en la web de la OA y en el Portal Nacional de Datos Públicos, correspondientes al período comprendido entre los años 2012 al 2018. Las mismas se publican en formato abierto y de libre disponibilidad.

-Decreto N° 1179/16 - Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos: todas las personas que desempeñan una función pública tienen la obligación de registrar cualquier obsequio que reciban por sus funciones (siempre que esté permitido por la ley) y también los viajes financiados por cualquier persona que no sea el Estado Nacional (terceros). Ambos registros son públicos y se puede acceder a ellos a través del sitio web de la OA, desde el portal Datos Abiertos de la Secretaría de Innovación Pública y también a través de la sección “Transparencia Activa” de las páginas de cada organismo público. Desde su implementación, se han registrado más de 3.800 obsequios y 550 viajes financiados por terceros.

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/obsequiosyviajes>

-Decreto 201/17: procedimiento especial de representación del Estado en juicio, con directa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y recaudos adicionales de transparencia, para los casos en que pudiera existir un conflicto de intereses potencial o aparente, por la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que suscite dudas en la ciudadanía sobre la debida gestión de los intereses del Estado. Su autoridad de aplicación es la Procuración del Tesoro de la Nación.

-Decreto 202/17: procedimiento especial aplicable a las contrataciones públicas o al otorgamiento licencias, permisos, autorizaciones, habilitaciones o derechos reales sobre bienes de dominio público o privado del Estado del Sector Público Nacional, en los que también pudiera existir un conflicto de intereses potencial o aparente por la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo -o las autoridades de rango inferior a Ministro con competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto-. La Oficina Anticorrupción publica el listado de casos en que los organismos obligados informaron la recepción de declaraciones juradas de intereses que expresan la existencia de alguno de los vínculos enunciados en el Decreto, y de aquellos otros supuestos en los que -por decisión del organismo que tramita un expediente determinado- se aplican los mecanismos de integridad y transparencia previstos en el artículo 4 de la norma aunque no se haya declarado un

vínculo de los allí mencionados. Desde la entrada en vigor del Decreto, a principios de 2017 a Octubre de 2020, la OA dictaminó sobre un total de 62 casos de vinculación informados y en 12 consultas sobre interpretación de esta normativa. <https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/decretos-de-gestion-de-conflictos-de-intereses/casos-informados>

-Difusión de normas éticas: con el objetivo de difundir y concientizar a funcionarios y a la ciudadanía sobre las pautas que rigen la función pública, se diseñó y difundió material gráfico que permitió una difusión amigable y masiva de las normas éticas, lo que fue acompañado por acciones de sensibilización que otorgaron mayor visibilidad y conciencia acerca de la relevancia de las cuestiones de integridad y transparencia en la función pública.

-Capacitación: La OA capacitó a más de 18.000 funcionarios y empleados públicos entre 2016 y octubre 2020. Lo hizo a través de distintas modalidades y en variadas temáticas. Incluso, varios de sus expertos fueron invitados a capacitar a otros funcionarios públicos en provincias y en el extranjero.

-Simulador de Conflictos de Intereses: A fin de fomentar la autoevaluación de los funcionarios en la detección de situaciones actuales o potenciales de conflictos de intereses, se desarrolló e implementó un Simulador de conflicto de intereses, de consulta a través de la web de la Oficina Anticorrupción (accediendo al link: http://simulador.anticorrupcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1). Desde su implementación en abril de 2017, se registraron más de 9100 consultas al Simulador de Conflictos de Intereses. Todos los años se publica un mensaje pop up en el Sistema de Gestión Electrónica para que más de 300.000 usuarios conozcan su existencia y hagan uso de la herramienta.

-Red Nacional de Enlaces y Áreas de Integridad (Decreto 659/2019): Creación de un espacio de intercambio técnico para el desarrollo de políticas orientadas a la prevención y control de la corrupción. Su finalidad es la promoción de estándares internacionales, el intercambio de buenas prácticas y experiencias, el fomento de la comunicación en el ámbito nacional e internacional de los avances y desafíos que tiene la República Argentina. Procura el intercambio y la articulación entre la OA y todos los organismos de la administración pública nacional. Incluye además a las Empresas con participación Estatal mayoritaria. Por primera vez, la OA comenzó a trabajar con las empresas del Estado como sector específico, y articuló -en conjunto con Jefatura de Gabinete de Ministros- una agenda de trabajo concreta sobre integridad con las EPEs.

-“Guía para la Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Integridad y Transparencia en Jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales”. Contribuye a la transversalización de la transparencia en la gestión pública aportando recursos y herramientas que faciliten el diseño e implementación de una política integral de transparencia en el ámbito nacional, provincial y municipal. El documento recorre las distintas experiencias de organismos- tanto nacionales como provinciales y municipales- dedicados a la integridad y transparencia. También hace un repaso de todas las funciones que puede desarrollar un área de transparencia, como los programas de capacitación, el control de declaraciones juradas o la normativa sobre compras y contrataciones. La Guía fue publicada mediante la Resolución 16/2020 y se encuentra disponible en <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020->

-Creación de Direcciones de Integridad y Transparencia en el marco del nuevo organigrama de la Administración Pública. El objetivo de estas áreas, creadas al interior de varios ministerios de la línea en el transcurso del año 2020, es ejercer como enlace, dentro del ámbito de su competencia, en materia de integridad y ética en el ejercicio de la función pública; brindar asistencia y promover internamente la aplicación de la normativa vigente, en línea con lo dispuesto por la Oficina Anticorrupción.

-"Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública": herramienta de difusión, sintética y práctica, de los principales deberes, incompatibilidades y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la Guía, desarrollada a mediados de 2020, brinda información sobre el régimen de conflicto de intereses y de declaraciones juradas, los registros de viajes, obsequios y audiencias de gestión de intereses, los principios rectores para compras y contrataciones, y los lineamientos sobre publicidad de información pública, entre otros. El material fue diseñado por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y la Oficina Anticorrupción, en el marco de la articulación de acciones para el mejor desarrollo de políticas públicas en materia de integridad y transparencia.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyep_-_septiembre_2020.pdf

-Federalización de las políticas de integridad para promover la creación de políticas públicas vinculadas a la transparencia en el ámbito provincial y municipal, ofreciendo herramientas de capacitación y asistencia técnica. La Oficina Anticorrupción (OA), con el apoyo de la Cancillería argentina y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), relanzó en julio de 2020 la ejecución del proyecto de cooperación para la implementación de políticas de transparencia y control de la corrupción en conjunto con gobiernos subnacionales. Como acciones principales, el proyecto desarrollará propuestas de asistencia técnica, provisión de herramientas y programas de capacitación para la implementación de iniciativas sobre integridad en el ámbito local. Asimismo tiene entre sus objetivos promover y acompañar políticas de transparencia en la gestión de la emergencia establecida en virtud de la pandemia provocada por el COVID-19. Todo el proyecto será ejecutado con perspectiva de género y considerando el impacto que pueda tener la corrupción en el ámbito de los derechos humanos.

-Formulación de recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas efectuadas en el marco de la emergencia por COVID-19 con el fin de robustecer la integridad en cada espacio institucional. En el marco de la emergencia sanitaria, la Oficina Anticorrupción desarrolló una serie de recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia por el COVID-19. A través de la Resolución 5/20, se aprobaron y difundieron un conjunto de buenas prácticas que surgen del análisis de varios procesos de contrataciones públicas.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-32057444-apn-oapte_-_recomendaciones.pdf

-Establecimiento de una mesa de trabajo interinstitucional entre la Oficina

Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Secretaría de Gestión y Empleo Público y la Secretaría de Innovación Pública. La finalidad es lograr sinergias, desarrollar, implementar, promover y controlar buenas prácticas y recomendaciones en materia de integridad y prevención de la corrupción hacia el interior del Estado.

-Mejora de la publicidad y la participación ciudadana de la nueva plataforma diseñada por el Ministerio de Obras Públicas con el fin de otorgar mayor visibilidad a las obras efectuadas en el marco de la emergencia por COVID19. Se realizaron mejoras a la plataforma que contiene información clave sobre las principales obras de infraestructura en todo el país (Mapa Interactivo), y específicamente en el módulo "COVID-19", donde se incorporaron los datos sobre las obras de infraestructura sanitarias en desarrollo y efectuadas. Este tablero de seguimiento y control del desarrollo de las inversiones del Ministerio permite seguir en tiempo real la conformación del presupuesto y la obra. Se focalizó en materia de acceso a datos abiertos y en la participación social en la gestión pública, con el objetivo de mejorar la construcción de políticas preventivas para evitar la corrupción.
<https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#mapaObras>

-Publicación en formato abierto en el Ministerio de Salud de las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia por COVID-19. Con el objetivo de mejorar la transparencia y permitir la participación ciudadana, el Ministerio de Salud, en un trabajo conjunto con la Oficina Anticorrupción (OA), publicó las compras y contrataciones en el marco de la emergencia por COVID-19 en formatos abiertos. Este modo de publicación permite la reutilización de los datos por parte de terceros, fomentando la participación y la apertura a toda la ciudadanía interesada en realizar un seguimiento de los recursos de la Administración Pública Nacional. Este hito en la transversalización y articulación de políticas públicas muestra el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Salud de la Nación, la OA y la totalidad Estado, no sólo para garantizar la prestación de los servicios en el medio de una pandemia mundial, sino también para rendir cuentas ante sus ciudadanos poniendo a su disposición los datos abiertos para el control de los recursos públicos y haciéndolos así parte de las políticas preventivas de la corrupción. <http://datos.salud.gob.ar/dataset/compras-covid-19>.

-Mapa de Acción Estatal: plataforma que describe, integra, sistematiza y grafica la información acerca de los bienes, servicios, inversión pública, regulaciones y transferencias dinerarias que provee el Estado. Fue desarrollada por la Secretaría de Gestión Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decisión Administrativa 1926/2020: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236506/20201026>) . Permite visualizar qué resultados producen estas intervenciones y cómo impactan en la realidad, constituyéndose en un instrumento de planificación, seguimiento y evaluación a medida de cada jurisdicción. Al trabajar sobre el modelo de cadena de valor público permite analizar la acción estatal a fin de mejorar sus procesos y la calidad de la intervención estatal como también integrar la dimensión ética de la gestión pública y sus dispositivos de integridad y transparencia. La plataforma - construida con software libre- proporciona información sobre las políticas públicas de forma dinámica en la web, a la que tendrán acceso -a través de dispositivos diferenciados- tanto las autoridades gubernamentales como la ciudadanía. <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/fortalecimiento-institucional/mapa-de-accion-estatal>.

Asimismo, desde la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión -Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional-, en el marco del proyecto de construcción del Mapa de la Acción Estatal se han relevado en forma continua desde el 15 de marzo de 2020 las medidas implementadas por el Gobierno Nacional en respuesta a la emergencia por COVID-19. Esa información se vuelca en informes quincenales. El último de ellos presenta los datos relevados hasta el 17 de septiembre de 2020 mostrando 169 acciones estatales vinculadas a la emergencia COVID-19. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/relevamiento-de-acciones-estatales-para-enfrentar-el-covid-19>

-EITI: El Consejo del EITI aprobó el 27 de febrero de 2019 la solicitud de Argentina de unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en la reunión celebrada en Kiev, Ucrania. Argentina, la tercera economía en importancia de América Latina, se convierte en el 52º país miembro del EITI. Con la unión de Argentina al EITI, el gobierno se compromete a garantizar la divulgación íntegra de información en toda la cadena de valor de las industrias extractivas, desde la manera en la que se otorgan los derechos de extracción hasta la trayectoria de los ingresos en el gobierno y cómo estos benefician al público. Asimismo, el gobierno se compromete a colaborar con la sociedad civil y el sector para contar con un debate informado sobre el modo en que se gestionan los recursos naturales. De conformidad con el Estándar EITI, Argentina tiene la obligación de publicar su primer Informe EITI en un plazo de 18 meses tras convertirse en país candidato, es decir, en agosto de 2020. Argentina solicitó una versión adaptada del EITI con el fin de tener en cuenta su estructura federal. Cada una de las provincias es propietaria de los recursos naturales de su territorio y está al cargo de su gestión. Las cinco organizaciones de la sociedad civil que forman parte del grupo de multi partícipes de Argentina, son: Fundación Directorio Legislativo, Fundación Cambio Democrático, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de San Martín y CIPPEC.

-Por otra parte, la Secretaría de Innovación Pública coordina la plataforma de Consulta Pública (<https://consultapublica.argentina.gob.ar/>). Esta plataforma es un canal de diálogo y debate que permite la interacción entre el gobierno y la comunidad promoviendo la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Varios proyectos, sobre diferente temáticas e impulsados por distintos organismos, han sido discutidos en esta plataforma.

-Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP): constituye un plan integral de administración de la información de capital humano de los recursos que componen y prestan servicios en las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el ámbito de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Se trata de un ecosistema de Bases de Datos analítico, integrado, detallado, histórico, consistente, flexible y escalable. Fuente única oficial sobre la situación de empleo público nacional. <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/biep>

Medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF):

Asimismo el Ministerio Público Fiscal de la Nación implementó una serie de medidas en orden a garantizar el cumplimiento de esta disposición:

1. Plan de Transparencia Institucional

Este Plan fue adoptado por Resolución en PGN N° 914/13, del 16 de mayo de 2013, con el propósito de promover los principios de transparencia y rendición de cuentas para su actuación.

Para el diseño de este plan de transparencia, se tuvieron en cuenta los estándares derivados de la Convención Interamericana contra la Corrupción (incorporada a nuestra normativa a través de la ley n° 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada en nuestro país por la ley n° 26.097), además de los principios fundamentales emanados de la Constitución Nacional y otros instrumentos internacionales de rango constitucional.

Este plan fue desarrollado en base a cuatro dimensiones: a) el acceso a la información y transparencia; b) la respuesta al ciudadano; c) la relación con la comunidad y, d) la rendición de cuentas, a partir de las cuales se fueron diseñando y ejecutando diversos ejes o programas para el fortalecimiento de la transparencia institucional.

2. Rendición de cuentas

a. Rendición de cuentas a través de los informes de gestión:

Según lo establecen los artículos 6 de la ley 27.148 y 32 de la ley 24.946, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el Procurador General de la Nación, como máxima autoridad del MPF, debe remitir al Congreso de la Nación, por intermedio de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual debe contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la eficiencia del servicio y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras legislativas que éste requiera.

Por Resolución PGN N° 3601/15, se modernizaron y estandarizaron los contenidos que se incluyen en los informes de gestión anual, tanto para agilizar y simplificar la elaboración y carga de la información, como para que luego ellos sean más comprensibles. A efectos de difundir los resultados de su gestión y desempeño, anualmente el MPF publica sus informes en la sección de transparencia activa de su portal institucional (<<https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/informes/>>).

b. Agencia de Acceso a la Información Pública del MPF:

La ley 27.275 (B.O. 29/09/2016) reguló el derecho de acceso a la información pública, en base a los principios de transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.

El Artículo 7, inciso d), de esa ley erigió al MPF como uno de los sujetos obligados a brindar información. Los artículos 19 y siguientes de esa norma dispusieron la creación, para el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

En esa inteligencia, el artículo 28 dispuso que dentro de cada uno de los Poderes

Legislativo y Judicial, y en los Ministerios Públicos, debía crearse una agencia con las mismas funciones y competencias que la Agencia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, los Directores de cada una de ellas debían ser designados mediante un procedimiento de selección abierto, público y transparente, y que garantice la idoneidad del candidato.

Mediante Resolución PGN N° 2757/17, del 29 de septiembre de 2017, se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública del MPF, en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación no Penal, encomendando a la Dirección de Relaciones Institucionales el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. Para el diseño de esta agencia, se tuvo en cuenta que la Ley de Acceso a la Información Pública no sólo consagra el derecho de toda persona a solicitar a las autoridades públicas información de su interés, sino que impone al MPF -entre otros sujetos obligados- el deber de llevar adelante “políticas de transparencia activa”, y con ello la obligación de facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial, de manera clara, esquematizada y entendible para las/los interesadas/os, procurando siempre remover toda barrera que pudiera obstaculizar o dificultar su reutilización por parte de terceros.

La Resolución PGN N° 2757/17, también encomendó a la Secretaría de Coordinación no Penal la realización de un reglamento del procedimiento de acceso a la información y a la Dirección de Relaciones Institucionales la implementación del sitio institucional de Datos Abiertos del MPF.

Asimismo, mediante las resoluciones PGN 2993/17 y 3033/17, se estableció un procedimiento de selección abierto, público y transparente que garantizara la participación social en la evaluación de la idoneidad del candidato, cumpliéndose así con los estándares fijados por la ley. El 17 de mayo de 2018, mediante resolución PGN 53/18, se inició el proceso de designación y se propuso un candidato para desempeñarse como Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del MPF. A los efectos de garantizar una selección abierta, pública y transparente, y asegurar una amplia participación social en la evaluación de la idoneidad del candidato, la Secretaría de Concursos de la Procuración General dio máxima difusión al procedimiento a través de su publicación en el Boletín Oficial, en el periódico de circulación nacional de mayor tirada y en el sitio web institucional, donde además se puso a disposición del público en general el curriculum vitae del candidato propuesto.

Además, el 5 de junio de 2018 se abrió el período de quince (15) días hábiles a fin de que los ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, asociaciones de derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema, pudieran presentar por escrito y de modo fundado y documentado, las adhesiones e impugnaciones que consideraran de interés expresar, con declaración jurada respecto de su propia objetividad con relación a la persona propuesta. En ese período fueron recibidas dos (2) adhesiones y ninguna impugnación.

El 16 de agosto de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública en la sede de la Secretaría de Concursos, la cual fue presidida por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; elevándose el informe final el 5 de septiembre de 2018.

Finalizado ese procedimiento, por Resolución PGN N° 94/18, del 12 de septiembre de 2018, se designó al doctor Carlos Osvaldo ERNST, Fiscal General de la Procuración

General de la Nación, como Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, con funciones revisoras en los términos del artículo 15 de la Ley n° 27.275.

c. Estadísticas.

A través de una adecuada recolección y sistematización de la información, se pretende la identificación de qué intereses están siendo efectivamente resguardados por la labor del MPF; ello, de modo de canalizar los esfuerzos institucionales hacia las contiendas de mayor conflictividad e impacto socio- económico; además de establecerse como un instrumento útil para el control preventivo interno.

A través de la Resolución PGN N° 320/2017, se constituyó al sistema Coirón en la herramienta rectora de gestión de información relativa a casos penales de todas las oficinas fiscales del MPF y dispuso que los datos registrados en Coirón constituirán la base oficial para la toma de decisiones vinculadas a la determinación de carga de trabajo y asignación de recursos, conformación de estadísticas oficiales sobre el desempeño de las dependencias y confección de informes de gestión.

El sistema Coirón cuenta con dos particularidades relevantes para el MPF. Este se encuentra pensado para dar soporte a las investigaciones penales y el litigio en general, permite gestionar información criminal y procesal como base para la toma de decisiones. Por su arquitectura puede ser utilizado como un gestor de expedientes, dando soporte a las tareas diarias y además, facilitar la planificación de los casos. A la vez Coirón constituye una herramienta de investigación, mediante el entrecruzamiento de datos de todos los casos registrados.

Esta resolución también aprueba los criterios para su implementación y su relación con los sistemas informáticos preexistentes, manteniendo el uso obligatorio de éstos para la totalidad de las causas en trámite y para las oficinas fiscales en las que no se haya implementado el nuevo sistema; determinando que, más allá del grado de desarrollo, seguridad y funcionalidades de esas herramientas informáticas, resulta necesaria su progresiva absorción al Coirón, así como la ampliación de éste a materias no penales.

Otro aspecto superador es que Coirón brinda la posibilidad de interactuar con los sistemas de gestión informática de otros organismos (ministerios públicos fiscales provinciales, poder judicial y fuerzas de seguridad).

El MPF viene trabajando con diversos organismos públicos para que su sistema Coirón pueda conectarse operativamente con el Sistema de Gestión Judicial "Lex 100" del Poder Judicial de la Nación; el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, del Ministerio de Seguridad de la Nación; el Registro Nacional de Reincidencia; el Registro Nacional de las Personas; la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros organismos.

Por último, como todo sistema, y por mejor que sea su desarrollo, este nunca resultará efectivo si no se cuenta con una adecuada operación por parte de los usuarios. En ese sentido, además de las capacitaciones que se brindan en el marco del programa de implementación gradual del sistema "Coirón" (Resolución PGN N° 30/18), el 10 de octubre de 2018, el Procurador General de la Nación interino dictó la Resolución PGN N° 104/18, tendiente a reforzar el compromiso de todos los agentes del MPF, recordando la obligatoriedad de dar de alta la totalidad de casos penales, de

conformidad con la Resolución PGN 320/2017, y de registrar los diversos pasos procesales de acuerdo a los términos de las resoluciones PGN 94/2010 y 119/2011.

Asimismo, en el marco del fortalecimiento de la función no penal del Ministerio Público Fiscal, se diseñó un sistema de carga y gestión de los expedientes no penales -SINOPE- a nivel nacional y federal. Este sistema, busca por un lado sistematizar todo el procedimiento de tramitación de los expedientes en las fiscalías para lograr mayor agilidad, acortando los tiempos de tramitación y maximizando los recursos empleados. Esto permitirá que todos los dictámenes que emiten las fiscalías estén disponibles digitalmente, ya sea para realizar búsqueda de antecedentes o para que las partes puedan acceder a ellos vía web. Finalmente, este sistema permitirá construir estadísticas del Ministerio Público Fiscal en la materia no penal. En este punto es preciso aclarar que todos los sistemas de gestión y estadísticas detallados no son de acceso público ni proveen información para la ciudadanía. Sin embargo su importancia radica en que ellas son herramientas necesarias para que el MPF pueda contar con datos adecuados y precisos para brindar una información de mejor calidad al público en general. Sin perjuicio de ello, los responsables de acceso a la información pública del MPF se encuentran trabajando para incorporar en el sitio de transparencia del organismo un apartado dedicado a estadísticas, la que al principio tendrá el acceso a la información estadística de los distintos sistemas y luego pretenderá unificarse en uno solo.

d. Portales del Ministerio Público Fiscal.

Otro de los ejes sobre los que se trabajó en el Plan de Transparencia Institucional, adoptado por Resolución PGN N° 914/13, fue el de brindar mayor información, tanto para los integrantes del MPF, como para representantes del Poder Judicial, otros poderes y la ciudadanía. Así se diseñaron los portales institucionales www.mpf.gob.ar y www.fiscales.gob.ar para comunicar a la población la información relevante sobre la tarea del MPF, mediante un lenguaje audiovisual y escrito ágil, de fácil comprensión y facilitando las oportunidades de acceso a la información de toda la población.

El portal institucional (www.mpf.gob.ar) contiene datos útiles sobre la organización (mapa de acceso a las distintas jurisdicciones, oficinas de la Procuración General de la Nación, unidades y fiscalías), nombres, antecedentes, dependencias y datos para el contacto de los funcionarios, información general y sitios relacionados, estadísticas, llamados a concursos, información de trámites, declaraciones juradas patrimoniales, estado de causas de interés público, información presupuestaria y plataforma de compras y contrataciones. El sitio cuenta también con acceso a una biblioteca virtual que ofrece la consulta de documentos de interés como dictámenes, resoluciones, protocolos, guías, etc.

Por otro lado, el portal de noticias (www.fiscales.gob.ar) está orientado para dar a conocer a la ciudadanía los dictámenes, presentaciones y actividades que en el ejercicio de sus funciones realizan los integrantes del Ministerio Público Fiscal en todo el país.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole

conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

3. Párrafo 2 del artículo 5

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

- La entrada en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm%20>> (sancionada en septiembre de 2016) que establece a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como órgano garante de la correcta aplicación de la ley en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados, hace posible que las personas puedan ejercer un control de los actos públicos.
- Plan Nacional Anticorrupción/ Estrategia Nacional de Integridad: <https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/plan-nacional>
- Documento de trabajo sobre la evaluación del Plan Nacional Anticorrupción (PNA) 2019-2023 y los lineamientos hacia el diseño de la Estrategia Nacional de Integridad: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-la-evaluacion-del-plan-nacional-anticorrupcion-0>
- Consejo Asesor del Plan Nacional Anticorrupción: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oa-amplio-el-consejo-asesor-del-plan-nacional-anticorrupcion> Resolución 20/20
<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2020-83029035-apn-oapte.pdf>
- Procesos de consulta pública sobre proyectos normativos relativos a ética pública e integridad (ver art 13)
- Manual sobre ética pública y conflicto de intereses
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/libro_oa_2.0_v2.pdf)
- Simulador de Conflictos de intereses
(http://simulador.anticorrupcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1)
- Consulta de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos
(<https://www.argentina.gob.ar/declaracionesjuradasdefuncionarios>)
- Estudio de Integridad de OCDE en Argentina:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf

- Monitoreo del Estudio de Integridad de OCDE en Argentina octubre 2020
- “Guía para la Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Integridad y Transparencia en Jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales”:
<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-51883774-apn-ssiyt-oa.pdf>
- “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyep_-_septiembre_2020.pdf
- Mapa de Acción Estatal: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-presento-el-mapa-de-accion-estatal>
- Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP): <https://biep.modernizacion.gob.ar/apps/directorio/>
- Recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas efectuadas en el marco de la emergencia por COVID-19:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-32057444-apn-oapte_-_recomendaciones.pdf

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Informes de gestión sobre la aplicación de estrategias nacionales, políticas y planes contra la corrupción, se pueden encontrar en la página de la Oficina Anticorrupción.

Los informes de gestión de la Oficina Anticorrupción son documentos públicos que describen las actividades, procesos y resultados de esta oficina, encargada de la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional. En cumplimiento de lo previsto en el Capítulo IV del Decreto N° 102/99, los informes de gestión se realizan semestralmente y anualmente, y pueden ser consultados y descargados en la página de internet del organismo, www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/informes-de-gestion.

4. Párrafo 3 del artículo 5

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD:

El Plan Nacional Anticorrupción, aprobado por Decreto 258/19, está conformado por 260 iniciativas que consolidan los objetivos prioritarios planteados por el Poder Ejecutivo Nacional en línea con las Convenciones Internacionales contra la corrupción. Cada una de las iniciativas contemplaba plazos de ejecución para realizar un seguimiento periódico de avance y cumplimiento. Para ello, a través de la Resolución 21/2019 se creó el Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas Incorporadas al PNA: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212330/20190730>, integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia. El Decreto estableció además la creación de un mecanismo de seguimiento público de la implementación de las medidas incorporadas.

La Oficina Anticorrupción se encuentra trabajando en la actualización del Plan Nacional Anticorrupción, de manera de avanzar hacia una Estrategia Nacional de Integridad más amplia que permita fortalecer la transversalización de las políticas de transparencia contemplando los cambios ocurridos a nivel institucional sobre la administración pública nacional así como también aquellos sucedidos a nivel social y económico, especialmente frente al actual y futuro escenario de pandemia. Dicha labor se desarrolla junto al Consejo Asesor y organismos especializados en la temática. Para ello, se encuentra en elaboración una nueva metodología que permitirá establecer criterios, elaborar indicadores de impacto y plazos de cumplimiento que faciliten su seguimiento y monitoreo por parte de la ciudadanía.

La revisión y actualización del PNA para toda la Administración Pública central y descentralizada requiere de una amplia coordinación interinstitucional, razón por la cual se trabaja de manera articulada con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y en particular con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Para ello, se formaron pares metodológicos de ambos organismos que realizaron la revisión de las iniciativas incluidas en el PNA. De las 260 que lo componen, se analizaron 83 cuyo plazo de ejecución correspondía al año 2019 y se clasificaron de acuerdo a su estado (vigentes, en proceso o vencidas). El resto de las iniciativas que integran el Plan fueron analizadas bajo una metodología e indicadores desarrollados a tales fines y de acuerdo a su carácter estratégico e integral. El resultado del trabajo de evaluación desarrollado, así como los lineamientos hacia el diseño de la Estrategia Nacional de

Integridad se publicó en la web del organismo:
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-la-evaluacion-del-plan-nacional-anticorrupcion-0>. El informe narra el proceso de evaluación del Plan Nacional Anticorrupción, detallando el diseño e implementación de herramientas metodológicas para su análisis y ponderación. Además, presenta las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos del Plan en vías al diseño de la Estrategia Nacional de Integridad. Por último, se proponen algunos lineamientos clave para la conformación de la Estrategia Nacional de Integridad de modo tal que brinden una visión integral, federal y plural, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos de ilícitos contra la administración pública.

Asimismo, entre las principales acciones desarrolladas se encuentran el fortalecimiento del Consejo Asesor Ad-Honorem, de modo que refleje una representación de diversos sectores, con perspectiva federal y de género, acorde a lo establecido en la Resolución 21/2019 que le da origen. En este sentido, la Resolución 20/2020 establece que “El CONSEJO estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con interés y/o reconocida trayectoria en la temática. Se procurará una representación equilibrada de cada uno de estos sectores y que exista diversidad federal y de género en la integración del CONSEJO. En el caso de las personas jurídicas, se les requerirá que designen una persona para que las represente en el CONSEJO, la que deberá tener facultades suficientes para decidir en nombre de la institución, y un suplente para el caso de que el representante titular deba ser reemplazado. Se invitará a participar de las reuniones del CONSEJO a los organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en materia de control, transparencia y/o lucha contra la corrupción”. Además, la OA, en coordinación con la SFI, podrá incorporar nuevos miembros al Consejo.

En el mes de diciembre de 2020 se organizó la primera reunión del Consejo Asesor, incorporando organizaciones no gubernamentales de diferentes provincias, sindicatos y espacios académicos, todos ellos de reconocida trayectoria en la materia, garantizando representación plural, federal y con perspectiva de género. Dicho encuentro tuvo como fin exponer los avances de la revisión del Plan Nacional Anticorrupción y dialogar respecto al diseño de la nueva Estrategia Nacional de Integridad que privilegiará una visión integral, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos de ilícitos contra la administración pública.

PROYECTO DE LEY DE ETICA PUBLICA:

Proyecto de reforma integral de la Ley de Ética, con el objeto de adecuar sus disposiciones a los nuevos tiempos y tecnologías, procurando mejorar las herramientas destinadas a prevenir infracciones éticas o malas conductas que puedan derivar en hechos de corrupción. Este proyecto es el resultado de un proceso de elaboración participativo y consensuado y contó con diversas instancias de participación pública. Se realizaron talleres y mesas de trabajo a las que fueron convocados expertos en la materia, representantes de la sociedad civil y de la comunidad académica. Asimismo, el proyecto fue sometido a una consulta online (se registraron 89 comentarios) y también presentado a través de la plataforma Justicia

2020 (se registraron 34 aportes). Durante todo el proceso, participaron de la discusión del proyecto diversas áreas del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura. Además, se contó con la asistencia técnica del Banco Mundial y de la OCDE. Actualmente, el proyecto de ley mencionado perdió estado parlamentario, por lo que la Oficina Anticorrupción se encuentra trabajando en un nuevo proyecto en base a su antecedente que incorpore nuevos fenómenos ocurridos en los últimos años, tales como la puerta giratoria y la captura de la decisión pública, contemplando siempre la perspectiva de derechos humanos y género. Asimismo, incluirá instancias de participación pública propiciando un consenso más amplio.

5. Párrafo 4 del artículo 5

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La Oficina Anticorrupción representa a la República Argentina ante organismos y foros internacionales y regionales en materia de integridad y control de la corrupción en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En este sentido, vela por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de prevención y control de la corrupción ratificadas por el Estado Nacional, ejerciendo el rol de punto focal, coordinando el trabajo de cooperación entre los distintos organismos nacionales. Monitorea el seguimiento de la implementación de las Convenciones Internacionales a fin de garantizar un mayor y mejor cumplimiento.

La OA promueve también el desarrollo de vínculos de cooperación bilateral, regional y multilateral e impulsa la firma de convenios en ámbitos especializados. Establece y mantiene contactos con gobiernos de diversos países y organismos multilaterales para intercambiar información, asistencia técnica, experiencias y mutua cooperación. Especialmente, pone en valor los vínculos regionales que consoliden el fortalecimiento de políticas de integridad partiendo de problemáticas compartidas.

Además, nuestro país forma parte de la Alianza para un Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa multilateral de 70 Estados, que fue fundada en 2011 por los gobiernos de Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos.

A través de esta iniciativa, en los distintos Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Argentina se comprometió a promover el cumplimiento de las prácticas respaldadas por los principios de Transparencia, Participación Ciudadana, Responsabilidad e Innovación y Tecnología.

Por otro lado, en el siglo XXI, el gran desafío para la administración es lograr el andamiaje tecnológico y el apoyo necesario para dar el salto cualitativo y pasar del formato de trabajo en papel a documentos electrónicos. Esta transición busca facilitar la interacción entre los ciudadanos y los diferentes organismos públicos, y promover la relación autónoma entre los diferentes sistemas.

La hipótesis fundamental de la política de modernización del Estado sostiene que para construir una administración pública que esté al servicio de los ciudadanos, en un marco de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios, es estrictamente necesario promover la interoperabilidad de los sistemas estatales a través de su interconexión y

simplificación de los procesos actuales.

-El **Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (en adelante GDE)** se implementó en el Sector Público Nacional. Es un software de gestión que consiste en una red de módulos integrados que están disponibles para todos los usuarios y con un sistema de firma digital que permite el procesamiento completo de todos los procedimientos en forma electrónica. Este modelo promueve la cultura de la eficiencia pública, enfatiza los resultados y la calidad de los servicios, permite inteligencia en el uso de datos e interoperabilidad, basado en sistemas de rendición de cuentas destinados a aumentar la transparencia y estimular la participación ciudadana.

Para llevar a cabo la política de modernización, ha sido esencial promover una transformación normativa, la creación de sistemas informáticos adecuados y la formación de equipos de implementación con orientación multidisciplinaria.

-En cuanto a los **sistemas de Compras y Contrataciones**, conocidos mundialmente como sistemas de compras electrónicas, Argentina ha diseñado y puesto en marcha nuevos desarrollos digitales que aceleran los procedimientos y tiempos en que estos procesos se han manejado y resuelto. Las plataformas COMPR.AR, CONTRAT.AR, Patrimonial Assets, Warehouses y SUBAST.AR, no solo simplificaron los tiempos de administración y los hicieron más eficientes, sino que también hicieron transparente las operaciones entre el gobierno y otras entidades privadas, y proporcionaron a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil herramientas para controlar estos procesos, reduciendo la existencia de irregularidades y la corrupción.

La publicación de compras y contratos de grandes áreas del Gobierno Nacional en el sitio web comprar.gob.ar (<https://comprar.gob.ar/>) y en el sitio web contratar.gob.ar (<https://contratar.gob.ar/>), cumple dos funciones vitales de la tarea de hacer que la administración del Poder Ejecutivo sea más transparente: oportunidades equitativas de acceso a una oferta o contrato por parte del Estado y, al mismo tiempo, se proporciona información en la misma plataforma y se producen bases de datos accesibles para organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en controlar las cuentas públicas. Una gran cantidad de información obtenida a través de herramientas digitales permite la posibilidad de contar con indicadores que permitan evaluar los resultados de la contratación pública en términos de costo-eficiencia; oportunidad; calidad; transparencia; integridad y trato justo. Sobre la base de datos consistentes, confiables y actualizados, es posible llevar a cabo evaluaciones precisas y tomar medidas para mejorar el reclutamiento.

-“**Data Protection Practitioners’ Conference**”: Argentina es miembro de esta red internacional de autoridades de protección de datos. También es parte de la Conferencia de Autoridades de Acceso a la Información (ICIC por sus siglas en inglés) y miembro del grupo de trabajo de “Gobernanza” de dicha red.

-A su vez, la **Agencia de Acceso a la Información Pública** también es parte de la Mesa de Coordinación de las Agencias de Acceso a la Información Pública de la Argentina; y preside el Consejo Federal para la Transparencia, órgano compuesto por las máximas autoridades de acceso a la información de las provincias argentinas. Igualmente es miembro pleno de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y el punto focal de la OEA para la elaboración de la Ley Modelo de Acceso a la Información

-EITI: El Consejo del EITI aprobó el 27 de febrero de 2019 la solicitud de Argentina de unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en la reunión celebrada en Kiev, Ucrania. Argentina, la tercera economía en importancia de América Latina, se convierte en el 52º país miembro del EITI. Con la unión de Argentina al EITI, el gobierno se compromete a garantizar la divulgación íntegra de información en toda la cadena de valor de las industrias extractivas, desde la manera en la que se otorgan los derechos de extracción hasta la trayectoria de los ingresos en el gobierno y cómo estos benefician al público. Asimismo, el gobierno se compromete a colaborar con la sociedad civil y el sector para contar con un debate informado sobre el modo en que se gestionan los recursos naturales. De conformidad con el Estándar EITI, Argentina tiene la obligación de publicar su primer Informe EITI en un plazo de 18 meses tras convertirse en país candidato, es decir, en agosto de 2020. Argentina solicitó una versión adaptada del EITI con el fin de tener en cuenta su estructura federal. Cada una de las provincias es propietaria de los recursos naturales de su territorio y está al cargo de su gestión. Las cinco organizaciones de la sociedad civil que forman parte del grupo de multi partícipes de Argentina, son: Fundación Directorio Legislativo, Fundación Cambio Democrático, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de San Martín y CIPPEC.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La Oficina Anticorrupción, como punto focal en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, tiene entre sus objetivos velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional. Desde la Oficina y junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, representa al país a través de la cooperación y el trabajo conjunto en diversos ámbitos internacionales.

- Organización de las Naciones Unidas (ONU): La Oficina Anticorrupción promueve la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Participa activamente en el Grupo de Implementación de la CNUCC, el Grupo de Prevención, el Grupo sobre Cooperación Internacional y el de Recupero de Activos.
- Organización de los Estados Americanos (OEA): La Oficina Anticorrupción es punto focal ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y participa activamente, no sólo de este mecanismo, sino también de las iniciativas de prevención y lucha contra la corrupción que desarrolla la OEA.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Argentina tiene la categoría de país observador en el ámbito de esta entidad, pero es miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales.
- Organismos multilaterales y Foros internacionales: La Oficina mantiene contactos, desarrolla programas y realiza actividades con la colaboración de estas

organizaciones. Junto a expertos en la prevención y la lucha contra la corrupción, intercambia información y experiencias, presenta ideas y acuerda estrategias de acción en los ámbitos regional y mundial.

En este sentido participa en los siguientes foros e iniciativas multilaterales de prevención y control de la corrupción: Grupo de los 20 (G20), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), MERCOSUR, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), ODS, Pacto Global, Eurosocial, International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC), Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), International Partnership Against Corruption in Sports (IPACS), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

6. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

El mundo atraviesa una situación inusitada, una pandemia que ha obligado a los países de todo el mundo a tomar decisiones y adoptar políticas para hacerle frente. Es una crisis global que ha puesto a los Estados en el centro de la escena y con ellos la variedad de políticas adoptadas. Es una situación de total excepcionalidad que ha demandado por parte del Estado Nacional respuestas rápidas y extraordinarias cuya modalidad de implementación cobran relevancia y le imprimen una impronta propia a la gestión.

La Oficina Anticorrupción emprendió acciones para garantizar la continuidad en la implementación de políticas claves y reaccionar frente a la especial coyuntura que trajo la irrupción del COVID19 como pandemia.

Por otra parte, en cuanto a la asistencia técnica, se identifica la necesidad de contar con sistemas informáticos que permitan el cruzamiento de datos de diferentes bases para crear una matriz que detecte conflictos de intereses entre funcionarios de distintas reparticiones públicas.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(OT) Otros aspectos: sírvase especificar

Se identifica la necesidad de contar con sistemas informáticos que permitan el cruzamiento de datos de diferentes bases para crear una matriz que detecte conflictos de intereses entre funcionarios de distintas reparticiones públicas.

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

6. Órgano u órganos de prevención de la corrupción

7. Párrafo 1 del artículo 6

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

- a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;
- b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La República Argentina cuenta con un conjunto de organismos especializados en la supervisión, coordinación e implementación de políticas y prácticas destinadas a la prevención de la corrupción, a las que alude la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción:

Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación, creado mediante la Ley N° 25.233, con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público. Además, este organismo es Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, y tiene por misión velar por el cumplimiento de todas las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional (Decreto 466/07).

En línea con los compromisos asumidos en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, el Decreto N° 54/19 le otorgó a la Oficina Anticorrupción mayor jerarquía institucional concediéndole carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación. Asimismo, en el artículo 2° elevó el rango y jerarquía del titular de la Oficina Anticorrupción equiparándolo al de Ministro y estableció que gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional, manteniendo su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con esta nueva normativa, la Oficina Anticorrupción adquirió mayor independencia para ejecutar sus funciones, pudiendo, entre otras cuestiones, elaborar su propio Plan de Acción y dictar su reglamento interno sin requerir la aprobación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, requisito necesario antes de la sanción del mencionado Decreto.

Complementariamente, el Decreto 885/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 13 de noviembre de 2020, aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Oficina Anticorrupción. Dicha normativa modificó la estructura aprobada mediante la Decisión Administrativa N° 312/18, por la cual se

crearon las Direcciones Nacionales y simples y las Coordinaciones existentes, y crea la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Actualmente, la estructura de la Oficina Anticorrupción está compuesta por dos Direcciones con rango y jerarquía de Subsecretarías: la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, encargada de la elaboración de políticas estatales contra la corrupción en el sector público nacional, y la Dirección de Investigaciones, responsable de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales. Además, cuenta con cinco Direcciones Nacionales, a saber: Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos -dependiente del Titular de la OA-; Dirección Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas y Dirección Nacional de Ética Pública -dependientes de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia-; Dirección Nacional de Investigaciones y Fiscalización y la Dirección Nacional de Apoyo, Análisis Técnico y Litigio -dependientes de la Dirección de Investigaciones-. Dentro del segundo orden operativo, se encuentra la Coordinación de Políticas de Integridad, en la órbita de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia; la Coordinación de Análisis de Información, bajo la dependencia de la Dirección de Investigaciones; y la Dirección de Relaciones Institucionales y la Coordinación de Admisión y Derivación de Denuncias, como unidades dependientes de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos.
<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237256/20201113>

A la fecha del envío, en la OA trabajan un total de 106 personas. Esta dotación se conforma de 68 profesionales (46 abogados/as, 7 licenciados/as en ciencias políticas, 8 ciencias económicas/as, 2 licenciados/as en relaciones internacionales, 1 licenciados/as en recursos humanos, 1 en sociología, 2 licenciados/as en comunicación y 1 en ingeniería), 6 asistentes técnicos, 25 empleados administrativos y 7 de servicios generales.

Ámbito de aplicación

La OA actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

Competencias

Para el cumplimiento de su misión, la OA se encuentra facultada para:

- Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto;
- Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior;
- Investigar preliminarmente a toda Institución o Asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los mencionados recursos;
- Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos;
- Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia;
- Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos;

- Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función;
- Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública;
- Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programas preventivos de hechos de corrupción.

Objetivos

De acuerdo a las misiones asignadas por ley, son objetivos del organismo:

- Velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional.
- Promover la ética, la transparencia y la integridad en la función pública de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional.
- Ejercer las funciones que le corresponden en carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 y sus normas complementarias.
- Impulsar las acciones tendientes a prevenir la corrupción y hacer efectivas las responsabilidades por actos contrarios a la ética pública.
- Entender en el diseño y en la implementación de políticas, programas, normas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción y en la promoción de la ética pública, la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno y asesorar a los organismos del Sector Público Nacional.
- Promover, de oficio o por denuncia, investigaciones respecto de la conducta de los agentes públicos, tendientes a determinar la existencia de hechos ilícitos cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública, en el ámbito de su competencia.
- Realizar investigaciones a fin de controlar a toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, en caso de indicios sobre el irregular manejo de tales recursos.
- Realizar las presentaciones a que dieran lugar las investigaciones, ante las autoridades administrativas o judiciales, a fin de impulsar su actuación, participando en carácter de parte interesada o querellante en los casos previstos en la normativa.
- Administrar los datos del registro de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los agentes públicos y efectuar el análisis de su contenido en orden a determinar la posible existencia de enriquecimiento ilícito o la configuración de conflictos de intereses.
- Dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias en los términos del Decreto N° 202 del 21 de marzo de 2017 y celebrar todos los actos que se requieran para la debida implementación del citado decreto.

Los principales ejes de trabajo de la OA están orientados a la aplicación de políticas preventivas y el aumento de la difusión de los conocimientos en materia de prevención. La OA tiene como propósito hacer foco en la prevención de la corrupción, posicionándose como organismo de consulta y referencia para la implementación de políticas de integridad y transparencia y en la construcción transversal de una gestión transparente y participativa. En este sentido, la transversalización de la transparencia en todo el Estado

Nacional resulta uno de los objetivos fundamentales de la Oficina, para instalarla como un compromiso en las decisiones y en las acciones que afecten los recursos públicos.

La Oficina se encuentra trabajando de manera conjunta con las Direcciones de Transparencia creadas en el marco del nuevo organigrama de la Administración Pública y los Enlaces de Integridad Pública, en la elaboración de recomendaciones sobre reformas administrativas y/o de gestión que mejoren los estándares de transparencia de la función pública y fortalezcan las políticas de integridad de esas áreas.

Junto con la OA, hay otras entidades públicas cruciales encargadas de prevenir la corrupción, tales como la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (ex Secretaría de Fortalecimiento Institucional en la Jefatura de Gabinete de Ministros), la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Sindicatura General de la Nación.

Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros

A través del Decreto 6/2018 se creó la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, organismo dentro de la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros. El Decreto 50/19 modificó su jerarquía, denominándose Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y le atribuye las siguientes funciones a su cargo:

1. Asistir a la Secretaría en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad en la función pública y prevengan la corrupción, en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con competencias en la materia.
2. Diseñar y proponer lineamientos relacionados con el fortalecimiento institucional y la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con las áreas con competencia del ESTADO NACIONAL.
3. Asistir a la Secretaría en el seguimiento de la implementación de las políticas de integridad y fortalecimiento institucional, y en la coordinación de su ejecución, en relación con los organismos del ESTADO NACIONAL con competencia en la materia.
4. Evaluar y consolidar la información originada en las Jurisdicciones cuyas competencias se encuentran vinculadas con los sistemas de control del sector público nacional, las políticas públicas de integridad y fortalecimiento institucional del ESTADO NACIONAL.
5. Desarrollar y administrar instrumentos de seguimiento y análisis referidos a las políticas públicas de integridad y fortalecimiento institucional en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
6. Formular y desarrollar programas de fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Administración Pública Nacional, con foco prioritario en la mejora de la calidad en la gestión y del servicio público.
7. Establecer pautas y criterios metodológicos para la implementación de un modelo de gestión por resultados en los organismos de la Administración Pública Nacional.
8. Formular y desarrollar las pautas e instrumentos metodológicos para la implementación de planes de reingeniería de procesos sustantivos y de apoyo administrativo para la Administración Pública Nacional.
9. Desarrollar y establecer las pautas e instrumentos metodológicos para la

implementación de planes estratégicos y operativos en las organizaciones públicas.

10. Desarrollar pautas y lineamientos metodológicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos establecidos por las organizaciones públicas.

11. Diseñar programas de desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional.

12. Asistir técnicamente al Secretario, en su carácter de Autoridad de aplicación de la Ley N° 24.127 que instituye el Premio Nacional a la Calidad, en lo referido al sector público.

Agencia de Acceso a la Información Pública

Particularmente en lo referido a la difusión de conocimientos en materia de prevención de la corrupción, el 29 de septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275 que estableció, como órgano garante de la correcta aplicación de la norma en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

La AAIP es un ente autárquico que funciona con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y tiene presupuesto aprobado por ley del Congreso. Tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y la protección de los datos personales.

La Agencia está a cargo de un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional tras un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantiza la idoneidad del candidato.

Mediante la Resolución 274-E/2017 del 19 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional propuso un director de la Agencia. Luego de la realización de la correspondiente audiencia pública para evaluar sus antecedentes, en agosto de 2017, en cumplimiento de la ley, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 685/2017 que oficializó esta designación.

El objetivo de la Agencia de Acceso a la Información Pública es, por un lado, aumentar los índices y una cultura de transparencia del sector público nacional mediante el ejercicio del acceso a la información pública; y, por el otro, fomentar una cultura de respeto a la privacidad mediante la protección de los datos personales.

Para cumplir con estos objetivos, sobre todo aquellas medidas de promoción de las herramientas de lucha contra la corrupción, la Agencia desarrolla las políticas necesarias para que se implemente la normativa en materia de acceso a la información pública, se mejore la aplicación de las regulaciones en materia de protección de datos personales, se ejecuten acciones que promuevan mejores prácticas, medidas de transparencia activa y mecanismos de provisión de información que garanticen el efectivo ejercicio del derecho a saber y el respeto del derecho a la privacidad, como también la prevención de hechos de corrupción en la administración pública.

Sindicatura General de la Nación

La Ley 24.156 ("Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional"), establece "la implementación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno, normativo, financiero, económico y de gestión de sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior de la

auditoría interna”.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el organismo del Poder Ejecutivo Nacional con competencia para realizar el control interno de las jurisdicciones que componen este Poder y los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado que dependen del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y métodos de trabajo.

En este sentido la SIGEN aprobó las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional, por medio de la Resolución SIGEN 172/2014.

Con respecto a las empresas y sociedades del Estado y conforme a los Artículos 8 y 9 de la Ley 24.156, éstas se encuentran dentro del ámbito de contralor de la SIGEN, y resulta necesario instrumentar políticas de gestión y control en seno de dichas organizaciones empresariales, con el objetivo de fomentar la responsabilidad y optimizar su gestión empresarial, en un marco de transparencia en la utilización de los recursos.

La SIGEN, considerando necesario regular su gestión y control a través de herramientas eficaces y transparentes, a fin de optimizar su administración y obtener una óptima gestión, trabaja en la actualización de las Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado que se aprobarán mediante Resolución SIGEN 37/2006.

El organismo promueve instrumentos de control innovadores para aplicar a la mejora de la gestión gubernamental, haciendo hincapié en herramientas preventivas que permitan fortalecer el control interno y respondan a las tendencias de auditoría contributiva, control integrado y mejora continua de la gestión pública.

En este sentido, la Sindicatura General de la Nación trabaja junto con la Oficina Anticorrupción (OA) reforzando las acciones de sensibilización y capacitación que ya realizan en conjunto, como ser el programa de capacitación “Sinergia entre Integridad, Ética y Control Interno”, la difusión permanente de conductas éticas para funcionarios públicos, y la puesta en funcionamiento de un foro virtual de intercambio permanente para funcionarios relacionados a temas de integridad y control interno. En 2018 participaron 47 funcionarios públicos y en la edición de 2019, organizada en especial para Auditores y Enlaces de Integridad de distintos organismos, la participación entre aulas virtuales y presenciales fue de 56 personas.

Plan Nacional Anticorrupción 2019 - 2023 - Estrategia Nacional de Integridad

Como parte de los esfuerzos del gobierno nacional para el desarrollo y la implementación de políticas y prácticas de prevención de la corrupción, el Decreto 258/19 aprobó el Plan Nacional Anticorrupción, elaborado y coordinado por la OA y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El PNA constituye un primer ejercicio y antecedente de planificación coordinada y estratégica de las políticas públicas en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a los mandatos de las convenciones internacionales, y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante la comunidad internacional.

La Oficina Anticorrupción se encuentra trabajando en la actualización del Plan Nacional Anticorrupción, de manera de avanzar hacia una Estrategia Nacional de Integridad más amplia que permita fortalecer la transversalización de las políticas de transparencia

contemplando los cambios ocurridos a nivel institucional sobre la administración pública nacional así como también aquellos sucedidos a nivel social y económico, especialmente frente al actual y futuro escenario de pandemia. Dicha labor se desarrolla junto al Consejo Asesor y organismos especializados en la temática. Para ello, se encuentra en elaboración una nueva metodología que permitirá establecer criterios, elaborar indicadores de impacto y plazos de cumplimiento que faciliten su seguimiento y monitoreo por parte de la ciudadanía.

La revisión y actualización del PNA para toda la Administración Pública central y descentralizada requiere de una amplia coordinación interinstitucional, razón por la cual se trabaja de manera articulada con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y en particular con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Para ello, se formaron pares metodológicos de ambos organismos que realizaron la revisión de las iniciativas incluidas en el PNA. De las 260 que lo componen, se analizaron 83 cuyo plazo de ejecución correspondía al año 2019 y se clasificaron de acuerdo a su estado (vigentes, en proceso o vencidas). El resto de las iniciativas que integran el Plan fueron analizadas bajo una metodología e indicadores desarrollados a tales fines y de acuerdo a su carácter estratégico e integral. El resultado del trabajo de evaluación desarrollado, así como los lineamientos hacia el diseño de la Estrategia Nacional de Integridad se publicó en la web del organismo: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-la-evaluacion-del-plan-nacional-anticorrupcion-0>. El informe narra el proceso de evaluación del Plan Nacional Anticorrupción, detallando el diseño e implementación de herramientas metodológicas para su análisis y ponderación. Además, presenta las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos del Plan en vías al diseño de la Estrategia Nacional de Integridad. Por último, se proponen algunos lineamientos clave para la conformación de la Estrategia Nacional de Integridad de modo tal que brinden una visión integral, federal y plural, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos de ilícitos contra la administración pública.

La mencionada reestructuración del Plan Nacional Anticorrupción contempla, además, el desarrollo y puesta en funcionamiento de una plataforma digital para el seguimiento público de la Estrategia Nacional de Integridad, incluyendo indicadores y parámetros que faciliten la comprensión de los avances realizados.

Asimismo, entre las principales acciones desarrolladas se encuentran el fortalecimiento del Consejo Asesor Ad-Honorem, de modo que refleje una representación de diversos sectores, con perspectiva federal y de género, acorde a lo establecido en la Resolución 21/2019 que le da origen. En este sentido, la Resolución 20/2020 establece que “El CONSEJO estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con interés y/o reconocida trayectoria en la temática. Se procurará una representación equilibrada de cada uno de estos sectores y que exista diversidad federal y de género en la integración del CONSEJO. En el caso de las personas jurídicas, se les requerirá que designen una persona para que las represente en el CONSEJO, la que deberá tener facultades suficientes para decidir en nombre de la institución, y un suplente para el caso de que el representante titular deba ser reemplazado. Se invitará a participar de las reuniones del CONSEJO a los organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en materia de control, transparencia y/o lucha contra la corrupción”. Además, la OA, en coordinación con la SFI, podrá incorporar nuevos miembros al Consejo.

En el mes de diciembre de 2020 se organizó la primera reunión del Consejo Asesor, incorporando organizaciones no gubernamentales de diferentes provincias, sindicatos y

espacios académicos, todos ellos de reconocida trayectoria en la materia, garantizando representación plural, federal y con perspectiva de género. Dicho encuentro tuvo como fin exponer los avances de la revisión del Plan Nacional Anticorrupción y dialogar respecto al diseño de la nueva Estrategia Nacional de Integridad que privilegiará una visión integral, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos de ilícitos contra la administración pública. Acta de la Primera Reunión del Consejo Asesor disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_1era_reunion_consejo_asesor_03_2020.pdf

Ley 24.701 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, tiene como objetivo dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la Administración Pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal.

El Decreto N° 277/2018 asignó a la OA la competencia para establecer los lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23, referentes a la implementación de programas de integridad y su contenido.

La OA publicó los “Lineamientos de Integridad para el Mejor Cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”, aprobado por la Resolución 27/2018 de la OA.

La publicación puede ser consultada y descargada en formato digital en la web de la OA. En su formato impreso, fue distribuida a organismos del sector público y privado nacional, en cámaras y asociaciones empresarias, en el ámbito académico y en organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se diseñó un afiche explicativo sobre los elementos que componen un programa de integridad, disponible para su consulta y descarga en la web de la OA. Los Lineamientos son resultado de un proceso abierto y participativo, que se inició con la publicación de una primera versión del documento el 30 de julio de 2018. En esta instancia, se receptaron más de 70 aportes en el sitio web de Consulta Pública, donde el documento estuvo disponible para efectuar comentarios por el término de un mes.

Los Lineamientos brindan una guía técnica para el diseño, la implementación y la autoevaluación de programas de integridad, y están dirigidos a las empresas y otras personas jurídicas como fundaciones o asociaciones civiles, a las organizaciones de la sociedad civil, las agencias estatales, los operadores del sistema de justicia y la comunidad profesional experta. El documento tuvo mucha repercusión en el sector de compliance, ya que se trata del primer documento oficial que aborda la temática.

Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en PyMEs

Especialistas recomendaron a la OA la elaboración de una guía complementaria para una adecuada implementación de la Ley 27.401 en PYMES. En 2019, se realizó una nueva consulta pública y la OA publicó “La Guía Complementaria para la implementación de Programas de Integridad en Pymes” en el Boletín Oficial. Esta tiene por objeto brindar herramientas e instrumentos prácticos que puedan ser aplicados por las PyMEs,

contemplando las particularidades del sector. Se trata del resultado de un trabajo conjunto con la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción y Trabajo.

Red Nacional de Enlaces y Áreas de Integridad

Como parte de su estrategia de promoción de integridad en la Administración Pública Nacional, y a fin de ampliar el alcance y la eficacia de sus políticas preventivas, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó con la coordinación de la OA, la creación de una Red Nacional de Enlaces y Áreas de Integridad conformada por funcionarios y empleados de organismos de la Administración centralizada y descentralizada.

A través del Decreto 650/2019 y la Decisión Administrativa 797/2019 se institucionalizó la Red para organismos centralizados y descentralizados de la administración pública como parte de un sistema que promueva mecanismos para la cooperación horizontal y vertical entre todos los funcionarios, entidades y organismos públicos, la que progresivamente está siendo implementada en las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, a partir de la asignación de funciones en materia de integridad pública y la selección de sus representantes.

Entre las principales tareas de los Enlaces de Integridad se encuentran: conocer y difundir la normativa vigente en materia de integridad y ética pública y los canales y sistemas de denuncias existentes; colaborar activamente en la prevención de actos de corrupción; ser referente de los funcionarios y empleados públicos en el caso de dudas sobre cómo proceder o si cierta conducta constituye o no una infracción o delito; participar de capacitaciones brindadas por la OA, entre otras.

El rol de los Enlaces es preventivo y promueve una cultura de integridad en su jurisdicción, aportando valor a los programas y políticas que se implementan en los distintos ámbitos y sectores de la administración pública.

En marzo de 2018, se organizó el primer encuentro de la Red que contó con la participación de cerca de 60 enlaces de integridad. La OA presentó los principales objetivos y desafíos de la Red y capacitó sobre buenas prácticas en materia de integridad en el sector público.

A partir del primer encuentro, se generó una dinámica de trabajo con los enlaces que permitió aumentar la cantidad de funcionarios capacitados, mejorar el asesoramiento brindado a los organismos en materia de prevención de la corrupción y la tramitación de los casos y expedientes.

La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete incorporó la función del enlace de integridad en los procesos de revisión y modificación de las estructuras de los organismos de la administración.

En junio de 2019, la Red participó de la presentación institucional del Plan Nacional Anticorrupción.

En septiembre de 2019, se llevó a cabo un nuevo encuentro para capacitar a los EIP en los aspectos normativos y técnicos del régimen de declaraciones juradas. En su rol de coordinación de la Red de EIP, la OA implementó actividades de capacitación específicas para potenciar el rol del EIP, entre las que se destacan el curso "Responsabilidad Penal y Compliance" en conjunto con la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) y "Sinergia entre Integridad, Ética y Control Interno", en coordinación con la SIGEN (en dos ediciones).

En total, participaron más de 150 funcionarios, entre enlaces de integridad y auditores internos. En octubre de 2019, la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada contaba con EIP designados en 65 organismos de la administración nacional.

El 29 de julio de 2020 se llevó a cabo el Primer Encuentro del año, -realizado de manera virtual a través de una plataforma online en el marco del aislamiento dictado a raíz de la pandemia por el brote de COVID-19- con la participación del Jefe de Gabinete de Ministros, el titular de la OA y la Secretaría de Gestión y Empleo Público.

En él se revisaron las principales atribuciones de los Enlaces de Integridad, las competencias de la Oficina en materia preventiva y las pautas generales para el ejercicio ético de la función pública. Asimismo, se brindaron los principales lineamientos para facilitar el intercambio y reporte de los Enlaces de Integridad con la Oficina y se analizaron la relevancia de coordinación interinstitucional con la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Del encuentro participaron enlaces jurisdiccionales y funcionarios a cargo de áreas de transparencia de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada, empresas con participación nacional y otros entes del sector público nacional. En total concurrieron más de 200 personas.

La Red Nacional de Enlaces y Áreas de Integridad tiene por objeto avanzar en el desarrollo de una política integral de transparencia que pueda ser transversalizada en el Estado Nacional. La intención es ampliar el alcance y fortalecer la coordinación de políticas preventivas en materia de integridad pública, a partir de la generación de múltiples canales de contacto que permitan concientizar y difundir los principios y pautas de comportamiento ético para funcionarios y funcionarias de la administración estatal.

Para ello, la Oficina promueve el fortalecimiento de las capacidades de los Enlaces a través de encuentros de intercambio, actividades de capacitación y la generación de documentos que brindan orientación en materia de implementación de buenas prácticas de integridad y transparencia.

En la actualidad cuentan con Enlace de Integridad la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los 20 Ministerios del Gobierno Nacional. Por su parte, de los 174 organismos descentralizados que conforman la administración nacional (excluyendo a la Oficina Anticorrupción) 109 han designado un enlace propio, mientras que 15 “comparten” enlace con otro organismo de la misma Jurisdicción. En total, 146 organismos cuentan con un referente sobre la temática. A octubre de 2019 tan solo 65 organismos tenían designado enlace de integridad.

La OA pretende contribuir al avance hacia una construcción política que permita la apropiación organizacional de la transversalización de la transparencia. Es decir, que cada uno de los organismos tome esta agenda e incorpore la perspectiva de transparencia en la gestión de sus desafíos sectoriales.

Para eso se desarrolló un documento con Recomendaciones para la creación y fortalecimiento de las áreas de integridad y transparencia jurisdiccional para orientar esta tarea. La promoción de estos espacios se apoya en el convencimiento de las ventajas que pueden aportar:

- Brindan un mensaje claro sobre la relevancia de las políticas y jerarquiza la agenda de transparencia.

- Proporcionan herramientas concretas para la gestión, asistencia para el desarrollo de políticas, conocimiento para prevenir irregularidades y recursos para responder frente a ellas.
- Facilitan la identificación de interlocutores en la temática en la jurisdicción.
- Pueden centralizar consultas y viabilizar el acceso a la información y la participación social.
- Aumentan las posibilidades de coordinación y generación de sinergias entre instituciones.
- Facilitan la acumulación de experiencias, especialización en la temática y continuidad de las políticas.

En este marco, resulta pertinente complementar el escenario compuesto por la Red Nacional de Enlaces a la que nos referimos al principio con el relevamiento de áreas creadas en la administración centralizada, organismos descentralizados y empresas con participación estatal:

Administración centralizada

- Jefatura de Gabinete de Ministros (Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (Decreto 50/2019)
- Ministerio de Defensa (Dirección de Transparencia Institucional Decisión Administrativa 286/2020, Anexo III y IV)
- Ministerio de Economía (Subsecretaría de Transparencia y Acceso Ciudadano creada por Decisión Administrativa 1314/20)
- Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (Dirección de Planificación, Transparencia y Evaluación de Gestión creada por Decisión Administrativa 279/2020, Anexo III y IV)
- Ministerio de Seguridad (Dirección Nacional de Transparencia Institucional creada por Decisión Administrativa 335/2020)
- Ministerio de Obras Públicas (Dirección Nacional de Transparencia creada por Decisión Administrativa 635/20)
- Ministerio de Transporte (Dirección de Acceso a la Información y Transparencia creada por Decisión Administrativa 1740/2020)

A este listado deben sumarse organismos cuyas áreas se encuentran en formación: Ministerio de Interior, PAMI, Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Otros organismos descentralizados

- Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) - Integridad y Transparencia
- Armada Argentina (Departamento de Transparencia Institucional)
- Banco de Inversión y Comercio Exterior (Dirección del Área de Legales y Compliance)
- Dirección Nacional de Vialidad (Unidad de Ética y Transparencia creada por Resolución DNV 705/2016)

- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Unidad de Transparencia Institucional creada por Resolución INCAA 1260/2018)
- Servicio Meteorológico Nacional (Área de Transparencia)
- Servicio Penitenciario Federal (Servicio de Prevención de la Corrupción creado por Resolución 2233/2014)

Empresas

- Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (Subgerencia de Ética, Transparencia y Riesgos)
- Administración Nacional de Seguridad Social (Integridad y Transparencia)
- Aerolíneas Argentinas S.A. (Gerencia de Compliance)
- Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Dirección de Integridad y Buenas Prácticas)
- Correo Argentino S.A. (Gerencia de Programa de Integridad y Transparencia)
- DIOXITEK S.A. (Área de Integridad)
- Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (Departamento de Integridad y Transparencia Corporativa)
- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Área de Compliance - Integridad y Cumplimiento)
- Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (Oficina de Ética)
- Fabricaciones Militares S.E. (Unidad de Transparencia creada por Decisión Administrativa 85/2018)
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Área de Ética y Transparencia)
- Operadora Ferroviaria S.E. (Subgerencia de Ética y Transparencia Corporativa creada por Acta de Directorio 208/2017)
- YPF S.A. (Área de Compliance)

Red de integridad de empresas de propiedad estatal

La Red de Integridad en Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEs), como un espacio de intercambio técnico para el desarrollo de políticas orientadas a la prevención y la lucha contra la corrupción.

Inicialmente, la OA creó una Red de Integridad en EPEs y luego participó en la elaboración de los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Accionaria del Estado (Decisión Administrativa JGM N° 85/2018).

Desde 2018, la OA integra el Comité de Buen Gobierno de EPEs. Esta Red reúne periódicamente a representantes de las EPEs (especialmente de áreas legales o de ética y compliance) para intercambiar experiencias y recomendaciones en materia de integridad; fomentar la elaboración e implementación de Programas de Integridad en las empresas y

capacitar a los integrantes de la Red, como gestores del cambio y capacitadores internos en sus organismos.

Actualmente, la Red de Integridad de EPEs cuenta con más de 30 empresas que han avanzado en la implementación de las siguientes políticas de integridad:

Análisis de riesgos de corrupción: ADIF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, IEASA, Fabricaciones Militares.

Códigos de ética: más de 20 empresas ya han aprobado sus códigos de ética (ADIF, Aerolíneas Argentinas, AGP, ARSAT, AYSA, Banco Nación, Belgrano Cargas, BICE, Casa de la Moneda, Correo Argentino, COVIARA, Dioxitek, EANA, FADEA, Fabricaciones Militares, IEASA, Intercargo, NASA, SOFSE, Tandanor, YPF). Además, algunas empresas diseñaron códigos específicos para proveedores, como Aerolíneas Argentinas.

Capacitación: ADIF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Banco Nación, Belgrano cargas, Correo Argentino, COVIARA, EANA, FAdeA, IEASA, NASA, SOFSE, YPF.

Responsables de integridad designado: ADIF, AGP, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Banco Nación, Belgrano Cargas, Correo Argentino, COVIARA, EANA, Educar, FAdeA, IEASA, Intercargo, NASA, SOFSE, Tandanor, YPF).

Actualmente la Red de Integridad de EPEs forma parte de la Red Nacional de Áreas de Enlaces de Integridad.

Canales de denuncias

Más de la mitad de las EPEs ya han implementado canales: Proveedor externo: Aerolíneas Argentinas, ADIF, Banco Nación, Belgrano Cargas, BICE, Correo Argentino, NASA, SOFSE, YPF. Línea interna: AGP, AYSA, Correo Argentino, COVIARA, Dioxitek, EANA (en trámite), IEASA, FADEA, Fabricaciones Militares, INTERCARGO.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Oficina Anticorrupción

En los últimos años, se enfatizó y perfeccionó el rol preventivo y proactivo de la OA. Algunas medidas y ejemplos de su aplicación, se describen a continuación.

Actividades de formación en ética pública

La capacitación de funcionarios públicos en materia de ética pública constituye una de las principales actividades de la Oficina Anticorrupción en materia de prevención y lucha contra la corrupción (OECD, 2019).

La OA desarrolla cursos de capacitación sobre las siguientes temáticas:

- Ética pública

Acerca de los principios y normas que rigen el comportamiento ético de quienes cumplan función pública.

- Régimen de obsequios y viajes

Se trabaja a lo largo del curso sobre la normativa vigente en materia de recepción de obsequios y viajes financiados por una fuente distinta al Estado, a través de criterios y casos prácticos para registrar un obsequio o viaje a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en caso de recibirlo.

- Conflictos de intereses

Se aborda la temática acerca de qué son y cómo se gestionan los conflictos de intereses, con el objetivo de reconocer cómo se previenen los conflictos y difundir, los criterios adoptados por la OA al respecto.

- Gestión de conflictos de intereses en compras públicas (Decreto 202/17)

Acerca de los mecanismos de transparencia que se activan cuando se da una declaración de interés “positiva” de parte de un proveedor del Estado Nacional durante un proceso de compra pública.

- Derecho penal y corrupción

Respecto del aspecto penal en la lucha contra la corrupción y cuáles son los canales para denunciar hechos de corrupción. Se trabaja sobre los delitos penales que existen en el ordenamiento jurídico, las estrategias y formas de proceder según el ámbito de competencia.

- Lineamientos de integridad para la implementación de los programas de integridad de la ley 27.401 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas)

En relación con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se abordan los elementos del Programa de Integridad deseados para las personas jurídicas y que, en algunos casos, son requisito para contratar con el Estado.

- Régimen de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales para funcionarios públicos

Se trata la normativa que se aplica para dar cumplimiento al régimen de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales que presentan los funcionarios públicos; mecanismos de control de las Declaraciones, las instancias de presentación y los criterios de la OA para determinar quiénes son los sujetos obligados a presentar la Declaración en su actividad conjunta con las áreas de Recursos Humanos. Las capacitaciones de la OA se brindan mediante 3 modalidades distintas: presencial, virtual tutorado y autogestionada.

Presencial

A través de ellos se dialoga en profundidad acerca de los distintos temas de competencia de la OA. Son brindados por profesionales de la OA que trabajan en el día a día resolviendo casos específicos.

Dichas capacitaciones se llevan a cabo a partir de una evaluación que la OA realiza sobre posibles áreas de riesgo, así como otras que son específicamente requeridas por las autoridades y diversos organismos.

Tutorada

Con una duración aproximada de 30 hrs, cuentan con tutor de la Oficina Anticorrupción que acompaña la totalidad del proceso de capacitación y entrenamiento. Estos cursos se dictan a través de la plataforma del INAP.

Para conocer los cursos disponibles, ingresar a:

<<https://capacitacion.inap.gob.ar/cursos/>>

Autogestionada

Poseen una duración aproximada de 4 a 6 hrs sin tutor asignado (de forma autogestionada). Se realizan a través de la plataforma del INAP.

Para conocer los cursos disponibles, ingresar a:

<<https://capacitacion.inap.gob.ar/cursos/>>

Cantidad de capacitados

Entre 2016 y 2018 se capacitaron cerca de 8000 funcionarios y empleados públicos en más de 40 aulas y/o espacios de capacitación (virtuales y presenciales). Sobre ese total, cerca del 70% de las capacitaciones se dictaron en forma virtual - utilizando las plataformas web de INAP, Secretaría de Gestión y Empleo Público. Se diseñaron e implementaron 3 cursos tutorados y 3 cursos autogestionados que se brindan con una frecuencia mensual o bimestral, según el caso. Para ello, la OA cuenta con cerca de diez funcionarios que imparten cursos de capacitación y charlas de concientización y tres tutores externos que implementan y tutorizan los cursos alojados en la plataforma virtual.

Durante el año 2019 se desarrollaron las siguientes actividades formativas:

Cursos Autogestionados: se organizaron en esta modalidad 13 misiones del Curso de Ética Pública, 6 comisiones del Curso del Régimen de Obsequios, 3 módulos sobre Pautas para la Gestión de Conflictos de Intereses dentro del Programa de Formación en Integridad del INAP, la primera comisión del Curso de Integridad en Compras y Contrataciones y un Webinar sobre Lineamientos de Integridad y Ética Pública para el Sector Privado: Aspectos Esenciales de la Responsabilidad Corporativa por Corrupción (ley 27.401) para el Programa Federal del INAP.

Cursos Tutorados: en relación a estas ediciones de cursos, se efectuaron 4 comisiones del Curso de Conflictos de Intereses, 10 comisiones del Curso de Ética, Transparencia e Integridad en el Estado: Perspectivas y Herramientas de Lucha contra la corrupción, y 2 comisiones del Curso de Derecho Penal y Corrupción.

Asimismo, se dictaron 4 comisiones cerradas del Curso de Ética, Transparencia e Integridad en el Estado adaptadas a las singularidades y necesidades de los organismos que lo solicitaron:

-1 comisión para la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

-1 comisión para ENARGAS

-2 comisiones Ministerio de Defensa Nacional

**Se capacitaron durante este período y modalidades un total de 3905 personas.*

En el año 2019 la Oficina Anticorrupción realizó un total de 21 actividades de capacitación

presencial, que abordaron distintas temáticas y audiencias:

- Gestión de Conflictos de Intereses
- Régimen de Obsequios (Decreto 1179/16)
- Transparencia en Compras Públicas (declaraciones juradas de conflictos de intereses, Decreto 202/17)
- Canales de Denuncia
- Lineamientos de Integridad (Ley 27.401)

**Participaron de estas actividades de capacitaciones presenciales 867 personas.*

Con la Sindicatura General de la Nación, se volvió a organizar el Programa de Capacitación “Sinergia entre Integridad, Ética y Control Interno”, difusión permanente de conductas éticas para funcionarios públicos, en especial para Auditores y Enlaces de Integridad de distintos organismos.

** La participación del mismo, entre aulas virtuales y presenciales fue de 56 personas.*

Durante el 2020, se realizó un relevamiento de los capacitadores y capacitadoras disponibles (dentro y fuera de la OA); una recopilación de los cursos desarrollados y disponibles para ser ofertados (tanto en las modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales); y una evaluación sobre la posibilidad real de cubrir la oferta de cursos que ya se encontraban comprometidos con la dotación de recursos disponible, especialmente en la plataforma virtual en el INAP. En el contexto del ASPO, se profundizó la necesidad de desarrollar capacitaciones en modalidad virtual.

En este contexto, se elaboró, publicó y difundió la “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”. La intención de este material es generar una herramienta concreta para la inducción de los y las funcionarias al asumir sus cargos en el estado nacional. La Guía es una iniciativa conjunta de la Oficina Anticorrupción, y de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público para difundir los principales deberes, principios, incompatibilidades, conflictos de interés y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de su función. Uno de los puntos centrales que son analizados son los conflictos de intereses, con indicaciones claras acerca de las políticas prohibidas. El material se ofrece como una guía inicial, con definiciones breves y prácticas, a efectos de que los y las agentes del Estado Nacional puedan aplicar estas normas en la gestión cotidiana. Para acompañar esta iniciativa, se han coordinado actividades formativas apoyadas en el material de la guía. Así, se desarrolló la “Capacitación para alta dirección sobre la Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”, actividad que ha sido acreditada en el Instituto Nacional de Administración Pública.

Esta actividad, recientemente incorporada al menú de actividades formativas, fue desarrollada en el Ministerio de Transporte, y estuvo dirigida a funcionarios y funcionarias de alta dirección del ministerio, sus organismos descentralizados y empresas públicas de participación estatal que funcionan en la órbita del ministerio. La actividad llegó a un total de 60 funcionarios. En la misma línea se desarrolló una actividad para alta dirección en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Esta actividad estuvo destinada a miembros del directorio del organismo, llegando a un total de 20 funcionarios. También en el INTI se desarrolló una actividad para alta dirección destinada a funcionarios y funcionarias del organismo sobre la Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública, llegando a un total de 38 funcionarios de alto rango.

Junto a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Empleo y

Gestión Pública de Jefatura de Gabinete y la Sindicatura General de la Nación desarrollamos un taller virtual sobre las “Recomendaciones para Fortalecer la Transparencia e Integridad de las compras y contrataciones tramitadas en el marco de la Emergencia COVID-19”. El taller contó con la participación de 100 funcionarios y funcionarias vinculadas a la tramitación de compras de bienes y servicios en la administración pública nacional, enlaces de integridad y unidades de auditoría interna se sumaron a la actividad.

Asimismo, se desarrollaron actividades formativas en el marco de la plataforma del INAP:

A octubre del año 2020 concluidas:

Cursos Autogestionados: en relación a esta modalidad, se desarrollaron 12 comisiones del Curso de Ética Pública, 2 comisiones del Curso de Integridad en Compras y Contrataciones y 4 comisiones del Curso de Régimen de Obsequios.

Cursos Tutorados: bajo esta modalidad se realizaron 3 ediciones del Curso de Ética, Transparencia e Integridad en el Estado: Perspectivas y Herramientas de Lucha contra la Corrupción (18 comisiones abiertas) y 2 comisiones del Curso de Derecho Penal y Corrupción.

Además, se desarrolló una comisión cerrada del Curso de Ética, Transparencia e Integridad en el Estado) dirigida a la Dirección de Integridad Institucional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con 35 miembros, que estuvo adaptada a las peculiaridades del organismo.

**Bajo estas modalidades, de enero a octubre de 2020 se capacitaron aproximadamente a 3.300 personas.*

En total desde 2016 la Oficina Anticorrupción capacitó a más de **18.000** funcionarios y empleados públicos.

En adición, la Oficina Anticorrupción ha presentado a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires una propuesta para la realización de una diplomatura en “Transparencia, Integridad y Compliance”, a realizarse junto a la World Compliance Association, Capítulo Argentino. El objetivo de la misma es formar profesionales expertos en Transparencia, Integridad y Compliance, en el sector público y privado. En la actualidad la Universidad se encuentra evaluando las modalidades y características de la misma.

La OA se encuentra trabajando en el desarrollo de una red de investigadores de transparencia. El objetivo es interactuar con el cuerpo hoy disperso de investigadores e investigadoras que se desempeñan en nuestro país, y acercar de este modo sus reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción, los debates sobre la disputa del término, y el análisis de políticas para integrar los principios de transparencia e integridad a la gestión pública.

En el marco del Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores Servicios Públicos en Argentina (Préstamo BIRF 8710-AR) se realizó una consultoría para potenciar el impacto de las capacitaciones en materia de prevención de la corrupción a través del desarrollo de herramientas audiovisuales. Específicamente, se elaboró una propuesta pedagógica de videos y actividades lúdicas que potencien el proceso de capacitación.

La OA además realiza actividades de sensibilización, intercambio y articulación con los miembros de la Red Nacional de Enlaces y Áreas de Integridad , a fin de fortalecer el intercambio y consolidar su rol. En este sentido, la ex Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la JGM incorpora la figura del enlace en los procesos de reordenamiento organizativo de los organismos descentralizados.

Estas acciones están en línea con las Recomendaciones del Estudio de Integridad de la OCDE (Punto 3.5.1.) que instan a desarrollar capacidades y concientizar sobre la integridad para promover un cambio conductual de los funcionarios públicos.

Difusión de normas éticas

Si bien las normas y principios éticos se encuentran vigentes desde 1999 y a pesar de que las leyes se presumen conocidas por todos, la realidad indicaba que ni los funcionarios ni la ciudadanía sabían cuáles eran las pautas que regían la función pública.

Para revertir esa situación, en conjunto con la Presidencia de la Nación y SAIJ se diseñó y difundió material gráfico que permitió una difusión amigable y masiva de las normas éticas, lo que fue acompañado por acciones de sensibilización que otorgaron mayor visibilidad y conciencia acerca de la relevancia de las cuestiones de integridad y transparencia en la función pública.

Además, se puso énfasis en que la temática -si bien las comprende- excede a las altas autoridades ya que debe ser respetada por todas las personas que trabajan en el Estado y que su cumplimiento tiene como consecuencia directa la profesionalización y mejor calidad del servicio público.

Se imprimieron y distribuyeron 10.000 afiches sobre principios y normas éticas; cuya versión digital registró más de 4.900 descargas desde el sitio web de la OA (según lo publicado por el dashboard de Data Studio para argentina.gob.ar/anticorruptcion). Además, se elaboraron cinco afiches temáticos: régimen de obsequios a funcionarios públicos, régimen de viajes financiados por terceros, integridad en compras y contrataciones, canal de denuncias y lineamientos para la implementación de programas de integridad.

Rediseño del canal de denuncias de la OA

Tal como fue expresado anteriormente, la OA tiene entre sus competencias ser la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública y recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto.

Además de realizar investigaciones de oficio, la OA recibe denuncias de funcionarios, empleados públicos y ciudadanos. Por ese motivo, fue importante llevar a cabo la actualización de los canales por intermedio de los cuales los denunciantes interactúan con el organismo.

Se realizó una revisión y se implementó una actualización que permitió la mejora de procesos que implicó:

1. La definición de un proceso de canal de denuncias, rediseño y actualización del formulario web de denuncias,

2. La actualización de la línea telefónica 0800, y

3. La creación de un espacio exclusivo para la recepción de denunciantes, otorgándoles un ámbito de privacidad y tranquilidad a la hora de formular una denuncia presencial.

Se renovó por completo el contenido y la experiencia del formulario web de denuncias, dotándolo de una imagen más agradable, fluida e interactiva para el ciudadano. Además, se actualizó el audio de la línea 0800. Finalmente, en el nuevo edificio de la OA, se dispuso de un espacio exclusivo para la recepción de denunciantes el que brinda un ámbito de mayor privacidad y seguridad a la hora de formular una denuncia en forma presencial.

Las reformas generaron el incremento de la cantidad de denuncias recibidas, permitieron contar con información más precisa y desagregada, optimizando la gestión de denuncias de la OA y otorgando al ciudadano un proceso más claro y un canal de denuncias más ágil, seguro y amigable.

Se buscó ampliar el universo de personas que tienen conocimiento de la posibilidad de formular una denuncia ante la OA. Consecuentemente, se diseñaron y distribuyeron 500 afiches con información sobre la OA y sobre los mecanismos para formular denuncias.

En el mismo sentido, se publicó la “Guía del Denunciante” (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_denunciante_0.pdf) para que el ciudadano posea información visual respecto de los hechos en los que la OA puede intervenir. Se imprimieron y distribuyeron 1000 ejemplares, y se registraron más de 1500 descargas del documento online desde la web.

Además, se publicó información sobre canales de denuncias en la página web del organismo y se decidió publicar en el Sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) un mensaje pop up.

La mejora en la tramitación de las denuncias implicó:

1. La revisión y definición de un procedimiento más efectivo para el trámite de denuncias ampliando la intervención y rol de los agentes, agilizando el tratamiento de las denuncias

2. La utilización de base de datos digitales para poder complementar la información recibida del denunciante

3. El seguimiento trimestral de las denuncias solicitando al organismo derivado que informe sobre los avances en la investigación

4. La articulación con el Enlace de Integridad para el seguimiento del avance de la investigación

Prevención de Conflictos de Intereses

En su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública la OA despliega su actividad en miras a prevenir, detectar y eventualmente promover la sanción de infracciones a esa ley, lo que incluye el cumplimiento del régimen de conflictos de intereses.

Las actuaciones que aquí tramitan pueden comenzar por iniciativa de la propia OA, por denuncias de ciudadanos, consultas de funcionarios, remisiones de actuaciones iniciadas en otros organismos públicos o bien a partir del control rutinario que la OA realiza de las declaraciones juradas patrimoniales. También interviene en el proceso de designación de determinados funcionarios, analizando su situación con carácter previo al nombramiento.

Las conclusiones de esos trámites, es decir, la opinión de la OA sobre un determinado tema, quedan plasmadas en diferentes documentos:

A- Resoluciones (que ponen fin a investigaciones en las que se produce prueba y el funcionario tiene oportunidad de ejercer su derecho de defensa)

B- Dictámenes (emitidos, principalmente, en respuesta a consultas)

C- Instrucciones preventivas (elaboradas a partir de un análisis de los vínculos de los funcionarios con el sector privado)

Desde enero de 2016 al 31 de octubre de 2020 se iniciaron más de 170 actuaciones, de oficio o por denuncias, vinculadas a potenciales conflictos de intereses y otras infracciones a la ley 25.188 y se dictaron: 95 resoluciones y 154 dictámenes.

En el mismo período, se realizaron y remitieron instrucciones preventivas y de post empleo a más de 650 funcionarios de alto rango.

Instrucciones Preventivas y Post empleo

La Oficina Anticorrupción elabora y remite instrucciones preventivas y post empleo que contienen información detallada sobre las normas de ética pública que todo funcionario público debe cumplir, así como indicaciones concretas respecto de su situación particular. Estas instrucciones preventivas son notas personalizadas que consisten en un análisis de los vínculos que el funcionario tiene o tuvo con el sector privado (trabajos anteriores, participación en sociedades, etc.) y una explicación, en lenguaje sencillo, de las normas de ética pública que se encuentra obligado a respetar y de los límites para el ejercicio de sus funciones públicas en virtud de tales vinculaciones.

Buena práctica: intervención preventiva en procesos de designación

El rol preventivo de la OA también se manifiesta en las consultas recibidas en los procesos de designación de altas autoridades de la administración pública nacional.

La Oficina interviene formalmente en los procesos de designación de funcionarios a requerimiento de los organismos encargados de tramitar esas designaciones (en particular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación).

Los dictámenes emitidos en ese marco analizan los vínculos (pasados y presentes) del candidato con el sector privado y determinan, por un lado, si se encuentran cumplidas las condiciones exigidas por la Ley de Ética para acceder a la función pública. Además se establecen los límites que el régimen de conflictos de intereses impone a la eventual gestión de la persona analizada (principalmente, objeto y alcance de sus deberes de abstención). No tienen carácter vinculante.

Entre mayo de 2016 y octubre de 2020, la OA intervino en 48 procedimientos de

designación. Entre éstos, cabe destacar el que tuvo lugar en cumplimiento de lo previsto por la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, norma que dispuso la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia y la forma de designación de sus miembros que contempla la intervención de la OA.

Simulador de Conflictos de Intereses

La Oficina Anticorrupción diseñó, desarrolló y publicó en el sitio web de la OA el Simulador de Conflictos de Intereses. Fomenta la autoevaluación de los funcionarios públicos. Es un método rápido, simple y anónimo.

La accesibilidad de la herramienta permite también el control de la ciudadanía y la potencial denuncia de una supuesta infracción ética ante la OA.

Esta aplicación innovadora contribuyó con las acciones de sensibilización y concientización lideradas desde la OA. También posicionó públicamente la temática de conflictos de intereses y tuvo una gran repercusión a nivel nacional e internacional, como consecuencia de su efectividad en la interacción de la OA con funcionarios, ciudadanos y la prensa.

Desde su implementación en abril de 2017 a noviembre de 2020 se registraron más de 9100 consultas al Simulador de Conflictos de Intereses. Todos los años se publica un mensaje pop up en el Sistema de Gestión Electrónica para que más de 300.000 usuarios conozcan su existencia y hagan uso de la herramienta.

Catálogo Jurídico de Ética Pública, Integridad y Transparencia

La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional elaboró el Catálogo jurídico de Ética Pública, Integridad y Transparencia que reúne los principales instrumentos que componen el marco normativo y los avances en materia de regulación de las pautas, deberes y obligaciones de quienes ejercen la función pública en el Estado Nacional.

La difusión de la normativa vigente permite avanzar hacia un análisis pormenorizado que posibilite evaluar las capacidades institucionales presentes, para fortalecer un futuro sistema nacional en términos de ética pública, integridad y transparencia.

Está destinado a los y las agentes de la Administración Pública Nacional, quienes podrán contar con una herramienta para relevar las normas que regulan su tarea. El Catálogo se encuentra a disposición de la ciudadanía en general, con información jurídica sobre mecanismos de acceso a la información pública, participación ciudadana y herramientas de control, entre otros.

El Catálogo integra la normativa de forma organizada con un criterio cronológico - de acuerdo al año de sanción- e incluye una sintética descripción de su contenido y un acceso directo al sistema de Información Legislativa y Documental del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1_catologo_juridico_etica_publica_integridad_y_transparencia_17-06.pdf

Agencia de Acceso a la Información Pública

En 2019 la DNAIP continuó con la elaboración de estadísticas sobre solicitudes y reclamos de acceso a la información pública, recibidos por los sujetos obligados previstos en el artículo 7 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que tienen sistema de Gestión Electrónica de Expedientes (GDE).

La estadística de solicitudes de acceso a la información pública tiene un doble objetivo: por un lado, dar cumplimiento al artículo 24 inciso h de la Ley 27.275 que establece “Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra cuestión que permita el control ciudadano a lo establecido por la presente ley” y, por el otro, sirve como control interno del cumplimiento de las obligaciones de la ley por parte de los sujetos obligados y como mecanismo para prever la demanda y tomar acciones tendientes a lograr la mejor calidad de respuesta en los tiempos adecuados.

Así, al 31 de diciembre de 2019 se contabilizaron 4.862 solicitudes de acceso a la información. Al cierre del año, se presentaron ante la Agencia 296 reclamos por presunto incumplimiento a las disposiciones de la ley. Este número representa un 6% de reclamos sobre el total de solicitudes ingresadas a los organismos que trabajan bajo el GDE. Esto no quiere decir que sólo el 6% de las solicitudes presente algún incumplimiento, sino que en esa cantidad los solicitantes decidieron seguir el trámite administrativo de reclamo. El 100% de los trámites de reclamos fueron resueltos dentro del plazo establecido por la ley.

Como complemento también se publicó en la página web el dataset de solicitudes de acceso a la información pública recibidas desde 2017, con actualizaciones semestrales, y se trabajó junto con la Secretaría de Innovación Pública (ex Secretaría de Gobierno de Modernización) en la publicación de los datos en el portal nacional de datos abiertos datos.argentina.gob.ar. Este repositorio de datos también incluyó las 20 solicitudes de acceso a la información recibidas por la Agencia, que fueron respondidas en su totalidad dentro de los plazos establecidos por la ley. Otra de las obligaciones que establece la Ley 27.275 es la de publicar proactivamente la información que está descripta en el artículo 32.

En 2019 se trabajó para que más organismos que migraron al portal argentina.gob.ar tengan su sección de “Transparencia” con los lineamientos aportados por la Agencia. Es así como organismos descentralizados y empresas del Estado se incorporaron al universo de sujetos obligados que publican la información establecida en el artículo 32. Por ejemplo, Trenes Argentinos Infraestructura y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Asimismo, se incorporó al menú de transparencia activa el ítem sobre Obsequios y Viajes. Para ello se trabajó junto con la Oficina Anticorrupción y la entonces Secretaría de Gobierno de Modernización. Los demás organismos que tienen sus propias páginas web también publicaron información de transparencia activa con un diseño propio, y desde la Agencia se controló el cumplimiento del contenido.

Para poder fiscalizar esta obligación se desarrolló una metodología que crea el “Índice de cumplimiento de los organismos centralizados de la Administración Pública Nacional a las obligaciones de transparencia activa” (artículo 32) cuyos resultados se encuentran publicados en la web. Allí se puede ver el nivel de cumplimiento general, el de cada inciso

del artículo 32 y el de cada ministerio.

Acceso a la información en la lucha contra la corrupción

La Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública (DNAIP) fue invitada a participar en la elaboración del Plan Nacional Anticorrupción 2019 - 2023, liderando cuatro iniciativas dentro del lineamiento "Transparencia y Gobierno Abierto".

Los compromisos fueron: el desarrollo de un sitio web de consulta de las solicitudes de acceso a la información pública y sus respuestas; la implementación de una política de transparencia activa focalizada en información clave para la prevención de la corrupción; la realización de acciones de difusión y capacitación en sectores específicos sobre acceso a la información pública; y la elaboración de un índice de cumplimiento de transparencia activa.

Sindicatura General de la Nación

La transparencia en la gestión y prevención de la corrupción es un eje de esta gestión, por lo que se continúa con el compromiso de impulsar medidas de lucha contra la corrupción, mejora en los procesos, corrección de errores, autoevaluación y producción de información precisa y oportuna para la toma de decisiones en el ámbito del Sector Público, tal como lo refleja su informe anual 2019.

Capacitaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)

En lo que respecta a la capacitación en materia de prevención, ética pública, lucha contra la corrupción, entre 2017 - 2019 se brindaron las siguientes capacitaciones: (1) Ética Pública, en dictado conjunto con la OA; (2) Transparencia y Responsabilidad Social en el sector público, para continuar con las actividades relacionadas de diagnóstico y diseño organizacional, su impacto en el monitoreo a lo largo del tiempo, así como la interpretación de la información relacionada; (3) Sinergia entre Ética, Integridad y Control Interno, importancia de la integridad, la ética y el control interno en la administración pública, en pos del compromiso con el fortalecimiento democrático y la transparencia en la gestión pública; (4) Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público Nacional. Normativa y documentos emitidos por la Oficina Anticorrupción (OA): (5) Plan Nacional Anticorrupción 2019/2023; (6) Proyecto de modificación Ley de Ética Pública No 25.1884 (borrador para la Reforma de la Ley). Mecanismo de Reporte de Alto Nivel - MRAN.

Plan Nacional Anticorrupción - SIGEN

Dentro de las iniciativas que se prevén por parte de la SIGEN en el Plan Nacional Anticorrupción, se presentan los siguientes lineamientos estratégicos en materia de Integridad y Prevención:

Lineamiento N° 135 - "Transparencia y lucha contra la Corrupción" en los planes de Auditoría Interna. A fin de priorizar auditorías, recomendaciones y seguimiento de medidas que fortalezcan la transparencia y las acciones contra la corrupción, se desarrollarán lineamientos para las Unidades de Auditoría Interna (UAI). Los mismos estarán orientados a establecer mecanismos de control para prevenir, detectar, responder y actuar frente a situaciones que presenten riesgo de ocurrencia de fraude, corrupción o cualquier tipo de conducta impropia.

Lineamiento Nº136 - Análisis de herramientas tecnológicas aplicadas a la lucha contra la corrupción. Elaboración de un análisis y evaluación respecto de alternativas, beneficios y costos de la aplicación de herramientas tecnológicas (Big Data, Blockchain, Data Mining e Inteligencia Artificial) a la labor de control interno. El principal objetivo de la presente iniciativa es contar con información actualizada y oportuna a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de la construcción de informes estadísticos y de modelos predictivos.

Lineamiento Nº 165 - Fortalecimiento del régimen disciplinario de la Administración Pública Nacional. Con el fin de prevenir la comisión de conductas reñidas con la ética, se dará difusión a las sanciones ante faltas disciplinarias, a partir de: Elaboración regular sobre aplicación de sanciones disciplinarias (apercibimientos, suspensiones, cesantías o exoneraciones -o equivalentes en distintos estatutos y normativas), con el propósito de ser difundida de manera regular; Acciones de seguimiento y auditorías (en coordinación con la SIGEN) en materia de cumplimiento de la asistencia y horario de trabajo y controlar los descuentos y sanciones que deben aplicarse. Esto apunta a generar un clima de control y modificar hábitos laborales que afectan el rendimiento y los servicios que el Estado Nacional debe prestarle a las personas de manera eficiente y transparente; Coordinación con la Procuración del Tesoro de la Nación, para la mejora de los procedimientos sumariales por medio de los cuales se aplican sanciones disciplinarias; Capacitación a las autoridades superiores y resto del personal de conducción, en materia de aplicación de sanciones, mediante distintas vías, inducción, capacitación obligatoria basada en casos prácticos y operativos, en materia de ética pública y régimen disciplinario; Estandarización y/o generación, según corresponda, de los códigos de descuento por sanciones, lo que permitirá un efectivo seguimiento de la evolución de la gestión del régimen.

8. Párrafo 2 del artículo 6

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Fortalecimiento institucional de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) tiene como principal objetivo fortalecer la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, a través de la prevención y la investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. Tiene entre sus objetivos hacer foco en la prevención de la corrupción, posicionándose como organismo de consulta y referencia para la implementación de políticas de transparencia y en la construcción transversal de una gestión transparente y participativa. Además, debe velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción por parte del Estado Nacional.

Desde el 20 de diciembre de 2019, mediante el Decreto 54/2019, se dispuso que la Oficina Anticorrupción, creada por el Art 13 de la Ley N° 25.233, tendrá carácter de organismo desconcentrado de la presidencia de la Nación, modificando el Decreto 102/1999. En consecuencia, el Decreto dota a la OA de mayor jerarquía institucional y eleva el cargo de su titular al rango de Ministro. En el mismo sentido, se propone transformar la oficina en un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación, manteniendo su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Aún cuando una mayor autonomía financiera y administrativa podrían fortalecer la entidad en mayor medida (<https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-en-argentina-folleto.pdf>), la Oficina Anticorrupción adquirió mayor independencia para ejecutar sus funciones, pudiendo, entre otras cuestiones, tener la capacidad de decidir sobre sus propias políticas de recursos humanos asegurando un personal profesional y multidisciplinario alineado con las necesidades del organismo y elaborar su propio Plan de Acción y dictar su reglamento interno sin requerir la aprobación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, requisito necesario antes de la sanción de la mencionada normativa.

Complementariamente, el Decreto 885/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 13 de noviembre de 2020, aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Oficina Anticorrupción. Dicha normativa modificó la estructura aprobada mediante la Decisión Administrativa N° 312/18, por la cual se crearon las Direcciones Nacionales y simples y las Coordinaciones existentes, y crea la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Actualmente, la estructura de la Oficina Anticorrupción está compuesta por dos Direcciones con rango y jerarquía de Subsecretarías: la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, encargada de la elaboración de políticas estatales contra la corrupción en el sector público nacional, y la Dirección de Investigaciones, responsable de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales. Además, cuenta con cinco Direcciones Nacionales, a saber: Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos -dependiente del Titular de la OA-; Dirección Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas y Dirección Nacional de Ética Pública -dependientes de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia-; Dirección Nacional de Investigaciones y Fiscalización y la Dirección Nacional de Apoyo, Análisis Técnico y Litigio -dependientes de la Dirección de Investigaciones-. Dentro del segundo orden operativo, se encuentra la Coordinación de Políticas de Integridad, en la órbita de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia; la Coordinación de Análisis de Información, bajo la dependencia de la Dirección de Investigaciones; y la Dirección de Relaciones Institucionales y la Coordinación de Admisión y Derivación de Denuncias, como unidades dependientes de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos.

El Proyecto de Ley de Ética Pública, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, incluye algunas de estas necesidades, y propone las siguientes innovaciones:

- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y el Ministerio Público deben designar o crear un organismo autárquico como autoridad de aplicación.

- Se prevén instancias de coordinación federal y entre poderes.

- Tiene facultades, entre otras, para la tramitación de denuncias, la emisión de dictámenes, la evacuación de consultas referidas a la Ley, la realización de programas de capacitación y divulgación, y el requerimiento de colaboración e información.

- Asimismo, tienen competencia expresa para dos medidas preventivas en particular: participar en los procedimientos de designación de ciertos funcionarios para analizar sus antecedentes.

- Con respecto a la designación del Titular: Se prevé un titular y titular adjunto, que dura 5 años con posibilidad de una nueva designación. Se fijan requisitos e incompatibilidad con cualquier actividad exceptuada la docencia.

- Se regula un procedimiento público, transparente y participativo para la designación (a cargo de la máxima autoridad del poder que corresponda), y causales de remoción para los casos de incompatibilidad o inhabilidad, por mal desempeño o por delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

- Por otra parte se crea la figura de los enlaces de ética: Para todos los organismos del Sector Público Nacional, (que establece los requisitos de selección). Tienen funciones para dar asistencia, implementar estrategias de sensibilización y capacitación, promover prácticas de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones nacionales e internacionales.

Nuevas Oficinas de la OA

Durante el año 2018, se llevaron a cabo tareas de readecuación de las instalaciones del inmueble del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en la calle 25 de Mayo 544, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de trasladar las oficinas de la OA.

En marzo del año 2019 comenzó el proceso de mudanza, el que se llevó a cabo por etapas, finalizando a principios del mes de abril. La mudanza al nuevo edificio

posibilitó una reorganización física más efectiva de los equipos de trabajo que favoreció la mejora y fortalecimiento de dinámicas de articulación interna.

Se dispone de un espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades del organismo, que entre otras prestaciones cuenta con un espacio de recepción de denuncias que asegura la confidencialidad y la reserva de la identidad del denunciante, y un espacio para archivar documentación reservada de declaraciones juradas de los funcionarios, además de permitir la concentración de todas las dependencias de la Oficina en un único edificio.

Cuestiones presupuestarias

La Oficina Anticorrupción, creada mediante el artículo 13 de la Ley N° 25.233, es un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación (Decreto N° 54/19) que tiene a su cargo la elaboración y coordinación de programas de prevención y control de la corrupción en el sector público nacional y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, goza de las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley N° 24.946". En materia presupuestaria, mantiene su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La OA es la Unidad Ejecutora del Programa 27-Controles Anticorrupción, existente en la órbita del Servicio Administrativo Financiero 332 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A través de este programa se canalizan las acciones destinadas a prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

En tal sentido, los principales objetivos del programa son:

- Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la integridad y transparencia en la gestión pública, a ser implementados en los Organismos Públicos.

- Recomendar y asesorar a los organismos del Estado para el diseño, promoción e implementación de programas y políticas de integridad y transparencia.

- Promover acciones de difusión y sensibilización en relación a los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública, entre funcionarios y empleados de la APN centralizada y descentralizada, el sector privado y en la opinión pública, entre otros.

- Velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional.

- Fortalecer el Sistema de Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos y la prevención en materia de Conflictos de Intereses y otras infracciones a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

- Contribuir con la implementación de políticas de transparencia y prevención de la corrupción en Jurisdicciones subnacionales, mediante la asistencia técnica.

-Recibir denuncias por presuntos hechos de corrupción, que provengan de organismos o funcionarios públicos, órganos de control y ciudadanía.

-Analizar la información que, como resultado de sus tareas de control, remiten la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, a fin de analizar la posible existencia de irregularidades administrativas que puedan configurar hechos de corrupción.

-Impulsar la atribución de responsabilidades y una consecuente sanción penal, por los hechos de corrupción que afecten el patrimonio del Estado Nacional, interviniendo como parte acusadora en los procesos penales donde esos hechos se sustancien.

Agencia de Acceso a la Información Pública

Gestión de los recursos humanos, administrativos y financieros

La puesta en funcionamiento de la Agencia fue un desafío, ya que era la creación de un organismo nuevo. Además, su carácter autónomo (funcional y financieramente) otorgado por ley requería que se crearán, también desde cero, su Servicio Administrativo Financiero y su Servicio Jurídico.

Es la propia Ley de Acceso a la Información Pública la que resalta la importancia de que la Agencia esté conformada por personas idóneas y elegidas a través de procesos no discrecionales.

De esta manera, establece que su Director deberá ser elegido a partir de un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice la expertise del candidato y prevea la posibilidad de presentar apoyos e impugnaciones. Por otra parte, también dispone que su remoción no puede darse por un decreto presidencial sino por acuerdo del Poder Legislativo Nacional que debe conformar una comisión bicameral a tal fin. Dicha comisión deberá emitir un dictamen vinculante fundando debidamente las razones por las cuales el/la directora/a tendrá que ser removido (artículo 27 de la Ley 27.275). Tal sistema de remoción de un funcionario que ejerce funciones en el ámbito del PEN se asemeja sólo a jueces de la Nación y titulares de organismos de control.

Con esta impronta y con el espíritu de fortalecer la institucionalidad de la Agencia fue que, durante el 2019, comenzó el proceso para llamar a concurso para cubrir los cuatro cargos directivos de las áreas sustantivas. Los cargos a concursar fueron: Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Dirección de Políticas de Información Pública y Dirección de Protección de la Privacidad. Durante el proceso que llevó siete meses se designaron a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, se diseñaron y aprobaron las bases del concurso y se realizó el llamado a convocatoria para la cobertura de los cargos mencionados. Luego de la presentación de los postulantes y de la realización de los exámenes pertinentes se aprobó el orden de mérito (Resolución 120/2019 de la Secretaría de Empleo Público) y en octubre se firmó la resolución según la cual se designan a las personas para ocupar dichos cargos.

En julio de 2018, y a poco más de medio año de funcionamiento y luego de haber desarrollado los procedimientos internos, seleccionado el personal y armado las

misiones y funciones de las áreas, se creó la Dirección Técnico Administrativa de la Agencia y la Coordinación de Asuntos Jurídicos y, de esta manera, se consiguió su completa autonomía para brindar los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica. Ya en 2019, se consolidó aún más la estructura de la Agencia al incorporar a la Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación.

A finales de 2018 la Agencia contaba con 38 agentes. Hoy, cuenta con 45 personas que trabajan día a día para cumplir con los objetivos definidos.

Planeamiento anual de trabajo

Durante 2019 la Unidad de Auditoría Interna (UAI) inició un proceso tendiente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Agencia, con el objetivo de lograr mayores niveles de eficiencia, calidad, integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

En este sentido, se planificaron y ejecutaron diversos proyectos, actividades y tareas, a modo de ejemplo:

-Informe 2/2019 "Reporte Ejecución Plan de Contingencia 2018": se realizó un seguimiento de los proyectos y/o actividades o tareas de Auditoría del Plan de Contingencia UAI 2018 correspondiente al período agosto-diciembre de 2018, analizando el cumplimiento, los desvíos y los motivos que los ocasionaron.

-Informe 3/2019 "Cierre de Ejercicio 2018": se verificó la aplicación de los Procedimientos de Auditoría de Cierre establecidos por la SIGEN en el ámbito de la Agencia (Servicio Administrativo Financiero 209).

-Informe 4/2019 "Seguimiento de Acciones Correctivas": se presentaron las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas por esta UAI y otros órganos de control a la Agencia vigentes al 31 de diciembre de 2018.

-Informe 5/2019 "Informe Anual sobre Comité de Control": este informe tuvo por objeto indicar el funcionamiento anual del Comité de Control Interno de la UAI de la Agencia durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.

-Informe 9/2019 "Auditoría en la Dirección de Protección de la Privacidad - área Inspecciones": se evaluaron los procedimientos de supervisión ejercidos en la Dirección de Protección de la Privacidad - área Inspecciones, dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, conforme a la normativa vigente en la materia.

-Informe 13/2019 "Auditoría del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados": se efectuó un relevamiento para evaluar los procedimientos y funcionamiento del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados, focalizado hacia el sistema informático y administrativo relevante que hace a su gestión, en el marco del cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene asignadas, en términos de eficacia, eficiencia y economía en las funciones desarrolladas en el organismo.

Sindicatura General de la Nación

Según lo establecido en el Artículo 97 de la Ley 24.156, es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera.

Como parte del proceso de fortalecimiento, y en relación a la independencia necesaria con la que trabaja SIGEN, a través del Decreto N° 72/18 del PEN y la Resolución SIGEN 69/2018, el Síndico General de la Nación dispone de la facultad de nombramiento y remoción del Auditor Interno Titular de todas la Unidades de Auditoría Interna que integran el Sector Público Nacional.

De esta manera, se modificó el sistema de designación y remoción de auditores internos. Con esta reforma se facultó a la SIGEN a determinar las pautas de conformación de estructura e integración de las Unidades de Auditoría Interna (UAI), y se consolidó el funcionamiento de los Comités de Control Interno como herramienta esencial para el fortalecimiento del sistema de control.

Además, se estableció que la SIGEN diseñará una carrera de especialización con el fin de lograr una mayor profesionalización de los Auditores Internos Gubernamentales. Por otra parte, se elaboró el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional correspondiente al año 2018. En dicho documento se exponen los niveles de riesgo en cada uno de los organismos y entidades, ordenados a través de una Matriz de Exposición que ofrece una visión integral de la situación y se redefinieron los formularios del Sistema Mapa de Riesgo con el objeto de mejorar la calidad de información.

En 2017, por ejemplo, la SIGEN elaboró 50 informes de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno de distintos entes, jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional y las universidades nacionales, y emitió 51 informes de Situación Empresarial.

Con la noción de que para mejorar realmente la gestión es necesario el trabajo en conjunto y articulado con los organismos ejecutores de las políticas públicas, se crearon 135 Comités de Control, integrados por funcionarios de distintas áreas de la administración pública y la SIGEN, orientados a verificar el funcionamiento del sistema de control interno. En el mismo año se supervisó el desempeño de 190 UAI, para constatar la ejecución de sus planes anuales (Carta de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS #11 - Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, abril 2018).

Actividades de capacitación

El Decreto 279/2010 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) establece la creación del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP), en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación, bajo la supervisión del Instituto Nacional de la Administración Pública.

El ISCGP tiene por objeto el desarrollo de la formación, capacitación y perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector Público Nacional, con un enfoque transdisciplinario. Es en el marco de este ISCGP que la SIGEN y la OA dictan la capacitación "Sinergia entre Integridad, Ética y Control Interno".

Por otro lado, cabe señalar que la mayor complejidad y tecnificación alcanzada por la creciente especialización del Sector Público Nacional, hacen necesario una mayor profesionalización de sus Auditores Internos y de las estructuras y diseño

de perfiles de las Unidades de Auditoría Interna, como así también de quienes cumplen funciones de auditoría desde la SIGEN como síndico jurisdiccional y síndicos de empresas o sociedades estatales. Asimismo corresponde destacar el dictado de la carrera en Auditoría Interna Gubernamental acreditada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Oficina Anticorrupción

El presupuesto asignado al Programa 27 se ha visto incrementado notoriamente en los últimos cuatro ejercicios, partiendo de una asignación de \$ 23.260.512,00 en el año 2016 a un total de \$ 105.810.209,00 en el 2020.

Presupuesto Pr. 27 - Ejercicios 2016 a 2019			
Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
\$ 23.260.512,00	\$ 67.754.833,00	\$ 68.641.577,00	\$ 102.410.209,00

Cabe destacar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de las previsiones legales en materia de Acceso a la Información Pública, publica en su portal de transparencia activa la información mencionada en el artículo 32 de la Ley Nº 27.275, entre la que se encuentra la correspondiente al presupuesto asignado a los distintos programas de la jurisdicción y su nivel de ejecución.

Dichos datos se encuentran publicados en la página web:

<https://www.argentina.gob.ar/justicia/transparencia>

Agencia de Acceso a la Información Pública

Como la Agencia entró en funciones en septiembre de 2017 y el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2018 ya se encontraba en el Congreso, no fue posible presentar la propuesta. Sin embargo, mientras se discutía en la Cámara de Diputados de la Nación, se consiguió que hubiese una partida especial para la Agencia de \$43.368.000 para solventar las actividades durante 2018. A partir de ese año, con la Agencia en funcionamiento, se llevaron adelante las tareas de formulación del anteproyecto de presupuesto para el año 2019, situación que derivó en el otorgamiento, a partir de Ley 27.467, de \$ 43.395.423 para el ejercicio 2019, contemplando gastos en personal y bienes y servicios.

Dichos datos se encuentran publicados en la página web:

<https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/presupuesto>

Puede consultarse la información presupuestaria de todas las reparticiones de la Administración Pública Nacional en el portal público Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, ingresando a <https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/>.

Estudio sobre Integridad en Argentina, OCDE 2019

El Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina evalúa el sistema de integridad pública y analiza las regulaciones, reformas y esfuerzos recientes del país.

El estudio cuenta con ocho capítulos y presenta propuestas de acción concretas en base al análisis y aspectos específicos de los tres pilares de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública.

Se analizan:

- La legislación y de las prácticas de integridad en el sector público

- El desarrollo de las capacidades de los empleados públicos responsables de promover la integridad y el control.

- El desarrollo de un plan de acción para las reformas propuestas en el Estudio

Asimismo, provee algunas ideas sobre cómo operacionalizar un enfoque de administración de riesgos de corrupción y mejorar la función de auditoría en el gobierno. Finalmente, en el documento se evalúa el proceso de toma de decisiones y se brindan opciones para incrementar su transparencia e integridad, en miras a lograr políticas sujetas a rendición de cuentas y más equitativas.

Más información sobre las acciones y medidas recomendadas a cada organismo:

<https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-en-argentina-folleto.pdf>

Actualmente la Oficina Anticorrupción y la OCDE dieron inicio a la fase de monitoreo del Estudio de Integridad. Para ello, se está construyendo un proceso de entrevistas virtuales con los responsables de diversos organismos que tienen a su cargo la implementación de recomendaciones contenidas en el estudio a fin de consolidar la fase de monitoreo.

En el mes de octubre, la Oficina Anticorrupción dio inicio a la fase de monitoreo del Estudio sobre Integridad, para lo cual se llevó a cabo un proceso de entrevistas virtuales con los responsables de los organismos que tienen a su cargo la implementación de dichas recomendaciones. Como resultado de este proceso, la OCDE elaborará un “Informe de seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina” que será publicado en la web del Organismo.

Informes de gestión de la Oficina Anticorrupción

Los informes de gestión de la Oficina Anticorrupción son documentos públicos que describen las actividades, procesos y resultados de esta oficina.

En cumplimiento de lo previsto en el Capítulo IV del Decreto N° 102/99, A partir del Decreto N° 54/19, los informes de gestión de la Oficina Anticorrupción contienen recomendaciones sobre reformas administrativas o de gestión que colaboran en la prevención de hechos ilícitos o irregularidades. Asimismo, pueden ser consultados en el portal de internet del organismo <https://www.argentina.gob.ar/node/1572> .

Informes de gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública

De acuerdo a lo establecido en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (artículo 24 - inciso j), la Agencia publica anualmente su Informe de Rendición de Cuentas de Gestión, en el siguiente enlace: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/informe-gestion> .

9. Párrafo 3 del artículo 6

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

¿Ha aportado su país la información tal como se describe más arriba? De ser así, facilite la referencia correspondiente.

La Oficina Anticorrupción como organismo encargado de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional, conforme el Decreto 838/17, ha sido designada para cumplir el rol de “punto focal” de dicho proceso de examen.

Por medio de NO-2018-22636611-APN-OA#MJ, con fecha 14 de mayo de 2018, esta oficina ha informado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina a la Misión Permanente de la República Argentina en Viena, la designación correspondiente.

10. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

SIGEN:

La Sindicatura General de la Nación requiere asistencia técnica tanto para profundización de la profesionalización de agentes de la administración pública nacional (sobre todo a lo referido a normas internacionales de aplicación local), como para la implementación de auditorías cooperativas en materia de integridad, con proyección al MERCOSUR. Por otro lado, se hace necesaria la capacitación y recursos relacionados a la implementación de nuevas tecnologías tales como DIGIWHIST (Digital Whistleblower), en Big Data, o para el desarrollo e implementación de una nueva app en control interno, para todos los organismos del estado y empresas con participación estatal. Estas herramientas tecnológicas son necesarias también para la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la detención de actos de corrupción o desvíos de gestión.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

Asistencia técnica que está siendo recibida y ejecutada en la Oficina Anticorrupción:

Asistencia Técnica PNUD:

Número y Título del Proyecto: PNUD ARG/16/019 Cooperación para la implementación de políticas de transparencia y control de la corrupción aplicados en conjunto en gobiernos subnacionales

Asociado en la Implementación: Oficina Anticorrupción

Inicio y finalización del Proyecto: 01/08/17 a 31/07/2022

Breve descripción: El proyecto se propone impulsar el cumplimiento de los mandatos de las convenciones internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción (ONU, OEA, OCDE), promoviendo la cooperación y trabajo conjunto con gobiernos provinciales y municipales, a través de la creación de mecanismos para promover la efectiva implementación de las políticas de transparencia y control de la

corrupción aplicados en conjunto en dichas jurisdicciones.

En el primer semestre de 2020, se llevó a cabo la revisión del proyecto, repensando las prioridades y estrategias, las acciones a desarrollar y su respectivo calendario y los resultados deseados, orientando el trabajo de la Oficina Anticorrupción con las jurisdicciones provinciales y municipales en materia de transparencia e integridad para los próximos dos años.

El **BID**, a través de una cooperación técnica no reembolsable (AR-T1166), se encuentra apoyando a la Oficina Anticorrupción (OA) en el diseño e implementación de políticas de transparencia e integridad en la gestión pública.

Esta consultoría se alinea con el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad adoptado en febrero de 2020 (GN-2981-2), que orienta el trabajo que realiza el Grupo BID con los gobiernos en temas de transparencia e integridad en los ámbitos operativos, de diálogo y de generación y difusión de conocimiento. El Banco a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) apoya a los países en implementar reformas de transparencia e integridad alineadas con los compromisos internacionales con énfasis en el fortalecimiento institucional, la integridad y el acceso a la información. Las reformas deben apuntar a mejorar la calidad de las instituciones, promover la adopción de reglas claras para evitar el abuso de autoridad, incrementar la información para la acción colectiva, y asegurar la efectividad de los organismos de control.

Número y Título del Proyecto: AR-T1166. Políticas de transparencia para una gestión más efectiva.

Asociado en la Implementación: Oficina Anticorrupción

Inicio del Proyecto: 24 de septiembre de 2020

Duración: 10 meses

Breve descripción: Diseños institucionales para políticas de integridad y transparencia: Consultoría para el desarrollo de diagnósticos y recomendaciones.

7. Sector público

11. Párrafo 1 del artículo 7

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:

a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;

b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;

d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Según datos aportados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, Argentina cuenta con regímenes normativos que establecen los principios y criterios previstos en el **inc. "a"**, ya sea por imperio de la Ley 25.164 de Empleo Público o por las convenciones colectivas de trabajo aplicables a la totalidad de los empleados de la Administración Pública, en sus distintos niveles de negociación, Convenio General o Convenios Sectoriales.

Sin perjuicio de la existencia de normas pertinentes, se encuentra en plena negociación con las asociaciones sindicales un nuevo régimen aplicable a la Alta Dirección Pública, es decir los tres niveles de reporte inmediatamente inferiores a la autoridad política, que constituyen los cargos de conducción y dirección más importantes de la pirámide organizativa del PEN.

A los fines de garantizar los principios antedichos, se digitalizan y modifican las normas relacionadas con los procedimientos concursales y de evaluación de desempeño, también con participación de las asociaciones sindicales signatarias de los Convenios Colectivos General y Sectoriales.

En lo que respecta a los concursos de los cargos simples o pertenecientes a la dotación, también se han evidenciado avances respecto de la normalización de la planta del Estado, atento a que se han digitalizado por procedimientos para

el crecimiento de la carrera en tramo y grado.

Asimismo, se ha dictado la Resolución RESOL-2018-8-APN-SGM#JGM que facilita la movilidad interna de trabajadores dentro de la APN, encontrándose en curso una modificación reglamentaria para agilizar los trámites de transferencias.

Por su parte, la RESOL-2020-48-APN-SGYEP#JGM establece la realización de un análisis sobre el estado de situación de la planta no permanente de la Administración Pública Nacional y de la antigüedad del personal en las mismas, lo que permitirá contar con datos válidos para la planificación estratégica de los procesos de selección a implementarse en los próximos años focalizada en proponer mejoras posibles en razón de un cambio superador dentro de la Administración Pública-

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232237/20200718>>-.

Actualmente se está realizando un análisis pormenorizado, para una posterior calibración con cada una de las jurisdicciones y organismos descentralizados. Una vez finalizado, permitirá poner en valor el trabajo desempeñado por las y los trabajadores del Estado, al tiempo que contribuirá a la transformación de la función pública potenciando el talento humano y el fortalecimiento institucional.

Además, con los datos de dicho relevamiento y la digitalización de todo el procedimiento de concurso para el acceso a la planta permanente, se cumplirá con una deuda histórica de dotar de estabilidad a los empleados públicos con más de cinco años de antigüedad.

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, órgano rector del Empleo Público, es el responsable de entender en la definición de las políticas, seguimiento y evaluación de la aplicación de Recursos Humanos el desarrollo y funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa, a través de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y en tanto Autoridad de Aplicación, se encuentra facultada para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su instrumentación y control.

La gestión del Estado requiere el diseño y puesta en funcionamiento de planes de recolección de información para promover el desarrollo profesional de sus integrantes. Para ello, es imprescindible contar con información actualizada, relevante y precisa; y, a su vez, aplicar métodos y procedimientos claramente definidos y controlados que permitan impulsar racional y equilibradamente las políticas de desarrollo de recursos humanos.

En esta línea, y en el marco del Plan integral de administración de la información de capital humano del Estado se continúa desarrollando la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), la cual actualizó todas las modificaciones sucedidas en el empleo público, a través de las pautas del Decreto N°132/20 integrando la información del capital humano y de los recursos que componen y prestan servicios en las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el ámbito de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público

Nacional.

La BIEP aspira a lograr la homogeneización de diferentes bases de datos que componen el motor de gestión de todo el Estado, sin perjuicio de que la naturaleza particular de cada una implique un diseño funcional dentro de sus propias estructuras. Se trata de un ecosistema de Bases de Datos analítico, integrado, detallado, histórico, consistente, flexible y escalable. Fuente única oficial sobre la situación de empleo público nacional.

<https://biep.modernizacion.gob.ar/apps/directorio/>.

Adicionalmente, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros elabora un **Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP)** con el objeto de brindar información sobre empleo público según los datos que surgen de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), creada por el Decreto 365/2017, que constituye la única fuente oficial de datos sobre el empleo público nacional. El informe se encuentra a cargo de la Dirección de Investigaciones y Publicaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), y de la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial.

Su tercera edición, de junio 2020, además de ofrecer una radiografía del empleo público, analiza el progreso en la carrera administrativa en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), teniendo en cuenta los factores que contribuyen a los cambios escalafonarios y vinculándolos con el nivel de estudios, modo de ingreso a la APN, nivel de estudios alcanzado, antigüedad, tipo de contratación y de acceso al cargo. Permite así planificar una política de promoción para los y las agentes en su carrera en la APN. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-informe-trimestral-de-empleo-publico-itep>.

Además, la Secretaría de Gestión y Empleo Público también elabora el **Informe Trimestral de la Estructura del Estado Nacional (ITESEN)**, publicación que tiene como propósito brindar información válida y confiable sobre la Administración Pública Nacional y sus organismos dependientes.

En lo que respecta al **punto “b”**, la selección de estos puestos se encuentra incluida en el objetivo de concursos previsto anteriormente aunque no se evidencian acciones vinculadas a la rotación en los puestos de manera general.

No obstante, desde la Oficina Nacional de Innovación de Gestión (ONIG) de la Subsecretaría de Empleo Público, el Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (PMOBI) acompaña y brinda respuestas a las necesidades de recursos humanos de los distintos organismos y las conjuga con las necesidades de progresión y aspiraciones personales en la inserción laboral según las trayectorias y los intereses de las personas que trabajan en la Administración Pública. Por ello, PMOBI impulsa la mejora continua y el fortalecimiento del empleo público.

Desde el PMOBI se pone el acento en recuperar las capacidades estatales orientadas a la implementación de las políticas públicas al servicio del

desarrollo del país.

Este propósito acompaña la misión de jerarquizar el rol de las y los trabajadores públicos a través de la mejora de sus condiciones laborales y la formación constante en su carrera a través de políticas, programas, y proyectos en materia de empleo público.

Entre enero y septiembre de 2020, PMOBI recibió más de 600 solicitudes de movilidades de las cuales 450 se hicieron efectivas y se registraron 160 solicitudes de búsquedas internas. Además, respecto de las movilidades acordadas entre los organismos (movilidades soporte) se gestionaron en promedio 71 pedidos por mes y 52 movilidades, de este tipo, se hicieron efectivas en promedio mensual.

Durante el 2020, 1266 postulantes se registraron en el Programa y realizaron 930 postulaciones. La cartelera de búsquedas, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, exclusiva para empleados públicos nacionales, registra más de 350 visitas diarias.

En lo que respecta al **punto “c”**, la política salarial de la Administración Pública se encuentra sujeta a la negociación colectiva con asociaciones sindicales, entendiéndose la misma adecuada según los fines y objetivos de cada institución/repartición.

Adicionalmente, funciona la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, integrada por representantes de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Economía y Secretaría de Innovación Pública que analiza obligatoriamente todas las propuestas salariales aplicables al sector público, con el propósito de mantener la razonabilidad y homogeneidad de la política salarial, la cual se encuentra en permanente análisis por parte de las autoridades, tanto las que fija de manera unilateral el Poder Ejecutivo (por ejemplo: Fuerzas Armadas), como aquellas que requieren de la negociación gremial.

Se encuentra a disposición, grillas salariales correspondientes a todos los niveles de la administración nacional, así como el listado de personal y autoridades superiores y sus salarios en www.argentina.gob.ar, sin perjuicio de proporcionar mayor información de ser requerida.

Como consecuencia de la digitalización del proceso de evaluación de desempeño realizado en el año 2020, se promoverá el derecho de los trabajadores a su evaluación, aun en contextos pandémicos y con la debida veeduría sindical; de modo tal que su carrera administrativa no se detenga por dichas vicisitudes. Además, la existencia de un mecanismo digital para la evaluación, fomenta que todos los trabajadores sean siempre evaluados, dado que históricamente varias jurisdicciones presentaban demoras incluso bianuales.

Actualmente, el contexto de aislamiento y trabajo remoto, supone restricciones para la realización presencial de algunas etapas reglamentarias del

procedimiento, por ello fue fundamental avanzar en el cumplimiento de la evaluación de desempeño, teniendo en consideración el impostergable derecho a la carrera del personal. En este marco, y con el fin de unificar criterios y facilitar la gestión, la Oficina Nacional de Empleo Público puso a disposición de las áreas de personal el Protocolo de Actuación a Distancia para el Procedimiento de Evaluación de Desempeño

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_gestion_remota_de_desempeno_1.pdf. En él se especifican los parámetros y recaudos para llevar adelante el proceso de evaluación de desempeño de manera remota.

Además, se fomentó el bienestar psico-social de los trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional publicitando desde el inicio de la pandemia la Guía de Recomendaciones para Empleados Públicos sobre Trabajo Remoto y Bienestar Psicosocial y la Guía para Conducción de Equipos por Trabajo Remoto (<https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/guias-de-trabajo-remoto>) donde se ofrecen pautas claras y practicable para sobrellevar una situación impensada.

En cuanto a la **pregunta “d”**, la Oficina Anticorrupción conjuntamente con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros (ex Secretaría) han desarrollado el Plan Nacional Anticorrupción el cual incluye medidas preventivas destinadas al personal de todos los niveles.

Capacitación: El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) ha tenido una alta performance preparando al personal de la administración pública en aspectos propios de su trabajo, áreas transversales y ética, existiendo oferta de cursos específicos impartidos en conjunto con la Oficina Anticorrupción.

El INAP ofrece actividades de capacitación para los/las trabajadores/as del Estado, en todos niveles, desde el ingreso y durante el desarrollo de sus trayectorias públicas, con el fin de fomentar su participación y recuperar sus conocimientos, en línea con los desafíos estratégicos del Gobierno:

Trayectos Formativos

Se trata de actividades de capacitación que permiten fortalecer y desarrollar las capacidades de los/las agentes, teniendo en cuenta las competencias requeridas según campos específicos de práctica dentro del Sector Público y organizadas atendiendo tanto a las tareas habituales de los participantes como a sus expectativas de trayectoria pública.

Las actividades se organizan sin una secuencia y pueden ser tomadas por los/las agentes con independencia de los puestos de trabajo, de manera que podrán realizar un trayecto por las actividades de un solo campo de práctica o combinar actividades de varios de ellos.

Capacidades específicas para la gestión pública

El INAP diseña, planifica e implementa actividades de formación específicas para los/las agentes que ocupan mandos medios, ejercen funciones ejecutivas o equivalentes y se encuentran a cargo de las principales políticas públicas.

Estas actividades de formación tienen por objetivo jerarquizar el empleo público, contribuir a la mejora de las capacidades estatales en un entorno cada vez más complejo, que requiere aumentar las relaciones inter e intragubernamentales, y poner en práctica una gestión colaborativa, fuertemente vinculada a los conocimientos académicos e interdisciplinaria.

Comprende actividades de capacitación relacionadas con herramientas de gestión (diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos), comunicación institucional (gestión de la comunicación interna y externa), integridad, trabajo en equipo, entre otras.

Programa de capacitación general para ingresantes al Estado nacional

El INAP, por medio de este programa, brinda a los/las ingresantes al Estado nacional las capacidades que les permitan desempeñarse en el ámbito de la Administración Pública, comprendiendo sus dimensiones y especificidades, la complejidad del proceso de formulación y gestión de políticas públicas, el marco normativo general que regula los vínculos laborales de los/las trabajadores/as con el Estado empleador y la manera en que pueden desarrollar sus trayectorias públicas.

A su vez, se aborda la aplicación práctica de los valores y criterios que deben regir el ejercicio de la función pública democrática, en un marco de ética, transparencia y rendición de cuentas, completando una perspectiva integral que contribuya decididamente en el desarrollo de las capacidades estatales.

Ciclo de conferencias: políticas estratégicas de gobierno

La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción conjunta y simultánea de sus dependencias.

El INAP constituye este espacio con el objetivo de estimular la actualización y el desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros.

Portal de capacitación y oferta formativa: [<https://capacitacion.inap.gob.ar/cursos/>](https://capacitacion.inap.gob.ar/cursos/)

INAP Federal

El INAP tiene por objeto fortalecer las capacidades estatales de las organizaciones públicas de las distintas regiones de la República Argentina, a través de la capacitación presencial y virtual de los/las trabajadores/as de las administraciones públicas provinciales y municipales. A su vez, es la responsable de llevar a cabo ciclos de videoconferencias en diferentes temáticas, tanto para la Administración Pública Nacional como provincial y municipal.

Para más información ingrese a:

[<https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-inap-federal/>](https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-inap-federal/) .

Logros del Instituto Nacional de la Administración Pública | 2020

Se registró un aumento del 25 % en el total de personas inscriptas respecto de igual período de 2019, con un total de 231.480 personas inscriptas, 276.181

vacantes y 1534 comisiones. Del total de personas inscriptas, 214.407 corresponden a la Escuela de Formación Pública y 17.073 a Órganos Rectores.

Respecto a las vacantes disponibles, se informaron 240.504 en la Escuela de Formación Pública y 35.677 para Órganos Rectores. Estas vacantes se organizaron a través de 1193 comisiones en la Escuela de Formación Pública y 341 comisiones en los Órganos Rectores.

En lo referido al trabajo con provincias y municipios, se registraron 32.037 personas inscriptas, 33.650 vacantes y 138 comisiones.

A través del canal de YouTube del INAP se brindaron 110 videoconferencias, con un total de 6855 suscriptores permanentes y 208.954 visualizaciones.

A su vez, se actualizaron y mejoraron 91 actividades virtuales tutoradas y autogestionadas y se diseñaron 63 nuevas actividades virtuales, 21 de modalidad sincrónica y 42 de modalidad tutorada y autogestionada.

También se desarrolló una nueva funcionalidad en el campus INAP que permite a los/las agentes disponer de las constancias de las capacitaciones realizadas desde el año 2006.

Por otra parte, se acreditaron 634 actividades de capacitación, se certificaron 1350 comisiones y se notificó los créditos de capacitación obtenidos por 158.841 agentes.

Respecto a la promoción de tramo, se dictaminaron 96 instrumentos de valoración para tramo y se procesaron 122.307 encuestas correspondientes a 771 actividades que fueron evaluadas. Se incorporó a 440 docentes al registro de prestadores y se le otorgaron beneficios arancelarios para cursar carreras en distintas universidades a 467 agentes.

Por otra parte, se revisaron más de 2000 propuestas de capacitación jurisdiccionales, de las cuales se dictaminaron 835 en total. También se acompañó a las jurisdicciones en la implementación de la modalidad virtual sincrónica de las actividades y se articuló con otras 120 para la elaboración de sus Planes Estratégicos de Capacitación (PEC 2021-2023).

Respecto a la asistencia técnica a organismos, se asistió a más de 100 organismos para que regularicen su oferta de capacitación y se respondieron alrededor de 7000 consultas.

En todo lo referente a investigaciones, se publicaron 50 Cuadernos del INAP (CUINAP), 2 revistas Estado Abierto, 4 números del Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP), 3 números del Informe Trimestral de la Estructura del Estado Nacional (ITESEN), 2 números del Boletín Estadístico Cuatrimestral de Capacitación del INAP (BECC) y un libro de Oscar Oszlak, llamado "El Estado en la era exponencial".

Para finalizar, se aprobaron 81 proyectos de becas por \$121.758.853 y becas individuales por \$9.438.346, que alcanzaron a 23.118 agentes de todo el país.

En este sentido, durante el ejercicio 2020 se gestionaron y efectuaron pagos de becas y proyectos, lo que hizo que disminuyera la deuda acumulada con universidades públicas y privadas al 31 de diciembre de 2019 en un 44,90 % para los proyectos y en un 45,94 % para las becas.

[<https://www.argentina.gob.ar/noticias/logros-del-instituto-nacional-de-la-administracion-publica>](https://www.argentina.gob.ar/noticias/logros-del-instituto-nacional-de-la-administracion-publica)

Asimismo, en el mes de agosto de 2020 se presentó el **Programa Federal de Capacitación para Funcionarios Públicos**, desarrollado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, el cual destinará 20 millones de pesos a la capacitación integral de 30 mil trabajadores públicos de provincias y municipios en todo el territorio nacional, junto a 12 universidades nacionales.

El Programa de Formación en Políticas Públicas tiene como objetivo fortalecer al Estado para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

[<https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-federal-de-capacitacion-para-empleadas-y-empleados-publicos>](https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-federal-de-capacitacion-para-empleadas-y-empleados-publicos)

En la órbita del **Ministerio Público Fiscal (MPF)** también se evidencia la adopción de medidas que garantizan el cumplimiento de esta disposición:

1. Mecanismos de selección de personal

En cuanto a los procedimientos para la selección y contratación de magistrados, funcionarios y empleados del MPF, es preciso distinguir las situaciones y mecanismos de selección que se presentan:

- a. Para el cargo de Procurador General de la Nación;
- b. Los fiscales de las distintas instancias, jurisdicciones y materias;
- c. El resto de los funcionarios y empleados del MPF.

a) Designación del Procurador General de la Nación.

Al igual que las facultades conferidas al Presidente de la Nación en el artículo 99, inciso 4) de la Constitución Nacional, para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N° 27.148), establece que *“el Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes”*.

Allí se determina que el Procurador General de la Nación es el jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y es el responsable de su buen funcionamiento. Su cargo es vitalicio y su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. El mismo artículo fija que los requisitos necesarios para ser nombrado en ese cargo son ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio, y reunir las demás calidades

exigidas para ser senador nacional (tener más de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente).

Por Decreto N° 588/2003, del 13 de agosto de 2003, se dispuso que el procedimiento para el nombramiento del Procurador General de la Nación debe aplicar el mecanismo de selección establecido para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación instituido por el Decreto N° 222/2003. Así se determinó que la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de la Nación debe tener en consideración la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función. Que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.

A efectos de dotar de mayor transparencia y posibilitar la participación ciudadana en el procedimiento de selección, se estableció que el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia deben ser publicados en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días y, en simultáneo, que esa información sea difundida en la página institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Luego de esa publicación de antecedentes, los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los candidatos, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos. Del mismo modo, también puede requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

Haciendo mérito de las razones invocadas en las opiniones u observaciones recibidas, el Poder Ejecutivo Nacional debe disponer la elevación o no de la propuesta de candidato al Senado de la Nación.

Por otro lado, se exige que los candidatos presenten una **declaración jurada** con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores. Asimismo, velando por la prevención de posibles **conflictos de intereses** la norma requiere además que los candidatos adjunten otra declaración en la que se incluya la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos 8 años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por el mismo período, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la

existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.

Al mismo tiempo, debe recabarse de la Administración Federal de Ingresos Públicos un informe relativo a la situación patrimonial y al cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas.

Una vez que el Poder Ejecutivo Nacional envía su propuesta de candidato para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación al Senado de la Nación, su tratamiento parlamentario se rige por las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación (aprobado por resolución D.R.-1388/02, del 18 de diciembre de 2002 y sus diversas modificaciones).

En lo que respecta a la publicidad de las solicitudes de acuerdos para magistrados del Ministerio Público, el artículo 22 bis del citado reglamento prevé que la Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las medidas necesarias para darlos a conocer además, mediante su publicación en el sitio Internet de esa Cámara, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días, con una antelación no menor de quince días corridos de la fecha de celebración de la audiencia pública. Según el artículo 22 los pliegos solicitando la designación de magistrados del Ministerio Público deben ser sometidos al procedimiento de audiencia pública luego de la cual la Comisión de Acuerdos deberá analizarlas y correrle traslado al interesado. Finalizada la audiencia pública, la Comisión de Acuerdos debe producir dictamen fundado, a la mayor brevedad posible, aconsejando hacer lugar o rechazar el pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.

Actualmente (noviembre 2020) el puesto de Procurador General de la Nación se encuentra vacante, desde la renuncia presentada por la anterior Procuradora General de la Nación. Desde el 21 de noviembre de 2017 se ha nombrado como Procurador General de la Nación interino al Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con más antigüedad en el cargo.

Mientras tanto, de acuerdo a la independencia del MPF y al mecanismo de selección antes reseñado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado-en marzo 2020- un nuevo pliego para la designación de un candidato para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, pero respecto a quién el Senado aún no se ha expedido.

b. Designación de fiscales.

El caso de los demás magistrados del MPF (señalados en los incisos b, c, d, e y f del artículo 3, de la ley 24.946), su nombramiento es también decidido a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional pero con el acuerdo del Senado por mayoría simple de sus miembros presentes. La propuesta del ejecutivo surge de una terna de candidatos que le presenta el Procurador General de la Nación y que resulten de los concursos de magistrados del MPF.

Según el artículo 48 de la Ley 27.148, para la designación de los procuradores fiscales, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscales generales, fiscales generales de la Procuración General, fiscales y fiscales de la Procuración General, se llevarán adelante concursos públicos de oposición y

antecedentes, de los cuales surgirán las ternas de candidatos que el Procurador General de la Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

El artículo 49 de la citada ley establece que el concurso de oposición y antecedentes será sustanciado ante un tribunal convocado por el Procurador General de la Nación. La prueba de oposición escrita versará sobre temas y/o casos elegidos por sorteo previo y será evaluada por el tribunal mediante un sistema que garantice el anonimato. La prueba de oposición oral será pública y versará sobre temas y/o casos, estos últimos elegidos por sorteo previo.

A fin de evitar criterios de evaluación subjetivos, se determinó que el procedimiento no incluirá, en ningún caso, entrevistas personales, y estará regido por los principios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.

Se entiende que uno de los requisitos mínimos y elementales para procurar un servicio de administración de justicia democrático es disponer de mecanismos adecuados de selección de magistrados y magistradas. Es por ello que en el marco del Estado de derecho deben extremarse los recaudos para asegurar procesos de selección de magistrados y magistradas -en este caso de fiscales nacionales y federales- ágiles, transparentes, objetivos y que garanticen el debido proceso y la igualdad de oportunidades a todas las personas idóneas interesadas en acceder a tales cargos.

Las Resoluciones PGN N° 751/13 y 307/14 establecían el Reglamento para la Selección de Magistrados del MPF. Luego, por medio de la Resolución PGN N° 1457/17, del 6 de junio de 2017, ese procedimiento fue modificado en orden a receptar los cambios establecidos por la ley 27.148 del año 2015, haciendo hincapié en los principios de celeridad, transparencia, publicidad, objetividad, debido proceso e igualdad de oportunidades.

El nuevo procedimiento para los concursos de magistrados del MPF tiene por objetivo mejorar la garantía de objetividad en la selección de magistrados.

En cada concurso se compone un jurado integrado por cuatro magistrados del MPF y un jurista invitado (un profesor de una universidad nacional), que deben ser seleccionados mediante un procedimiento de sorteo público. Los miembros del jurado de selección deben preferentemente desempeñarse en la jurisdicción o en el área de especialización respecto de la posición que se quiere cubrir. La composición de este jurado debe procurar garantizar la diversidad geográfica, funcional y de género de quienes lo integren.

De acuerdo con el procedimiento establecido por Resolución PGN N° 1457/17, el concurso para la selección de candidatos debe ser despersonalizado y no puede incluir entrevistas personales. Se compone de un examen de oposición escrito, sobre materias y/o casos previamente elegidos a partir de un sorteo previo y evaluado de manera tal que se garantice el anonimato.

Luego de superar favorablemente el examen escrito, el procedimiento tiene una segunda instancia de examen oral público, también sobre materias y/o casos previamente seleccionados por sorteo.

En términos de transparencia, cada etapa relevante del proceso de selección debe ser publicada y difundida. Por ejemplo el llamado a concurso debe ser inmediatamente publicado en el Boletín Oficial, en un diario de alcance nacional, en los sitios institucionales de la Procuración General de la Nación, en las carteleras de todos los edificios públicos con oficinas del MPF y del Poder Judicial de la Nación, en los colegios de abogados, universidades y en otras instituciones públicas o privadas relevantes. Asimismo deben publicarse las listas de participantes, los miembros del jurado de selección, quienes son elegidos por sorteo, y la lista de candidatos con las calificaciones que han obtenido.

En lo que respecta a la objetividad, el jurado debe especificar previamente el criterio para el análisis de las evaluaciones. El nuevo régimen además provee lineamientos preestablecidos para la evaluación de los antecedentes de los candidatos. Asimismo, la consideración final de los miembros del jurado de selección es vinculante para la conformación de la terna que el Procurador General de la Nación debe enviar al Poder Ejecutivo Nacional, para su posterior acuerdo por parte del Senado.

La gestión administrativa de los concursos es llevada a cabo por la Secretaría de Concursos, dependiente de la Secretaría Disciplinaria y Técnica del MPF (<https://www.mpf.gob.ar/secretaria> <http://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/>).

Las funciones de la Secretaría de Concursos son:

- i. asistir a el/la PGN en las distintas instancias del trámite de los concursos en que deba intervenir,
- ii. organizar y realizar los trámites administrativos de todos los concursos, formar los expedientes de actuaciones, confeccionar las nóminas, efectuar las notificaciones, certificaciones, publicaciones, sorteos y gestiones que correspondan conforme lo dispuesto en el Reglamento para la selección de Magistrados/as y procurar especialmente el cumplimiento de los plazos establecidos;
- iii. brindar información al público;
- iv. confeccionar el formulario de solicitud de inscripción y todos los instructivos para la correcta inscripción de las/os postulantes;
- v. asistir, apoyar y asesorar técnica y administrativamente al Tribunal durante la sustanciación del concurso, labrar las actas y dar fe de los actos cumplidos por este;
- vi. requerir la colaboración de los/as magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación para la obtención de copias de expedientes a los efectos del sorteo de casos;
- vii. proceder a la destrucción de la documentación una vez transcurridos dos (2) años desde la designación de la/s persona/s en el/los cargo/s concursado/s;
- viii. adoptar las medidas y realizar todas las gestiones tendientes a garantizarla objetividad, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la celeridad en la sustanciación de los concursos.

Luego de finalizada la etapa del concurso público de oposición y antecedentes y de elevada la terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el proceso de selección de fiscales se rige por las previsiones del **Decreto N° 588/2003** y el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, reseñadas en el caso de la selección del Procurador General de la Nación (ver artículo 2° del Decreto 588/2003).

Según los artículos 4 y 5 del decreto reglamentario, a efectos de dar amplio conocimiento de las ternas en consideración para la designación de los funcionarios del MPF, estas deben ser difundidas en el sitio de Internet del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con indicación del cargo a cubrir, la integración de la respectiva terna, los puntajes obtenidos por los profesionales propuestos en las etapas de evaluación cumplidas, y el Curriculum Vitae de cada uno de los ternados. En forma simultánea esa información deberá publicarse en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Cuando él o los cargos a cubrir tuvieran asiento en las Provincias, la citada publicación deberá efectuarse, también, en un diario de circulación en la o las jurisdicciones que correspondiere.

El Decreto 588/2003 también establece un **mecanismo de participación ciudadana**, fijando un plazo para que los particulares, los colegios profesionales, asociaciones que nucleen a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema puedan hacer llegar, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales propuestos. También se podrá invitar a exponer su opinión a entidades profesionales, de la Magistratura y organizaciones sociales que considere pertinentes con relación a cada cargo a cubrir (artículos 6 y 7).

Al igual que en el caso para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, cada uno de los candidatos ternados también deberá presentar una declaración jurada patrimonial que podrá ser consultada por los sujetos interesados y el Ministerio de Justicia podrá recabar de la Administración Federal de Ingresos Públicos, un informe relativo al cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales.

Luego de estos procedimientos el Ministerio de Justicia deberá elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional, el que dispondrá sobre la elevación de la propuesta respectiva al Senado de la Nación, a fin de recabar el acuerdo pertinente.

c. Designaciones del resto de los funcionarios y empleados del MPF.

El MPF cuenta con mecanismos de selección y designación de funcionarios y empleados que garantizan la transparencia y la igualdad de oportunidades, ya que presentan parámetros de admisión objetivos, equitativos y democráticos.

En este sentido, en el marco de la sanción de un conjunto de normas orientadas a la democratización de la justicia, el 29 de mayo de 2013, el Congreso de la Nación aprobó la ley n° 26.861, “*Ley de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder judicial de la Nación*”. Esta norma estableció que el ingreso de los empleados y funcionarios al MPF se debe realizar a través de concursos públicos y abiertos.

El objetivo central es garantizar que las futuras vacantes se cubran a través de procedimientos que contemplen la publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia.

El MPF reglamentó la ley a través de la Resolución PGN N° 507/14 (<https://www.mpf.gob.ar/ingreso-democratico/files/2015/03/PGN-0507-2014-Reglamento.pdf>) y su modificatoria (Resolución PGN 3329/16: <https://www.mpf.gob.ar/ingreso-democratico/files/2015/03/PGN-3329-2016-001.pdf>).

Este reglamento regula el ingreso del personal permanente y no permanente a los cargos más bajos de los agrupamientos “Servicios Auxiliares”, “Técnico Administrativo” y “Técnico Jurídico”. Se busca, así, favorecer la carrera judicial dentro del organismo. En los considerandos de esta resolución se determinó que “uno de los requisitos mínimos y elementales para procurar un servicio adecuado y democrático de administración de justicia es **disponer de mecanismos idóneos de selección de su personal**”.

De este modo, el ingreso a los cargos de la carrera dentro del MPF se rige por medio de parámetros de admisión más objetivos, equitativos y a la vez respetuosos de las diferencias, en concordancia con el respeto de la manda constitucional de observar la idoneidad sin prevalencias ni preferencias antojadizas, caprichosas o infundadas.

En primer lugar, el Reglamento se asienta sobre el **principio de igualdad de oportunidades**, siendo abierto, público y basado en el parámetro objetivo de la idoneidad. Se ha diseñado un procedimiento que contempla convocatorias abiertas, dotadas de la mayor publicidad posible, a fin de favorecer que todas las personas interesadas se puedan postular.

Asimismo, se cuenta con la implementación de un programa informático para que todas las instancias de inscripción, aporte de documentación y presentaciones necesarias, se realicen en el sitio web del MPF.

En segundo término, el Reglamento fortalece las garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad del procedimiento estableciendo un Comité Permanente de Evaluación, que tiene como función principal la corrección y calificación de las evaluaciones. Se prevé la posibilidad de planteos de recusación y excusación como salvaguarda de la imparcialidad del órgano evaluador. A su vez, se diferencia a quien confecciona el examen (autoridad de aplicación) de quien lo corrige (tribunal evaluador). Por otra parte, el temario de las evaluaciones se sortea de manera previa, y en los concursos para cargos letrados se fija el sistema de anonimato para la corrección de los exámenes.

En tercer lugar, el Reglamento prioriza el principio de la idoneidad en el cargo. Se

evaluarán las aptitudes laborales de las personas postulantes a través de una entrevista personal y dependiendo de la categoría, se prioriza la formación profesional y académica de las personas concursantes a través de un orden de mérito.

Por último, el Reglamento busca favorecer la carrera judicial de los empleados y funcionarios del MPF.

La gestión administrativa de los procedimientos de selección de funcionarios y empleados del MPF se lleva a cabo por parte de la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos del MPF y toda la información relevante sobre los mismos es publicada en el sitio institucional: <https://www.mpf.gob.ar/ingreso-democratico/que-es-ingreso-democratico/>.

2. Remuneración adecuada

El derecho a una remuneración adecuada para todos los magistrados, funcionarios y empleados del MPF, como así también su progresión en la carrera laboral del MPF, se encuentra previsto en diversas normas y resoluciones internas. Están incluidos expresamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ley N° 24.946; así como en la reforma de la ley orgánica para el MPF, ley N° 27.148.

El **artículo 12 de la ley 24.946** estableció un sistema de equivalencias entre las remuneraciones de los funcionarios del MPF a las retribuciones de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, en sus distintas instancias: *“Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:*

a. El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

b. Los Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, percibirán un 20% más, de las remuneraciones que correspondan a los Jueces de Cámara, computables solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada C.S.J.N. 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional.

c. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y los magistrados enumerados en el inciso c) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara.

d. Los magistrados mencionados en los incisos d) y e) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia.

e. Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia

y de la Procuración General de la Nación, y los defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de Cámara.

f. Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia. Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios, idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.”

La **ley 27.148** regula la cuestión del desempeño, en la que se incluye la carrera laboral, la estructura escalafonaria y las escalas salariales en su Capítulo 2, del Título V (artículos 55 a 64):

“ARTÍCULO 55. - Carrera. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación tienen derecho al desarrollo de una carrera laboral. Se entiende por tal al conjunto de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso conforme a los principios de igualdad, idoneidad y capacidad que definen la trayectoria laboral y profesional de los distintos integrantes.

ARTÍCULO 56. - Capacitación. La capacitación es una condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Comprende el acceso a actividades formativas y/o de actualización, tanto para mejorar el desempeño en la plaza laboral respectiva como para acceder a otras posiciones dentro del organismo.

La capacitación que se brinde será integral, permanente y gratuita. Se ejecutará a través de recursos propios o por medio de convenios con instituciones públicas o privadas, todo ello en consonancia con las reglamentaciones específicas que para esta temática se dispongan.

ARTÍCULO 57. - Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación se integrarán en tres agrupamientos:

- a. Técnico jurídico.
- b. Técnico administrativo.
- c. Servicios auxiliares.

Dichos agrupamientos se conformarán en base a un escalafón que privilegiará un mayor nivel de profesionalización y especialización de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo de ampliar la capacidad institucional del organismo.

A tales efectos, se tendrá en cuenta la jerarquía de las funciones desempeñadas, el mérito y la idoneidad comprobados, el nivel de las remuneraciones y el logro de resultados en su función. En todos los casos, el progreso en la carrera operará de acuerdo con los sistemas de selección y los procedimientos de evaluación del

desempeño que se establezcan.

ARTÍCULO 61. -Remuneración y prestaciones sociales. Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación se determinarán del siguiente modo:

- a. El Procurador General de la Nación recibirá una retribución equivalente a la de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- b. Los procuradores fiscales percibirán un veinte por ciento (20%) más de las remuneraciones que correspondan a los jueces de cámara, computables solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada C.S.J.N. N° 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional.
- c. Los fiscales generales que actúen ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación Penal y los fiscales generales que se desempeñen como fiscales coordinadores de distrito percibirán una remuneración equivalente a la de juez de casación.
- d. El Fiscal de Investigaciones Administrativas y los fiscales generales percibirán una remuneración equivalente a la de juez de cámara.
- e. Los fiscales percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia.
- f. El resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación percibirán retribuciones equivalentes o superiores que las conferidas a funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Nación.

Las equivalencias precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios, así como en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación son afiliados naturales de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tienen derecho al goce de idénticas coberturas médicas y prestaciones que los agentes del Poder Judicial de la Nación, por cuanto sus aportes y contribuciones no podrán ser objeto de un tratamiento diferenciado.

Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos."

Regulando estas cuestiones, el "**Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación**", aprobado por la Resolución PGN N° 128/2010, en su artículo 20, enumera los derechos del personal del MPF, del siguiente modo:

"ARTÍCULO 20º: Los derechos del personal del Ministerio Público Fiscal de la Nación son:

- a) Estabilidad.*
- b) Retribución por sus servicios.*

- c) Igualdad de oportunidades en la carrera.
- d) Capacitación.
- e) Licencias y justificaciones.
- f) Obra Social.
- g) Cobertura de seguros de vida y por accidentes de trabajo.
- h) Consultas e interposición de Recursos.
- i) Jubilación.
- j) Renuncia”.

Con relación a la **retribución por los servicios**, los artículos 24 y 25 disponen que:

“ARTÍCULO 24°: El personal del Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene derecho a la retribución de sus servicios, con arreglo a las escalas establecidas y en función de sus respectivas categorías de revista. c) Igualdad de oportunidades en la carrera.”

“ARTÍCULO 25°: El personal permanente tiene derecho a la igualdad de oportunidades para progresar en su carrera. Podrá ascender a través de los procedimientos establecidos.”

En lo que respecta al **régimen de licencias**, aportes para la cobertura médica, seguros de vida y riesgos del trabajo, los artículos 28 al 30 disponen que:

“ARTÍCULO 28°: Los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación tienen derecho al goce de licencias y justificación de inasistencias de acuerdo con lo que establece el reglamento respectivo.”

“ARTÍCULO 29°: Los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación conservan sus derechos respecto de los beneficios de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, con arreglo a lo dispuesto por el art. 65, inciso c), de la Ley 24.946.”

“ARTÍCULO 30°: Los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación gozarán de la cobertura de los seguros de vida obligatorios a cargo del Ministerio Público, pudiendo contratar los que deseen a su exclusivo cargo. Se garantizará la cobertura por riesgos de trabajo conforme la legislación vigente en la materia”

Entre los años 2015 y 2018 la Procuración General de la Nación dispuso incrementos salariales y suplementos salariales remunerativos a través de las Resoluciones PGN Nros. 126/18, 81/2018, 59/2018, 38/2018, 22/2018, 3727/2017, 1687/2017, 197/2017, 3156/2016, 1601/2016, 494/2016, 3560/2016, 1857/2015, 724/2015. En estos casos los gastos que demandan dichos incrementos fueron atendidos con cargo al “Inciso 1.- Gastos en Personal del Presupuesto de Gastos” de cada ejercicio financiero.

Finalmente, como mecanismo de transparencia tanto para la ciudadanía en general y para los propios agentes del MPF, a través del espacio de transparencia activa del portal institucional del MPF se puede acceder al listado de magistrados, funcionarios y empleados que integran la planta del MPF, así como también a la escala salarial vigente de todos los cargos del organismo (<https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/>).

3. Programas de formación y capacitación

La carrera que desarrolla un integrante del MPF, desde su ingreso hasta el momento en el que alcanza roles y funciones de mayor jerarquía, suele estar acompañada por una formación diaria a partir de la práctica cotidiana, la cual resulta fundamental; pero también es necesario que la formación sea acompañada por una capacitación profesionalizada de acuerdo con un plan estratégico que incluya todos los niveles funcionales, de acuerdo con las necesidades particulares de cada escalafón, así como también según las áreas temáticas que las distintas especialidades demandan.

El artículo 56 de la ley 27.148 instituye a la capacitación como una condición esencial de desempeño y fija los lineamientos respecto al alcance, finalidad y modo en que esta debe ser brindada.

“ARTÍCULO 56. - Capacitación. La capacitación es una condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Comprende el acceso a actividades formativas y/o de actualización, tanto para mejorar el desempeño en la plaza laboral respectiva como para acceder a otras posiciones dentro del organismo. La capacitación que se brinde será integral, permanente y gratuita. Se ejecutará a través de recursos propios o por medio de convenios con instituciones públicas o privadas, todo ello en consonancia con las reglamentaciones específicas que para esta temática se dispongan.”

El **artículo 35, inciso k), de la ley 27.148** le encomendó las funciones de proponer e implementar modelos y estrategias de capacitación para mejorar el desempeño institucional y fortalecer la labor de los fiscales y su equipo de trabajo a la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según el **artículo 33** *“Las direcciones generales son los órganos encargados de realizar las tareas auxiliares y de apoyo indispensables para el desarrollo de las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Existirán las siguientes direcciones generales permanentes, sin perjuicio de aquellas que se creen por resolución del Procurador General de la Nación para brindar nuevos servicios o auxiliar en asuntos de una manera especializada.”*

Por su parte, el *“Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación”*, aprobado por la **Resolución PGN N° 128/2010**, en su artículo 27 establece que: *“La capacitación es una condición de desempeño y como tal*

constituye un derecho y a su vez un deber de todos los agentes del Ministerio Público Fiscal. Comprende el acceso -en igualdad de requisitos- a actividades formativas y/o de actualización, tanto para mejorar su actuación en el puesto como para acceder a posiciones superiores”.

En el mes de mayo de 2018, se aprobó el Plan Estratégico de Capacitación para Empleados, Funcionarios y Magistrados del MPF y el Programa del Curso de Nivel Inicial.

La organización del Plan de Capacitación se confeccionó en razón de que la formación que debe brindarse a las personas del MPF sea integral y que abarque los distintos aspectos vinculados no sólo a la práctica y a sus fundamentos teóricos, sino también áreas orientadas a las distintas especialidades y las diferentes funciones jerárquicas.

Los cursos se estructuran de acuerdo al nivel de capacitación. Existiendo tres niveles distintos:

1. Nivel Inicial; que tiene como destinatarios a las personas ingresantes al Ministerio Público Fiscal como empleados dentro del escalafón técnico-administrativo y resulta obligatorio para las personas que ingresen a la institución.
2. De Formación Continua: que tiene como destinatarios a todos los empleados y funcionarios del MPF.
3. Nivel Superior: destinado a la formación de los fiscales y funcionarios de mayor jerarquía, sin perjuicio de que los empleados que demuestren antecedentes académicos y/o de entrenamiento equivalentes puedan cursarlo.

El Plan de Capacitación está organizado en base a 5 ejes:

1. Fundamentos
2. Destrezas para el trabajo en casos concretos
3. Ética Profesional
4. Estudios interdisciplinarios y política criminal
5. Gestión Judicial

El Plan de Capacitación fijó tres áreas temáticas que sirven como un criterio de organización de los cursos:

- Área de Núcleo Común, con cursos referidos a temáticas generales de la institución y del sistema de administración de justicia.
- Área Específica, que contendrá sub-áreas temáticas con diversos contenidos: trata de personas, delitos informáticos, seguridad social, criminalidad económica, justicia juvenil, comercial, laboral, entre otros.
- Área de Formación Complementaria, que incluye todos aquellos cursos referidos

a saberes que no son estrictamente jurídicos, pero que se relacionan con las destrezas que hacen a la mejor gestión de la institución.

Con el objeto de difundir, el sitio web institucional del MPF contiene una sección especial en la que se informa y se brindan detalles de cada actividad, tanto para cursos presenciales, como a distancia o externos (<https://www.mpf.gob.ar/capacitacion/>).

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

12. Párrafo 2 del artículo 7

2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Proyecto de Reforma de la Ley de Ética Pública:

En el capítulo II del mencionado Proyecto, referido al RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS DE LOS CANDIDATOS A EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS Y MIEMBROS DE PARTIDOS POLÍTICOS, el ARTÍCULO 25 estipula que: *Los candidatos titulares a ejercer cargos públicos electivos nacionales o para desempeñar cargos para cuya designación la Ley requiera la intervención de alguna de las Cámaras del Congreso o de sus comisiones, deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses en el marco del respectivo procedimiento, en los términos y condiciones previstas en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.*

La reglamentación determinará los plazos de cumplimiento de esta obligación así como la autoridad ante quién deberán ser presentadas.

Por su parte, el ARTÍCULO 26 establece que *los miembros del partido político a los que refiere el artículo 20 de la LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS N° 26.215 y sus modificatorias - o la que en el futuro la reemplace- deberán presentar al inicio, anualmente y a la finalización de su función una Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses con el contenido y sujeta al régimen de publicidad de las Declaraciones Juradas en los términos de la presente Ley. La presentación de la Declaración será un requisito de permanencia en el cargo.*

La reglamentación determinará los plazos de cumplimiento de esta obligación así como la autoridad ante quién deberán ser presentadas.

La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública dispone en sus artículos 21, 22 y 23 el procedimiento de selección del director de la Agencia, el rango en el escalafón y otros requisitos.

ARTÍCULO 21. -El procedimiento de selección del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto a continuación:

a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1) persona y publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de la misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días;

b) El candidato deberá presentar una declaración jurada conforme la normativa prevista en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, y su reglamentación;

c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas del candidato;

d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;

e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial prevista en el inciso a) del presente artículo, presentar al organismo a cargo de la organización de la audiencia pública, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen en el mismo plazo podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración;

f) Dentro de los quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso e) del presente artículo, se deberá celebrar una audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días de celebrada la audiencia, el Poder Ejecutivo nacional tomará la decisión de confirmar o retirar la candidatura de la persona propuesta, debiendo en este último caso proponer a un nuevo candidato y reiniciar el procedimiento de selección.

ARTÍCULO 22. - Rango y jerarquía del director. El director a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.

ARTÍCULO 23. - Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.

Asimismo, deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función.

El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función.

Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, sus modificaciones y su reglamentación.

El director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco (5) años previos a la designación.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Agencia de acceso a la Información Pública:

Está a cargo de un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional tras un

procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantiza la idoneidad del candidato (<https://argentina.gob.ar/acceso-informacion-publica/selecciondirector>).

Mediante la Resolución 274-E/2017 del 19 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional propuso a Eduardo Bertoni como Director de la Agencia. El 17 de agosto de 2017 se realizó la audiencia pública con presencia de ciudadanos inscriptos a tal fin, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, para evaluar sus antecedentes.

El 29 de agosto, en cumplimiento de la ley, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 685/2017 (<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/169788/20170830>) que oficializó la designación de Eduardo Bertoni como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Unidad de información financiera (UIF):

El proceso establecido para la designación del presidente y vicepresidente de la UIF es llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía.

La Unidad de Información Financiera (UIF) depende del Ministerio de Economía pero tiene autonomía y autarquía financiera. El presidente de la UIF, según el Decreto 1025 de 2016, tiene a su cargo crear la estructura organizativa del organismo, así como seleccionar a su personal sobre la base del título, capacitación académica, experiencia profesional calificada.

Su designación y la del vicepresidente son a propuesta del Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía), se publican sus candidaturas en el Boletín Oficial y en dos diarios, junto a sus currículos. Asimismo, los candidatos deben presentar sus Declaraciones juradas y las de su familia y someterse a una Audiencia Pública para responder ante los comentarios y observaciones presentadas por los ciudadanos, las ONGs, las asociaciones de profesionales y las instituciones académicas dentro de los 15 días de la propuesta oficial, la cual luego es enviada al Ejecutivo. Se establecen también algunos criterios respecto de la duración en el cargo (4 años, renovable) y su remoción, en base a diversos criterios.

Oficina Anticorrupción:

Actualmente el Decreto 102/99, modificado por el Decreto N° 54/19, establece que el titular de la OA es designado por el Poder Ejecutivo sobre la base de ciertos requisitos generales (título, capacitación académica, experiencia profesional calificada) y puede ser removido de su cargo sin ninguna justificación específica.

Modificaciones con respecto a estos criterios de selección y remoción están contemplados en el proyecto de Ley de Ética pública.

13. Párrafo 3 del artículo 7

3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Medidas de transparencia en la financiación de los partidos políticos:

En la República argentina el financiamiento de los partidos políticos se encuentra regulado principalmente en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, sancionada en el año 2002, y modificada posteriormente por la Ley N° 26.215 del año 2006, y por la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, N° 26.571 del año 2009.

Estas leyes han tenido por objetivo lograr mayor transparencia y morigerar las diferencias generadas por la desigual capacidad financiera de los partidos políticos en la competencia electoral. Cada una de ellas incorpora disposiciones y herramientas que implican importantes avances. Sin embargo, muchos de los instrumentos incluidos no han obtenido los resultados esperados en términos de eficiencia en relación con los objetivos propuestos.

En mayo de 2019, se aprobó la Ley N° 27.504 de Financiamiento de los Partidos Políticos que introdujo cambios a la Ley N° 26.215 y prevé una serie de reformas al sistema de gestión de los aportes de campañas y boletas a los partidos, tendientes a agilizar los procesos y transparentar la información relativa. El objetivo es dotar al sistema de los instrumentos y herramientas necesarios para garantizar que el origen y destino de los fondos empleados por los partidos políticos y sus candidatos sean de conocimiento público. Asimismo, se apunta a garantizar condiciones de mayor equidad en la competencia electoral.

Entre las medidas adoptadas se contempla la bancarización de los aportes a los partidos políticos, prohibiendo el aporte en efectivo, para garantizar el registro de los aportes e identificación del origen; se establece la obligación de todos los organismos que sean requeridos por la Justicia Nacional Electoral de brindar en forma completa y clara toda la información solicitada a efectos de determinar el origen y destino de los fondos de los partidos políticos; se amplía el plazo de prohibición para realizar actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio; se fortalece el cuerpo de auditores de la Justicia Nacional Electoral encargado de auditar los informes de los partidos políticos; se obliga a los partidos a designar en carácter de responsables económico- financiero a una autoridad partidaria; y se modifica el régimen de sanciones para los funcionarios que utilicen recursos y facultades a su cargo con fines partidarios, entre otros.

En miras de incrementar los niveles de transparencia en el financiamiento de los partidos

políticos, se han adoptado además las siguientes medidas:

a) Incorporación de plataformas de transparencia activa, a través del portal web de la Dirección Nacional Electoral

En concordancia con la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, se garantiza el derecho de acceso a la información sobre el financiamiento de los partidos, gastos de elecciones, aportes de boletas y campañas, entre otros, a través del portal web <https://www.argentina.gob.ar/interior/dine> administrado por la Dirección Nacional Electoral, dependiente de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales. En tal sentido, se publican datos referidos a:

- Publicidad Electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA): se informa el resultado del Sorteo de Espacios de Publicidad, el listado definitivo de Servicios de Comunicación Audiovisual para cada elección.
- Fondo Partidario Permanente: se informa la asignación de aportes correspondientes en los artículos 9° inc a) y b) y 10 de la Ley 26.215. Como así también los partidos deudores y las multas informadas por la Justicia Nacional Electoral.
- Requisitos para el registro de cuenta partidaria en la Dirección Nacional Electoral.
- Situación de las Agrupaciones Políticas ante la Ley N° 26.215, detallado por provincias.
- Procesos electorales y financiamiento electoral: detalle de los aportes de boleta y campañas, distinguido entre diputados y senadores.

A partir del año 2016, y profundizado su labor en 2017, se procedió a la carga de información referida a las contrataciones y correspondiente rendición de gastos de las elecciones generales, incluyendo el detalle de cada uno de los procesos de contrataciones realizados, a través de la vinculación directa con el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPRAR <<https://comprar.gob.ar/>>).

b) Modernización y perfeccionamiento del sistema FIPEL (Sistema de Administración del Financiamiento Público Partidario y Electoral)

Se comenzó un proceso de perfeccionamiento y ampliación del sistema FIPEL (Sistema de Administración del Financiamiento Público Partidario y Electoral) a los distintos actores del sistema partidario y electoral, tales como las agrupaciones políticas, los juzgados federales con competencia electoral y la Cámara Nacional Electoral.

Dicho sistema consiste en un programa de liquidación de pagos a los partidos políticos, que tiene como finalidad registrar los aportes públicos abonados a los partidos políticos, correspondientes al Fondo Partidario Permanente (en adelante FPP).

El FIPEL fue sin duda un avance en el sistema de liquidación de pagos, que hasta el momento de su implementación se realizaba de modo manual. Es así que al reemplazar el método de cálculo manual de aportes de boletas y campañas por un programa automático se ha reducido significativamente el margen de error en la gestión.

Además al garantizar el acceso a los órganos de control (los Juzgados Federales con competencia electoral y la Cámara Nacional Electoral), permite la verificación del efectivo cumplimiento de sus resoluciones, cuando estas últimas requieran el dictado de actos administrativos emitidos por la Dirección Nacional Electoral, como sucede con la aplicación de sanciones, y consolida la labor de contralor jurisdiccional sobre las agrupaciones y/o partidos políticos.

En cuanto a la proyección de medidas a adoptar se espera continuar con la publicación en el sitio web con el acceso irrestricto de todo ciudadano que quiera conocer exactamente cuánto y cómo se efectuó el gasto de elecciones. Asimismo, y en miras de ahondar en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de *Transparencia y Gobierno Abierto*, en el marco de los Objetivos Prioritarios de Gobierno, se prevé:

- Incorporar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como usuario del sistema FIPEL, a los fines de garantizar el acceso de dicho organismo y con ello un control más efectivo sobre la situación de los partidos políticos.
- Incorporar al Banco de la Nación Argentina (BNA) como usuario del FIPEL, a los fines de que tome conocimiento de la posibilidad de cerrar una cuenta de las Alianzas y Frentes Electorales, a la finalización del período electoral.
- Desarrollar un nuevo módulo a los fines de controlar la presentación de balances, conforme el artículo 13 de la Ley N° 26.215.
- Realizar un sistema de trazabilidad de todo pago de aporte otorgado a los partidos, a los fines de facilitar la labor de auditoría.
- Publicitar las solicitudes, presupuesto y pagos de los aportes extraordinarios, en miras de garantizar un control efectivo por parte de la Cámara Nacional Electoral.
- Transformación del FIPEL en un sistema administrativo que permita llevar control de partida doble, que incluya el seguimiento de cuentas presupuestarias y no presupuestarias, tales como los aportes correspondientes al artículo 76 de la Ley N° 26.215, como así también los gastos de campaña.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

14. Párrafo 4 del artículo 7

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

1. Normas sobre conflictos de intereses

A continuación efectuaremos una breve reseña de las principales normas sobre conflictos de intereses que los funcionarios del Estado nacional argentino se encuentran obligados a respetar.

El Capítulo V de la Ley 25.188 (en adelante Ley de Ética Pública) regula el conflicto de intereses, es decir, aquellas situaciones en las que se produce una contraposición entre los intereses particulares del funcionario (ya sean personales, laborales, económicos, profesionales) con los públicos que, desde su función, debe tutelar.

Se trata de normas de carácter objetivo que no juzgan la intención del funcionario de obtener una ventaja o provecho personal, prohibiendo directamente la configuración de determinadas situaciones o imponiendo ciertos deberes (renuncia, abstención, publicidad de los intereses) con la misión de preservar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas y prevenir posibles hechos de corrupción.

La autoridad en el ámbito de la Administración Pública Nacional es la Oficina Anticorrupción (conforme Decreto 54/2019, modificatorio del Decreto 102/1999).

1.1. Conflictos de intereses actuales

Aunque la Ley de Ética Pública no define ni clasifica los conflictos de intereses, la Oficina Anticorrupción entiende que son “actuales” aquellos que se presentan cuando la concurrencia o contraposición de intereses se produce por el desempeño de actividades particulares simultáneas al ejercicio de la función pública (por ejemplo, el funcionario realiza en el ámbito privado una actividad sobre la que tiene atribuciones en ejercicio de su cargo público).

En tal sentido, el artículo 13 inciso a) de la Ley 25.188 prohíbe a quienes cumplan funciones públicas: “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.

El inciso b), por su parte, veda a quienes ejerzan funciones públicas “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”. El

concepto de “tercero” ha sido interpretado por la autoridad de aplicación con criterio extensivo, considerándose como tal al cónyuge y a las personas jurídicas en las cuales el funcionario o su cónyuge -individual o conjuntamente- tengan participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio (RESOL-2016-1-APN-OA#MJ y sus citas)¹.

Si dichas actividades particulares tuvieron lugar antes del inicio de la gestión pública, el artículo 15 inciso a) de la Ley 25.188 establece el deber de renunciar a las mismas como condición previa para asumir el cargo público, no resultando suficiente (de acuerdo al criterio de la Oficina Anticorrupción) cualquier tipo de desvinculación temporal como podría ser una licencia -con o sin goce de haberes-, dado que la expectativa de reingreso a la actividad privada podría condicionar la imparcialidad de sus decisiones.

1.2. Conflictos de intereses potenciales

La Oficina Anticorrupción entiende que son “potenciales” aquellos conflictos de intereses en los que el riesgo para la imparcialidad es circunstancial.

Previo desempeño de actividades privadas

El artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188 establece el deber del funcionario de abstenerse de intervenir, en ejercicio de su gestión, respecto de las cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años.

Dicho deber de abstención subsiste hasta tanto transcurran tres años desde el cese de la actividad privada o desde la desvinculación con el asunto incompatible (Resoluciones OA 427/2014, 523/2016 y sus citas)².

Participación en sociedades

Con relación a la participación societaria de un funcionario en empresas respecto de las cuales tenga atribuciones o deba adoptar alguna decisión, la Ley de Ética Pública también impone el deber de abstención, mientras mantenga el carácter de socio, respecto de las cuestiones o asuntos que a ellas se refieran particularmente [artículo 15 inciso b) in fine de la Ley 25.188].

Más allá de lo expuesto y de que la Ley de Ética Pública no prohíbe -en principio- la tenencia accionaria, la Oficina Anticorrupción -en su carácter de autoridad de aplicación- ha concluido que el funcionario debe evitar la adquisición de nuevas participaciones en empresas relacionadas con la actividad sobre la que posee atribuciones (artículos 9º, 23 y 41 del Decreto 41/99).

Asimismo se ha recomendado a ciertos funcionarios, en virtud de su jerarquía, eviten integrar (como socios o asociados) o prestar servicios a instituciones no estatales dedicadas a la defensa o representación de intereses sectoriales cuyo objeto resulte concurrente con los intereses públicos que, desde su función en el Estado, deben tutelar (artículos 9º, 23 y 41 del Decreto 41/99).

Finalmente en otros supuestos se ha recomendado la venta de participaciones societaria sobre la base del principio de prudencia (artículo 9º del Decreto 41/99) (Resolución 2016-1-E-APN-OA#MJ)³.

El deber de excusación previsto en el artículo 2 inciso i) de la Ley 25.188.

Otro modo de gestión de los conflictos de intereses potenciales es el previsto en el artículo 2 inciso i) de la Ley 25.188 que incluye, dentro de los deberes éticos, el de “abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil”.

Dichas causas son las mencionadas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley 17.4545):

- 1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
- 2) Tener el juez [en este caso el funcionario] o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.
- 3) Tener el juez [funcionario] pleito pendiente con el recusante.
- 4) Ser el juez [funcionario] acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.
- 5) Ser o haber sido el juez [funcionario] autor de denuncia o querrela contra el recusante, o denunciado o querrellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
- 6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia [esta causa resulta inaplicable a los funcionarios no judiciales].
- 7) Haber sido el juez [funcionario] defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
- 8) Haber recibido el juez [funcionario] beneficios de importancia de alguna de las partes.
- 9) Tener el juez [funcionario] con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.
- 10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez [funcionario] después que hubiere comenzado a conocer del asunto”.

El artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por su parte, expresa que “Todo juez [funcionario] que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes”.

Entre ellas cabe mencionar: el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad del funcionario con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados; tener el funcionario o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado, interés en la cuestión en la que debe intervenir o en otra semejante, o sociedad o comunidad con alguna de las partes, sus procuradores o abogados; ser el funcionario acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes; haber recibido de éstas beneficios de importancia o tener con los interesados amistad o enemistad manifiesta; etc.).

Cabe señalar que el referido deber de abstención no limitará sus atribuciones sobre la fijación de reglas generales o políticas públicas.

Éstas pueden abarcar a las personas o sociedades en cuestión entre los sujetos

alcanzados por la prohibición antes esbozada siempre y cuando dichas medidas generales no estén dirigidas específicamente a éstos en forma claramente identificable (Resoluciones OA 69/01, 83/02, 89/02 y 94/03, 509/166, 512/167 y 2016-1-E-APN-OA#MJ8).⁴

Dicha abstención deberá hacerse efectiva de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549), norma conforme la cual, cuando un funcionario encuentra motivos de excusación, deberá disponer, en el mismo acto, que pase el expediente al superior jerárquico quien designará reemplazante.

1.3. Conflictos de intereses aparentes

De acuerdo a la interpretación que ha efectuado la Oficina Anticorrupción, los “conflictos de intereses aparentes” son situaciones -generalmente vinculadas a funcionarios de jerarquía superior- en las que no se configura ninguna de las situaciones previstas en la Ley de Ética Pública pero existe la percepción general de que la imparcialidad de las decisiones que adopte un funcionario podría encontrarse afectada.

Estas situaciones no pueden asimilarse, en cuanto a su calificación y consecuencias, a las prohibidas por la Ley de Ética Pública. De otro modo se vulnerarían los principios constitucionales de legalidad y reserva (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional). Pero tales contextos merecen ser gestionados a través de la formulación de políticas públicas de transparencia, control y participación ciudadana.

Por tal motivo se dictaron los Decretos 201/2017 y 202/2017⁵, que introdujeron sendas regulaciones específicas sobre “conflictos de intereses aparentes” en las normas sobre ética pública.

Su objetivo principal es el “fortalecimiento de los pilares básicos del sistema republicano y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, evitando situaciones que la puedan debilitar”.

Cabe mencionar que el anteproyecto de dicho Decreto fue elaborado por la Oficina Anticorrupción y que su redacción final fue fruto de un proceso de discusión abierto a la participación de la ciudadanía en general a través del portal web <https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/queremos-conocer-tu-opinion> (actualmente inactivo) y en cuyo marco tuvo lugar una mesa de trabajo de la que participaron diferentes áreas del Poder Ejecutivo Nacional, así como también representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La gestión de los conflictos de intereses aparentes en los juicios en los que el Estado Nacional es parte (Decreto 201/2017)

Por Decreto 201/2017 del 21 de marzo de 2017 se aprobó un procedimiento especial de representación del Estado en juicio, con directa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y recaudos adicionales de transparencia, para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés potencial o aparente, por la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que suscite dudas en la ciudadanía sobre la debida gestión de los intereses del Estado.

Situaciones alcanzadas por el Decreto 201/2017

Conforme lo expresado, el Decreto 201/2017 establece en su artículo 1º que el Estado

Nacional será representado y/o patrocinado en forma directa por la Procuración del Tesoro de la Nación en los procesos judiciales y extrajudiciales en que un organismo o entidad del Sector Público Nacional (definido en el artículo 8º de la Ley 24.156) sea parte (tanto actora, como demandada) y en los que el Presidente de la Nación, el Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros o cualquier Ministro del Poder Ejecutivo Nacional o autoridad de igual rango, tenga con alguna de las partes en el proceso (o sus representantes legales o letrados patrocinantes) alguno de los siguientes supuestos de vinculación:

- parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
- sociedad o comunidad
- pleito pendiente (esta hipótesis comprende los casos en los cuales el declarante está involucrado en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario)
- ser deudor o acreedor
- haber recibido beneficios de importancia
- amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato

Conforme el artículo 8º de la Ley 24.156 integran el Sector Público Nacional:

- a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
- b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
- c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
- d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades". (Artículo sustituido por art. 8 de la Ley N° 25.827 B.O. 22/12/2003).

En el caso de las personas jurídicas, cualquiera de los vínculos anteriores en relación a un director, accionista o socio que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Herramientas de transparencia y participación ciudadana establecidos en el Decreto 201/2017

El decreto establece qué ocurre si se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 1º. En tal caso:

Los servicios jurídicos permanentes deberán comunicar en forma inmediata y fehaciente a la Procuración del Tesoro de la Nación el inicio de todo proceso alcanzado por este régimen, acompañando un informe del Director de dichos servicios jurídicos junto con la totalidad de las actuaciones y su documentación (artículo 4º).

A la comunicación de la iniciación de demandas contra la Nación que el actor debe hacer a la Procuración del Tesoro de la Nación (conforme los artículos 5° y 12 del Anexo III del Decreto N° 1116/00), se agregó una declaración jurada relativa a que la causa se encuentra alcanzada o no por el régimen del Decreto 201/2017 (artículo 5°).

Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 411/80 (t.o. 1987), previo a formular allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, o rescindir convenios, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá comunicar la voluntad de actuar en alguno de aquellos modos, con una antelación no menor a 10 días hábiles de la presentación o celebración del acto pertinente, a la Oficina Anticorrupción, a la SIGEN y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración del Congreso de la Nación (artículo 6°).

Asimismo deberá publicar, en forma previa a la realización de los actos referidos, un informe que contenga: a) el análisis circunstanciado de los hechos y, en su caso, de las opiniones recibidas de los organismos de control; y b) La fundamentación de la posición jurídica. No obstante, cuando dicha publicación pudiera afectar la estrategia de defensa del Estado, podrá efectuarse junto con la presentación (artículo 7°).

Las autoridades respecto de las cuales se declare un vínculo deberán abstenerse de tomar cualquier tipo de intervención en dichos casos (artículo 10).

El artículo 2° del Decreto establece que la Procuración del Tesoro de la Nación procurará - en estos casos- desempeñar la defensa del Estado Nacional asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público en todos los casos contemplados en el decreto.

En tal sentido, deberá publicar y mantener actualizada a través del portal web del organismo, un “Listado de causas judiciales y otras actuaciones” que se encuentren comprendidas en este régimen indicando: carátula, número de expediente y radicación y el enlace de acceso al expediente digital del Poder Judicial de la Nación, así como también información actualizada sobre el estado de las actuaciones y las audiencias o reuniones a celebrarse, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la información pública (artículo 3°).

La gestión de los conflictos de intereses aparentes en las contrataciones del Estado (Decreto 202/2017)

Por Decreto 202/2017 del 21 de marzo de 2017 se aprobó un procedimiento especial aplicable a las contrataciones públicas o al otorgamiento licencias, permisos, autorizaciones, habilitaciones o derechos reales sobre bienes de dominio público o privado del Estado del Sector Público Nacional, en los que pudiera existir un conflicto de interés potencial o aparente por la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo (o las autoridades de rango inferior a Ministro con competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto), que suscite dudas en la ciudadanía sobre la debida gestión de los intereses del Estado.

Situaciones alcanzadas por el Decreto 202/2017

Como se anticipó, el Decreto 202/2017 prevé la suscripción de una “Declaración Jurada de Intereses” por parte de toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización,

habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del Estado, en el ámbito del Sector Público Nacional (artículo 8° de la Ley 24.156).

En esta declaración el oferente o peticionante debe consignar si él -o en el caso de personas jurídicas, ciertos integrantes- poseen determinados vínculos con las máximas autoridades de la Nación o con funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

En esta declaración, el oferente o peticionante debe consignar si él -o en el caso de las personas jurídicas, ciertos integrantes- poseen determinados vínculos con relación a:

- Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y autoridades de igual rango del Poder Ejecutivo Nacional, tengan o no atribuciones sobre el procedimiento de que se trate (artículo 1º);
- Funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2º).

Cuando el interesado es una persona jurídica, ¿quiénes deben declarar los vínculos con las máximas autoridades?

Si el declarante es una persona jurídica, es ésta quien debe confeccionar la declaración, señalando los vínculos que posean con los funcionarios mencionados en los artículos 1º y 2º:

- la propia persona jurídica
- sus representantes legales
- las sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados
- sus directores
- sus socios con participación idónea para formar la voluntad social o que ejerzan influencia dominante

Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social.

Si bien la norma alude a los “directores” de la sociedad, debe considerarse que dicho término refiere a todas aquellas personas que ejercen funciones directivas en los distintos tipos de sociedades, asociaciones o fundaciones. Tal es el caso de los socios gerentes de las sociedades de responsabilidad limitadas, los miembros del Consejo de Administración de las fundaciones, etc.

¿Qué vínculos deben ser declarados?

Los vínculos entre el declarante y el funcionario que el Decreto considera demostrativos de un interés son:

- parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
- sociedad o comunidad
- pleito pendiente (esta hipótesis comprende los casos en los cuales el declarante está involucrado en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario)
- ser deudor o acreedor
- haber recibido beneficios de importancia, y
- amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato

Si el declarante es una persona jurídica, deberá consignar los vínculos actuales y los existentes “dentro del último año calendario”. De este modo se evitan transferencias patrimoniales simuladas a efectos de excluir la contratación del procedimiento previsto en el Decreto. El “último año calendario” deberá computarse a partir de la fecha de presentación o actualización de la Declaración.

Herramientas de transparencia y participación ciudadana establecidos en el Decreto 202/2017

Si se declara uno de los referidos vínculos, se abre un procedimiento con mayores herramientas de publicidad y control (artículo 4º).

Se debe comunicar dicha circunstancia a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción. Esta última examinará las posibles violaciones a la Ley 25.188 (artículo 5º).

La autoridad contratante/interviniente deberá arbitrar los medios para dar publicidad total a las actuaciones en su página web y en la de la Oficina Anticorrupción.

De esta forma, se eleva el estándar de transparencia previsto en los Decretos 1023/01 y 1030/16, permitiendo al ciudadano acceder en forma centralizada y rápida a los expedientes de las contrataciones, sin necesidad de invocar interés alguno para su consulta.

Se debe adoptar fundadamente -y dando intervención a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN- al menos uno de los siguientes mecanismos: celebración de pactos de integridad, participación de testigos sociales, veeduría especial de organismos de control y/o audiencias públicas, no descartándose la implementación de otros procedimientos que puedan resultar adecuados.

Cabe señalar que el régimen previsto en el Decreto 202/2017 establece un estándar mínimo de integridad y transparencia que debe respetarse. Por ello, si el organismo o entidad responsable del procedimiento estima adecuado adoptar más de un mecanismo de los propuestos, no tiene impedimentos para hacerlo.

Para el cumplimiento de esta obligación resulta fundamental que se sigan los lineamientos contenidos en los Anexos II, III, IV y V de la Resolución OA 11-E/2017, según cuál sea el mecanismo elegido.

El funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos señalados, deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento. Ello aún cuando potencialmente no exista un conflicto de intereses conforme la Ley 25.188.

Cuando se trate de un procedimiento de contratación directa, la oferta podrá ser declarada inadmisibile, salvo en los casos contemplados en el artículo 25 inciso d) apartados 2, 3 y 6 del Decreto 1023/01 (contratación directa por exclusividad, especialidad y por razones de seguridad y defensa).

En los casos en que la persona seleccionada hubiera declarado alguna de las situaciones previstas en el Decreto 202/2017, los mecanismos detallados en su artículo 4º inciso d) deberán aplicarse en todas las etapas del procedimiento, incluyendo en la instancia de ejecución del contrato.

Cabe señalar que conforme el artículo 6º del Decreto 202/2017, la omisión de presentar

oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

Carácter complementario

Esta reglamentación no deroga ni modifica el régimen de conflicto de intereses previsto en la Ley 25.188, con el que coexiste (como surge de su artículo 5º).

Autoridad de aplicación del Decreto 202/2017

Conforme los artículos 4º, 5º y 7º del Decreto 202/2017, la autoridad de aplicación es la Oficina Anticorrupción.

1.4. Disposiciones particulares para autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

Se destaca la Ley de Ministerios 22.520, que establece incompatibilidades específicas para quienes ejercen cargos de jerarquía igual o superior a Subsecretario.

En tal sentido, el artículo 24 de la citada ley señala que “Durante el desempeño de sus cargos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales”.

El artículo 25, por su parte, expresa: “Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las provincias o los municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de funcionario pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional.”

La PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, máxima autoridad de los servicios jurídicos permanentes de la Administración, en su dictamen 134 del 15/07/2013 interpretó que los fines -implícitos y subyacentes- de estos preceptos “... serían la transparencia en el ejercicio de aquellos cargos, la dedicación exclusiva de funciones por parte de sus titulares y la necesidad de prevenir y evitar conflictos de intereses, entre otros”.

1.5. Restricciones post empleo

En su texto original, el artículo 15 de la Ley 25.188 expresaba: “Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente”.

La limitación para poder designar a personas que, precisamente por su experiencia previa, se encontraban capacitadas para ejercer una función pública, motivó el dictado del Decreto 862/01 (reglamento de carácter general que el Poder Ejecutivo dictó en uso de las facultades que le fueron delegadas por la Ley 25.414) que modificó la redacción original de los artículos 14 y 15 de la Ley 25.188, reemplazándola íntegramente.

Restricciones al desempeño de actividades privadas con posterioridad al cese de un cargo público (artículo 46 del Decreto 41/99)

El íntegro reemplazo del artículo 15 de la Ley 25.188 por parte del Decreto 862/0113 significó la eliminación del período de carencia ex post que allí se establecía.

Ello no implica la inexistencia de normas específicas para determinados organismos o funciones, que impidan ciertas actividades en el ámbito privado. Tal es el caso, por ejemplo, de la Unidad de Información Financiera (UIF) cuyo Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor no pueden ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación las actividades que la reglamentación establezca en cada caso (artículo 10 de la Ley 25.246).⁶ También la Ley General de Sociedades 19.550 contempla un período de carencia ex post de dos (2) años, para ser director o gerente de una sociedad, en el caso de los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de tal sociedad (artículo 264 inciso 4 de la Ley 19.550).

Más allá de la eliminación del período de carencia ex post previsto en el artículo 15 de la Ley 25.188, debe destacarse la vigencia del artículo 46 del Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/99), aplicable a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Ello en tanto la falta de derogación expresa del Decreto 41/99 lleva a concluir que sus disposiciones se encuentran vigentes, en tanto no contradicen sino que complementan a la Ley 25.188.

La norma citada establece: “Período de carencia: El funcionario público no debe, durante su empleo y hasta un (1) año después de su egreso, efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado”.

Cabe señalar que si bien la finalidad del artículo 46 del Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/99) guarda identidad con la del derogado artículo 15 de la Ley 25.188 -evitar perjuicios al organismo público del que se trate, o el tráfico indebido de influencias, que pueda acelerar el trámite o gestión, o condicionar su resultado-, el ámbito de aplicación de la norma hoy vigente es más limitado:⁷ no prohíbe al ex funcionario desempeñar actividades privadas en un sector sobre el cual poseía atribuciones, sino que sólo veda, en ejecución de dichas actividades, “efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas” y “... celebrar contratos”.

Esta norma se condice con las disposiciones contenidas en la Ley 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público) que establece entre las prohibiciones “... Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones” [artículo 24 inciso a) Ley 25.164], aclarando el decreto reglamentario que “...esta prohibición se extenderá hasta después de un (1) año de su egreso” [artículo 24 inciso a) Decreto 1421/02].

Restricciones al desempeño de actividades en el Estado con posterioridad al cese de un cargo público (artículo 14 de la Ley 25.188)

A finales de los años noventa, comenzó un profundo debate acerca de la legalidad de los procesos de privatización, muchos de los cuales fueron cuestionados por los posibles hechos de corrupción que habían rodeado las adjudicaciones. En dicho contexto, el artículo 14 de la Ley 25.188 -en su redacción originaria- expresaba:

“Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios”.

Por Decreto 862/01,⁸ y con el objeto de limitar la prohibición y, de ese modo, permitir que personas capacitadas puedan acceder a la función pública dotándola de eficiencia, se limitó temporalmente la prohibición a los “... tres (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado”.

De acuerdo a la actual redacción, esta hipótesis de conflicto de intereses se presenta cuando un funcionario: a) ha tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, y b) actuare en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, dentro de los tres (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.

Al respecto, en consonancia con la finalidad preventiva de la norma, la Oficina Anticorrupción ha interpretado que la prohibición alcanza a los actos de renegociación de los términos y condiciones de contratos ya adjudicados y de redeterminación de precios o tarifas.

El sentido de la disposición legal reside en evitar que quien -incluso como funcionario público- hubiere participado en un proceso de privatización o concesión de empresa o servicio público, actúe luego en un organismo con atribuciones para controlar o revisar dicho proceso. Esto a fin de evitar que se soslayen u oculten las eventuales irregularidades que se pudieran haber cometido, o que se afecte de cualquier otro modo su imparcialidad.

Cabe aclarar que la previsión se refiere expresamente al caso en el que una persona haya tenido “... intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos...”. No basta la mera prestación de servicios en la empresa o servicio privatizado o concesionado (de hecho, el período de inhabilitación establecido se computa expresamente a partir de la “última adjudicación”).⁹

1.6. Los deberes éticos que complementan e integran el régimen de conflictos de intereses

Las normas precitadas deben complementarse con los principios, pautas y deberes de comportamiento ético contenidos en el artículo 2º de la Ley 25.188 y en los Capítulos III y IV del Decreto 41/99, entre ellos la independencia de criterio, la prevalencia del interés público sobre el particular, el uso adecuado de la información a la que se acceda en ejercicio del cargo público y el mandato de actuar de forma proba, transparente y prudente.

En particular cabe señalar el deber de no “... involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones” y de “... abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones” (art. 23 del Código de Ética Pública, Decreto 41/99), así como la prohibición de “... mantener relaciones [o] aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes

y funciones a su cargo” (art. 41 del Código de Ética Pública, Decreto 41/99).

Por su parte, los principios de Legalidad y Equidad fijan los márgenes para la toma de decisiones acordes a un Estado de Derecho, en tanto prescriben que “El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad...” y que “El empleo de criterios de equidad para adecuar la solución legal a un resultado más justo nunca debe ser ejecutado en contra de los fines perseguidos por las leyes.” (arts. 16 y 24 del Código de Ética Pública, Decreto 41/99).

Asimismo debe destacarse el deber de prudencia contenido en el artículo 9º del Decreto precedentemente citado, conforme al cual “El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad...” , debiendo el funcionario “...evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.”

Como puede advertirse, muchos de los deberes éticos señalados tienen como misión guiar el comportamiento de los funcionarios para evitar conflictos de intereses, preservando siempre el interés general, el principio de igualdad y el uso adecuado de los bienes públicos.

1.7. Anteproyecto de Reforma a la Ley de Ética Pública

La Oficina Anticorrupción elaboró un anteproyecto de reforma integral a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188 que introduce cambios significativos en materia de ética pública y conflictos de intereses. Por ejemplo, incorpora a la ley de ética los artículos 24 y 25 de la ley de Ministerios 22.520,¹⁰ haciéndolos extensibles a quienes tengan rango y jerarquía equivalente a dichos cargos. De esta manera, queda establecida una autoridad de aplicación para esta normativa (hasta hoy no definida).

Actualmente, el proyecto presentado perdió estado parlamentario en virtud de la pandemia por COVID-19. La Oficina Anticorrupción, no obstante, está trabajando en un nuevo proyecto en base a su antecedente, que incorpore nuevos fenómenos ocurridos en los últimos años, tales como la puerta giratoria y la captura de la decisión pública, contemplando siempre la perspectiva de derechos humanos y género. Asimismo, incluirá instancias de participación pública propiciando un consenso más amplio.

2. Difusión general de los principios, deberes, prohibiciones del régimen de conflictos de intereses

Entre las políticas destinadas a prevenir conflictos de intereses o a mantener y fortalecer dichos sistemas, podemos mencionar aquellas destinadas a procurar que los funcionarios conozcan las prohibiciones, restricciones y obligaciones que los afectan.

Se señalan a continuación algunas de las medidas desarrolladas con este objetivo.

2.1. “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”

La Oficina Anticorrupción elaboró, publicó y difundió la “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”. La intención de este material es generar una herramienta concreta para la inducción de los y las funcionarias al asumir sus cargos en el estado nacional.

La Guía es una iniciativa conjunta de la Oficina Anticorrupción, y de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público para difundir los principales deberes, principios, incompatibilidades, conflictos de interés y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de su función. Se halla publicada en un lugar destacado en la página de inicio del sitio web de la Oficina Anticorrupción

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyep_-_septiembre_2020.pdf.

Uno de los puntos centrales que son analizados son los conflictos de intereses, con indicaciones claras acerca de las políticas prohibidas. El material se ofrece como una guía inicial, con definiciones breves y prácticas, a efectos de que los y las agentes del Estado Nacional puedan aplicar estas normas en la gestión cotidiana. Para acompañar esta iniciativa, se han coordinado actividades formativas apoyadas en el material de la guía. Así, se desarrolló la “Capacitación para alta dirección sobre la Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”, actividad que ha sido acreditada en el Instituto Nacional de Administración Pública.

Esta actividad, recientemente incorporada al menú de actividades formativas, se está desarrollando además a través de talleres virtuales en varios Ministerios de la línea, en organismos descentralizados, y empresas públicas de participación estatal que funcionan en la órbita de los ministerios. En principio estas actividades formativas estuvieron dirigidas a funcionarios y funcionarias de alta dirección y a miembros del directorio de las empresas, para luego llegar a la totalidad de los empleados públicos.

2.2. Actividades de formación en materia de conflicto de intereses

En el año 2018 la Oficina Anticorrupción realizó un total de 24 cursos relacionados específicamente con el tema de referencia (21 presenciales y 3 en modalidad virtual), en los que participaron un total de 555 funcionarios públicos de distintos niveles y jerarquías.

Sin embargo, la materia “conflicto de intereses” es abordada también como una unidad temática dentro de otros cursos de la Oficina Anticorrupción sobre Ética Pública en general. En el mismo año se realizaron 6 actividades de capacitación (modalidad virtual), que alcanzaron a 268 funcionarios, y 16 capacitaciones (modalidad presencial) que alcanzaron a un total de 1658.

Por su parte, en 2019 la Oficina Anticorrupción llevó adelante 22 cursos relacionados con el tema (17 presenciales y 5 en modalidad virtual), en los que participaron un total de 927 funcionarios públicos de distintos niveles y jerarquías. Asimismo, se lanzó el Programa de Formación en Integridad del INAP, que contenía un módulo autogestionado dedicado específicamente a conflictos de intereses, que tuvo 3 ediciones donde fueron capacitados 198 funcionarios públicos de alta dirección.

En 2020 se realizaron más de 20 actividades de capacitación a empleados y funcionarios públicos relacionados con la temática. Todos fueron desarrollados en formato virtual a raíz de la irrupción de la pandemia por COVID-19.

2.3. Acceso a las decisiones sobre ética pública de la Oficina Anticorrupción a través de un sistema de búsqueda on line

Se desarrolló una aplicación on line, para consulta interna y externa de las decisiones de la Oficina Anticorrupción en materia de ética pública y -principalmente- conflictos de intereses, mediante de la utilización de un sistema simple, ágil y que permite la búsqueda de las resoluciones a través de distintos criterios (número de acto, funcionario, tema, texto del dictamen y/o fecha).

La consulta puede efectuarse ingresando en el link <https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/resoluciones-conflicto-intereses>, disponible en la página web de la Oficina Anticorrupción.

Una vez que se accede al sitio, pueden visualizarse los temas que abarca cada resolución, los datos de trámite del respectivo expediente y los nombres de los funcionarios analizados. También se puede acceder directamente al texto completo de la decisión de la Oficina Anticorrupción.

De este modo, se procura dotar a la Oficina Anticorrupción de una herramienta de consulta de sus propios antecedentes y, al mismo tiempo, promover la difusión al público en general (funcionarios y ciudadanía) de los criterios interpretativos adoptados al respecto.

2.4. Diseño de material de difusión en materia de conflicto de intereses

En forma complementaria al dictado de cursos relacionados con conflictos de intereses, se ha diseñado material de difusión sobre integridad en compras y contrataciones, el cual también es empleado como insumo en las capacitaciones efectuadas por la Oficina Anticorrupción (tanto presenciales como virtuales). Estos materiales se hallan publicados en el sitio web institucional y son regularmente actualizados de acuerdo con los criterios fijados por la Oficina Anticorrupción como autoridad de aplicación de las normas de ética pública.

2.5. Difusión de principios y obligaciones en materia de ética pública a funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional a través de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE)

Se implementó la utilización de ventanas pop-up en la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) a los fines de difundir principios y obligaciones en materia de ética pública. De esta forma, los más de 250.000 usuarios de GDE accedieron al contenido de los mensajes al ingresar al sistema.

Se difundió el mensaje titulado *¿Cómo prevenimos los conflictos de interés?*, destinado a difundir los pasos a seguir ante la existencia de una situación de conflicto de intereses real, potencial o aparente. Al cierre del mensaje, se informa que en la Oficina Anticorrupción se podrán hacer consultas, acceder a las preguntas frecuentes que se publican en nuestra web y utilizar el simulador interactivo (al que referimos en el punto 3.1. de este informe) que ayuda a resolver los casos más comunes.

Como muestra del impacto de este canal de difusión, durante la semana de su publicación en GDE se registró un incremento del 159% en el uso del simulador interactivo de conflicto de intereses, respecto de meses anteriores.

2.6. Diseño de material de estudio y análisis

Se ha elaborado un Manual sobre Ética Pública y Conflicto de Intereses (titulado *Ética Pública y Conflicto de Intereses, Estudio para su prevención y su adecuada gestión*) que se encuentra online en la web de la OA y que condensa los distintos criterios interpretativos de esta Oficina, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública 25.188.

El manual *“Ética Pública y Conflictos de Intereses. Estudio para su prevención y adecuada gestión”* compendia los diferentes criterios interpretativos y estándares sostenidos por la OA en las más de 500 resoluciones que lleva emitidas desde su creación en 1999. Se publicó en 2019. Producto de los casi 20 años de funcionamiento de la OA, existe una cantidad de publicaciones muy técnicas sobre cuestiones de ética pública, lo que tornó necesario un enfoque más práctico y amigable para abordar y difundir la temática. Así surgió la idea de desarrollar un manual en lenguaje sencillo donde se analizan las distintas normas del régimen de conflictos de intereses. Actualmente el Manual es utilizado como fuente de consulta y forma parte de las acciones de difusión y capacitación de la OA.

En igual sentido vale destacar también la publicación del “Catálogo Jurídico de Ética Pública, Integridad y Transparencia” https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1_catologo_juridico_etica_publica_integridad_y_transparencia_17-06.pdf. Se trata de una iniciativa de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros para compilar y difundir, en un formato accesible, los principales instrumentos que componen el marco normativo de integridad y transparencia en nuestro país y que regulan las pautas éticas, los deberes y las obligaciones de quienes ejercen una función pública en el Estado Nacional.

3. Herramientas de auto consulta

3.1. Simulador de conflicto de intereses

A fin de fomentar la autoevaluación de los funcionarios en la detección de situaciones actuales o potenciales de conflictos de intereses, se desarrolló e implementó un Simulador de conflicto de intereses, de consulta a través de la web de la Oficina Anticorrupción (accediendo al link: http://simulador.anticorrupcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1).

Este aplicativo permite al propio funcionario y a cualquier ciudadano, a través de la respuesta a preguntas formuladas por el sistema, detectar una eventual infracción a las normas de la Ley 25.188. Ello con el objeto de procurar su inmediato cese y/o delimitar el alcance de un deber de abstención.

Desde su implementación en abril de 2017 a noviembre de 2020, se registraron más de 9100 consultas al Simulador de Conflictos de Intereses. Todos los años se publica un mensaje pop up en el Sistema de Gestión Electrónica para que más de 300.000 usuarios conozcan su existencia y hagan uso de la herramienta.

3.2. Preguntas frecuentes

En la página web de la Oficina Anticorrupción se puede acceder a las preguntas frecuentes relacionadas con conflictos de intereses, a fin de que el funcionario pueda encontrar respuesta a las situaciones más comunes o frecuentes.

Para consultar su contenido puede accederse a los siguientes links:

- Conflictos de intereses:

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/prevencion-conflictos-intereses/preguntas-frecuentes>

- Régimen aprobado por el Decreto 202/17:

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/decretos-intereses/preguntas-frecuentes>

- Incompatibilidades administrativas:

<https://www.argentina.gob.ar/consultarincompatibilidades>

4. Acciones preventivas individuales sobre los funcionarios

4.1. Intervención de la autoridad de aplicación en materia de conflictos de intereses en los procedimientos de designación

La actuación de la Oficina Anticorrupción en el marco de los procesos de designación permite analizar, en una instancia embrionaria, los vínculos de interés de los futuros funcionarios, las obligaciones y limitaciones que derivarán de éstos y -en consecuencia- la procedencia (ante eventuales períodos de carencia ex ante) o conveniencia de la designación (si las relaciones personales, patrimoniales, profesionales, etc. del postulante limitarán en forma extraordinaria el adecuado ejercicio del cargo).

Ello además de brindar la posibilidad de que el funcionario y sus superiores jerárquicos conozcan, apenas iniciada la función pública, el alcance de los deberes y restricciones que lo afectan.

4.2.- Análisis de antecedentes de los funcionarios y formulación de recomendaciones e instrucciones preventivas

Las instrucciones preventivas son comunicaciones oficiales que la autoridad de aplicación envía a los funcionarios con el objeto de que éstos conozcan cuáles son las conductas que tienen prohibidas y/o en qué asuntos deben abstenerse de intervenir, de conformidad con la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188.

Cada instrucción preventiva implica el análisis de la situación particular de un funcionario, teniendo en cuenta sus atribuciones y sus vinculaciones, tanto previas como actuales. El análisis se realiza en base a la información que se encuentra disponible en la Oficina Anticorrupción como las Declaraciones Juradas Patrimoniales, el curriculum vitae del funcionario, publicaciones en el Boletín Oficial, y otras bases de datos y fuentes abiertas.

4.3. Oportuna respuesta de consultas del funcionario y sus superiores jerárquicos

La Oficina Anticorrupción procura brindar inmediata respuesta a las consultas que efectúen tanto los funcionarios como los superiores jerárquicos. Ello en el entendimiento de que una respuesta oportuna evitará la configuración de situaciones objetables desde el punto de vista de la ética pública. Además fomentará el canal de comunicación e incentivará a la realización de consultas por mayor cantidad de funcionarios lo que redundará en una merma significativa de la configuración de situaciones objetables.

Cargos electivos:

En la República Argentina son varios los organismos encargados de llevar adelante el diseño y la implementación de medidas tendientes a la promoción de sistemas transparentes y, particularmente, a la prevención de Conflictos de Intereses.

Por su parte, la **Secretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Interior** lleva adelante ciertas políticas tendientes a la Promoción de la transparencia tales como:

a) Registro de audiencias:

La Constitución Nacional Argentina reconoce en su artículo 14 el derecho de todos los habitantes de la Nación de peticionar a las autoridades “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”, dando lugar a la obligación de los funcionarios públicos de facilitar instancias de diálogo con distintos sectores sociales como sindicatos, cámaras empresarias, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

A su vez, en el marco del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno - contemplado por los artículos 1, 33 y 38 de la Constitución Nacional - dicha obligación se encuentra íntimamente ligada con el deber de transparentar la gestión estatal implementando los mecanismos que devengan necesarios a fin de habilitar el conocimiento de dichas instancias para toda la ciudadanía.

En este marco, en el orden nacional, en el año 2003 se dictó el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses, aprobado por el Decreto N° 1172/2003 <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm>> (Anexo III), constituyendo un notable avance en la disponibilidad de información sobre las audiencias de gestión de intereses de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Siendo hasta la actualidad el único instrumento normativo que regula expresamente la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

El Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, del Decreto N° 1172/03, definió la gestión de intereses como toda actividad desarrollada -en modalidad de audiencia- por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros -con o sin fines de lucro- cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.

De este modo, previó la obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a registrar toda audiencia cuyo objeto consista en las actividades calificadas como gestión de intereses; y proceder a la carga de la información en el Registro Único de Audiencias por Gestión de Intereses. Asimismo, la obligación impuesta por el Reglamento precitado conduce a hacer públicos no solamente los encuentros que mantienen las personas que gestionan intereses, tanto con los mandatarios -Presidente y Vicepresidente de la República- como con los funcionarios públicos desde el nivel del Jefe de Gabinete de Ministros hasta el de Director General, sino también los datos del solicitante; los intereses que se invocan; los datos de los participantes de la audiencia; el lugar, fecha, hora y objeto de la reunión y la síntesis del contenido del encuentro.

En el año 2008, la entonces autoridad de aplicación del Decreto N° 1172/03 (Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia), dictó la

Disposición N° 1 del 25 de marzo de 2008, en la que se creó el sistema denominado Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Poder Ejecutivo Nacional. El Registro Único resultó ser una herramienta de gran utilidad en sus comienzos, pero no contempló los adelantos tecnológicos producidos en los últimos años y resultó poco eficaz a los fines de cumplir con los objetivos propuestos por la norma.

Atento a las dificultades derivadas de la implementación del Reglamento y su limitación en cuanto a los sujetos obligados; y en miras a ampliar la transparencia de la actividad estatal, el Poder Ejecutivo Nacional llevó adelante una serie de medidas y modificaciones al régimen vigente; entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

- **Mejora en la implementación:** a partir de diciembre de 2016, la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dictó la Disposición N° 3/2016 que reemplazó el sistema de Registro implementado por la Disposición N° 1/2008, por el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses. Se creó una Plataforma digital de carga de información del mencionado Registro, de libre acceso disponible en el portal web: <<https://audiencias.mininterior.gob.ar/>>; resultando en una herramienta de gran utilidad, que ha dotado de una mayor utilización al Registro, adaptándolo a las nuevas tecnologías.

La nueva Plataforma web, se ha establecido como un sistema más sencillo, amigable y de frecuente utilización por parte de los sujetos obligados, redundando en un cumplimiento más efectivo de la obligación de registrar las audiencias y que ha optimizado los tiempos de carga de información.

El portal cuenta con la siguiente información: cantidad de audiencias y detalles de cada una de ellas (motivos, fecha de celebración, participantes e interés involucrado), según estructura del Poder Ejecutivo Nacional; desagregado por los funcionarios que concedieron audiencias (sujeto obligado) y finalmente a través del detalle de las personas que solicitaron audiencias (sujeto solicitante).

Asimismo, a partir del año 2016 comenzó a ejecutarse un Plan de Capacitaciones Anuales, que se desarrolla en forma continua, y contempla programas de asesoramiento tanto individual como grupal, dirigido a los operadores y sujetos obligados de los diversos organismos nacionales. Las capacitaciones tienen como finalidad formar y concientizar a los sujetos obligados sobre la importancia del efectivo cumplimiento del deber de carga en el Registro Único, como así también en aspectos técnicos que hacen a la correcta utilización de la plataforma digital.

A su vez, se estableció un área técnica dentro de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, destinada a brindar permanente asesoramiento por medios telefónicos y online a todas las personas que tuvieran inquietudes, referidas al Registro Único.

Finalmente, en miras a lograr la integración de la carga de Audiencias por Gestión de Intereses al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), la autoridad de aplicación a cargo de la administración y gestión del Registro - Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior-, está realizando las gestiones pertinentes a los fines de alinearse con la política de Expediente Electrónico. Siendo esto último un avance en la modernización del sistema de registro, permitiendo simplificar y agilizar las cargas en el Registro.

b) Acceso a la Información Pública:

El Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley al Congreso Nacional, que al ser aprobado por una amplia mayoría de los legisladores, se convirtió en la Ley de Acceso a la Información Pública (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm>) el 14 de septiembre de 2016. (ver detalle en sección especial).

La sanción de la ley implicó un avance fundamental en nuestro país en materia de calidad institucional, al reconocer el derecho de acceso a la información pública como un requisito para el adecuado funcionamiento de la democracia y como derecho fundamental de las personas.

El ejercicio del derecho de acceso a la información promueve la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el control de los actos públicos de gobierno y es fundamental para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud y la vivienda, entre otros.

La Ley de Acceso a la Información, tiene como fin garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué o para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de la administración centralizada y descentralizada, así como del resto de instituciones que reciben fondos públicos o brindan servicios públicos esenciales.

En marzo de 2017 se dictó el Decreto N° 206/17
<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273023/norma.htm>> reglamentario de la Ley a los fines de su efectiva aplicación.

Finalmente, el 03 de noviembre de 2017, por Decreto N° 899/17
<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285903/norma.htm>> se creó una Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en tanto la ley crea agencias de acceso para la información pública en diferentes poderes del Estado nacional, a saber el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La Mesa de Coordinación se integró el 05 de julio de 2018, por los representantes de las agencias de acceso a la información o sus equivalentes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura; y tiene como objetivo promover el trabajo en conjunto entre las oficinas y agencias de acceso a la información de los distintos poderes del Estado, como así también colaborar en el diseño de la planificación estratégica y la difusión de las políticas de transparencia y acceso a la información de todo el Estado, generar herramientas de asistencia técnica recíproca y participar en proyectos conjuntos de cooperación internacional.

[¹] <<http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/documentos/aranguren.pdf>>

[²] <http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/documentos/Res%20427-14_CI-Pronsato%20y%20Milano_.pdf> ;
<http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/documentos/Res%20523-16_CI-Cacetta.pdf>

[³] <<http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/documentos/aranguren.pdf>>

[4]<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm#2>>;
<<http://archivo.anticorruptcion.gob.ar/documentos/Resoluci%C3%B3n%20OA-DPPT%20509-16.pdf>>:
<<http://archivo.anticorruptcion.gob.ar/documentos/Resoluci%C3%B3n%20OA-DPPT>>;
<<http://archivo.anticorruptcion.gob.ar/documentos/aranguren.pdf>>

[5]<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272922/norma.htm>>
<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272923/norma.htm>>

[6] www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm

[7] Resolución OA/DPPT 71/2002

[8] Reglamento de carácter general que el Poder Ejecutivo dictó en uso de las facultades que le fueron delegadas por la Ley 25.414.

[9] La actuación de un funcionario, a título particular, en una empresa privada que realice una actividad regulada por el Estado (ya sea concesionaria de un bien o servicio público o simplemente una empresa de capitales privados sometida a la regulación estatal) y su participación en un área del Estado con atribuciones de control sobre dicha empresa se encuentran reguladas en los artículos 13 de la Ley Nº 25.188 (cuando el ejercicio de la actividad privada es simultánea con el de la pública) y 15 del mismo marco legal (cuando el ejercicio de la actividad privada es previo al de la función pública).

[10] infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48853/texact.htm

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

En relación a lo expuesto en materia de conflicto de intereses pueden consultarse las últimas decisiones de la Oficina Anticorrupción con relación a las normas sobre conflictos de intereses a través del link <http://www.saij.gob.ar/anticorruptcion> y en <https://www.argentina.gob.ar/anticorruptcion/resoluciones-conflicto-intereses>

En materia de Acceso a la Información: Con la finalidad de fortalecer el trabajo de la Mesa de Coordinación, se llevó adelante un programa de acción con el aporte de asistencia técnica por parte del Fondo Chile (fondo financiado por aportes de la República de Chile que busca promover la cooperación Sur-Sur).

En este marco, el Consejo para la Transparencia de Chile, realizó junto al Gobierno Nacional diversas actividades, talleres y jornadas de capacitación con integrantes de la Mesa de Coordinación, representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, del Consejo de la Magistratura de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Cámara de Senadores de la Nación y de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional.

15. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

Durante el año 2018 el Gobierno Nacional celebró un compromiso con el Programa EUROsociAL de la Unión Europea , para el apoyo a la implementación de la Ley de Acceso a la Información.

Tal compromiso estableció que el Programa EUROsociAL disponga de fondos para la transmisión de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en cada uno de los sectores objeto del acompañamiento, garantizando un diálogo técnico institucional. En este marco, se celebraron durante el año en curso diversos encuentros, reuniones y talleres destinados a mejorar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

8. Códigos de conducta para funcionarios públicos

16. Párrafo 1 del artículo 8

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La República Argentina promueve la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos a través de medidas de diversa índole:

1. Normativa sobre integridad.
2. Difusión general de los principios, deberes, prohibiciones y restricciones éticas aplicables al ejercicio de la función pública.
3. Herramientas de auto consulta.
4. Acciones preventivas individuales sobre los funcionarios.

Se deja constancia de que la República Argentina posee una forma de gobierno republicana y federal. En este informe se contemplan exclusivamente las iniciativas de promoción de la ética pública instrumentadas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo es necesario señalar que la República Argentina posee, a nivel federal, una profusa normativa en materia de integridad y ética pública.

La autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188, del Código de Ética de la Función Pública y de su normativa complementaria[1] es la Oficina Anticorrupción (creada mediante el artículo 13 de la Ley N° 25.233[2]), y con carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación (Decreto N° 54/19) [3] con la misión de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional con competencias y atribuciones concurrentes -en algunos aspectos- con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Asimismo, el artículo 2° del Decreto N° 54/19 elevó el rango y jerarquía del titular de la Oficina Anticorrupción equiparándolo al de Ministro y estableció que gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional, manteniendo su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con esta nueva normativa, la Oficina Anticorrupción adquirió mayor independencia para ejecutar sus funciones, pudiendo, entre otras cuestiones, elaborar su propio Plan de

Acción y dictar su reglamento interno sin requerir la aprobación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, requisito necesario antes de la sanción del mencionado Decreto.

Conforme el Decreto 102/99 de creación, y sus modificaciones, la Oficina Anticorrupción tiene entre sus atribuciones:

- Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional.
- Promover la ética, la transparencia y la integridad en la función pública de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional.
- Ejercer las funciones que le corresponden en carácter de autoridad de aplicación de la Ley 25.188[4], y sus normas complementarias.
- Impulsar las acciones tendientes a prevenir la corrupción y hacer efectivas las responsabilidades por actos contrarios a la ética pública.
- Entender en el diseño y en la implementación de políticas, programas, normas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción y en la promoción de la ética pública, la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno y asesorar a los organismos del Sector Público Nacional.
- Promover, de oficio o por denuncia, investigaciones respecto de la conducta de los agentes públicos, tendientes a determinar la existencia de hechos ilícitos cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública, en el ámbito de su competencia.
- Realizar investigaciones a fin de controlar a toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, en caso de indicios sobre el irregular manejo de esos recursos.
- Realizar las presentaciones a que dieran lugar las investigaciones, ante las autoridades administrativas o judiciales, a fin de impulsar su actuación, participando en carácter de parte interesada o querellante en los casos previstos en la normativa.
- Administrar los datos del registro de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los agentes públicos y efectuar el análisis de su contenido en orden a determinar la posible existencia de enriquecimiento ilícito o la configuración de conflictos de intereses.
- Dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias en los términos del Decreto 202/2017 (sobre conflictos de intereses) y celebrar todos los actos que se requieran para la debida implementación del citado decreto.

Actualmente, la estructura de la Oficina Anticorrupción está compuesta por dos Direcciones con rango y jerarquía de Subsecretarías: la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, encargada de la elaboración de políticas estatales contra la corrupción en el sector público nacional, y la Dirección de Investigaciones, responsable de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales. Además, cuenta con cinco Direcciones Nacionales, a saber: Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos -dependiente del Titular de la OA-; Dirección Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas y Dirección Nacional de Ética Pública -dependientes de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia-; Dirección Nacional de

Investigaciones y Fiscalización y la Dirección Nacional de Apoyo, Análisis Técnico y Litigio - dependientes de la Dirección de Investigaciones-. Dentro del segundo orden operativo, se encuentra la Coordinación de Políticas de Integridad, en la órbita de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia; la Coordinación de Análisis de Información, bajo la dependencia de la Dirección de Investigaciones; y la Dirección de Relaciones Institucionales y la Coordinación de Admisión y Derivación de Denuncias, como unidades dependientes de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos.

En lo que resulta de interés para este informe, la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia asiste al titular de la Oficina Anticorrupción en la elaboración y ejecución de acciones para la promoción de la ética pública, la integridad y la transparencia en el Sector Público Nacional. A tal fin, entre otras funciones:

- Realiza estudios e investigaciones relativas a la corrupción en la función pública, sus causas y su impacto económico.
- Diseña políticas y programas de prevención y realiza recomendaciones sobre políticas de represión de hechos ilícitos o irregulares.
- Propone modificaciones a las normas que establecen los procedimientos y la organización administrativa en el ámbito del Sector Público Nacional, en las temáticas de su competencia.
- Efectúa el control y seguimiento de las declaraciones juradas de los agentes públicos y analiza su contenido en orden a determinar la existencia de situaciones que puedan configurar presunto enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses.
- Dictamina en los procedimientos de selección para la designación de funcionarios por parte del Poder Ejecutivo Nacional, cuando éste así lo requiera, con relación a la idoneidad ética de los candidatos y eventual conflicto de intereses.
- Elabora proyectos normativos relacionados con la ética y la transparencia.
- Diseña y administra los datos del Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos y del Registro de Viajes Financiados por Terceros aprobados por el Decreto 1179/2016.
- Asiste al Titular de la OA en las acciones desarrolladas en el marco de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, su normativa complementaria y del Decreto 202/2017, así como en el dictado de sus normas complementarias y/o aclaratorias.

En ejecución de este cometido, analiza -de oficio, por denuncia o por consulta de los funcionarios o sus superiores jerárquicos- situaciones concretas en las que podría existir una infracción a la normativa sobre ética pública o resulta previsible que se produzca si no se adoptan las medidas necesarias.

En los supuestos señalados, procede a la formación de actuaciones administrativas en las que se evalúa la información inicial, se produce la prueba que se estime pertinente y, previo traslado al funcionario a efectos de que formule su descargo -si lo considera necesario-, se emite un informe o resolución[5].

Sobre la base de los referidos procedimientos, se impulsa -ante las autoridades competentes, de acuerdo al cargo o función de que se trate- el inicio de las actuaciones

tendientes a deslindar las responsabilidades disciplinarias y patrimoniales que pudieran corresponder y a anular los actos celebrados en conflicto de intereses.

Cabe señalar que las normas sobre ética pública brindan instrumentos que permiten la detección de infracciones tanto por parte de quien resulta autoridad de aplicación como de la ciudadanía.

Entre ellas encontramos el control y publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses. La posibilidad de visualizar sin restricciones el contenido de las declaraciones juradas permite a la autoridad de aplicación analizar, a la luz de esta información, la eventual existencia de conflictos de intereses tanto reales como potenciales o aparentes. En tal sentido, puede detectarse la realización de actividades simultáneas funcionalmente incompatibles (por ejemplo si el funcionario declara ser director de una empresa sobre la que, como agente del Estado tiene atribuciones). Asimismo puede constatar la existencia de vínculos o intereses que generen el deber de abstención y verificar su efectivo cumplimiento (por ejemplo, es posible que el funcionario declare ser accionista de una empresa sujeta a sus atribuciones, o ser deudor, acreedor o familiar de una persona sobre la que deba adoptar decisiones).

Por otra parte, su difusión permite contar con el significativo apoyo de la ciudadanía que puede analizar la situación de funcionarios cuya situación le resulte de interés e informar a la autoridad de aplicación en caso de que detecte inconsistencias o eventuales conflictos.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, promueve de oficio (sin necesidad de denuncia o comunicación de otro organismo) actuaciones administrativas tendientes a analizar si en un caso determinado se ha configurado un conflicto de intereses o bien la infracción a otras disposiciones contenidas en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ello sobre la base de relevamientos de bases de dato (registros de la propiedad inmueble, automotor, de sociedades, de antecedentes comerciales), cruces de información efectuados respecto de autoridades superiores, información periodística o a la que acceda por cualquier otro medio, etc).

1. Normativa sobre integridad

Si bien encontramos normas éticas (que contienen pautas y deberes de comportamiento o disposiciones tendientes a preservar la imparcialidad) en múltiples marcos normativos[6], en este apartado nos referiremos sólo a las leyes y decretos que regulan específicamente la materia: la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley de Ministerios 22.520 (artículos 24 y 25), el Decreto 41/99 que aprueba el Código de Ética de la Función Pública y sus disposiciones complementarias (Decretos 164/99, 1179/16, 201/17, 202/17 y 93/18).

Cabe señalar que la Ley 22.520 y los Decretos 41/99, 201/17, 202/17 y 93/18 se aplican únicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y complementan las disposiciones de la Ley 25.188. Los Decretos 164/99 y 1179/16, en cambio, fueron dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de su poder reglamentario (conferido por el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional), por lo que se aplican en todos los poderes del Estado Nacional.

Este marco normativo básico debe ser interpretado y aplicado a la luz de las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional[7] y en las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción[8] aprobadas por nuestro país, que poseen rango superior a las leyes (conforme artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).

1.1. Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública[9]

El 29 de septiembre de 1999 el Congreso Nacional concretó el mandato contenido en el artículo 36 de la Constitución Nacional, sancionando la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188, norma que establece una serie de principios y pautas que deben respetar quienes se desempeñen en un cargo o función pública, cualquiera sea el poder del Estado en el que las cumplan.

A los efectos de su aplicación considera función pública “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” (artículo 1º).

La Ley 25.188 establece:

- Un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública (artículo 2º), estableciendo su cumplimiento como requisito de permanencia en el cargo (artículo 3º);
- Un régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses (Capítulos III y IV);
- Normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses (Capítulo V);
- Un régimen de obsequios a funcionarios públicos (Capítulo VI);
- Regulación de la prevención sumaria para la investigación de supuestos de enriquecimiento injustificado (Capítulo VII); y
- Normas éticas sobre la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos (la cual deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos) (artículo 42).

El Capítulo IX introduce reformas al Código Penal incorporando nuevos artículos (256 bis y 258 bis) y modificando otros [artículos 23, 29, 30 y 67, rúbrica del capítulo VI, 256, 257, 258, 265, 266, 268 (2) y 268 (3)].

La Ley 25.188 fue modificada por la Ley 26.857 (sancionada el 8 de mayo de 2013) que, entre otras modificaciones:

- Establece el carácter público y de libre accesibilidad de las declaraciones juradas patrimoniales integrales y de intereses presentadas por los funcionarios obligados, las que podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet.
- Incorpora entre los sujetos obligados a presentar declaración jurada patrimonial a los candidatos a ejercer cargos públicos electivos nacionales.

-Deroga el capítulo VIII de la Ley 25.188 que preveía la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública en el ámbito del Congreso de la Nación como órgano independiente y con autonomía funcional, autoridad que nunca se había conformado.

1.2. Ley 22.520 - Ley de Ministerios[10]

La Ley de Ministerios 22.520 (t.o. 438/92) establece incompatibilidades específicas que resultan aplicables a los Ministros, Secretarios y Subsecretarios, adicionales a las establecidas en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El artículo 24 de la citada ley señala que “Durante el desempeño de sus cargos, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales”

El artículo 25, por su parte, expresa: “Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las provincias o los municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de funcionario pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional”.

La Procuración del Tesoro de la Nación, en su dictamen 134 del 15 de julio de 2013 (Dictámenes 286:30), interpretó que los fines -implícitos y subyacentes- de los referidos artículos son “la transparencia en el ejercicio de aquellos cargos, la dedicación exclusiva de funciones por parte de sus titulares y la necesidad de prevenir y evitar conflictos de intereses, entre otros”.

Cabe señalar que la Ley 22.520 no determina quién es su autoridad de aplicación, por lo que esta cuestión ha sido debatida. Ello sin perjuicio de las atribuciones de la Oficina Anticorrupción en la detección de situaciones de incompatibilidad y en el análisis e interpretación de situaciones que pueden constituir conflictos de intereses, que -de algún modo- las normas contenidas en la Ley 22.520 también pretenden evitar.

1.3. El Decreto 164/99 Reglamentario de la Ley 25.188[11]

Esta norma, reglamentaria de la Ley 25.188, confirió el carácter de autoridad de aplicación de la Ley en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien luego (por Resolución MJyDH 17/00[12]) delegó tal atribución en la Oficina Anticorrupción, creada por Ley 25.233[13] como organismo dentro de dicha jurisdicción. Hoy la referida Oficina posee carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación en virtud del Decreto N° 54/19.

El Decreto N° 164/99 reglamenta el régimen de declaración jurada patrimonial y de intereses previsto en el Capítulo III de la Ley 25.188, respecto de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, contiene disposiciones relacionadas al régimen de obsequios (Capítulo VI de la Ley 25.88) y al de incompatibilidades y conflictos de intereses (Capítulo V de la Ley 25.188), en este último caso, con relación a la obligación de presentar una declaración jurada a efectos de su detección.

1.4.- Código de Ética de la Función Pública aprobado por Decreto 41/99[14]

En cumplimiento del compromiso asumido en la CICC, el 27 de enero de 1999 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 41/99 que aprueba el Código de Ética de la Función Pública, obligatorio para “los funcionarios públicos de todos los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financieras oficiales y de todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, así como también de las comisiones nacionales y los entes de regulación de servicios públicos” (artículo 4º del Anexo al Decreto 41/99).

El Código de Ética entiende la función pública en forma amplia, abarcando “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” (artículo 2º del Anexo al Decreto 41/99).

Queda comprendida no sólo la función desempeñada por los empleados públicos, sino también por todos aquellos que -más allá de su jerarquía, cargo, modalidad de contratación o grado de estabilidad- cumplen tareas “en nombre del Estado o al servicio del Estado”.

Su artículo 1º establece que “el fin de la función pública es el bien común, ordenado por las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación y las normas destinadas a su regulación”, agregando que “el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.”

Luego de delimitar su ámbito de aplicación y el alcance de la intervención de quien designa como su autoridad de aplicación (la Oficina Nacional de Ética Pública -hoy Oficina Anticorrupción[15]-) se refiere a los que considera los “Principios Generales” y “Particulares” de la ética pública.

El Capítulo I de la Parte Especial reglamenta el “Régimen de regalos y otros beneficios”, que debe considerarse reemplazado por el artículo 18 de la Ley 25.188 y los Decretos 164/99 y 1179/16 (salvo en lo referido a regalos entre funcionarios, que no ha sido objeto de tratamiento por las normas posteriores). Lo mismo ocurre con su Capítulo IV denominado “Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras” ya que, en este caso, rigen las disposiciones de los Capítulos III y IV de la Ley 25.188 (“Régimen de Declaraciones Juradas”).

Párrafo aparte merece la consideración de la vigencia del Capítulo II del Código de Ética referido a “Impedimentos funcionales”. Éste debe considerarse subsistente sólo parcialmente, ya que las normas sobre conflictos de intereses contenidas en los artículos 41 segundo párrafo y 42 fueron reemplazadas por el Capítulo V de la Ley 25.188[16].

El resto de las disposiciones del Código de Ética subsisten y resultan aplicables en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional en todo aquello que no contradigan el régimen dispuesto por la Ley 25.188.

1.5. Decreto 1179/2016 - Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos[17]

Este Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, dictado el 18 de noviembre de 2016 sobre la base de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción, reglamenta el artículo 18 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188. Dicha norma establece que “Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere”.

El Decreto -que sigue los estándares internacionales y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reglamenta las excepciones a la prohibición de recibir obsequios definidas en el citado artículo 18 (cortesía y costumbre diplomática), precisando su concepto y alcance y estableciendo la obligación de registro en todos los casos. Además establece los supuestos en los que los obsequios (excepcionalmente admisibles) deben ser incorporados al Patrimonio del Estado.

Por otra parte señala en qué supuestos no pueden recibirse obsequios (aun de cortesía o costumbre diplomática): cuando provengan de personas o entidades que realizan actividades reguladas, fiscalizadas por el organismo donde se desempeña el funcionario; que gestionen o exploten concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por el órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario; que sean contratistas o proveedores de obras, bienes o servicios del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario; que procuren una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario; o que tengan intereses que pudieran verse significativamente afectados por una decisión, acción, retardo u omisión del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario.

Finalmente regula en qué casos es posible aceptar el financiamiento de viajes por terceros (ajenos al Estado Nacional) para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas. Dicho financiamiento podrá ser aceptado cuando proceda de gobiernos, entidades o personas humanas o jurídicas que no puedan ser incluidas en la prohibición de recibir obsequios y siempre que su aceptación no resultare incompatible con las funciones del cargo, o prohibido por normas especiales. Los funcionarios que reciban estos beneficios deberán proceder a su registración en el “Registro de Viajes Financiados por Terceros”.

El Decreto 1179/16 crea un “Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos” y un “Registro de Viajes Financiados por Terceros” (<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/obsequiosyviajes>), que funcionan en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y que pueden ser completados por cualquier funcionario que reciba un obsequio a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

1.6. Decreto 201/17 - Gestión de los conflictos de intereses aparentes en los juicios en los que el Estado Nacional es parte[18]

Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 201/17, dictado el 21 de marzo de 2017, se

aprobó un procedimiento especial de representación del Estado en juicio, con directa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación (órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional) y recaudos adicionales de transparencia, para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés potencial o aparente, por la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que suscite dudas en la ciudadanía sobre la debida gestión de los intereses del Estado.

Situaciones alcanzadas por el Decreto 201/2017

Conforme lo expresado, el Decreto 201/2017 establece en su artículo 1º que el Estado Nacional será representado y/o patrocinado en forma directa por la Procuración del Tesoro de la Nación en los procesos judiciales y extrajudiciales en que un organismo o entidad del Sector Público Nacional (definido en el artículo 8º de la Ley 24.156[19]) sea parte (tanto actora, como demandada) y en los que el Presidente de la Nación, el Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros o cualquier Ministro del Poder Ejecutivo Nacional o autoridad de igual rango, tenga con alguna de las partes en el proceso (o sus representantes legales o letrados patrocinantes) alguno de los siguientes supuestos de vinculación:

- Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad,
- Sociedad o comunidad,
- Pleito pendiente (esta hipótesis comprende los casos en los cuales el declarante está involucrado en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario),
- Ser deudor o acreedor,
- Haber recibido beneficios de importancia,
- Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.
- En el caso de las personas jurídicas, cualquiera de los vínculos anteriores en relación a un director, accionista o socio que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Herramientas de transparencia y participación ciudadana establecidos en el Decreto 201/2017

El Decreto establece qué ocurre si se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 1º. En tal caso:

-Los servicios jurídicos permanentes deberán comunicar en forma inmediata y fehaciente a la Procuración del Tesoro de la Nación el inicio de todo proceso alcanzado por este régimen, acompañando un informe del Director de dichos servicios jurídicos junto con la totalidad de las actuaciones y su documentación (artículo 4º).

-A la comunicación de la iniciación de demandas contra la Nación que el actor debe hacer a la Procuración del Tesoro de la Nación (conforme los artículos 5º y 12 del Anexo III del Decreto N° 1116/00), se agregó una declaración jurada relativa a que la causa se encuentra alcanzada o no por el régimen del Decreto 201/2017 (artículo 5º).

-Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 411/80 (t.o. 1987), previo a formular allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, o rescindir convenios, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá comunicar la voluntad de actuar en alguno de aquellos modos, con una antelación no menor a 10 días hábiles de la

presentación o celebración del acto pertinente, a la Oficina Anticorrupción, a la SIGEN y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración del Congreso de la Nación (artículo 6°).

-Asimismo deberá publicar, en forma previa a la realización de los actos referidos, un informe que contenga: a) el análisis circunstanciado de los hechos y, en su caso, de las opiniones recibidas de los organismos de control; y b) La fundamentación de la posición jurídica. No obstante, cuando dicha publicación pudiera afectar la estrategia de defensa del Estado, podrá efectuarse junto con la presentación (artículo 7°).

-Las autoridades respecto de las cuales se declare un vínculo deberán abstenerse de tomar cualquier tipo de intervención en dichos casos (artículo 10)

El artículo 2° del Decreto establece que la Procuración del Tesoro de la Nación procurará - en estos casos- desempeñar la defensa del Estado Nacional asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público en todos los casos contemplados en el decreto.

En tal sentido, deberá publicar y mantener actualizada a través del portal web del organismo, un "Listado de causas judiciales y otras actuaciones" que se encuentren comprendidas en este régimen indicando: carátula, número de expediente y radicación y el enlace de acceso al expediente digital del Poder Judicial de la Nación, así como también información actualizada sobre el estado de las actuaciones y las audiencias o reuniones a celebrarse, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la información pública (artículo 3°).

Carácter complementario

Las disposiciones del Decreto 201/2017 son complementarias de lo establecido en la Ley 25.188 y en el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549[20] sobre recusación y excusación de funcionarios (artículo 9°).

Autoridad de aplicación del Decreto 201/2017

Conforme el artículo 12 del Decreto 201/2017, la autoridad de aplicación es la Procuración del Tesoro de la Nación.

1.7. Decreto 202/17 - Gestión de los conflictos de intereses aparentes en las contrataciones del Estado[21]

Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 202/2017 del 21 de marzo de 2017 se aprobó un procedimiento especial aplicable a las contrataciones públicas o al otorgamiento licencias, permisos, autorizaciones, habilitaciones o derechos reales sobre bienes de dominio público o privado del Estado del Sector Público Nacional, en los que pudiera existir un conflicto de interés potencial o aparente por la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo (o las autoridades de rango inferior a Ministro con competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto), que suscite dudas en la ciudadanía sobre la debida gestión de los intereses del Estado.

Situaciones alcanzadas por el Decreto 202/2017

El Decreto 202/2017 prevé la suscripción de una “Declaración Jurada de Intereses” por parte de toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del Estado, en el ámbito del Sector Público Nacional (artículo 8° de la Ley 24.156).

En esta declaración el oferente o peticionante debe consignar si él -o en el caso de personas jurídicas, ciertos integrantes- poseen determinados vínculos con las máximas autoridades de la Nación o con funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

¿Respecto de qué funcionarios deben declararse vínculos?

En esta declaración, el oferente o peticionante debe consignar si él -o en el caso de las personas jurídicas, ciertos integrantes- poseen determinados vínculos con relación a:

-Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y autoridades de igual rango del Poder Ejecutivo Nacional, tengan o no atribuciones sobre el procedimiento de que se trate (artículo 1º);

-Funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2º).

Cuando el interesado es una persona jurídica, ¿quiénes deben declarar los vínculos con las máximas autoridades?

Si el declarante es una persona jurídica, es ésta quien debe confeccionar la declaración, señalando los vínculos que posean con los funcionarios mencionados en el artículo 1º y 2º:

-La propia persona jurídica

-Sus representantes legales

-Las sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados

-Sus directores

-Sus socios con participación idónea para formar la voluntad social o que ejerzan influencia dominante

-Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del cinco por ciento (5%) del capital social.

Si bien la norma alude a los “directores” de la sociedad, debe considerarse que dicho término refiere a todas aquellas personas que ejercen funciones directivas en los distintos tipos de sociedades, asociaciones o fundaciones. Tal es el caso de los socios gerentes de las sociedades de responsabilidad limitadas, los miembros del Consejo de Administración de las fundaciones, etc.

¿Qué vínculos deben ser declarados?

Los vínculos entre el declarante y el funcionario que el Decreto considera demostrativos de un interés son:

- Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
- Sociedad o comunidad
- Pleito pendiente (esta hipótesis comprende los casos en los cuales el declarante está involucrado en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario)
- Ser deudor o acreedor
- Haber recibido beneficios de importancia y
- Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato

Si el declarante es una persona jurídica, deberá consignar los vínculos actuales y los existentes “dentro del último año calendario”. De este modo se evitan transferencias patrimoniales simuladas a efectos de excluir la contratación del procedimiento previsto en el Decreto. El “último año calendario” deberá computarse a partir de la fecha de presentación o actualización de la Declaración.

Herramientas de transparencia y participación ciudadana establecidos en el Decreto 202/2017

Si se denuncia uno de los referidos vínculos, se abre un procedimiento con mayores herramientas de publicidad y control (artículo 4º).

-Se debe comunicar dicha circunstancia a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción. Esta última examinará las posibles violaciones a la Ley 25.188 (artículo 5º).

-La autoridad contratante/interviniente deberá arbitrar los medios para dar publicidad total a las actuaciones en su página web y en la de la Oficina Anticorrupción. Se eleva el estándar de transparencia previsto en los Decretos 1023/01[22] y 1030/16[23] (Régimen General de Contrataciones de la Administración Nacional y decreto reglamentario), permitiendo al ciudadano acceder en forma centralizada y rápida a los expedientes de las contrataciones, sin necesidad de invocar interés alguno para su consulta.

-Se debe adoptar fundadamente -y dando intervención a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN- al menos uno de los siguientes mecanismos: celebración de pactos de integridad, participación de testigos sociales, veeduría especial de organismos de control y/o audiencias públicas, no descartándose la implementación de otros procedimientos que puedan resultar adecuados.

Cabe señalar que el régimen previsto en el Decreto 202/2017 establece un estándar mínimo de integridad y transparencia que debe respetarse. Por ello, si el organismo o entidad responsable del procedimiento desea adoptar más de un mecanismo de los propuestos, podrá hacerlo.

Para el cumplimiento de esta obligación resulta fundamental que se sigan los lineamientos contenidos en los Anexos II, III, IV y V de la Resolución 11-E/2017[24], según

cuál sea el mecanismo elegido.

-Exista o no conflicto de intereses en los términos de la Ley 25.188, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos señalados, deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento.

-Cuando se tratare de un procedimiento de contratación directa, la oferta podrá ser declarada inadmisibile, salvo en los casos contemplados en el artículo 25 inciso d) apartados 2, 3 y 6 del Decreto 1023/01 (contrataciones directas por especialidad, exclusividad o por razones de seguridad o defensa).

-En los casos en que la persona seleccionada hubiera declarado alguna de las situaciones previstas en el Decreto 202/2017, los mecanismos detallados en su artículo 4º inciso d) deberán aplicarse en todas las etapas del procedimiento, incluyendo en la instancia de ejecución del contrato.

Cabe señalar que conforme el artículo 6º del Decreto 202/2017, la omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

Carácter complementario

Esta reglamentación no deroga ni modifica el régimen de conflicto de intereses previsto en la Ley 25.188, con el que coexiste (como surge de su artículo 5º).

Autoridad de aplicación del Decreto 202/2017

Conforme los artículos 4º, 5º y 7º del Decreto 202/2017, la autoridad de aplicación es la Oficina Anticorrupción.

1.8. Decreto 93/18 - Nepotismo[25]

Sin perjuicio de la disposición general sobre nepotismo contenida en el artículo 43 del Código de Ética en la Función Pública (aprobado por Decreto 41/99)[26], el Decreto 93/2018 contiene una restricción amplia y objetiva aplicable a las altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Su artículo 1º establece que “... no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.”

Esta norma no sólo prohíbe a dichos funcionarios que designen familiares en el área a su cargo, sino que la restricción abarca el nombramiento o contratación en el ámbito de todo el Sector Público Nacional -que expresamente define-, participen o no aquellas altas autoridades en el proceso de designación.

Queda incluida en la veda cualquier modalidad de designación o contratación (ya sea bajo el régimen de empleo público, a través de entes cooperadores, el nombramiento en los directorios de sociedades que integran el Sector Público Nacional, la contratación en dichas empresas bajo la modalidad de contrato de trabajo, etc).

Se encuentra exceptuada de la prohibición, la designación de personas mediante procesos de selección por concurso público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo (artículo 3º).

La norma tiene efectos retroactivos, por lo que los familiares -en el grado precedentemente expresado- de los funcionarios de rango y jerarquía superior a Ministro, debieron abandonar sus cargos antes del 28 de febrero de 2018.

1.9.- Códigos de Ética de entes y organismos del Poder Ejecutivo Nacional (ver en detalle en el siguiente inciso)

1.10.- Anteproyecto de Reforma a la Ley de Ética Pública

La Oficina Anticorrupción ha elaborado un anteproyecto de reforma integral a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188 que introduce cambios significativos en materia de ética pública y conflictos de intereses, el cual fue enviado al Congreso en 2019 para su tratamiento. Actualmente, este proyecto presentado perdió estado parlamentario en virtud de la pandemia por COVID-19. La Oficina Anticorrupción, no obstante, está trabajando en un nuevo proyecto en base a su antecedente, que incorpore nuevos fenómenos ocurridos en los últimos años, tales como la puerta giratoria y la captura de la decisión pública, contemplando siempre la perspectiva de derechos humanos y género. Asimismo, incluirá instancias de participación pública propiciando un consenso más amplio.

En el proyecto anterior, se mantiene un concepto amplio de función pública (propiciado en las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción), el cual incluye a toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre o al servicio de intereses estatales o potestades públicas, prestada en el ámbito de entidades estatales o públicas no estatales en cuyos órganos de gobierno o de fiscalización participe el Estado Nacional, cualquiera sea su nivel jerárquico y la forma en que hubiera accedido al ejercicio de la función.

El anteproyecto estructura el régimen de ética pública en principios orientadores de criterio (igualdad de trato; integridad; preservación del interés público; razonabilidad; juridicidad; responsabilidad; imparcialidad; transparencia y rendición de cuentas; austeridad y prudencia), y a un catálogo de deberes más precisos. El incumplimiento de los principios y deberes es considerado una falta o, en su caso, un agravante de otra falta. También podrá dar lugar a la formulación de observaciones o recomendaciones por parte de la autoridad de aplicación. El proyecto contenía propuestas de reforma respecto a las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, nepotismo, conflictos de interés, régimen de obsequios, sanciones por incumplimiento y la autoridad de aplicación.

2. Difusión general de los principios, deberes, prohibiciones y restricciones éticas aplicables al ejercicio de la función pública

Entre las políticas tendientes a promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad

entre sus funcionarios públicos, podemos mencionar aquellas destinadas a procurar que los funcionarios conozcan las prohibiciones, restricciones y obligaciones que los afectan.

Se señalan a continuación algunas de las políticas públicas desarrolladas con este objetivo.

2.1. Actividades de formación en materia de ética pública

Capacitación interna

Con el fin de potenciar las capacidades del personal de la OA, permitiéndole incorporar herramientas que contribuyan a incrementar la calidad y eficiencia en el desarrollo de sus tareas, se han promovido acciones tendientes a la realización y participación de staff. En particular, durante el primer semestre del año 2018 se destacó la realización del Curso de Capacitación Virtual "Gobierno Abierto y Datos Abiertos", dictado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha capacitación, a la que accedieron 27 agentes de la OA, permitió profundizar conocimientos en lo referente a la identificación de las bases conceptuales del desarrollo del Gobierno Abierto para relacionarlas con casos de éxito en la formulación e implementación de estrategias y proyectos que fortalezcan la transparencia, la colaboración y mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Estos conocimientos implican una contribución al cumplimiento de los objetivos de la OA, en particular en lo que refiere al diseño e implementación de políticas, programas, normas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción, y en la promoción de la ética pública, la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno y asesorar a los organismos del Sector Público Nacional.

A partir de la segunda mitad del año 2018 el personal de la OA accedió a cursos de inglés, bajo la modalidad in company, dictados por el Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esta actividad se desarrolló por un convenio celebrado entre la OA y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y permitió -luego de un proceso abierto de selección interna-, capacitar a 39 empleados del organismo hasta el día 15 de noviembre de 2019. Además de estos cursos, se registraron otras actividades en temáticas vinculadas con ética pública, uso de datos abiertos, recupero de activos, herramientas para el análisis de datos, Compliance, Investigaciones Financieras y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Programas de Integridad. Durante el año 2018 se gestionaron 150 vacantes en distintas actividades y cursos de capacitación, a las que accedieron 62 empleados de la Oficina. En 2019, la cantidad de vacantes fue de 101, alcanzando a un total de 66 agentes. Considerando las particularidades y dificultades producto de la actual pandemia por COVID-19, se está tramitando una reedición de estos cursos para el 2021.

Capacitación externa (brindada por la Oficina Anticorrupción)

A partir de 2016, se incrementó la oferta de capacitación, tanto presencial como virtual que brinda la OA. Se trabaja coordinadamente con el INAP en el desarrollo de nuevos cursos específicos y en la incorporación de nuevas ofertas a través de la plataforma virtual del INAP. En particular, se destaca la implementación de cursos autogestionados que se brindan a través del Instituto. Los cursos cuentan con la acreditación del INAP, organismo rector en materia de capacitación para empleados públicos.

La inclusión de modalidades virtuales y autogestionadas de capacitación lograron abarcar una audiencia amplia en variedad y niveles jerárquicos en los diferentes organismos de la

administración pública, fortaleciendo el rol de difusión y prevención de la Oficina en materia de lucha contra la corrupción. Entre los años 2016 y octubre de 2020 la OA capacitó a más de 17.300 funcionarios y empleados públicos, agentes de la sociedad civil y del sector privado. Durante las capacitaciones que realiza la OA, se dedicó un espacio para concientizar sobre la importancia de reportar todo hecho que atente contra la ética pública o que pueda configurar un acto de corrupción, alcanzando a 524 capacitados en 11 actividades de capacitación presencial y 6 virtuales.

2.2. Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública

La “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública” es el resultado de un trabajo en conjunto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGEP), que tiene el objetivo de fortalecer una cultura organizacional basada en la integridad, ética pública y transparencia en la Administración Pública Nacional.

En nuestro país, el marco legal que establece las normas de conducta y los valores esperados de los y las funcionarias públicas es la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), en complementariedad con varias regulaciones como el Código de Ética de la Función Pública y la Ley Marco de Regulación del Empleo Público, entre otras. Se trata de una herramienta de difusión, sintética y práctica, de los principales deberes, incompatibilidades y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la Guía brinda información sobre el régimen de conflicto de intereses y de declaraciones juradas, los registros de viajes, obsequios y audiencias de gestión de intereses, los principios rectores para compras y contrataciones, y los lineamientos sobre publicidad de información pública, entre otros. Al cierre de cada temática se presenta un acceso directo a efectos de profundizar el análisis correspondiente.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyep_-_septiembre_2020.pdf

2.3. Guía para la creación de áreas de transparencia

Con el objetivo de nutrir el trabajo de enlaces de integridad, la OA elaboró y publicó una “Guía para la Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Integridad y Transparencia en Jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales”.

El documento recorre experiencias sobre integridad y transparencia de organismos estatales en los tres niveles, y repasa las funciones que pueden desarrollar estas áreas (programas de capacitación, control de declaraciones juradas, normativas sobre compras y contrataciones).

El Poder Ejecutivo Nacional, en la actualidad, cuenta con 24 áreas de Integridad y Transparencia. Las 6 que se encuentran en la administración centralizada fueron creadas desde diciembre de 2019 y otras 4 se encuentran en formación. Asimismo, hay un total de 14 organismos que poseen programas de integridad.

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-51883774-apn-ssiyt-oa.pdf>

2.4. Acceso a las decisiones sobre ética pública de la Oficina Anticorrupción a través de un sistema de búsqueda on line

Se desarrolló una aplicación on line, para consulta interna y externa de las decisiones de la Oficina Anticorrupción en materia de ética pública, mediante de la utilización de un sistema simple, ágil y que permite la búsqueda de las resoluciones a través de distintos criterios (número de acto, funcionario, tema, texto del dictamen y/o fecha).

La consulta puede efectuarse ingresando en el link <http://www.saij.gob.ar/anticorrupcion>, disponible en la página web del Sistema Argentino de Información Jurídica. Próximamente se podrá acceder en forma directa a dicha información en la página web de la Oficina Anticorrupción.

Una vez que se accede a la resolución, pueden visualizarse los temas que abarca, un resumen de los hechos, de su doctrina y el texto completo de la decisión de la Oficina Anticorrupción.

De este modo, se procura dotar a la Oficina Anticorrupción de una herramienta de consulta de sus propios antecedentes y, al mismo tiempo, promover la difusión al público en general (funcionarios y ciudadanía) de los criterios interpretativos adoptados respecto de las normas sobre ética pública.

El sistema se encuentra en etapa de prueba. Hoy pueden consultarse las resoluciones de la Oficina Anticorrupción correspondientes a partir del año 2016. Las resoluciones previas (desde su creación en el año 1999 hasta 2015) se encuentran también disponibles on line, en la página web del organismo, pero no es posible efectuar su búsqueda por tema o texto del dictamen.

2.5. Diseño de material de difusión en materia de ética pública

En forma complementaria al dictado de cursos relacionados con la ética pública, se ha diseñado material de difusión sobre pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de obsequios y transparencia en contrataciones, el cual fue impreso para su distribución en papel y -simultáneamente- colocado en la web de la Oficina Anticorrupción para su descarga por los interesados.

En efecto, por Decisión Administrativa 1047/17[27] dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, se instruyó a las reparticiones de la Administración Pública Nacional a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato electrónico, al afiche Ética y Transparencia que refleja los principios éticos para el ejercicio de la función pública, que posee el siguiente el siguiente diseño:
<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/deberes-eticos/afiche>.

En la misma Decisión Administrativa se indicó a las reparticiones que debían colocar el referido afiche en lugares que garanticen su visibilidad por parte de los funcionarios y empleados públicos y por el público en general. Asimismo se dispuso su difusión a través de medios electrónicos.

En materia de obsequios a funcionarios públicos y viajes financiados por terceros, se diseñaron, imprimieron y distribuyeron entre los organismos de la Administración Pública Nacional, dos afiches.

Respecto del tema integridad en compras y contrataciones se elaboró y difundió on line el siguiente material, el cual también es empleado como insumo en las capacitaciones efectuadas por la Oficina Anticorrupción (tanto presenciales como virtuales).

La OA desarrolló la “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”, una herramienta de difusión, sintética y práctica, de los principales deberes, incompatibilidades y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la

integridad en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la Guía brinda información sobre el régimen de conflicto de intereses y de declaraciones juradas, los registros de viajes, obsequios y audiencias de gestión de intereses, los principios rectores para compras y contrataciones, y los lineamientos sobre publicidad de información pública, entre otros. El material fue diseñado por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y la Oficina Anticorrupción, en el marco de la articulación de acciones para el mejor desarrollo de políticas públicas en materia de integridad y transparencia.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyp_-_septiembre_2020.pdf

2.6. Difusión de principios y obligaciones en materia de ética pública a funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional a través de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE)

En el marco de la estrategia de difusión, se implementó la utilización de ventanas pop-up en la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) a los fines de difundir principios y obligaciones en materia de ética pública. De esta forma, los más de 300.000 usuarios de GDE accedieron al contenido de los mensajes al ingresar al sistema.

Se registraron mensajes titulados *¿Cómo prevenimos los conflictos de interés?*, destinado a difundir los pasos a seguir ante la existencia de una situación de conflicto de intereses real, potencial o aparente. Al cierre del mensaje, se informa que en la Oficina Anticorrupción se podrán hacer consultas, acceder a las preguntas frecuentes que se publican en nuestra web y utilizar el simulador interactivo (al que referimos en el punto 3.1. de este informe) que ayuda a resolver los casos más comunes.

Como muestra del impacto de este canal de difusión, durante la semana de su publicación en GDE se registró un incremento del 159% en el uso del simulador interactivo de conflicto de intereses, respecto de meses anteriores.

Se implementó el pop-up de mecanismos y canales de denuncias para hechos de corrupción titulado *Ayúdanos a prevenir y detectar la corrupción denunciando en la Oficina Anticorrupción*. A través de dicho mensaje, se informa que la denuncia ante el conocimiento de irregularidades administrativas o hechos de corrupción llevados a cabo por funcionarios, empleados o contratistas, puede ser efectuada de manera anónima o con identidad reservada en la Oficina Anticorrupción, por medio del formulario web.

Por último, en forma previa a las fiestas navideñas y de fin de año, se recordó a los funcionarios y empleados la prohibición de recibir obsequios, en el marco de lo establecido por el Decreto 1179/2016.

2.7. Diseño de manuales de procedimiento e instructivos

La Oficina Anticorrupción ha aprobado un Instructivo para el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, con el objeto de posibilitar la adecuada carga de datos por parte de los funcionarios obligados. Éste se encuentra disponible en el link <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2017-14440260-apn-oa23mj.pdf>.

Asimismo, se ha aprobado un Instructivo para el Registro de Viajes Financiados por terceros, disponible en el link <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2017-14440284-apn-oa23mj.pdf>.

Complementariamente, se realizaron dos tutoriales (accesibles a través de la página web de la Oficina Anticorrupción), que contienen una descripción de los referidos procedimientos. Puede accederse a los videos en el link <https://www.argentina.gob.ar/registrar-obsequios-y-viajes-como-funcionario-publico>.

3.- Herramientas de auto consulta

3.1. Simulador de conflicto de intereses

A fin de fomentar la autoevaluación de los funcionarios en la detección de situaciones actuales o potenciales de conflictos de intereses, se desarrolló e implementó un Simulador de conflicto de intereses, de consulta a través de la web de la Oficina Anticorrupción (accediendo al link: http://simulador.anticorruccion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1).

Este aplicativo permite al propio funcionario, a través de la respuesta a preguntas formuladas por el sistema, detectar una eventual infracción a las normas de la Ley 25.188. Ello con el objeto de procurar su inmediato cese y/o delimitar el alcance de un deber de abstención.

Desde su implementación en abril de 2017, se registraron más de 7800 consultas al Simulador de Conflictos de Intereses. Todos los años se publica un mensaje pop up en el Sistema de Gestión Electrónica para que más de 300.000 usuarios conozcan su existencia y hagan uso de la herramienta.

3.2. Preguntas frecuentes

También se ha actualizado y rediseñado la presentación de preguntas frecuentes de la página web de la Oficina Anticorrupción, a fin de que el funcionario pueda encontrar respuesta a las situaciones más comunes o frecuentes.

Los distintos temas son accesibles en las siguientes direcciones web:

- Conflicto de intereses: <https://www.argentina.gob.ar/anticorruccion/conflicto-de-intereses-preguntas>

- Incompatibilidades administrativas:
<https://www.argentina.gob.ar/anticorruccion/incompatibilidades-preguntas>

- Régimen aprobado por el Decreto 202/17:
<https://www.argentina.gob.ar/anticorruccion/prevencion/decretos-intereses/preguntas-frecuentes>

- Régimen de obsequios a funcionarios públicos:
<https://www.argentina.gob.ar/anticorruccion/obsequios-y-viajes-preguntas>

4. Acciones preventivas individuales sobre los funcionarios

4.1. Intervención de la autoridad de aplicación en materia de ética pública en los procedimientos de designación

La actuación de la Oficina Anticorrupción en el marco de los procesos de designación permite analizar, en una instancia embrionaria, los vínculos de interés de los futuros funcionarios, las obligaciones y limitaciones que derivarán de éstos y -en consecuencia- la procedencia (ante eventuales períodos de carencia ex ante) o conveniencia de la designación (si las relaciones personales, patrimoniales, profesionales, etc. del postulante limitarán en forma extraordinaria el adecuado ejercicio del cargo).

Ello además de brindar la posibilidad de que el funcionario y sus superiores jerárquicos conozcan, apenas iniciada la función pública, el alcance de los deberes y restricciones que lo afectan.

4.2. Análisis de antecedentes de los funcionarios y formulación de recomendaciones e instrucciones preventivas

Las instrucciones preventivas son comunicaciones oficiales que la autoridad de aplicación envía a los funcionarios con el objeto de que éstos conozcan cuáles son las conductas que tienen prohibidas y/o en qué asuntos deben abstenerse de intervenir, de conformidad con la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188.

Cada instrucción preventiva implica el análisis de la situación particular de un funcionario, teniendo en cuenta sus atribuciones y sus vinculaciones, tanto previas como actuales. El análisis se realiza en base a la información que se encuentra disponible en la Oficina Anticorrupción como las Declaraciones Juradas Patrimoniales, el curriculum vitae del funcionario, publicaciones en el Boletín Oficial, y otras bases de datos.

4.3. Oportuna respuesta de consultas del funcionario y sus superiores jerárquicos

La Oficina Anticorrupción procura brindar inmediata respuesta a las consultas que efectúen tanto los funcionarios como los superiores jerárquicos. Ello en el entendimiento de que una respuesta oportuna evitará la configuración de situaciones objetables desde el punto de vista de la ética pública. Además fomentará el canal de comunicación e incentivará a la realización de consultas por mayor cantidad de funcionarios lo que redundará en una merma significativa de la configuración de situaciones objetables.

[1] Salvo del Decreto 201/17 pues dicho rol lo ejerce la Procuración del Tesoro de la Nación.

[2] Disponible en
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61394/norma.htm>

[3] Disponible en
<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224051/20191221>

[4] Dicha delegación tuvo lugar por resolución MJyDH 17/2000 (disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61934/norma.htm>)

[5] Conforme procedimiento regulado por la Resolución MJSyDH 1316/2008.

[6] Por ejemplo los artículos 23 y 24 de la Ley 25.164 (Ley Marco de Regulación de

Empleo Público Nacional, disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60458/norma.htm>), los artículos 17, 36 y 37 del Decreto 214/06 (CCT para la Administración Pública Nacional, disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114315/texact.htm>), el artículo 60 de la Ley 24.065 (Marco regulatorio del transporte y distribución de electricidad, disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/464/texact.htm>, el artículo 56 de la Ley 24.076 (Marco regulatorio del transporte y distribución de gas natural, disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/475/texact.htm>, entre muchos otros.

[7] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>. La reforma del año 1994 incorporó en el artículo 36 de la Carta Magna el mandato al Congreso de “sancionar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”. La inclusión de dicha atribución en el capítulo “Nuevos Derechos y Garantías” demuestra el propósito de considerar a la ética como un derecho de la ciudadanía así como un deber de los agentes públicos.

[8] La Convención Interamericana contra la Corrupción fue aprobada por Ley 24.759 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por Ley 26.097.

[9] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/norma.htm>

[10] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48853/texact.htm>

[11] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61900/norma.htm>

[12] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61934/norma.htm>

[13] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61394/norma.htm>

[14] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/55841/norma.htm>

[15] Conforme el artículo 20 del Decreto 102/99 (norma de creación de la Oficina Anticorrupción) “Toda alusión a la OFICINA NACIONAL DE ÉTICA PÚBLICA en el Decreto Nº 41 del 27 de enero de 1999 se entenderá referida a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN”.

[16] En efecto, el segundo párrafo del artículo 41 del Código de Ética fue sustituido por el artículo 13 de la Ley 25.188. Por su parte, el artículo 42 del Código de Ética establece que el funcionario público debe “excusarse en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto de intereses”, mientras que hoy el artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188 obliga a los funcionarios a renunciar a sus actividades en conflicto de intereses como condición para acceder a la función pública y sólo admite

la abstención en los casos en los que dicha actividad tuvo lugar antes de asumir el cargo en el Estado o cuando existe un interés personal, económico o financiero que no implique desempeño de función en el ámbito privado.

[17] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267949/norma.htm>

[18] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272922/norma.htm>

[19] Conforme el artículo 8º de la Ley 24.156 integran el Sector Público Nacional “a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones. d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades”.(Artículo sustituido por art. 8 de la Ley N° 25.827
<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91229/norma.htm>)

[20] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm>

[21] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272923/norma.htm>

[22] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm>

[23] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/norma.htm>

[24] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/norma.htm>

[25] Disponible en <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306423/norma.htm>

[26] El artículo 43 del Anexo al Código de Ética en la Función Pública establece que “.

El funcionario público no debe designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado”

[27] Disponible en

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230741/20200616>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Pueden consultarse las últimas decisiones de la Oficina Anticorrupción con relación a las normas sobre integridad accediendo al siguiente link

<http://www.saij.gob.ar/anticorrupcion>

17. Párrafos 2 y 3 del artículo 8

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.
3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.

¿Cumple su país estas disposiciones?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones de la Convención.

Párrafo 2:

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA APROBADO POR DECRETO 41/99

En cumplimiento del compromiso asumido en la CICC, el 27 de enero de 1999 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 41/99 que aprueba el Código de Ética de la Función Pública, obligatorio para “los funcionarios públicos de todos los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financieras oficiales y de todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, así como también de las comisiones nacionales y los entes de regulación de servicios públicos” (artículo 4º del Anexo al Decreto 41/99).

El Código de Ética entiende la función pública en forma amplia, abarcando “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” (artículo 2º del Anexo al Decreto 41/99).

Queda comprendida no sólo la función desempeñada por los empleados públicos, sino también por todos aquellos que -más allá de su jerarquía, cargo, modalidad de contratación o grado de estabilidad- cumplen tareas “en nombre del Estado o al servicio del Estado”.

Su artículo 1º establece que “el fin de la función pública es el bien común, ordenado por las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación y las normas destinadas a su regulación”, agregando que “el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas

de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.”

Luego de delimitar su ámbito de aplicación y el alcance de la intervención de quien designa como su autoridad de aplicación (la Oficina Nacional de Ética Pública -hoy Oficina Anticorrupción-) se refiere a los que considera los “Principios Generales” y “Particulares” de la ética pública.

El Capítulo I de la Parte Especial reglamenta el “Régimen de regalos y otros beneficios”, que debe considerarse reemplazado por el artículo 18 de la Ley 25.188 y los Decretos 164/99 y 1179/16 (salvo en lo referido a regalos entre funcionarios, que no ha sido objeto de tratamiento por las normas posteriores). Lo mismo ocurre con su Capítulo IV denominado “Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras” ya que, en este caso, rigen las disposiciones de los Capítulos III y IV de la Ley 25.188 (“Régimen de Declaraciones Juradas”).

Párrafo aparte merece la consideración de la vigencia del Capítulo II del Código de Ética referido a “Impedimentos funcionales”. Éste debe considerarse subsistente sólo parcialmente, ya que las normas sobre conflictos de intereses contenidas en los artículos 41 segundo párrafo y 42 fueron reemplazadas por el Capítulo V de la Ley 25.188.

El resto de las disposiciones del Código de Ética subsisten y resultan aplicables en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional en todo aquello que no contradigan el régimen dispuesto por la Ley 25.188.

Atento la importancia de que ciertas organizaciones desarrollen sus propios códigos de ética para responder a riesgos de corrupción específicos y efectuar un cambio en la cultura real, en los últimos años múltiples organismos, entidades y empresas estatales han aprobado normas y reglas específicas en esta materia, en línea con las vigentes para los funcionarios públicos en general.

Entre ellos podemos mencionar los dictados por:

- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT)
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF)
- Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF)
- Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)
- Integración Energética Argentina S.A - IEASA (ex Energía Argentina S.A. - ENARSA)
- Aerolíneas Argentinas S.A. (AARSA)
- Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE)

- Servicio Penitenciario Federal (SPF)
- Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
- Belgrano Cargas y Logística S.A.
- DIOXITEK S.A.
- Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)
- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Seguridad
- Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA)
- Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, la **Sindicatura General de la Nación**, en su carácter de órgano de control interno promueve, diseña e implementa medidas de integridad en los funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional.

Mediante la Resolución SIGEN 132/2018, aprobó su **Código de Ética**, cuyo objetivo es establecer normas que regulen la conducta personal y profesional de todos los que actúen y presten servicios en el ámbito de la SIGEN, inculcando el compromiso con los valores de este organismo de control, a fin de que el ejercicio de sus actividades se traduzcan en conductas tendientes a crear un lugar de trabajo eficaz, honesto, sin discriminación, ajustado a las normas y comprometido con el ambiente y la responsabilidad social.

Para el cumplimiento de este Código se constituyó un Comité de Ética, cuyos miembros fueron elegidos mediante el voto de todo el personal de la SIGEN, y que cuenta con representación de todos los niveles escalafonarios del organismo.

SIGEN CÓDIGO DE ÉTICA

Puede encontrarse en <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo-etica-v-final-0000.pdf>. Por su parte el Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de este Plan de Transparencia Institucional aprobado por la Resolución PGN N° 914/13, proyectó la elaboración de un Código de Ética para el ejercicio de sus funciones, definiendo las pautas de comportamiento ético, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la Ley n° 25.188. de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

AVANCES MÁS RECIENTES

La República Argentina ha efectuado grandes avances en los últimos años en relación al desarrollo y la implementación de herramientas que promuevan un correcto diseño de códigos de conducta éticos entre los diversos organismos de la Administración Pública Nacional.

En este sentido, se ha publicado la “Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública”, como resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público y la OA que tiene el objetivo de fortalecer una cultura organizacional basada en la integridad, ética pública y transparencia en la Administración Pública Nacional. Se trata de una herramienta de difusión, sintética y práctica, de los principales deberes, incompatibilidades y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la Guía brinda información sobre el régimen de conflicto de intereses y de declaraciones juradas, los registros de viajes, obsequios y audiencias de gestión de intereses, los principios rectores para compras y contrataciones, y los lineamientos sobre publicidad de información pública, entre otros. Al cierre de cada temática se presenta un acceso directo a efectos de profundizar el análisis correspondiente. La Guía se encuentra disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_el_ejercicio_etico_-_oa_y_sgyep_-_septiembre_2020.pdf

El propósito de la Guía es orientar la conducta de los agentes públicos en materia de ética pública, para mejorar la comprensión e internalización de sus deberes éticos. Se busca de esta manera acercar la normativa ética a funcionarios y empleados públicos, así como promover la implementación de los principios éticos de acuerdo con las funciones y competencias propias y particulares de los distintos organismos que conforman la Administración Pública.

Atento la cantidad de organismos, entidades y empresas estatales que han aprobado normas y reglas específicas contenidas en códigos de ética propios, la Oficina Anticorrupción se encuentra desarrollando un trabajo colaborativo para la revisión y eventual modificación de los códigos de ética existentes en cada organismo, y en la creación de nuevos códigos en aquellos donde no estén establecidos aún. Este desarrollo contará con una fase de participación abierta que incluirá una serie de instancias de consulta pública y mesas de trabajo para mejorar los códigos de conducta de los organismos.

Párrafo 3:

Los principios establecidos en el Anexo de la Resolución N° 51/59 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1996, han sido receptados genéricamente; luego de la reforma de la Constitución Nacional de la República Argentina (en el año 1994) determinadas convenciones internacionales adquirieron rango constitucional; y el Código Penal receptó la definición de acto de corrupción que brinda la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC).

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT)
(<https://www.arsat.com.ar/sites/default/files/documentos/manual-de-etica.pdf>)
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
(http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Codigo_de_Etica.asp)
- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
(<http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/codEtica.pdf>)
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF)
(<https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/Paginas/codigo-etica.aspx>)
- Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_etica.pdf)
- Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF)
(<https://servicios.adifse.com.ar/site/documentos/C%C3%93DIGO%20DE%20CONDUCTA%20PARA%20TERCERAS%20PARTES.pdf>)
- Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)
(https://www.eana.com.ar/sites/default/files/2018-03/codigo_etica_final_simple.pdf)
- Aerolíneas Argentinas S.A. (AARSA) (<https://www.aerolineas.com.ar/OfficeFile/E-commerce/CodigoEticaGrupoAR.pdf>)
- Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) (<https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/transparencia/programa-de-integridad/codigo-de-etica-y-conducta>)
- Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) - Programa de Integridad Institucional (<https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-creo-el-programa-de-integridad-institucional#:~:text=La%20creaci%C3%B3n%20del%20Programa%20de,la%20salud%20de%20la%20poblaci%C3%B3n>)
- Belgrano Cargas y Logística S.A. - Programa de Integridad
(<https://www.bcyf.com.ar/transparencia/ProgramaIntegridad>)
- DIOXITEK S.A. - Programa de Integridad (<https://dioxitek.com.ar/Documentos/Integridad.pdf>)
- Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) - Programa de Integridad y Transparencia (PIT)
(<https://www.eana.com.ar/integridad-y-transparencia#integridad-titulo>)
- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) - Programa de Integridad y Transparencia (http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2020-1714-INSSJP-DE-INSSJP.pdf)
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Programa de Integridad, Ética Pública y Transparencia (<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235214/202009229>)
- Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad - Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas
(<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233794/20200819>)
- Ministerio de Obras Públicas - Programa de Fortalecimiento Institucional, Integridad y Transparencia (<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228783/20200507>)

•**Ministerio de Seguridad - Programa de Transparencia e Integridad**
(<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231052/20200623>)

•**Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA) - Programa de Integridad** (<http://transparenciaactiva.nasa.com.ar/programa-de-integridad>)

•**Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. - Programa de Integridad**
(http://www.playasferroviarias.com.ar/descargas/programa_de_integridad/programa_integridad_pf.pdf)

•**Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) - Programa de Integridad**
(<https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/transparencia/programa-de-integridad>)

•**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Plan de Integridad**
(<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-146-2020-339403/texto>)

•**Agencia Federal de Inteligencia. Resolución 1162/20. Creación del Comité de Ética.**

SIGEN CÓDIGO DE ÉTICA: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo-etica-v-final-0000.pdf>

18. Párrafo 4 del artículo 8

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Conforme el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984)[1],
“Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1º) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones...”

A continuación se reseñan los sistemas que facilitan la denuncia de hechos de corrupción y de protección de denunciantes en el ámbito nacional. En algunos de ellos no se formulan distinciones en virtud del carácter de funcionario del denunciante.

1. Sistemas de protección en el ámbito nacional

La ley 25.764[2], sancionada en el año 2003, creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dada la “necesidad de una mayor protección de testigos e imputados cuando hubieren colaborado de un modo eficiente con la investigación judicial en la competencia federal relativa a los delitos de secuestro extorsivo, privación agravada de la libertad, violación a la Ley de Estupefacientes y Terrorismo, por intermedio de la creación de un programa nacional[3]”.

La norma crea un marco de protección que va desde la seguridad personal del denunciante, hasta la de la familia y su asistencia integral. Prevé que las medidas de protección se dispondrán de oficio o a petición del juez, fiscal o tribunal que entienda en la causa y siempre que se justifique su implementación en aquellos casos en el que una persona haya colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis (Delitos contra la libertad) y 170 (Delito de extorsión) del Código Penal de la Nación y los previstos por las Leyes 23.737 (Narcotráfico) y 25.241 (Hechos de Terrorismo).

Como es sabido, tanto el tráfico ilícito de estupefacientes como el terrorismo se encuentran vinculados estrechamente con la delincuencia organizada y económica y, por ende, con los delitos de corrupción, tal como mencionan expresamente en sus Preámbulos tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (párrafo 2) como la Convención Interamericana contra la Corrupción (párrafo 8). Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.241 permite extender dichos supuestos a ciertos delitos de corrupción, cuando tenga relación con la delincuencia organizada.

En tal sentido, el artículo 1º de la Ley 25.764, luego de crear el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los previstos por las Leyes 23.737 y 25.241, estipula que “a requerimiento de la autoridad judicial, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”. Ello permite inferir que los mecanismos de protección a testigos e imputados dispuestos por esta norma podrían ser utilizados, a requerimiento de autoridad judicial y por decisión fundada del Ministerio de Justicia, para casos de delitos de corrupción vinculados con la delincuencia organizada.

La norma describe la protección integral de toda persona pasible de amenaza, así como todas o algunas de las personas que convivan con ella. En particular, el artículo 5 de la ley expresa que las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en: a) la custodia personal o domiciliaria; b) el alojamiento temporario en lugares reservados; c) el cambio de domicilio; d) el suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios (se aclara que en ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis meses); e) la asistencia para la gestión de trámites; f) la asistencia para la reinserción laboral; y g) el suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.

Una de las dificultades que presenta el Programa son los requerimientos necesarios para que un testigo sea incluido:

- Debe haber una presunción justificada de un peligro cierto para la integridad física de la persona o de su familia;
- Debe existir un interés público trascendente en la investigación (lo cual puede permitir cierta discrecionalidad en tal calificación);
- Debe haber indicios ciertos de que los aportes del testigo puedan llevar al esclarecimiento de los hechos.

Actualmente, la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo a cargo del Programa, informó que está realizando una auditoría interna a efectos de evaluar el procedimiento administrativo con el objeto de mejorar su funcionamiento. Además, se encuentra en desarrollo una reforma del marco jurídico que rige la temática a los fines de fortalecer el Programa optimizando sus recursos y funcionamiento.

2. Regímenes administrativos de protección de denunciantes

2.1. Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción es un organismo creado por el artículo 13 de la Ley N° 25.233. El Decreto N° 54/19, le otorgó a la Oficina Anticorrupción mayor jerarquía institucional concediéndole carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación.

Asimismo, en el artículo 2° elevó el rango y jerarquía del titular de la Oficina Anticorrupción equiparándolo al de Ministro y estableció que gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional, manteniendo su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el ámbito de esta Oficina, las actuaciones pueden iniciarse de oficio, a partir de información publicada en sitios periodísticas, en base a los informes producidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) o la Auditoría General de la Nación (AGN) o a partir de la denuncia de algún funcionario de la Administración Pública Nacional, de una persona jurídica o de particulares.

En cuanto a las denuncias formuladas por particulares, las mismas pueden ser realizadas personalmente, telefónicamente, por correo postal o por intermedio del formulario web institucional de denunciantes.

En todos los casos, la Oficina Anticorrupción cuenta con un sistema de protección de denunciantes que implica la posibilidad de formular la denuncia con identidad declarada, con identidad reservada o de forma completamente anónima. En el último caso los trámites se iniciarán cuando la denuncia sea razonablemente circunstanciada y exista gravedad en el hecho denunciado y razonabilidad en la intención del denunciante de conservar el anonimato [conf. art. 1 inciso a) del Anexo I a la Resolución MJSyDH N° 1316/2008[4]].

Los datos de la persona que haya solicitado reserva de identidad serán mantenidos en secreto y no podrán ser revelados, salvo requerimiento judicial, en cuyo caso se remitirán al tribunal solicitante en sobre cerrado. Cuando la actuación que genere la denuncia finalice, tanto el sobre como sus datos personales, y aquellos aportes que el denunciante haya efectuado y que pudieran delatar su identidad (los que serán entonces separados de la carpeta), no podrán ser consultados por persona alguna, salvo requerimiento judicial. Al denunciante se le hará saber acerca de estas condiciones [conf. art. 1 inciso a) del Anexo I a la Resolución MJSyDH N° 1316/2008].

2.2. Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación implementó en el año 2016 el Sistema de Protección Administrativa del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SPAPFS) por intermedio de la Resolución MS N° 561/2016[5], actualizada en enero de 2019 mediante Resolución MS N° 59/2019.

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/200890/20190129>.

La misma toma como uno de sus antecedentes el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, que establece que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”.

En ese sentido, el SPAPFS se encuentra dirigido a todo el personal de las Fuerzas de Seguridad; Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y destinado a brindar la seguridad suficiente, para reducir las represalias que los miembros de las mencionadas fuerzas pueden sufrir por formular una denuncia y para que cuenten con canales adecuados de reporte de conductas que impliquen: ilícitos, actos de irregulares o de narcotráfico, violencia institucional o violencia de género.

La autoridad de aplicación que da tratamiento a las presentaciones depende del tipo de denuncia formulada:

- La Dirección de Investigaciones Internas recibe denuncias por actos de corrupción (en los términos de la Ley N°24.759), complicidad con el narcotráfico u otras formas de crimen organizado o delitos conexos.
- La Dirección de Violencia Institucional recibe denuncias por actos de violencia institucional.
- La Coordinación de Políticas de Género y no Discriminación recibe denuncias por actos de violencia de género o prácticas discriminatorias en materia de género, religión, etnia, raza, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro acto discriminatorio.

En todos los casos, el testigo o denunciante debe haberse negado expresamente a participar de tales actos.

Algunas de las herramientas que implementó el Ministerio de Seguridad para incentivar el reporte de irregularidades y reducir la presentación de denuncias anónimas dentro de las fuerzas se alinean con las mejores prácticas internacionales en materia de protección de denunciantes por hechos de corrupción.

En primer lugar, el denunciante anónimo no puede ingresar al SPAPFS, dado que su identidad no fue revelada a persona alguna.

En segundo lugar, son definidas con claridad las represalias que pueden sufrir los denunciantes, sin las cuales no es posible el ingreso al SPAPFS.

La Resolución menciona:

“a) Violencia física o verbal;

b) Misiones ordenadas con riesgo innecesario o sin los recaudos o sin el equipamiento de práctica para preservar la vida o la integridad física de quienes las lleven a cabo, de

acuerdo con la situación de la Fuerza y las circunstancias del caso;

c) Generación deliberada de un mal clima de trabajo, mediante comportamientos tales como hostilidad reiterada en el trato, la crítica permanente a una misma persona o la difusión de rumores injuriosos que posean la entidad suficiente como para justificar una medida excepcional;

d) Asignación de tareas o actividades que correspondan a niveles de menor jerarquía en el escalafón;

e) Negativa a asignar tareas o la sobrecarga injustificada de tareas en un contexto que permita advertir que se trata de una medida destinada a hostigar específicamente al denunciante;

f) Acoso sexual o laboral, sin perjuicio de las medidas de protección que adoptaren las áreas específicas cuando esas conductas no constituyeren una represalia en los términos de esta resolución;

g) Postergación injustificada en un ascenso o sanciones infundadas, injustificadas, reiteradas o desproporcionadas;

h) Traslados intempestivos o arbitrarios;

i) Convocatoria infundada a controles, evaluaciones o juntas médicas;

j) Cualquier otra conducta que, a juicio de la Autoridad de Aplicación, derive o pueda razonablemente derivar de las circunstancias descriptas del artículo 2° de la presente.”

Sin perjuicio de ello, se deja abierta la posibilidad de que la autoridad de aplicación considere otro tipo de conductas como pasibles de ser calificadas como represalias hacia el denunciante.

La autoridad de aplicación debe recibir en forma personal a quienes deseen ingresar al SPAPFS y proceder a tomar declaración al presentante. Se admite la formulación de la denuncia por canales electrónicos o de forma telefónica cuando la presentación no pueda realizarse de forma presencial. Cuando no medie solicitud expresa del denunciante, la autoridad de aplicación debe evaluar las circunstancias reportadas para analizar si corresponde o no el ingreso al SPAPFS. La Autoridad de Aplicación podrá adoptar recaudos para acreditar la identidad del denunciante.

Si la denuncia se realizará por la línea de recepción de denuncias “134” del Ministerio, el denunciante que aspire a ingresar en el Sistema deberá dejar sus datos para ser contactado y adecuarse al procedimiento que le indique la Autoridad de Aplicación correspondiente. En los casos en que no medie solicitud expresa por parte del personal denunciante, la Autoridad de Aplicación evaluará la conveniencia de ofrecer al denunciante su incorporación al Sistema cuando el caso haga presuponer la existencia de represalias o el fundado temor a sufrirlas en los términos comprendidos en los artículos 2º y 4º.

Una vez que el denunciante ingrese al SPAPFS, la autoridad de aplicación debe notificar a

la superioridad donde el denunciante presta funciones, lo cual implica:

- la suspensión inmediata de cualquier medida que estuviere a punto de adoptarse respecto del denunciante;
- el cese de cualquier tipo de acto u omisión de los mencionados como represalias;
- que no podrán adoptarse nuevas medidas disciplinarias respecto del denunciante sin el consentimiento del Ministerio de Seguridad.

Otros de los aspectos positivos del SPAPFS son las medidas introducidas por la norma para desincentivar a los denunciantes de mala fe.

Si bien la protección que brinda el SPAPFS no tiene plazo de vigencia, la Autoridad de Aplicación puede dar por finalizada la permanencia en el Sistema si se evidencia que la denuncia contiene falsedades, si el denunciante omite brindar información necesaria para la investigación o si hiciera abuso de su condición de protegido.

Incluso se prevé la sanción disciplinaria de aquellos agentes que abusen del sistema por medio de la formulación de denuncias falsas, con el fin de perjudicar a un tercero u obtener beneficios que no le corresponden. Cuando la autoridad de aplicación toma conocimiento de estos presupuestos, o existan indicios que le haga presuponer la mala utilización del Sistema, puede solicitar la intervención de las autoridades judiciales competentes a fin de investigar los hechos en cuestión.

Asimismo, a través de la Resolución 191/2020, se aprobó el Programa de Transparencia e Integridad en el ámbito de este Ministerio. Se trata de un programa de asistencia y fortalecimiento institucional para impulsar acciones tendientes preservar, promover y fortalecer a las áreas de gestión administrativa dependientes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, en temas vinculados con la ética, la transparencia y la integridad y con la prevención de riesgos de corrupción. La Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional es la autoridad de aplicación del Programa.

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231052/20200623>

Existe además, un programa de investigaciones en la Dirección de Investigaciones, que analiza las denuncias sobre presuntas irregularidades o delitos en los que podría estar involucrado personal o autoridades policiales de las fuerzas y determinar el curso de acción a seguir. Además, esta Dirección gestiona un programa de protección administrativa y disciplinaria para miembros de las fuerzas que, por haber denunciado irregularidades, pudieran verse afectados en su relación laboral con los superiores o temer hostigamientos sancionatorios.

2.3. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)

El INSSJP a través de la Resolución RESOL-2020-1714-INSSJP-DE-INSSJP crea el Programa de Integridad y Transparencia del organismo. El mismo, establece la creación de un canal de denuncias sobre incumplimientos en materia de Integridad y Transparencia:

“El mismo deberá permitir la realización de denuncias a través de distintos medios sobre

irregularidades, de una manera ágil, segura, confidencial y anónima, brindando todos los mecanismos informáticos y tecnológicos para ello.

Además, se deberá establecer los criterios para su tramitación, sin perjuicio de la derivación a otras instancias (Departamento de Sumarios, Oficina Anticorrupción, Unidad Fiscal de Investigación PAMI, etc.), cuando así correspondiere.”

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2020-1714-INSSJP-DE-INSSJP.pdf

2.4. Trenes Argentinos Cargas

Cuenta con un Programa de Integridad a través del cual promueven el fortalecimiento de Trenes Argentinos Cargas, guiado en los valores, misión y visión:

- Compromiso de la alta dirección
- Código de conducta
- Políticas y procedimientos
- Responsable de ética y transparencia
- Comité de integridad
- Capacitación y comunicación
- Medidas correctivas y disciplinarias

En el ámbito de la mencionada empresa estatal se ha implementado la “Línea Transparente”, en donde pueden denunciarse personalmente, por mail, teléfono o formulario web, violaciones al código de ética y conducta. Las denuncias pueden realizarse en forma anónima o con identidad declarada.

<https://www.resguarda.com/tac/main.html>

2.5. Trenes Argentinos Operaciones

El Programa de Integridad de Trenes Argentinos consiste en desarrollar e implementar mecanismos eficaces que le permitan alcanzar los más altos estándares en ética, integridad y transparencia. Tiene como propósito:

- Fomentar una cultura organizacional ética y transparente
- Prevenir y detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos
- Articular los valores y la ética de la empresa, las políticas y los procedimientos;
- Capacitar y comunicar a todos los integrantes de la organización los valores y la cultura de integridad de la empresa
- Generar en todas las personas de la organización una responsabilidad compartida en la lucha contra la corrupción

- Implementar un canal seguro de reporte de irregularidades y asesoramiento a fin de que las personas sientan que pueden expresar sus preocupaciones y que la organización los apoya

En este último sentido, se ha implementado la “Línea Transparente”, en donde pueden denunciarse personalmente, por mail, teléfono o formulario web, violaciones al código de ética y conducta. Las denuncias pueden realizarse en forma anónima o con identidad declarada. <https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/transparencia/programa-de-integridad>

2.6. Ministerio de Defensa

En el ámbito del Ministerio de Defensa funciona la Dirección General de Integridad, Transparencia y Fortalecimiento Institucional, la cual tiene como responsabilidad primaria el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad y ética pública, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información, transparencia y prevención de la corrupción (conforme Anexo II a la Decisión Administrativa 310/2018)[6].

La Dirección tiene entre sus acciones “recibir e investigar denuncias que hicieran particulares o agentes públicos sobre posibles hechos de corrupción relacionados con su ámbito de competencia, y promover de oficio la investigación de posibles hechos que llegaren a su conocimiento”.

Para la tramitación de las denuncias puede requerir informes a las áreas que integran el Ministerio de Defensa y valerse de información obrante en bases de datos públicas o privadas.

Los canales que tiene habilitados para la formulación de denuncias son: correo electrónico institucional, correo postal y personalmente. El emisor puede declarar su identidad, reservarla, o presentar la denuncia de forma anónima.

<https://www.argentina.gob.ar/defensa/transparencia>

2.7.- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

La AFIP es el organismo encargado de la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social. Fue creado en 1997 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 618/97[7] y se encuentra integrado por la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

En el año 2017, mediante el dictado de la Disposición N° 200-E/17[8], se creó la Dirección de Integridad Institucional, que depende directamente del Administrador Federal. En los considerandos de su norma de creación menciona la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097), la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188).

La Dirección de Integridad Institucional tiene como responsabilidad primaria asistir al Administrador Federal en la prevención e investigación de aquellas conductas que sean

contrarias a los deberes y pautas de comportamiento ético aplicables a los agentes que pertenezcan a la AFIP. Además, debe implementar acciones que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

Por otra parte, entiende en el análisis, clasificación y sistematización de las denuncias que tengan un interés fiscal para la AFIP. Analiza las denuncias efectuadas contra el personal de la AFIP, utilizando como insumos para su tramitación, información contenida en bases de datos de fuentes internas y externas. Además participa en el seguimiento de la gestión de los procedimientos disciplinarios (sumarios administrativos, informaciones sumarias y procedimientos abreviados) del personal.

Las denuncias pueden ser formuladas personal o telefónicamente. En este último supuesto, las presentaciones se realizan por medio del Centro de Atención de Denuncias de la AFIP y, en base al carácter de la misma (impositiva, aduanera, de seguridad social o por actos de corrupción), se remiten al área correspondiente.

<https://www.afip.gob.ar/denuncias/>

2.8.- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

El SENASA fue creado por la Ley 23.899[9]. Es el organismo encargado de la ejecución de las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal. También tiene, entre su competencia, el control del tráfico federal y de las importaciones y exportaciones de los productos y derivados de origen animal y vegetal.

En el ámbito de su Dirección de Asuntos Jurídicos funciona la Coordinación de Gestión de Denuncias del SENASA, encargada de la recepción de presentaciones de particulares que deseen formular reportes relacionados con incumplimientos a la normativa del organismo o falta de comportamiento ético por parte del personal del organismo.

Si bien pueden presentarse denuncias a través de la página web o en forma telefónica - con identidad reservada o anónimas-, la documentación probatoria debe ser entregada personalmente, en cualquiera de las delegaciones u oficinas que tiene el organismo en todo el país.

<https://www.argentina.gob.ar/senasa/sistema-de-denuncias>

2.9.- SIGEN

En su carácter de órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y en virtud de las facultades concedidas por el Artículo 112 de la Ley 24.156, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en cooperación con la Procuraduría de Investigaciones Administrativa y la Oficina Anticorrupción, aprueba el Reglamento de Denuncias mediante la Resolución SIGEN 29/2006. Este reglamento especifica la admisión, formalidades para las denuncias, el alcance, el traslado de las actuaciones y el acta de denuncia con reserva de identidad.

Además instruye a la Gerencia de Tecnología Informática SIGEN, en la realización de un sistema informático de denuncia y el cual debe contemplar el ingreso y seguimiento de las mismas y designar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos como responsable primario con la misión de control, seguimiento y actualización del mencionado sistema.

Asimismo, es oportuno señalar que es la Oficina Anticorrupción la encargada de “denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos” (Decreto 102/1999).

<https://www.argentina.gob.ar/sigen/transparencia-activa>

2.10. Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El programa de integridad de la empresa incluye una “Línea Transparente” de denuncias. La misma es una herramienta para reporte de violaciones al Código de Conducta, políticas y procedimientos corporativos en forma segura, anónima o confidencial.

<http://transparenciaactiva.na-sa.com.ar/programa-de-integridad>

2.11. Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima

El Programa de Integridad de la empresa estipula las acciones que se deberán llevar a cabo, así como también, enuncia las normas y principios éticos que deberán guiar la conducta y actividad de todos los directores, empleados, y en general de todas las personas que se desempeñan laboralmente en la empresa o que pudieran actuar en nombre y representación de ella, ya sea como mandatarios, contratistas, agentes, corredores, comisionistas o por cualquier título.

En cuanto a las denuncias el Programa de Integridad establece:

“11. Sistema de Denuncias

Las denuncias contra la Dirección de PFSA, o cualquier otra autoridad o responsable de la integridad y control de ella, deberán realizarse a través del canal habilitado por la OA conforme a la Guía del Denunciante disponible en su web institucional (<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion>), telefónicamente al 0800-444-4462 o a partir del formulario de denuncias web disponible en <http://denuncias.anticorrupcion.gob.ar/>

PFSA se compromete a garantizar que nadie sufra ningún maltrato como resultado de negarse a participar en una práctica que implique el incumplimiento de este Programa de Integridad, o por denunciar de buena fe su sospecha de que se ha llevado a cabo, real o potencialmente, un incumplimiento al Programa de Integridad, o que pueda tener lugar en el futuro. El maltrato incluye el despido, medidas disciplinarias, amenazas u otro tratamiento desfavorable relacionado con la generación de una inquietud. Si un trabajador cree haber sufrido dicho maltrato, deberá informarlo inmediatamente al Responsable Interno.” <https://www.playasferroviarias.com.ar/transparencia/>

2.12. Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca

A través de la Resolución , el Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca Resolución 146/2020 aprobó el “Plan de Integridad y Cumplimiento” con el fin de promover, desarrollar, consolidar, y controlar sistemas de gestión de prevención de riesgos de todos los procesos llevados a cabo en el ámbito de la Jurisdicción. Entre las medidas aprobadas, se encuentra la “Línea Ética”:

“4.3.3. LÍNEA ÉTICA - CANAL DE DENUNCIAS

La Línea Ética es un canal de contacto que brinda herramientas a quienes desean reportar o denunciar, entre otros, conductas contrarias a los principios éticos, que se originen en el marco de las actividades y operaciones realizadas por el MAGyP. Asimismo, este canal de contacto debe permitir la posibilidad de realizar denuncias de manera anónima y confidencial, brindando la posibilidad al denunciante de reservar su identidad.

Se deberá relevar y evaluar en el ámbito del MAGyP, la efectividad de los canales de denuncias existentes y su reglamentación, los cuales deberán brindar la posibilidad al denunciante de agregar la información y prueba que considere conducente para la acreditación de su denuncia y la posibilidad de reservar su identidad.

A su vez, se deberá relevar el grado de conocimiento y utilización del sistema por parte de los agentes y funcionarios de su jurisdicción, y en caso de ser necesario, realizar jornadas de capacitación y concientización sobre la importancia de la misma y fomentar su uso.

En caso de resultar necesaria una modificación del sistema existente, se deberá coordinar con las dependencias informáticas del MAGyP el desarrollo del mismo, acorde a los requerimientos supra mencionados, prestando especial atención a resguardar la información efectuada por medio del sistema, como así también la identidad del denunciante y demás documentos que contenga la denuncia.

La Línea Ética se encontrará bajo la supervisión de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MAGyP, y por quienes determinen las autoridades de los Entes Descentralizados, siendo estas, las encargadas de llevar adelante la investigación de las denuncias recibidas, y de establecer los criterios a seguir respecto de los hechos y situaciones denunciados, con la debida intervención de las Dependencias Jurídicas y/o de Sumarios de la jurisdicción, con toda la información relevada, para que prosiga con el trámite ordinario.”

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-146-2020-339403/texto>

3. Algunas experiencias provinciales

Organismos que reciben denuncias por hechos de corrupción:

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/organismos-que-reciben-denuncias-por-hechos-de-corrupcion>

3.1. Oficina de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires

La Oficina de Transparencia Institucional (OTI), creada por Decreto 1577/2016 en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene por objeto la implementación de políticas que tiendan a erradicar “prácticas corruptas en la gestión de

gobierno”.

La Dirección de Control de la Corrupción es el área encargada de la recepción de denuncias sobre hechos que “presuntamente contraríen la ética pública de los funcionarios en el ejercicio de su cargo”. Los canales de denuncia habilitados son: personalmente, en su sede en la ciudad de La Plata, o vía web, a través de su formulario de denuncias.

Las denuncias pueden ser presentadas con identidad declarada o bajo identidad reservada, pero siempre debe proveerse un correo electrónico de contacto, que puede ser de fantasía, para brindar mayores precisiones en caso de ser necesario. No pueden presentarse denuncias anónimas.

En ocasiones la Oficina Anticorrupción ha recibido llamados de denunciantes de hechos que tendrían lugar en la Provincia de Buenos Aires y que, al ser informados sobre la existencia de la OTI, hacen saber que les genera inseguridad tener que brindar indefectiblemente un correo electrónico para proceder a formular su denuncia.
<https://rud.mjus.gba.gob.ar/web/>

3.2. Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia de la Provincia de Santa Fe

Fue creada en el año 2008 por el Decreto 1882/2008 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su ámbito de competencia comprende el Sector Público Provincial. Se ocupa de “la implementación de políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia, careciendo de atribuciones sancionatorias y coercitivas”.

Su trabajo comprende tres ejes: investigación, ética pública y planificación.

El Anexo I del Decreto 2235/10 establece el procedimiento que deben seguir las investigaciones preliminares que se realicen en el ámbito de la Dirección. Menciona que las mismas se abren de oficio o por denuncia, a fin de determinar la existencia de los extremos que hagan procedente una investigación. A pesar de ello, no se han podido localizar en la página web del organismo los canales de denuncia ni surge de la aludida normativa la forma en la que un denunciante podría reportar un presunto hecho de corrupción. <https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93811>

3.3. Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy

Fue creada por la Ley 5885 del año 2017, como entidad independiente. Es autoridad de aplicación de las conductas establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y de aquellas situaciones que resulten violatorias del régimen local de ética pública.

Puede actuar de oficio o a partir de denuncias formuladas por funcionarios públicos o particulares, quienes pueden realizarlas de manera declarada, bajo reserva de identidad o de forma anónima, siempre que el Fiscal Anticorrupción lo autorice. Los denunciantes deben presentarse personalmente ante la sede de la OA en la capital provincial y completar un formulario para después proceder a completar un modelo de denuncia ante el organismo.

4. Anteproyecto de reforma a la Ley de Ética Pública

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación el 6 de marzo de 2019 y presentado en la Cámara de Diputados, ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, por la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción junto con el Secretario de Fortalecimiento Institucional. La OA ha participado en reuniones de asesores técnicos de los legisladores a fin de discutir detalles de la propuesta. Actualmente se está trabajando sobre una mejora del contenido del Proyecto de Ley que contará con instancias de participación pública.

5.- Plan Nacional Anticorrupción/Estrategia Nacional de Integridad

Principal eje temático propuesto por la OA: implementación de “Sistemas de Denuncias y Protección”.

Las políticas que han sido enviadas en ese sentido son:

- Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección integral de quienes denuncien de buena fe o sean testigos de actos de corrupción.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentra: Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial; fortalecer los mecanismos de denuncia que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción. Para ello se planea la elaboración de UNA (1) norma de protección de denunciantes que incluya UN (1) procedimiento claro para efectuar denuncias y solicitar protección, garantías adecuadas de protección de la identidad del denunciante y remedios adecuados ante actos de represalias.

- Sistema de coordinación de los canales de denuncia por organismo y general de la APN.

En atención a la implementación de diversos canales de denuncias que permiten simplificar el acceso del ciudadano y de los funcionarios a las vías de reporte de irregularidades, resulta necesario establecer UN (1) Sistema de coordinación de los distintos canales existentes en los organismos de la Administración Pública Nacional en general a fin de estandarizar procedimientos, protocolos de actuación y lineamientos generales en cuanto al trámite de los reportes. Asimismo se recopilarán datos estadísticos, se fortalecerá la difusión de los canales existentes y la colaboración entre las áreas.

- Creación y puesta en marcha del Canal ético en AFIP

Se implementará el Canal ético, que consistirá en un formulario electrónico, fácilmente

accesible desde el website o la intranet, y que permitirá que cualquier ciudadano, incluyendo proveedores y los agentes mismos de AFIP, puedan efectuar la denuncia de una violación al Código de Ética, en forma anónima o con identidad reservada. Se formulará una política anti represalias y de confidencialidad de la información. Se elaborarán protocolos de actuación ante denuncias y una Guía del Denunciante.

Investigación de denuncias con componente interno-enfoque estratégico en AFIP. Se potenciarán las acciones de investigación de conductas contrarias a los valores y principios sostenidos por la AFIP, con enfoque estratégico basado en análisis de riesgo.

- Creación área de denuncias de fraude en ANDIS

En virtud de numerosas irregularidades detectadas sobre el otorgamiento de pensiones, y denuncias de ciudadanos recibidas, se creará un área de denuncias de fraude. Tendrá como finalidad primordial recibir noticias sobre pensiones activas que incumplan con alguno de los requisitos básicos para recibir el beneficio. Los denunciantes no necesitarán poseer patrocinio letrado y contarán con la protección y garantías necesarias por parte de la agencia.

- Difusión del sistema de protección administrativa (Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 561/16 y 59/19)

El Sistema de Protección Administrativa para Fuerzas de Seguridad funciona desde 2016 y fue puesto a cargo de áreas determinadas según la naturaleza de la denuncia que motiva la protección del testigo o denunciante, a fin de evitar que los denunciantes sean sancionados injustificadamente mediante acciones de represalia. Se propone ampliar su difusión, alcances y límites, tanto para favorecer las denuncias presenciales como para evitar el abuso del sistema. La mencionada política tiene por objeto por un lado favorecer mayor volumen de denuncias presenciales en relación con las denuncias anónimas, así como evitar la utilización abusiva de sus mecanismos.

- Sistema de denuncias de posibles hechos de corrupción en el Ministerio de Defensa

Implementar mejoras al actual sistema de denuncias, con el fin de mejorar la identificación de riesgos, diseñar y promover acciones preventivas, recomendar cursos de acción a seguir y proponer políticas e impulsar acciones tendientes a promover la transparencia y la integridad en el ámbito de la Defensa.

Se prevé elaborar un Protocolo de Recepción y Tramitación de Denuncias, con el objetivo de regular el proceso de recepción, admisión a trámite, investigación y seguimiento de las denuncias, y coordinar la tramitación e investigación de denuncias en los distintos organismos de la Jurisdicción. Además se establecerá un protocolo de protección de denunciantes según estándares y buenas prácticas en la materia e implementarán herramientas informáticas para generar un registro que permita realizar el seguimiento y trazabilidad de la tramitación de denuncias, a partir del desarrollo de una base de datos interna.

Metas:

1. Protocolo de recepción y tramitación de denuncias elaborado e implementado
2. Protocolo de protección de denunciantes elaborado e implementado
3. Mapa de riesgos elaborado
4. Base de datos de denuncias desarrollado

- Canal de denuncias de corrupción en la Secretaría de Cultura de la Nación

Creación de un área técnica especializada en la recepción de todo tipo de denuncias por potenciales actos de corrupción e irregularidades administrativas.

- Canal de denuncias "Línea Transparente" en el Ministerio de Transporte

Se habilitarán diversos canales de denuncias para que todos los integrantes del Ministerio de Transporte, oferentes, proveedores, cualquier otra parte relacionada con el Ministerio de Transporte y la ciudadanía pueda denunciar actos, conductas, hechos y/o circunstancias de los que tuviere conocimiento, que constituyan o pudieran constituir una irregularidad o falta a las disposiciones de los Códigos de Ética y Conducta, al ordenamiento jurídico en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción y ejercicio de la función pública. Su habilitación estará acompañada de una campaña de amplia difusión. Por otro lado, se confeccionará y llevará un registro de las denuncias recibidas, así como el establecimiento de criterios objetivos para la tramitación de las denuncias.

Cabe señalar que estas iniciativas, junto con las restantes que integran el Plan Nacional Anticorrupción, fueron analizadas de manera articulada con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y en particular con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Para ello, se formaron pares metodológicos de ambos organismos que realizaron la revisión de las iniciativas incluidas en el PNA. De las 260 que lo componen, se analizaron 83 cuyo plazo de ejecución correspondía al año 2019 y se clasificaron de acuerdo a su estado (vigentes, en proceso o vencidas). El resto de las iniciativas que integran el Plan fueron analizadas bajo una metodología e indicadores desarrollados a tales fines y de acuerdo a su carácter estratégico e integral. El documento de trabajo sobre la evaluación del Plan Nacional Anticorrupción (PNA) 2019-2023 y los lineamientos hacia el diseño de la Estrategia Nacional de Integridad se puede consultar en la web del organismo: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-la-evaluacion-del-plan-nacional-anticorrupcion-0>

Dicha labor se desarrolla junto al Consejo Asesor, ampliado durante el año 2020, y organismos especializados en la temática con el fin de fortalecer la transversalización de las políticas de transparencia contemplando los cambios ocurridos a nivel institucional sobre la administración pública nacional así como también aquellos sucedidos a nivel social y económico, especialmente frente al actual y futuro escenario de pandemia mundial.

[1] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm#7>

[2] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm>

[3] Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 9° REUNIÓN - 2° SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACION) JUNIO 4 DE 2003.

[4] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140863/norma.htm>

[5] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268028/texact.htm>

[6] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307791/decadm310-2.pdf>

[7] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44432/texact.htm>

[8] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277632/norma.htm>

[9] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/299/texact.htm>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

1. Capacitaciones

La OA dicta capacitación (presenciales y virtuales tutorados) sobre los canales de denuncia existentes y las principales acciones de la Oficina Anticorrupción a partir de la recepción y su tratamiento interno

En las capacitaciones se trabaja el deber de denunciar de parte de los funcionarios públicos y cuál es el tratamiento que recibe cada denuncia que llega a la Oficina.

En los últimos años se capacitaron 800 funcionarios de distintas áreas de la Administración Central y Descentralizada.

2. Publicación de Guía del Denunciante

Se trata de una publicación de interés para funcionarios y ciudadanos que explica en forma sencilla y atractiva qué es una denuncia y cómo se gestiona internamente.

Además indica qué hechos pueden denunciarse en la Oficina Anticorrupción y cuáles son las vías adecuadas a tal efecto.

La Publicación se encuentra disponible en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_denunciante_0.pdf

Se entregaron 1000 ejemplares en diversos organismos de la Administración Pública Nacional.

3. Difusión a funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional a través de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE)

Se implementó la utilización de ventanas pop- up en la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) a los fines de difundir un mensaje vinculado a canales de denuncia en la Oficina Anticorrupción titulado *“Ayúdanos a prevenir y detectar la*

corrupción denunciando en la Oficina Anticorrupción”.

De esta forma, los más de 300.000 usuarios de GDE accedieron al contenido de los mensajes al ingresar al sistema.

El mensaje difundido poseía el siguiente texto:

“Ayúdanos a prevenir y detectar la corrupción denunciando en la Oficina Anticorrupción. Si sabés o conocés a algún funcionario, empleado o contratista que haya cometido una irregularidad administrativa o un hecho de corrupción, denuncialo de manera anónima o con identidad reservada en la Oficina Anticorrupción por medio del formulario web <<https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion>>

La denuncia debe tratar sobre delitos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Cuanto mayor sea la información que puedas adjuntar a tu denuncia, será mejor para que la OA pueda darle un trámite expeditivo y efectivo.

Los datos del denunciante que haya solicitado reserva de identidad serán mantenidos en secreto y no podrán ser revelados salvo a requerimiento de un Juez, en cuyo caso se remitirán al tribunal solicitante en sobre cerrado.

En la OA trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción. El reporte de irregularidades nos permite tener una reacción rápida y eficaz y una gestión transparente.

Si la denuncia trata sobre el Poder Judicial, Poder Legislativo, Provincias o Municipios, será remitida al organismo de control con competencia para efectuar la investigación en ese ámbito.

Para mayor información se podés consultar la Guía del Denunciante <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_denunciante_0.pdf> o visitar el sitio web oficial de la Oficina Anticorrupción <<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion>>.

19. Párrafo 5 del artículo 8

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

1. Marco Normativo General

El marco normativo aplicable a las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales se encuentra contenido en la Ley 25.188 -modificada por la Ley 26.857-, norma que establece la obligación para cierta categoría de funcionarios públicos, de presentar Declaración Jurada Patrimonial Integral.

La Ley es de aplicación para los integrantes de los distintos Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y para el Ministerio Público).

Se establecen distintos momentos de presentación: al inicio de la función pública, anualmente y al cese de la misma.

“ARTICULO 4º - Las personas referidas en artículo 5º de la presente ley, deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos.

Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.”

El universo de obligados a presentar Declaración Jurada Patrimonial Integral se conforma por quienes poseen determinados cargos previstos en la Ley y por quienes cumplen una función específica por la cual se entiende adecuada su inclusión.

“ARTICULO 5º - Quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada:

a) El presidente y vicepresidente de la Nación;

b) Los senadores y diputados de la Nación;

c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

- d) Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;*
- e) El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;*
- f) El Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional;*
- g) Los interventores federales;*
- h) El Síndico General de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;*
- i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento;*
- j) Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el exterior;*
- k) El personal en actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;*
- l) Los rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales;*
- m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;*
- n) Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;*
- o) El personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;*

p) Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;

r) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director;

s) El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;

u) Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156.

w) Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria, estará obligado a presentar las declaraciones juradas establecidas por la ley 26.857. (Inciso incorporado por art. 26 de la Ley N° 27.126 B.O. 05/03/2015. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.857 B.O. 23/5/2013) Por su parte, el artículo 6 de la Ley prevé el contenido de las declaraciones juradas)

A partir de la Reforma legal que tuvo lugar por la sanción de la Ley 26.857 se incorporan como sujetos obligados “Los candidatos a ejercer cargos públicos electivos nacionales”.

1. Contenido de las Declaraciones

En el artículo 6 de la Ley 25.188 se define el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales:

“La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero”.

En especial se deben detallar:

a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles;

b) Bienes muebles registrables;

c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto.

d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias;

e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y provisionales, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. (En sobre cerrado y lacrado deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extensiones que posea). Dicho sobre será reservado y sólo deberá ser entregado a requerimiento de la autoridad judicial.

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;

g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;

h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales.

i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo,

deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.”

Por su parte, la norma establece cómo proceder en caso de incumplimientos:

ARTICULO 8º - Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

ARTICULO 9º - Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumple con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder.

Asimismo, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se aplica también la Resolución OA 9/11 a través de la cual se estableció:

ARTICULO 1º - El funcionario obligado a presentar la Declaración Jurada Inicial o Anual, que no obstante haber sido debidamente intimado persistiera en su incumplimiento, será pasible de la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho dicha obligación.

El incumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales puede derivar también en una sanción penal. Es así que el Código Penal de la Nación en su artículo 268 (3) establece las posibles sanciones penales ante delitos cometidos a través del incumplimiento de la presentación o, falsedad u omisión de la información.

ARTICULO 268 (3) - Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo,

estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

2. Reforma de la Ley Nro. 26.857

Entre las principales modificaciones producidas por la Ley 26.857 al sistema de Declaraciones Juradas vigente hasta el año 2013, se puede detallar:

- 1) Se estableció la igualdad entre las declaraciones juradas patrimoniales integrales y las declaraciones que se presentan ante el órgano recaudador tributario (artículo 4 Ley 26.857).
- 2) Se estableció la publicidad en internet del contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (artículo 6 Ley 26.857)
- 3) Se derogó el Capítulo VIII de la Ley 25.188 que refería a la Comisión Nacional de Ética Pública como autoridad de aplicación (desde la sanción de la Ley en el año 1999 no había sido creada).

Esto generó la necesidad de cada Poder de regular sus propios mecanismos de presentación y publicidad de la información.

3. Mecanismo de presentación y regulaciones específicas

a) Poder Ejecutivo

A partir de la reforma establecida por la Ley 26.857 las Declaraciones Juradas exigidas por la Ley de Ética fueron asimiladas a las declaraciones impositivas correspondientes a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales que se presentan ante el organismo recaudador (Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-).

La AFIP dispuso de una aplicación web específica para dicho fin (Formulario F-1245) que captura de las declaraciones impositivas gran parte de los datos que pasarán a integrar la Declaración Jurada exigida por la Ley de Ética. En los supuestos en que un funcionario obligado a presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral, no presente habitualmente las declaraciones impositivas, se permite la confección manual del Formulario F-1245.

El Formulario F-1245 es remitido por el declarante vía electrónica a la AFIP, quien finalmente pondrá a disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la información pública allí declarada para qué, bajo la forma del Modelo de Visualización aprobado por la Resolución MJ y DH N° 1695/13, esos datos sean finalmente exhibidos a través de la página web de la Oficina Anticorrupción.

Por su parte el declarante, debe imprimir y suscribir en todas sus hojas el mencionado Formularios F-1245 para cumplimentar el Anexo Reservado que debe presentar ante el área de Recursos Humanos del organismo en el que se desempeñe.

En caso de poseer cónyuge, conviviente o hijos menores, dicho Anexo Reservado deberá contener también el Formulario F-1246, el cual se completa con la información patrimonial de dichas personas.

4. Proceso de verificación

Conforme los estándares internacionales, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos tienen dos objetivos esenciales:

- 1) analizar, prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito y
- 2) analizar, prevenir y detectar eventuales situaciones de conflictos de intereses e incompatibilidades.

Las DDJJ en nuestro país son públicas y accesibles a través de internet, facilitando el control ciudadano y la rendición de cuentas.

La Oficina Anticorrupción se encuentra facultada para efectuar el control y seguimiento de las DDJJ de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, analizar su contenido a fin de detectar la posible existencia de enriquecimiento ilícito o la configuración de conflictos de intereses.

Para realizar el control, se llevan a cabo las siguientes medidas:

- Se recopila toda la información y antecedentes del funcionario analizado, como sus declaraciones juradas de años anteriores, aquella obrante en los registros de la Oficina u otros organismos públicos, y se realiza un cruce de información con distintas bases de datos.
- Se verifica la consistencia de la información declarada por el funcionario

con aquella obtenida por la Oficina Anticorrupción.

- Se realiza un análisis a fin de determinar si el incremento patrimonial del funcionario es razonable de acuerdo a los ingresos declarados.
- Se analiza la información que pudiera dar cuenta de situaciones que puedan configurar conflictos de intereses como ser sus vinculaciones previas, tenencias accionarias, o participación en sociedades.
- En caso de resultar necesaria información adicional o detectar inconsistencias en la declaración jurada, la Oficina Anticorrupción remite solicitudes de aclaraciones patrimoniales (SAP) a fin de que el funcionario analizado brinde mayor detalle y, en su caso, acompañe las constancias documentales que resulten necesarias.

El resultado del análisis y de las aclaraciones patrimoniales solicitadas puede dar lugar al inicio de una investigación en el ámbito de la Oficina Anticorrupción o -en caso que ya exista una causa judicial- ser utilizado como un aporte técnico a la Justicia.

Recordemos que las declaraciones juradas patrimoniales integrales son públicas, de modo tal que además del control que realiza la Oficina Anticorrupción, existe un control posible por parte del ciudadano.

5. Declaraciones Juradas en formato abierto

El Decreto 117/16[1] creó el "Portal Nacional de Datos Públicos".

En el mencionado Portal las distintas jurisdicciones y secretarías publican en formato abierto la información allí detallada.

En materia de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, se encuentra disponible la información sobre las declaraciones presentadas para los períodos 2012 a 2016 en formato abierto.

Se trata de información patrimonial de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y legisladores en formato abierto y disponible para cualquier persona que desee consultarla a través del Portal Nacional de Datos Públicos (<https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimoniales-integrales-caracter-publico>).

6. Publicidad del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores

La Oficina Anticorrupción publica en su página web el listado de funcionarios cumplidores e incumplidores de la obligación de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales. Los listados están disponibles en

<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/listado-funcionarios-incumplidores>.

7. Nuevo sistema de presentación y gestión para el Poder Ejecutivo Nacional

La reforma del año 2013 de la Ley de Ética Pública fue un retroceso ya que redujo la cantidad de información requerida en las declaraciones juradas para un mejor control. Desafortunadamente, la OA perdió el manejo del sistema denominado OANET, ya que el nuevo aplicativo para la confección de las declaraciones juradas comenzó a funcionar en la plataforma de AFIP.

Ante este escenario, se propuso promover un cambio y contar con un sistema propio para el análisis de la información contenida en las declaraciones juradas, cuestión que hasta el momento se había venido realizando con las herramientas disponibles para tales fines. Un sistema nuevo, adecuado a las necesidades, permitiría cumplir mejor con los objetivos de control reduciendo plazos de trabajo, eliminando el formato papel, generando reportes estadísticos con mayor precisión, y simplificando la burocracia en la comunicación con las áreas involucradas en todo el proceso.

Con el objetivo de cumplir con las cuestiones antes planteadas, esta Oficina conjuntamente con la Dirección de Gestión Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros - a partir de abril de 2017 - emprendió labores tendientes a la mejora y adecuación del sistema, tanto en su faz técnico - operativa como a nivel de su normativa reglamentaria.

Las tareas de desarrollo del nuevo sistema se enmarcaron teniendo en cuenta recomendaciones fruto del asesoramiento de organismos como el Banco Mundial y OCDE.

No obstante haberse maximizado los esfuerzos de las distintas áreas intervinientes y alcanzado un alto nivel de desarrollo, el sistema no pudo implementarse para la presentación de DDJJ anuales del año 2018 dado que no pudieron realizarse las acciones necesarias que el sistema requería para su puesta en marcha.

Diferentes situaciones llevaron a la suspensión de las tareas relacionadas con el mencionado sistema hasta septiembre de 2019, momento en que se pusieron en marcha nuevamente las tareas de revisión del mismo.

En febrero de 2020, posteriormente al cambio de gestión, comenzaron las reuniones con el nuevo equipo de la Secretaría de Legal y Técnica para darle impulso al proyecto.

Actualmente nos encontramos en fase de testeo de los módulos desarrollados con el objetivo de poner en marcha el funcionamiento gradual del nuevo sistema en los próximos meses.

El lanzamiento del mismo implicará un avance en la comunicación entre las partes intervinientes en su utilización dado que se conformará de módulos que trabajarán de manera interrelacionada, brindando información de manera online y eliminando

procesos que hoy demandan tiempo y recursos.

Actualmente se desarrollaron y están en fase de testeo como se mencionó anteriormente los módulos **OA** -de administración de la Oficina Anticorrupción-, **presentación de Declaraciones Juradas** destinado a la confección de DDJJ por parte de los sujetos obligados -la transmisión será inmediata y se eliminará el formato papel- y **módulo de RRHH** -que propiciará el contacto directo con todas las áreas de RRHH de la APN quienes realizarán la carga de altas, bajas y novedades. Adicionalmente, también se encuentra en fase de desarrollo, el **módulo de Consulta Judicial** para aquellos casos en que la justicia requiera el acceso a la información reservada de los funcionarios.

Se prevé en las próximas semanas avanzar con las correcciones necesarias para el correcto funcionamiento de este producto, comenzando luego con las pruebas de funcionamiento, determinando a posteriori el esquema gradual de implementación y puesta en marcha para 2021.

b) Poder Judicial

El Consejo de la Magistratura, a través de la Resolución 237/14[2] estableció el Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios de los tribunales inferiores de la Nación, y de los miembros y funcionarios del Consejo de la Magistratura, y del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación.

Por su parte los Magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se rigen por la Acordada 9/14[3] a través de la cual se aprobó el “Reglamento de presentación consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

c) Poder Legislativo

El Poder Legislativo, ha adherido al sistema de presentación elaborado por el Poder Ejecutivo a través del referido Formulario F-1245.

En caso de poseer cónyuge, conviviente o hijos menores, deberá completar también el Formulario F-1246, en el que se detallará la información patrimonial de dichas personas (Anexo Reservado).

La publicidad de las declaraciones juradas es realizada a través de la página web de la Oficina Anticorrupción.

d) Ministerio Público

d.1) Fiscal

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Resolución PGN 1302/2013, aprobó el “Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimoniales para el Ministerio Público Fiscal de la Nación”[4].

d.2) de la Defensa

El Ministerio Público de la Defensa, a través de la Resolución DGN 620/14, aprobó el “Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales”[5] .

En la esfera del ministerio público, el régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos ha sido considerado como una cuestión ética destacada en la lucha contra la corrupción, que apunta a prevenir eventuales conflictos de intereses o posibles incompatibilidades.

Por esa razón, el Plan de Transparencia Institucional aprobado por la Resolución PGN N° 914/13, fijó como uno de sus ejes de acción el desarrollo de un nuevo sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

La Ley 26.857 estableció el carácter público, de libre accesibilidad y la posibilidad de que las declaraciones puedan ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet. Según su artículo 2 los funcionarios del MPF se encuentran comprendidos en el universo de sujetos obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales.

Así, respetando la independencia y autonomía del MPF respecto a los demás poderes del Estado, en julio de 2013, se aprobó un “Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimoniales para las/os obligadas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

En el artículo 1, del Reglamento sobre Declaraciones Juradas, se fijó el alcance de los funcionarios del MPF obligados a presentar, incluyendo a los funcionarios de categorías medias y altas; como también por funciones, alcanzado a funcionarios de menores jerarquías que, por sus funciones, per se, puedan presentar mayores riesgos de corrupción.

De esta manera, el régimen de declaraciones juradas comprende a:

"a) Las/os magistradas/os y funcionarias/os con categoría igual o superior a secretaria/o de fiscalía de primera instancia o cargos equiparados, con independencia del vínculo contractual. Se incluyen asimismo aquellas personas designadas con carácter interino.

b) Quienes se desempeñen bajo la modalidad "ad-hoc - ad-honorem" en tales cargos, si sus designaciones fueren por períodos de más de 6 (seis) meses continuos.

c) Las/os funcionarias/os y empleadas/os que tuvieran un cargo inferior al de secretaria/o de fiscalía de primera instancia o su equivalente pero, por la índole de su tarea, administren o participen en la gestión y administración de fondos públicos, integren comisiones de adjudicación o recepción de bienes, o participen en

procedimientos de compras y/ o licitaciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación en cualquiera de sus formas, conforme los términos de los incisos t) y u) del artículo 5 de la ley n° 25.188, sustituido por la ley n° 26.857.

d) Aquellas personas contempladas en los incisos anteriores que se encuentren en uso de licencia; excepto que la licencia sea por ejercicio transitorio de otro cargo en un organismo en el que hayan tenido que efectuar la declaración jurada de conformidad con lo establecido en la ley n° 26.857. En ese caso, será obligación de quienes gozaren de licencia presentar una copia certificada de la constancia de recepción de la declaración jurada ante la autoridad competente.”

El artículo 2° del reglamento ratificó el carácter público de las declaraciones juradas, en sentido similar al dispuesto por la ley 26.857, y sus artículos 7 y 8 determinan la obligación de presentar declaraciones al momento del alta y la baja en la función en el MPF, como así también la actualización anual de las declaraciones.

Los artículos 9 y 10 establecen las consecuencias frente al incumplimiento de la presentación de declaraciones juradas, el que configurará una falta grave, en los términos de los reglamentos disciplinarios respectivos y puede producir la suspensión de haberes si el incumplimiento se registrara en oportunidad del cese en el cargo. Esta suspensión alcanzará a la liquidación final de haberes, vacaciones adeudadas o cualquier otro concepto pendiente hasta su regularización.

Este reglamento estableció también un registro público de las personas obligadas a presentar declaraciones juradas y procedimientos especiales para la exhibición de las declaraciones juradas.

Más adelante, luego de un año de vigencia de la Resolución PGN N° 1302/13, se advirtió la necesidad de ajustar el régimen de declaraciones juradas a los parámetros legales vigentes y modernizar el sistema de elaboración y carga de las declaraciones.

Fue por ello que el 29 de abril de 2014 se dictó la Resolución PGN N° 792/14, que introdujo algunas modificaciones al régimen de declaraciones juradas para el MPF.

Las modificaciones impulsadas se orientaron a aprovechar nuevas herramientas informáticas para el sistema de declaraciones juradas, a fin de facilitar su confección y carga, así como a maximizar los recursos materiales y humanos disponibles.

Para ello se diseñó un nuevo sistema más avanzado que permite la carga digital de las declaraciones juradas de carácter público desde la intranet del organismo, que facilita la tarea de los sujetos obligados. A través de este sistema cada sujeto obligado debe cargar toda la información requerida en el formulario público una sola vez y es el propio sistema el que genera de manera automática el formulario de visualización simplificado.

Asimismo, la información que se ingresa y carga al sistema y permanece disponible para realizar las actualizaciones anuales de manera más sencilla. Por otra parte, para las declaraciones reservadas se mantiene un sistema de carga de información escrita

en formato papel y sobre cerrado.

Se dispuso también que la Autoridad de Aplicación de este régimen será la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación, la cual tiene a su cargo la recepción, seguimiento, registro y custodia de las declaraciones juradas. Asimismo, debe mantener actualizada la nómina de las personas obligadas a presentar declaraciones.

En el espacio de Transparencia Activa del MPF (<https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/#top>) se puede acceder al listado de magistrados y funcionarios del MPF obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, al listado de los que efectivamente la presentaron, así como también al formulario para solicitar copia de estos documentos públicos.

[1] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257755/norma.htm>

[2] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231896/texact.htm> <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231896/texact.htm>>

[3] Disponible en <https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=87025> <<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=87025>>

[4] Disponible en <<http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2013/07/PGN-1302-2013-001.pdf>>

[5] Disponible en <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-34999/230567/norma.htm>>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Declaraciones Juradas Abiertas

Explotación, usos y análisis de los datos abiertos por parte de la Oficina Anticorrupción en el proceso de verificación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de intereses:

En el marco del Plan Nacional de Apertura de Datos, se publican datos abiertos vinculados a las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por los sujetos obligados.

Actualmente, en la página de datos abiertos, en el apartado “Justicia, seguridad y legales”, se encuentra disponible el dataset “Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público”. En él, resulta observable la información contenida en las DDJJ efectuadas por los funcionarios obligados según Ley Nº 25.188 y sus modificatorias.

Gracias a esa información de las Declaraciones Juradas en formato abierto, la Oficina Anticorrupción ha realizado entrecruzamientos que permitieron la detección masiva de distintos “alertas” para identificar posibles declaraciones erróneas o advertir sobre

potenciales enriquecimientos ilícitos o conflictos de intereses, en el marco de las tareas de verificación que le son propias.

También la OA en el marco de sus procesos de verificación está incorporando la información en formato abierto aportada por otros organismos. Así por ejemplo una nueva fuente la constituyen los datos de la Inspección General de Justicia (IGJ) disponible a través de página de datos abiertos, dataset: “Entidades Constituidas en la Inspección General de Justicia” que permite realizar el cruzamiento de participaciones societarias declaradas por los sujetos obligados, permitiendo un control rápido de funcionarios que no declaran participación societaria pero sí la tienen.

Declaraciones Juradas (DDJJ)

La Oficina Anticorrupción (OA) tiene a su cargo la administración del sistema que registra y conserva las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios de la Administración Pública Nacional. Conforme la normativa aplicable (Ley 25.188 y modificaciones introducidas por la Ley 26.857; Decreto 102/99 y Resolución MJyDH 1000/00) lleva a cabo el control de las DDJJ de los funcionarios de más alta jerarquía.

Como Autoridad de Aplicación, la OA publica un listado de los funcionarios cumplidores e incumplidores y, respecto de estos últimos, solicita se apliquen medidas administrativas como la retención del salario. Este listado se publica en la página web de la Oficina.

Durante el año **2019** se controlaron las declaraciones juradas correspondientes a **1.809** funcionarios (3300 ddjj). En el mismo período se registraron 26 casos de funcionarios sancionados con la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales a raíz de la falta de presentación de la Declaración Jurada Inicial o Anual.

Durante el **2020**, a pesar de las dificultades impuestas a causa de la pandemia por COVID-19, se controlaron declaraciones juradas correspondientes a **1.536** funcionarios a noviembre del corriente (2547 ddjj).

El nivel de cumplimiento se ha visto incrementado en los últimos años, alcanzando a la fecha de corte del presente ejercicio a un 94% de los funcionarios obligados. Las Declaraciones Juradas son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas irrestrictamente por toda persona interesada en forma gratuita a través de la página de internet de la OA. También publicamos la información consolidada en formato abierto y libre en el Portal Nacional de Datos Públicos (<https://datos.gob.ar>)

Acerca del Sistema actual y las oportunidades de mejora

A través de la presentación de las declaraciones juradas puede prevenirse, detectarse e investigarse: (i) posibles situaciones de enriquecimiento ilícito y (ii) posibles situaciones de conflicto de intereses.

En la actualidad, el sistema en uso posee algunos aspectos que requieren ser mejorados:

1. Disociar la información fiscal (requerida por el organismo recaudador) con aquella que reviste utilidad con el control y detección de posibles enriquecimientos ilícitos y posibles conflictos de intereses.

2. Eliminar el formato papel en la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (hoy las DDJJ se presentan por un lado en formato electrónico y por otro, en formato papel que acompaña al funcionario con su firma).

3. Integrar a todos los operadores del sistema en un sistema único con impacto directo en la base central de cada jurisdicción de manera tal de evitar errores en la carga manual de información. De esta manera, las áreas de RRHH y la Oficina Anticorrupción operarían una misma interfaz, haciendo más eficiente el sistema.

4. Recuperar la información que antes era pública y que, a partir de la reforma introducida mediante la Ley N° 26.857, dificultó los controles al adquirir carácter de reservada la información patrimonial del cónyuge, conviviente e hijos y los antecedentes laborales de los funcionarios.

Remediar estos aspectos permitiría mejorar el control tanto del contenido de las Declaraciones Juradas (a los fines de cumplir con los objetivos específicos), como las cuestiones operativas del sistema, entre ellos contar con listados de cumplidores e incumplidores de manera sencilla, promover las retenciones por incumplimiento de presentación o, incluso, verificar que una persona se encuentra en condiciones de acceder a la función pública por no adeudar declaraciones de baja.

Entendiendo que la naturaleza de la información requerida a nivel fiscal (que tiende a determinar la base imponible de una persona) difiere de las declaraciones juradas patrimoniales integrales (cuyo objetivo se enmarca en la detección de posibles situaciones de conflictos de intereses y de posibles situaciones de enriquecimiento ilícitos) en diversas oportunidades se ha recomendado la separación de ambos sistemas y la ampliación de la información requerida que permita mejorar el control.

El Estudio de Integridad de Argentina (OCDE, 2019) analiza el sistema vigente y elabora una serie de propuestas de acción, que incluyen (i) fortalecer el proceso de presentación de la declaración que contenga los datos necesarios para garantizar una adecuada verificación de la información presentada; (ii) que admita la integración de distintas bases de datos y el acceso a información reservada a fin de efectuar los controles y (iii) que permita administrar sanciones que tengan efecto disuasorio.

A fin de fortalecer el control de las declaraciones, la OA promueve la implementación de un nuevo sistema integral de presentación y gestión que permita:

- Integración de todos los actores intervinientes en el proceso de presentación de la DDJJ
- Sistema de alertas rojas y elaboración automatizada de reportes
- Eliminación de la presentación en formato papel
- Generación automática del listado de cumplidores e incumplidores
- Control integral del sistema por parte de la OA

Cabe destacar que las modificaciones al Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales se encuentran incorporadas en el Proyecto de Ley de Ética en el

Ejercicio de la Función Pública, presentado en el Congreso de la Nación para todos los Poderes del Estado y que prevé la creación de Autoridades de Aplicación específicas que tiendan a la administración y control de su contenido.

Módulos del nuevo sistema

La generación de un nuevo sistema es esencial para que la OA, como autoridad de aplicación, recupere la rectoría sobre el sistema y el acceso a información vital para el cumplimiento de las funciones de control que la normativa requiere. Además, el desarrollo de un sistema, permitiría superar problemas operativos como la presentación de documentación en formato papel, y facilitaría interacción de todas las áreas involucradas en el proceso de presentación y gestión.

En este sentido, como se mencionó con anterioridad, nos encontramos trabajando en cuatro módulos específicos:

- a) Módulo Presentación
- b) Módulo Recursos Humanos
- c) Módulo Gestión OA
- d) Módulo de acceso Judicial.

Próximos pasos

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de testeo de los módulos desarrollados con la finalidad de detectar posibles errores, proponer mejoras o realizar modificaciones, para lograr poner en marcha el funcionamiento gradual del nuevo sistema en el transcurso del año 2021.

El lanzamiento del nuevo sistema implica un avance en la comunicación entre las partes intervinientes en su utilización dado que se conformará de módulos que trabajarán de manera interrelacionada, brindando información de manera online y eliminando procesos que hoy demandan tiempo y recursos.

20. Párrafo 6 del artículo 8

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

1. Consecuencias disciplinarias

El artículo 3º de la Ley 25.188 establece que “Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”.

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública no establece cuál es el procedimiento ni cuáles son las sanciones aplicables para cada infracción, y remite al régimen general que se aplique a cada categoría de agente o funcionario.

Haremos una breve referencia a cada uno de ellos.

1.1. Régimen disciplinario aplicable a los empleados públicos

Para el personal vinculado a la Administración Pública Nacional por una relación de empleo público[1], el régimen sancionatorio es el que surge de la Ley Marco de Empleo Público Nacional 25.164 (Capítulos VII y VIII, artículos 27 a 41) y de su Decreto Reglamentario 1421/02 (artículos 27 a 41).

- **Sanciones aplicables**

El artículo 24 de la Ley 25.164 establece, entre las prohibiciones impuestas a los agentes del Estado, la de incurrir en situaciones de conflicto de intereses[2]. De acuerdo a los artículos 32 y 33 de dicha Ley, su violación puede acarrear la cesantía e incluso la exoneración del agente, cuando así correspondiere en razón de la magnitud y gravedad de la falta[3].

- **Autoridad con atribuciones para su aplicación**

En cuanto a quién es la autoridad con atribuciones para la aplicación de sanciones, el artículo 38 del Decreto 1421/02 establece que:

-el apercibimiento es aplicado por la autoridad de nivel no inferior a Jefe de Departamento o equivalente de quien dependa el agente;

-la suspensión de hasta cinco (5) días, por la autoridad de nivel no inferior a Director de quien dependa el agente, hasta acumular un máximo de treinta (30) días en los doce (12) meses anteriores[4];

-la suspensión de hasta diez (10) días, por la autoridad de nivel no inferior a Director Nacional;

-la suspensión mayor de diez (10) días, por la autoridad de nivel no inferior a Subsecretario, o en su caso autoridad máxima de organismo descentralizado;

-la cesantía o exoneración, por el Poder Ejecutivo Nacional o, en su caso, por la autoridad superior con jerarquía no inferior a Secretario de Estado o titular de organismo descentralizado, del que dependa el agente.

De lo expuesto se deduce que la autoridad competente para aplicar sanciones será aquella que posea la jerarquía que se requiera en cada caso, en el ámbito donde reviste o cumple tareas el agente infractor.

Así lo establece también el artículo 4º del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto 467/99[5], que establece: “La información sumaria o el sumario será siempre instruido en la jurisdicción donde se produzca el hecho, cualquiera fuere la situación de revista del sumariado”.

En idéntico sentido, el artículo 48 del Decreto 41/99 (Código de Ética de la Función Pública) expresa que “En caso de violaciones al presente Código, los responsables de cada jurisdicción o entidad, de oficio o a requerimiento de la Oficina Nacional de Ética Pública [hoy Oficina Anticorrupción], deben instruir sumario o poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para deslindar las responsabilidades que en cada caso correspondan, con intervención de los servicios jurídicos respectivos”.

En consecuencia, si la Oficina Anticorrupción determina -en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 25.188 y del Decreto 41/99- que un funcionario ha incurrido en un conflicto de intereses o en otra infracción a las normas sobre ética pública, los antecedentes son remitidos al organismo donde se desempeña el infractor, a los efectos de la instrucción del sumario disciplinario pertinente.

- Procedimiento para determinar la responsabilidad disciplinaria

El artículo 38 de la Ley 25.164 establece que el procedimiento disciplinario se establecerá por vía reglamentaria y que este “... deberá garantizar el derecho de defensa en juicio y establecerá plazos perentorios e improrrogables para resolver los sumarios administrativos, que nunca podrán exceder de seis (6) meses de cometido el hecho o la conducta imputada”[6].

Al respecto, el artículo 38 del Decreto 1421/02[7] expresa que el procedimiento de investigación aplicable será el establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto 467/99 o el que se dicte en su reemplazo) y por su intermedio se deslindará la responsabilidad del agente, con adecuado resguardo de su derecho de defensa.

- Posibilidad de iniciar o continuar el sumario con posterioridad al cese del empleado público

Cabe señalar que el Decreto Reglamentario de la Ley Marco de Empleo Público Nacional (Decreto 1421/02) prevé la posibilidad de continuar con un sumario disciplinario incluso con posterioridad al cese de las funciones del agente responsable.

En efecto, el artículo 27 establece que la aplicación de medidas será procedente "... en tanto subsista la relación de empleo público. En el caso de haber cesado dicha relación, el sumario que se hubiere dispuesto deberá continuarse hasta su resolución. Si surgiera responsabilidad del respectivo sumario deberá dejarse constancia en el legajo del ex agente de la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en servicio".

Esta última actividad del procedimiento tiene sentido ante un eventual reingreso del agente en la Administración Pública, ya que conforme el artículo 4 de la Ley Marco de Empleo Público 25.154, el acceso a la Administración Pública Nacional estará sujeto, entre otros ítems, a la previa acreditación de "... b) condiciones de conducta e idoneidad para el cargo"[8].

1.2. Régimen disciplinario aplicable a los funcionarios políticos

Si bien no existe una definición concreta de "funcionario político" se ha calificado como tal a los que poseen rango y jerarquía igual o superior a la de Subsecretario, designados para desempeñarse en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y a las máximas autoridades de Organismos Descentralizados, instituciones bancarias oficiales y de la Seguridad Social, empresas y sociedades del Estado, y de cualquier otro ente en que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias (Dictamen ONEP 1857/02).

Éstos también se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley 25.188. El incumplimiento de las pautas de comportamiento ético por parte de quien desempeña una función pública resulta merecedor de reproche sin importar la modalidad bajo la cual se la ejerce.

- La posibilidad de aplicar sanciones a los funcionarios políticos

La ausencia de una regulación normativa que establezca sanciones expresas o el procedimiento para su imposición a esta categoría de funcionarios obstaculiza su aplicación.

Así, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que "cualquiera fuera la medida disciplinaria que se impusiere a tales funcionarios -salvo su remoción- habida cuenta de la inexistencia de norma previa que establezca una sanción disciplinaria específica resultaría violatoria del principio de legalidad de las penas consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional <[http://www.saij.gob.ar/ptn-forneris-livio-ll-grin-ricardo-66-n0221102-1997-05-23/12345672-0112-20no-tseu-pmocnematcid?q=%20id-infojus%3A*221102&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Dictamen/PTN%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1](http://www.saij.gob.ar/ptn-forneris-livio-ll-grin-ricardo-66-n0221102-1997-05-23/12345672-0112-20no-tseu-pmocnematcid?q=%20id-infojus%3A*221102&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Dictamen/PTN%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1>)>" (Dictámenes 192:96 y 98, 199:31, 211:453, 221:102,

233:156, 233:386, 241:494).

En esa línea, si se concluye que un funcionario político ha incurrido en un conflicto de intereses, la Oficina Anticorrupción debe notificar la resolución a la autoridad política con competencia en su remoción, quien se encuentra facultado a decidir si este debe o no abandonar el cargo.

- Procedimiento disciplinario aplicable a los funcionarios políticos

La Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que “Los funcionarios políticos no tienen estabilidad, pueden ser removidos en cualquier momento y no están alcanzados por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional aprobada por la Ley 25.164; consiguientemente, no pueden ser sometidos a una investigación con aplicación del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública...” (Dictámenes 261:112).

Se admite como excepción la posibilidad de instruir un procedimiento de investigación para la averiguación de hechos irregulares atribuidos a funcionarios excluidos del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública <http://www.saij.gob.ar/ptn-forneris-livio-ll-grin-ricardo-66-n0221102-1997-05-23/12345672-0112-20no-tseu-pmocnematcid?q=%20id-infojus%3A*221102&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Dictamen/PTN%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1>, cuando expresamente lo dispone el Presidente de la Nación (Dictámenes 169:377, 192:96, 192:98, 199:31, 221:102, 233:386, 241:494 y 245:87).

En tal sentido, se ha señalado que “... para que los funcionarios políticos puedan, excepcionalmente, declarar como sumariados o imputados, la Instrucción debe pedir que el Poder Ejecutivo Nacional dicte un decreto que lo ordene, previa intervención de esta Procuración del Tesoro de la Nación...” (Dictámenes 261:112).

En síntesis, de acuerdo a la posición del máximo órgano asesor, solo podrían ser sumariados los funcionarios políticos cuando exista una decisión del titular del Poder Ejecutivo Nacional.

- Posibilidad de iniciar o continuar una investigación posterioridad al cese del funcionario político

Si consideramos que no puede aplicarse a un funcionario político otra sanción que la de remoción, cuando este ha cesado en sus funciones al momento del dictado de la Resolución de la Oficina Anticorrupción que determina la existencia de una infracción a la Ley 25.188, una remisión a la autoridad competente resultaría abstracta, en tanto no sería posible proceder aplicar al agente sanción alguna.

Así lo ha entendido la Procuración del Tesoro quien, en un antiguo pronunciamiento, expresó: “Si al momento en que se determina la existencia de conflicto de interés el funcionario ha cesado en el cargo, este no podría ser sumariado con vistas a la aplicación de medidas administrativas de carácter disciplinario (Doctrina del Caso “Magallanes”, Fallos Corte Suprema de Justicia de la Nación, T. 251, página 368)...” (Dictámenes 87:185,

28/11/1963).

Sin embargo, no resultará abstracto expedirse respecto de la existencia de un conflicto de intereses a los efectos de la eventual nulidad de los actos que hubieren resultado viciados por este conflicto o bien con el objeto de determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios o de terceros involucrados, por el perjuicio causado al erario público. En dicho caso, la investigación continuará hasta su finalización.

1.3. Otros casos de ejercicio de función pública

Como se anticipó, el artículo 1º de la Ley 25.188 expresa que el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública resultan “aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”.

La norma agrega que se entiende por función pública a “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”, en consonancia con el enfoque amplio sobre el ámbito de aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que incluye a toda persona que realiza o contribuye a que se realicen funciones especiales y específicas propias de la administración.

Por ende, quedan abarcados por la ley una serie de agentes que ejercen una función para el Estado o al servicio del Estado pero no revisten la calidad de empleados públicos, ni de funcionarios políticos.

En este caso, se aplicarán las sanciones disciplinarias y los procedimientos contemplados en los respectivos regímenes jurídicos (por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo, los reglamentos de los entes públicos no estatales, etcétera), algunos de los cuales remiten a las normas y procedimientos de la Ley Marco de Empleo Público.

2. Responsabilidad patrimonial de los funcionarios

Los funcionarios públicos pueden resultar también patrimonialmente responsables por sus infracciones a las disposiciones sobre conflictos de intereses. El perjuicio patrimonial puede producirse, por ejemplo, si se anula un acto o contrato celebrado en ese contexto.

Al respecto, el artículo 17 de la Ley 25.188 establece que “Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado”.

Cabe señalar que la responsabilidad patrimonial personal de los funcionarios por los daños ocasionados tanto al Estado como a terceros ha sido reconocida normativamente.

En tal sentido, el artículo 130 de la Ley 24.156 (Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) establece que “Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría

General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.

Y el artículo 131 aclara: “La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de esta ley, prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o de producido este si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas”.

Asimismo, la Ley de Responsabilidad del Estado establece en su artículo 9º que “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen”.

Agrega luego que “La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”. Y “La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización”.

Si bien es probable que, por la magnitud y trascendencia de los daños ocasionados en actos y contratos de la Administración, difícilmente el patrimonio particular resulte suficiente para hacer efectiva la reparación, ello no exime al funcionario de su responsabilidad.

3. Nulidad de los actos celebrados en conflictos de intereses

Cuando un funcionario realice actos o firme contratos encontrándose en una situación de conflicto de intereses, dichos actos o contratos serán nulos, de nulidad absoluta (artículo 17 de la Ley 25.188)[9].

Conforme el artículo 14 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”.

El acto ejecutado en conflicto de intereses se encontraría viciado de nulidad con sustento en la “violación de la ley aplicable” o bien en la “finalidad que inspiró su dictado”.

El carácter absoluto de la nulidad implica la imposibilidad de que el acto celebrado mediando un conflicto de intereses sea confirmado o saneado con posterioridad a su dictado o que se pueda plantear la prescripción de la acción de nulidad.

4. La actuación de la Oficina Anticorrupción con relación a las infracciones al régimen de ética pública

De conformidad a lo dispuesto por el Anexo II al Decreto 174/18 (y antes en virtud del 1° del Decreto 164/99 y la Resolución MJyDH 17/2000), la autoridad de aplicación de la Ley 25.188 en el ámbito de la Administración Pública Nacional es la Oficina Anticorrupción, que dicta las resoluciones e instrucciones y emite los dictámenes necesarios para su ejercicio.

Las actuaciones ante la Oficina Anticorrupción pueden iniciarse:

- de oficio (es decir, a instancia de su titular),
- ante denuncia de terceros,
- por consulta de los propios funcionarios o de sus superiores jerárquicos.

Previo producción de las medidas probatorias que se estimen pertinentes y traslado de todo lo actuado al agente investigado para que presente su descargo, la Oficina Anticorrupción dicta una resolución en la que, primero, analiza la situación que dio origen al procedimiento y la califica, determinando si se ha configurado una situación de conflicto de intereses o una infracción a las pautas y deberes de comportamiento ético contenidos en el citado marco normativo -prohibición de recibir obsequios, uso inadecuado de los bienes del Estado o de la información adquirida en virtud de la función pública, omisión del deber de excusación, entre muchos otros-. Luego, si el agente no está en conflicto de intereses real, pero sí en un conflicto de intereses potencial o aparente, la Oficina Anticorrupción le formula instrucciones preventivas, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones.

Si constata el incumplimiento de una norma ética, la Oficina Anticorrupción remite las actuaciones al organismo competente -donde se desempeña el agente- a los fines previstos en los artículos 3º y 17 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Es decir que no aplica sanciones ni decreta la nulidad de los actos administrativos afectados, tarea que se encuentra a cargo de las autoridades del área de gobierno donde se desempeña el funcionario.

5. Anteproyecto de Reforma a la Ley de Ética Pública

En el anteproyecto de reforma integral a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188 -ya mencionado- se proponen ciertas modificaciones respecto del régimen sancionatorio. Entre ellas cabe señalar:

- La autoridad de aplicación mantiene las facultades para impulsar la instrucción de actuaciones sumariales y para realizar denuncias que hoy posee, aunque suma la atribución de tomar por -sí misma- medidas complementarias propias del régimen de ética pública (que pueden ser la formulación de un reproche ético, pedidos de aclaraciones públicas, la formulación de instrucciones preventivas o de comportamiento, o anotaciones en el legajo del funcionario).

- Contiene previsiones especiales para el caso de que el funcionario infractor no se encuentre sujeto a un régimen disciplinario (por ejemplo, un funcionario político). En tal caso la máxima autoridad de su jurisdicción podrá disponer la instrucción de una investigación, sin perjuicio de ordenar la inmediata remoción si lo considera pertinente. La renuncia del funcionario no obsta el inicio o continuación de los procedimientos investigativos, que continúa a efectos de dejar constancia de la infracción cometida y de su responsabilidad en su legajo, además de las inhabilitaciones y las responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponder.
- Agrega que toda sanción o medida debe respetar el principio de proporcionalidad (según la gravedad de la falta ética, su reiteración, la jerarquía y el nivel de responsabilidad del funcionario)

Como se mencionó anteriormente la República Argentina tiene un régimen de incompatibilidades e inhabilitaciones que se encuentra previsto por el **Poder Ejecutivo Nacional** en el Decreto 8.566/61 y sus normas complementarias. También se establece un régimen disciplinario en la Ley 25.164 ("*Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional*").

Por otro lado, el incumplimiento del Código de Ética de la SIGEN habilita al Comité de Ética a recomendar al Síndico General de la Nación a iniciar las acciones necesarias previstas en el Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto 467/99), es decir información sumaria o sumario administrativo. Ello sin perjuicio de la prosecución de otras acciones que pudieran corresponder.

Por su parte el **Ministerio Público Fiscal** cuenta con un cuerpo normativo adecuado para aplicar sanciones a sus magistrados, funcionarios y empleados que violasen los deberes y prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del MPF (leyes 24.946 y 27.148) y en el "Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación", aprobado por Resolución PGN N° 128/10 (ver información dada para el Párrafo 1 del artículo 8°), entre los cuales se encuentran los deberes de comportamiento ético.

Si bien el MPF se estructura en una organización jerárquica y en base al principio de unidad de actuación, el artículo 1° de la ley 24.946, también establece el principio de autonomía funcional que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales. Por tal motivo, respetando la autonomía propia de la función de los magistrados, funcionarios y empleados del MPF, las normas disciplinarias vigentes establecen de manera previa, objetiva y clara, las sanciones aplicables, los criterios para la graduación de las sanciones, las causales para su aplicación, el procedimiento y los derechos de los funcionarios sumariados.

En materia de sanciones disciplinarias, en el ámbito del MPF deben distinguirse los regímenes disciplinarios para magistrados y para el resto de funcionarios y empleados; los que se detallarán a continuación:

A) Régimen disciplinario para magistrados.

El régimen disciplinario para los fiscales de MPF, en todas sus instancias, jurisdicciones y fueros, se rige por las disposiciones del **Capítulo 3, del Título V, de la Ley 27.148**, artículos 65 a 80, y su reglamentación dispuesta por la **Resolución PGN N° 2627/15**, del 27 de agosto de 2015.

Conforme al artículo 67, el poder disciplinario se encuentra en cabeza del Procurador General de la Nación, como máxima autoridad del MPF, quién podrá delegar parcialmente las facultades vinculadas al procedimiento disciplinario en la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos, y con la intervención previa de un Consejo Evaluador en aquellos casos en los que el contenido de la denuncia no resultare manifiestamente inconducente (artículo 73).

Los artículos 68 y 69 enumeran cuáles son consideradas faltas graves y leves, respectivamente, en los siguientes términos.

“ARTÍCULO 68. - *Faltas graves. Se consideran faltas graves las siguientes:*

a) Abandonar su trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación.

b) Incumplir en forma reiterada las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeñan, de conformidad con la misión del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

c) Incumplir reiteradamente instrucciones generales, cuando el incumplimiento fuere infundado y no se hubiere expresado objeción o cuando habiéndose expresado ésta, la naturaleza de la instrucción no admitiese dilaciones.

d) Violar las reglas de confidencialidad respecto de los asuntos que así lo requieren y en los que actúa el Ministerio Público Fiscal de la Nación, o extraer, duplicar, exhibir o transmitir documentación que debía permanecer reservada poniendo en riesgo las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

e) Actuar con grave negligencia en la atención de asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas.

f) No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima o a su representado, según corresponda, cuando éstos lo requieran respecto de las circunstancias del proceso y ello afecte su derecho de defensa en juicio.

g) Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculización del trámite o del servicio de justicia.

h) No excusarse dentro del tiempo que corresponde a sabiendas de que existen motivos para su apartamiento.

i) Interferir en actuaciones judiciales en las que no tenga ninguna intervención oficial.

j) Incumplir injustificada y reiteradamente los plazos procesales.

k) Ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de su cónyuge, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hiciere en cumplimiento de un deber legal.

l) Desempeñar profesión, empleo público o privado, aun con carácter interino, sin previa autorización del Procurador General de la Nación exceptuando el ejercicio de la docencia y las comisiones de investigación y estudio académico, siempre y cuando la práctica no obstaculice el cumplimiento de sus funciones.

m) Asesorar o evacuar consultas fuera de los casos inherentes al ejercicio de

su función.

n) Recibir dádivas, concesiones o gratificaciones de cualquier clase por la realización de sus funciones, en tanto ellas revistan de entidad en su valoración material.

ñ) No presentar en tiempo y forma la declaración jurada patrimonial y su actualización.

o) Acumular más de cinco (5) faltas leves cometidas en el mismo año.

p) Ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en el ejercicio de sus funciones.”

“ARTÍCULO 69. - Faltas leves. Se consideran faltas leves las siguientes:

a) Incumplir las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeñan, de conformidad con la misión del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

b) Incumplir instrucciones generales, cuando el incumplimiento fuere infundado y no se hubiere expresado objeción o cuando habiéndose expresado ésta, la naturaleza de la instrucción no admitiese dilaciones.

c) Faltar al trabajo sin aviso ni causa justificada, llegar habitualmente tarde o ausentarse sin autorización.

d) Actuar en forma irrespetuosa con relación a las partes o cualquier persona que intervenga en una diligencia en que actúe el magistrado o que acuda a las respectivas oficinas.

e) Descuidar el uso de los muebles y demás elementos provistos para el ejercicio de la función.”

Las sanciones aplicables para los magistrados que componen el MPF se encuentran previstas en el artículo 70 de la ley 27.148 y consisten en:

a) Apercibimiento.

b) Multa de hasta el veinte por ciento (20%) de sus remuneraciones mensuales.

c) Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce de sueldo.

d) Remoción.

El artículo 71 establece en qué casos puede proceder cada tipo de sanción y cuáles son los criterios para su graduación, exigiéndose como regla general que exista proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción efectivamente impuesta.

Con relación al procedimiento para la aplicación de sanciones, deben distinguirse los procesos de remoción, de aquellos sustanciados por las demás sanciones. En ambos casos, se requiere una intervención previa de un consejo evaluador que debe emitir una opinión no vinculante sobre el objeto de las actuaciones.

i. Apercibimiento, multa y suspensión.

El Capítulo 3 del Título V de la ley 27.148, define los lineamientos generales para la determinación del régimen disciplinario, y prescribe en los artículos 74 y 80 que deberá reglamentarse el procedimiento aplicable a supuestos de faltas

disciplinarias, recursos administrativos y trámite ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

Esta reglamentación fue dispuesta por la **Resolución PGN N° 2627/15**, del 27 de agosto de 2015.

Este reglamento define y determina el alcance de cada una de las sanciones previstas; fija las pautas para la graduación de las sanciones, las reglas del procedimiento; establece los plazos, el modo de computar los plazos y los plazos de prescripción y caducidad.

En cuanto a su trámite, el artículo 23 prevé que el procedimiento disciplinario podrá instarse por comunicación, queja o denuncia de particulares, funcionarios públicos y/o magistrados. Luego de su presentación, la denuncia debe ser comunicada al magistrado denunciado para que, en caso de estimarlo conveniente, pueda hacer un descargo.

Seguidamente en caso de que la denuncia y luego de las explicaciones brindadas por el magistrado, los hechos no resultaren manifiestamente inconducentes, el Procurador General de la Nación debe darle vista de la denuncia al Consejo Evaluador; integrado por cinco fiscales generales designados por el Procurador General de la Nación con desempeño honorario y cuya función es la de asesorar al Procurador General de la Nación mediante opiniones no vinculantes sobre el objeto de las denuncias (arts. 21 y 22).

Según el artículo 30, el Consejo Evaluador debe expedirse respecto al mérito y sobre el curso de acción a seguir, pudiendo sugerir la desestimación de la denuncia, la iniciación de un sumario o la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Asimismo, podrá solicitar la realización de medidas necesarias para dictaminar.

Una vez presentado el dictamen del Consejo Evaluador, el Procurador General se puede expedir en algunos de los siguientes sentidos: a) Desestimar la denuncia y archivar las actuaciones; b) ordenar la iniciación de sumario; c) disponer la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

En caso de que se inicie un sumario, el Procurador General de la Nación deberá designar quién será el instructor del sumario, pudiendo ser elegido cualquier funcionario del agrupamiento técnico-jurídico del MPF. Este a su vez, podrá contar con un secretario de actuación.

Iniciado el sumario, el reglamento prevé las condiciones para la producción de pruebas y los informes de mérito que debe elaborar el oficial sumariante. Una vez concluida la etapa de investigación y descargo del sumariado se clausurará esa etapa y se enviará nuevamente al Consejo Evaluador y a la Asesoría Jurídica del MPF para que emitan sus opiniones sobre el objeto del sumario.

Luego de esa intervención de los órganos necesarios, el Procurador General de la Nación deberá dictar una resolución en la que podrá:

“a) Disponer la desestimación de las actuaciones si los hechos que la motivaron no se cometieron, no constituyen infracción disciplinaria, o no se hubiera probado la participación en ellos del magistrado sumariado.

b) Imponer la sanción que estime corresponder, si los hechos investigados

configuran una falta disciplinaria atribuible al magistrado sumariado.

c) Decidir la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, si los hechos investigados configuran causal de remoción.”

Contra dicha resolución el reglamento prevé recursos jerárquicos, de reconsideración y de queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento, en favor del magistrado sumariado.

ii. Remoción.

Los supuestos de remoción, proceden únicamente en casos de faltas graves y este procedimiento se distingue a su vez de la remoción del Procurador General de la Nación, de la del resto de los Magistrados del MPF.

En cuanto al mecanismo de remoción del Procurador General, el artículo 76 de la ley 27.148, establece que sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, que regulan el mecanismo de juicio político para el Presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, por mal desempeño de funciones, promovido por la Cámara de Diputados ante el Senado de la Nación.

El resto de los magistrados del MPF deben ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento, a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la procedencia de su remoción o la aplicación de otras sanciones (artículos 74, segundo párrafo y 76 de la ley 27.148).

El procedimiento de remoción se encuentra previsto en **los artículos 76 a 80 de la ley 27.148** y reglamentado, en lo que la ley no dispone, en los **artículos 60 a 81 del Régimen de Sanciones aprobado por Resolución PGN N° 2627/15**.

El artículo 77 de la ley 27.148, regula la integración de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por 7 miembros, que duran tres años en sus funciones, siendo tres vocales designados por el Poder Ejecutivo, por la mayoría de la Cámara de Senadores y por el Consejo Interuniversitario Nacional, respectivamente; dos vocales abogados de la matrícula federal designados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y finalmente dos vocales elegidos por sorteo entre los magistrados del MPF. Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

El procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación, y atenerse a las siguientes normas fijadas en el **artículo 80 de la ley 27.148**:

“a) El juicio será oral, público, contradictorio y continuo.

b) La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes.

c) El Tribunal de Enjuiciamiento tiene un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles desde la recepción de las actuaciones para emitir sentencia.

d) Durante el debate el acusador deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El pedido de absolución será obligatorio para el Tribunal de Enjuiciamiento.

e) La sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor a quince (15) días que fijará el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento al cerrar el debate.

f) Según las circunstancias del caso, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá el setenta por ciento (70%) de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio; si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.

g) El Tribunal de Enjuiciamiento sesionará con la totalidad de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple pero en el caso de recaer sentencia condenatoria se exigirá el voto de cinco (5) de sus integrantes.

h) La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiera de la prueba o aquélla ya hubiere sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda a la autoridad competente.

i) La sentencia podrá ser recurrida por el magistrado condenado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta (30) días de notificado el fallo; el Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las actuaciones a la Cámara mencionada dentro de los cinco (5) días de interpuesto.

j) La sentencia condenatoria se ejecutará inmediatamente sin perjuicio de la posibilidad de revisión judicial a través de la acción contencioso administrativa correspondiente."

B) Régimen disciplinario para funcionarios y empleados.

El "Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación", aprobado por **Resolución PGN N° 128/10**, en su artículo 82, de manera genérica establece que los agentes del MPF estarán sujetos a los regímenes disciplinarios para Magistrados, Funcionarios y Empleados vigentes a la fecha del presente Reglamento, con las modificaciones que a futuro pudieren introducirse.

Para el caso de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados del MPF, rige el "Reglamento Disciplinario", aprobado por la **Resolución PGN N° 52/08**, del 26 de mayo de 2008 y las modificaciones introducidas por **Resolución PGN N° 98/11**.

Al igual que en el caso del régimen para magistrados, en este reglamento también se prevén las distintas clases de sanciones (art. 7), las causales para imponer cada una de las sanciones (arts. 8 a 10) y todas las demás normas de procedimiento e

instancias recursivas necesarias para regular de manera completa el proceso administrativo sancionatorio.

Asimismo se fijan las competencias para resolver un sumario administrativo, según la gravedad del hecho y el tipo de sanción que pueda ser aplicada (arts. 12 y 13). En este caso también debe nombrarse a un oficial que será el encargado de llevar adelante el sumario, quien también podrá nombrar un secretario que lo asista en la sustanciación de la investigación.

El objeto de los sumarios es esclarecer en forma definitiva los hechos investigados, deslindar las responsabilidades emergentes respetando el ejercicio del derecho de defensa, y -en su caso- aplicar las sanciones que correspondan.

[1] Conforme el artículo 3º de la Ley 25.164, esta se aplica al personal que integra el Servicio Civil de la Nación, que está constituido por las personas que, habiendo sido designadas conforme lo previsto en la citada ley, prestan servicios en dependencias del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados.

Quedan exceptuados: "a) El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, el Secretario General de la Presidencia de la Nación, los Secretarios, Subsecretarios, el Jefe de la Casa Militar, las máximas autoridades de organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social y los miembros integrantes de los cuerpos colegiados. b) Las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados en el inciso precedente. c) El personal militar en actividad y el retirado que preste servicios militares. d) El personal perteneciente a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en actividad y retirado que preste servicios por convocatoria. e) El personal diplomático en actividad comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación. f) El personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo aprobadas en el marco de la Ley 14.250 (t.o. decreto 198/88) o la que se dicte en su reemplazo. g) El clero. Al personal que preste servicios en organismos pertenecientes a la Administración Pública Nacional, y esté regido por los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), y modificatorias o la que se dicte en su reemplazo, se les aplicarán las previsiones contenidas en ese régimen normativo. En los supuestos contemplados en el párrafo anterior y en el inciso f), las partes, de común acuerdo, podrán insertarse en el régimen de empleo público, a través de la firma de convenios colectivos de trabajo, tal como lo regula el inciso j) de la Ley 24.185 y de acuerdo con las disposiciones de dicha norma".

[2] Textualmente se refiere a "a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones. b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o privilegios de administración en el orden nacional, provincial municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas. c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la administración en orden nacional, provincial o municipal. d) Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el ministerio, dependencia o entidad en el que se encuentre prestando servicios. (...)".

[3] Artículo 32 de la Ley 25.164: "Son causales para imponer cesantía: (...) e) Incumplimiento de los deberes establecidos en los arts. 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere...". Artículo 33 de la Ley Nº 25.164: "Son causales para imponer la exoneración: (...) d) Violación de las prohibiciones previstas en el art. 24".

[4] La norma autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario General de la Presidencia de la Nación, Secretarios, Jefe de la Casa Militar y titulares de los organismos descentralizados, a delegar la atribución de aplicar las sanciones de apercibimiento y suspensión de hasta cinco (5) días, en los funcionarios de jerarquía inferior a Director, que sean directamente responsables de unidades orgánicas cuya ubicación geográfica o descentralización operativa justifiquen tal medida.

[5] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/57525/texact.htm>

[6] Artículo 29 de la Ley 25.164: "El personal comprendido en ámbito de aplicación del presente régimen tiene derecho a que se le garantice el debido proceso adjetivo, en los términos del art. 1º inciso f) de la Ley 19.549 o la que la sustituya".

[7] Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76700/texact.htm>

[8] El mismo artículo del Decreto Reglamentario 1421/02, a su vez, establece que "...El cumplimiento de las condiciones previstas para el ingreso a la Administración Pública Nacional deberá acreditarse en todos los casos, con carácter previo a la designación en el correspondiente cargo. La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado en el que figura el cargo a ocupar, resultará responsable de la verificación del cumplimiento de tales recaudos, así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre Ética en el Ejercicio de la Función Pública, contenidas en el Código de Ética aprobado por el Decreto Nº 41 del 27 de enero de 1999 y en la Ley Nº 25.188 y su modificatorio, o las que se dicten en su reemplazo. A tal efecto, los titulares de las Unidades de Recursos Humanos deberán adjuntar al correspondiente proyecto de designación, los antecedentes y certificaciones que permitan constatar el cumplimiento de los requisitos de ingreso del postulante (...). Dicho cumplimiento y acreditación deberán constar en los fundamentos del referido proyecto de designación (...). b) Sin perjuicio del sistema de acreditación de las condiciones de conducta que establecerá el señor Jefe de Gabinete de Ministros, o en su caso la autoridad de aplicación según el art. 2º del presente, deberá considerarse como causales que impiden la acreditación de dicho requisito, las siguientes situaciones: l) Cuando el ex agente hubiera renunciado en los términos del segundo párrafo del art. 22 del Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente y que como resultado del sumario instruido, de haber continuado en servicio, le hubiera correspondido la aplicación de una sanción expulsiva...".

[9] Artículo 17 de la Ley 25.188: "Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, este se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la Ley 19.549".

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Datos proporcionados por la Dirección Nacional de Sumarios Administrativos de la Procuración del Tesoro de la Nación:

La Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la Procuración del Tesoro de la Nación (DNSIA) no desarrolla tareas preventivas de delitos de corrupción.

La responsabilidad primaria de la DNSIA es realizar la instrucción de sumarios administrativos por hechos ya acaecidos (post facto) en la Administración Pública Nacional centralizada y entes descentralizados (excepto empresas y sociedades del Estado), en los que esté imputado cualquier funcionario de las dos máximas categorías escalafonarias, con ejercicio de funciones ejecutivas; y ordenados por las autoridades competentes.

Tal actividad permite desarrollar medidas para apoyar y vigilar la aplicación, recolección de datos y estadísticas para la evaluación y monitoreo del régimen disciplinario.

Sin perjuicio de la competencia excepcional de la DNSIA ya descripta, las oficinas o Direcciones de Sumarios de cada Organismo, investigarán las presuntas irregularidades acaecidas en esa jurisdicción.

Datos estadísticos

• Porcentaje de personal en direcciones de sumarios administrativo que no están en planta permanente (si disponible)

El artículo 6 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº

467/99, exige que los Instructores que deben tramitar los sumarios disciplinarios, deben ser “funcionarios letrados de planta permanente” y la falta de estos, genera que se solicite al Procurador del Tesoro, como Director del Cuerpo de Abogados del Estado, la autorización para que abogados que no pertenecen a la planta permanente puedan, como excepción, instruir los sumarios.

- Número de consultas pedidas por Direcciones de Sumarios de organismos nacionales en 2016 y 2017

Aproximadamente se evacúan vía mails o telefónicamente diez (10) consultas mensuales.

- Número de consultas pedidas por organismos nacionales sobre procedimientos administrativos, en particular por oficinas de recursos humanos (si disponible)

Las oficinas de Recursos Humanos, previo a dar de baja a un agente de las dos máximas categorías escalafonarias, solicitan información a la Dirección, sobre si el mismo registra algún sumario en trámite.

En la actualidad y a partir del dictado de la Resolución PTN Nº 64, del 29/08/17, previo a la designación o promoción de un abogado del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyo cargo tenga vinculación con el derecho disciplinario, el Procurador del Tesoro requiere la opinión de esta Dirección.

- Datos sobre capacitación al personal de las direcciones de sumarios (si disponibles)

Se está llevando a cabo en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado un seminario sobre “Cuestiones de Actualidad en el Régimen Disciplinario”.

Pueden consultarse las últimas decisiones de la Oficina Anticorrupción con relación a las normas sobre integridad accediendo al siguiente link
<http://www.saij.gob.ar/anticorrupcion>

21. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Asesoría legislativa y diseño de acuerdos modelo para su definición y aprobación.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(LA) Asistencia legislativa: describa el tipo de asistencia

Asesoría legislativa para establecer coherencia en los umbrales de denuncia, y diseño de acuerdos modelo para su definición y aprobación.

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

9. Contratación pública y gestión de la hacienda pública

22. Párrafo 1 del artículo 9

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:

a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;

b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

A través del dictado del Decreto N° 1169, de fecha 21 de diciembre de 2018, la República Argentina dispuso que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública (Ex Secretaría De Gobierno De Modernización) de la Jefatura De Gabinete De Ministros tendrá nivel de Subsecretaría y tendrá las funciones previstas en el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y será el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones de Obras Públicas que lleven a cabo las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional comprendida en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

La ONC asume la administración y reglamentación del funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS, pero se establece como disposición transitoria que hasta tanto dicte el nuevo reglamento continuará vigente el Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Se instruye a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN a arbitrar los medios necesarios para publicar información y documentación relevante sobre las contrataciones de OBRA PÚBLICA y CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA a través del Portal Nacional de Datos Públicos.

Se instruye a la ONC para que elabore y dé a publicidad un PROGRAMA DE GOBERNANZA DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA Y CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA.

Se incorporan pautas de inelegibilidad de oferentes en contratos de OBRA PÚBLICA y CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA, análogas a las existentes respecto de bienes y servicios en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16.

Se establece un régimen de sanciones en materia de contratos de OBRA PÚBLICA y CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA con el objetivo de disuadir y penalizar conductas disvaliosas por parte de los actores del sistema y se faculta a la ONC para aplicarlas. Se regulan las competencias para el dictado de diversos actos administrativos en el marco de contrataciones de OBRA PÚBLICA y CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA -entre otros-, con el objeto de establecer un criterio uniforme en toda la Administración Nacional.

En su estructura interna se encuentra la Unidad Operativa de Contrataciones, encargada de dar a publicidad la convocatoria de los procedimientos de selección por los medios establecidos en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, según el tipo de procedimiento, clase y modalidad elegida.

En primera medida, debe señalarse que en materia de publicidad y difusión de la convocatoria a licitación pública o concurso público de clase nacional, en tanto regla general, el artículo 40 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 contempla los siguientes recaudos de cumplimiento obligatorio:

1. Publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno (Boletín Oficial de la República Argentina) por el término de dos días.
2. Difusión por internet en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones (<https://comprar.gob.ar/>), desde el día en que se le comience a dar publicidad a la convocatoria en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno. Es decir, desde el día en que tenga lugar la primera publicación en el Boletín Oficial.
3. Envío de comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los proveedores, productores, fabricantes y comerciantes del rubro, del lugar donde deban efectuarse las provisiones y/o prestaciones de servicios. Este requisito debe cumplimentarse durante el término de publicación de la convocatoria en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno; es decir, en el lapso de tiempo en que tienen lugar las dos publicaciones en el Boletín Oficial.
4. Envío de invitaciones a por lo menos cinco proveedores del rubro -estén o no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores-, durante el término de publicación de la convocatoria en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno. Es decir, en el lapso de tiempo en que tienen lugar las dos publicaciones en el Boletín Oficial.
5. Plazo mínimo de antelación exigido para la difusión de la convocatoria: Las convocatorias que no se realicen en formato digital, deberán difundirse con un mínimo de veinte días corridos de antelación y las que se realicen en formato digital con un mínimo de siete días corridos de antelación, computados en ambos casos, desde el día

hábil inmediato siguiente al de la última publicación, hasta la fecha de apertura de las ofertas, o a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro o compra del pliego inclusive, o para la presentación de muestras inclusive, la que opere primero, cuando esa fecha sea anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

Si se tratase de una licitación privada o concurso privado, el artículo 41 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 prescribe que la convocatoria a presentar ofertas en estos casos deberá efectuarse siguiendo las pautas que a continuación se detallan:

1. Mediante el envío de invitaciones a por lo menos cinco proveedores del rubro que se hallaren inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores, con un mínimo de siete días corridos de antelación a la fecha de apertura de las ofertas, o a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro o compra del pliego inclusive, o para la presentación de muestras inclusive, la que opere primero, cuando esa fecha sea anterior a la fecha de apertura de las ofertas. En aquellos casos en que no fuera posible dirigir el llamado exclusivamente a proveedores inscriptos, bien sea por la inexistencia de proveedores incorporados en el rubro específico que se licita o por otros motivos, la jurisdicción o entidad contratante podrá extender la convocatoria a otros interesados que no se hallen inscriptos en el aludido sistema.

2. Además se deberá difundir en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se cursen las invitaciones.

Cuando la licitación o el concurso sean de clase internacional, se deberá efectuar mediante la utilización de los medios de publicidad y difusión correspondientes, según se trate de un procedimiento privado o público, pero con una antelación que no será menor a cuarenta días corridos (v. artículo 42 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

Además la convocatoria a presentar ofertas deberá efectuarse mediante la publicación de un aviso en el sitio de internet de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, o en el que en el futuro lo reemplace, o en el sitio de internet del Banco Mundial denominado DG Market, o en el que en el futuro lo reemplace, indistintamente, por el término de dos días, con un mínimo de cuarenta días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura.

En el caso de la subasta pública, la convocatoria a presentar ofertas deberá efectuarse mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, con un mínimo de diez días corridos de antelación a la fecha fijada para la subasta (v. artículo 43 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

Los requisitos de publicidad y difusión de la convocatoria a presentar ofertas en las contrataciones directas varían según se trate de compulsas abreviadas o adjudicaciones simples. De la lectura del artículo 44 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se desprende lo siguiente:

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de compulsas abreviadas por monto:

-Invitaciones: Envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores, estén o no incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

-Plazo de antelación: Con un mínimo de tres días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, o a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro o compra del pliego inclusive, o para la presentación de muestras inclusive, la que operare primero, cuando esa fecha sea anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se cursen las respectivas invitaciones.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de adjudicación simple por especialidad:

-Envío de invitaciones: No se exige cursar invitaciones.

-Plazo de antelación: No se prevé un plazo de antelación a la fecha de apertura.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se curse el pedido de cotización.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de adjudicación simple por exclusividad:

-Envío de invitaciones: No se exige cursar invitaciones.

-Plazo de antelación: No se prevé un plazo de antelación a la fecha de apertura.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se curse el pedido de cotización.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de compulsa abreviada por DOS (2) licitaciones o concursos desiertos o fracasados:

-Invitaciones: Envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores, estén o no incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

-Plazo de antelación: con un mínimo de tres días hábiles de antelación (completos) a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, o a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro o compra del pliego inclusive, o para la presentación de muestras inclusive, la que operare primero, cuando esa fecha sea anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se cursen las respectivas invitaciones.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de compulsa

abreviada por urgencia.

-Invitaciones: Envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores, estén o no incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

-Plazo de antelación: No se exige un plazo mínimo de antelación.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se cursen las respectivas invitaciones.

Difusión de la convocatoria de contrataciones directas por emergencia:

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión de la convocatoria en el sitio de la ONC.

No se exige ningún tipo de publicidad de la convocatoria, pero sí de las restantes etapas en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Contrataciones directas secretas por razones de seguridad o defensa nacional:

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en el sitio de Internet de la ONC en todas las etapas del procedimiento.

No se exige ningún tipo de publicidad de ninguna de las etapas del procedimiento.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de adjudicación simple por desarme, traslado o examen previo:

-Envío de invitaciones: No se exige cursar invitaciones.

-Plazo de antelación: No se prevé un plazo de antelación a la fecha de apertura.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se curse el pedido de cotización.

Difusión de la convocatoria correspondiente a una adjudicación simple interadministrativa:

No se exige ningún tipo de publicidad de la convocatoria, pero sí del convenio firmado en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Difusión del convenio: La Unidad Operativa de Contrataciones difundirá el convenio en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, dentro de los CINCO (5) días de su suscripción.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de una adjudicación simple con una universidad nacional.

-Envío de invitaciones: No se exige cursar invitaciones.

-Plazo de antelación: No se prevé un plazo de antelación a la fecha de apertura.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se curse el pedido de cotización.

-Difusión del convenio: La Unidad Operativa de Contrataciones difundirá el convenio en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, dentro de los CINCO (5) días de su suscripción.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de compulsa abreviada con efectores de desarrollo local y economía social.

-Envío de invitaciones: Envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

-Plazo de antelación: con un mínimo de tres días hábiles de antelación a la fecha de apertura de las ofertas, o a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el retiro o compra del pliego inclusive, o para la presentación de muestras inclusive, la que operare primero, cuando esa fecha sea anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

-Difusión por internet: difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se cursen las respectivas invitaciones, en la forma y por los medios que establezca el Órgano Rector.

Difusión de la convocatoria correspondiente a un procedimiento de adjudicación simple con efectores de desarrollo local y economía social cuando son sustanciadas por el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

-Envío de invitaciones: No se exige cursar invitaciones. Podrá efectuarse el pedido de cotización a un efector en particular.

-Plazo de antelación: No se prevé un plazo de antelación a la fecha de apertura.

-Difusión por internet: Difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en que se curse el pedido de cotización.

En todos los medios por los cuales se den a conocer las convocatorias de los procedimientos de selección y de sus respectivas circulares aclaratorias y modificatorias se deberá hacer constar que se podrá tomar vista o se podrá descargar o retirar el pliego de bases y condiciones particulares, así como el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional, consignando la dirección del mismo (v. artículo 16 del Manual de Procedimiento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

Téngase presente, además, que en principio tanto el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales como los pliegos de bases y condiciones particulares o en su caso las bases del llamado pueden obtenerse o descargarse de internet sin costo. Eventualmente, en

aquellos casos en que las jurisdicciones y entidades contratantes entreguen copias de los mismos podrán establecer para su entrega el pago de una suma equivalente al costo de reproducción, la que deberá ser establecida en la convocatoria (v. artículo 39 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16).

A lo expuesto cabe agregar que, conforme con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Delegado N° 1023/01 y en el artículo 47 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, con el fin de cumplir el principio de transparencia las jurisdicciones o entidades contratantes deberán difundir en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, la información que a continuación se detalla, cualquiera fuera el tipo de procedimiento de selección elegido, salvo que expresamente se dispusiera lo contrario en el Decreto Delegado N° 1.023/01 o en su reglamentación.

A saber:

- a. La convocatoria para recibir observaciones de los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, junto con el respectivo proyecto.
- b. La convocatoria a los procedimientos de selección, junto con el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
- c. Las circulares aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos.
- d. Las actas de apertura de las ofertas.
- e. Los cuadros comparativos de ofertas.
- f. La preselección en los procedimientos de etapa múltiple.
- g. El dictamen de evaluación de las ofertas.
- h. Las impugnaciones planteadas por los oferentes contra el dictamen de evaluación de las ofertas.
- i. La aprobación del procedimiento de selección, adjudicación, la declaración de desierto o fracasado, o la decisión de dejar sin efecto un procedimiento de selección.
- j. Las órdenes de compra, venta o los contratos.
- k. Las solicitudes de provisión, en los casos de orden de compra abierta.
- l. Los actos administrativos y las respectivas órdenes de compra por las que se aumente, disminuya o prorrogue el contrato.
- m. Los actos administrativos firmes por los cuales las jurisdicciones o entidades hubieran dispuesto la aplicación de penalidades a los oferentes o adjudicatarios.
- n. Las cesiones de los contratos.
- o. La revocación, suspensión, resolución, rescate o declaración de caducidad.

Amén de lo expuesto, es dable mencionar que la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos se lleva a cabo a través de diversos sistemas conforme se detallará a continuación:

PORTAL NACIONAL DE DATOS ABIERTOS

Mediante el Decreto N° 117 de fecha 12 de enero de 2016 se establece el “**Plan de Apertura de Datos**”, por el cual se instruyó a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL a difundir a través del Portal Nacional de Datos Públicos información concerniente -entre otros extremos- a contrataciones públicas, con el propósito de acercar al ciudadano a la gestión del Gobierno Nacional y en el entendimiento que la disponibilidad de los datos públicos en condiciones adecuadas para su uso y reutilización constituye un elemento catalizador para el fortalecimiento del proceso democrático, el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, la provisión de servicios públicos centrados en el usuario y la promoción del desarrollo social, económico, científico y cultural de la Nación.

Se trata de un medio que posibilita un mejor conocimiento del funcionamiento del gobierno y facilita el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual fortalece la rendición de cuentas y el control social sobre las contrataciones públicas, en los términos del artículo 9° del Decreto Delegado N° 1023/01.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)

Mediante el Decreto N° 434 del 1° de marzo de 2016 se aprobó el **Plan de Modernización del Estado** con el objetivo de constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios.

El citado Decreto contempló en el eje “Plan de Tecnología y Gobierno Digital” el objetivo de implementar una plataforma horizontal informática de generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la Administración Nacional a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

La implementación de este enfoque estratégico de la política de modernización administrativa se puso en marcha mediante el Decreto N° 561 de fecha 6 de abril de 2016, que dispuso la implementación del ecosistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, en reemplazo de aquellos sistemas de gestión documental en uso en ese momento.

El ecosistema de Gestión Documental Electrónica - GDE es una plataforma horizontal que permite la creación, registro y archivo de documentos electrónicos para realizar todos los trámites de registración, fiscalización y resolución que mayormente realiza la Administración, junto a la posibilidad de tramitar mediante módulos o subsistemas informáticos del sistema GDE, diferentes procedimientos regulados por cuerpos normativos particulares, módulos que a su vez utilizan mutuamente sus funciones informáticas que permiten la implementación escalable con otros sistemas y proyectos

de digitalización de nuevos módulos.

Se trata, en suma, de una plataforma unificada que permite gestionar de manera integral la totalidad de documentos, expedientes y actuaciones administrativas y facilita el acceso de los ciudadanos a la Administración en forma remota, con el objeto fortalecer las capacidades institucionales del Sector Público Nacional, acelerar los trámites, aumentar la transparencia, facilitar el acceso a la información, posibilitar la integración e interoperabilidad de los sistemas de información y dotar a los organismos de una herramienta moderna para elevar la calidad de la gestión.

A la fecha de presentación de este informe, el sistema GDE se ha implementado en la totalidad de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.

Como aspecto estratégico de la modernización administrativa para lograr la tramitación digital completa y remota y orientar la acción administrativa del Estado al ciudadano, el Decreto N° 1063 del 4 de octubre de 2016 aprobó la implementación de la plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE, como medio de interacción del ciudadano con la Administración a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES “COMPR.AR”

En el Capítulo II del Título II del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 se encuentran reguladas las contrataciones públicas electrónicas. Puntualmente, el artículo 32 del citado cuerpo reglamentario establece, en su parte pertinente, que: *“...La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilitará los medios para efectuar en forma electrónica los procedimientos prescriptos en el presente reglamento y dictará los manuales de procedimiento en los que se podrán estipular condiciones específicas que se aparten de lo dispuesto en el mismo...”*.

Con sustento en dicho precepto, se dictó oportunamente la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones N° 29/16, que luego fue reemplazada por su similar N° 65/16 y a través de la cual finalmente se habilitó el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, en adelante denominado “COMPR.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos prescriptos en el reglamento antes citado.

“COMPR.AR” es una herramienta transversal a través de la cual, mediante un flujo predeterminado, se gestiona el proceso de contratación desde la solicitud del área requirente hasta el perfeccionamiento del contrato. La plataforma permite a los organismos tramitar y difundir sus procesos de compra y a los proveedores presentar sus ofertas de forma electrónica.

“COMPR.AR” tiene tres ambientes principales, “ambiente comprador”, “ambiente proveedor” y “ambiente ciudadano”:

a) El “ambiente comprador” es aquel en el que los usuarios habilitados de los organismos contratantes generan las distintas etapas de los procedimientos de contratación llevados a cabo en sus respectivos ámbitos, como por ejemplo: solicitudes de contratación, carga y autorización de procesos, emisión de circulares aclaratorias y modificatorias, evaluación de ofertas, adjudicación, etc.;

b) El “ambiente proveedor” es aquel en el que operan los proveedores y/o oferentes que se preinscriben en el portal “COMPR.AR” con el fin de consultar y/o participar de los procesos de contratación difundidos en dicho portal;

c) El “ambiente ciudadano” cumple la función de página web oficial de esta Oficina Nacional de Contrataciones donde se difunden las distintas etapas y documentos de los procesos de contratación tramitados por los organismos en los que se ha implementado el sistema “COMPR.AR”.

A su vez, el sistema refleja automáticamente la gestión de cada contratación en un expediente electrónico, integrándose de esta forma con el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) aprobado por el Decreto Nº 561/16. Todo proceso de contratación iniciado en el portal genera de forma automática un expediente electrónico, en el cual se refleja mediante documentos oficiales las distintas etapas, documentos e intervenciones ocurridas a través de “COMPR.AR”.

De lo expuesto se desprende que “COMPR.AR” cumple la doble función de ser un portal de difusión y una herramienta de gestión y tramitación de todo el proceso de contratación, dotando a los procedimientos de contrataciones de mayor agilidad, transparencia y seguridad.

Así, cualquier interesado puede conocer los detalles de las contrataciones que realizan las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional con sólo efectuar su consulta en el sitio de internet: <https://comprar.gob.ar/>.

De tal modo, la ONC, promovió la implementación del Sistema Electrónico de contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”, como una buena práctica de transparencia y eficiencia en la gestión de las compras y contrataciones públicas de bienes y servicios.

Dicha implementación se está llevando a cabo a través de un cronograma que determina la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en forma gradual. A partir de la implementación en cada jurisdicción o entidad es obligatorio el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional 'COMPR.AR', para los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen o los que a partir de esa fecha se convoquen -cuando no se requiera autorización previa-.

A la fecha de emisión de este informe, el sistema COMPR.AR se ha implementado en más de 100 organismos de la Administración Pública Nacional. En relación con todos aquellos organismos de la Administración Nacional que aún que no utilizan el sistema COMPR.AR, la información de los diversos procedimientos de contrataciones se difunde en el portal “ARGENTINA COMPRA”, cuya dirección de internet es: www.argentinacompra.gov.ar.

Ello, sin perjuicio de la información que se encuentra cargada y disponible para el público en general en el Portal Nacional de Datos Públicos: <http://datos.gob.ar/>, como parte del “Plan de Apertura de Datos” establecido mediante el Decreto Nº 117/16, previamente mencionado.

Es decir que en la actualidad los datos correspondientes a procedimientos de selección celebrados en el marco del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional se difunden, en forma libre e irrestricta, a través de los portales web: <https://comprar.gob.ar/>; www.argentinacompra.gov.ar/ y del Portal de Datos Públicos: www.datos.gob.ar.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) es administrado por la ONC y tiene por objeto registrar información relativa a los proveedores, sus antecedentes, historial de procedimientos de selección en los que se hubieren presentado como oferentes, historial de contratos, órdenes de compra o venta, incumplimientos contractuales y extra-contractuales, en ambos casos por causas imputables al proveedor, sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación y toda otra información que la mencionada oficina considere de utilidad.

En él se inscribirá a quienes pretendan participar en los procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, salvo las excepciones expresamente previstas en la normativa vigente (v. Artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 y el Título VI, Capítulo Único del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16).

En la actualidad el sistema electrónico de contrataciones “COMPR.AR” y el sistema de información de proveedores “SIPRO” se encuentran integrados en un único portal, sin perjuicio de mantener su individualidad y fines propios. El acceso es público, gratuito e irrestricto y se realiza a través de Internet, en el sitio <<https://comprar.gob.ar>>.

Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, “CONTRAT.AR”

Por el Decreto N° 1336 de fecha 29 de diciembre de 2016 se aprobó la implementación del Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, “CONTRAT.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos de contratación y seguimiento de la ejecución de los mencionados contratos del Sector Público Nacional, de conformidad con la normativa legal vigente en la materia. “CONTRAT.AR” permite la incorporación de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de modo de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad. Basarse en estándares públicos e interoperables que permiten el respaldo de la información y el registro de operaciones, posibilita su operación e integración con otros sistemas de información.

Asimismo por el citado Decreto N° 1336/16 se designó al ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN - actual SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS- como administrador del sistema “CONTRAT.AR”, quedando facultado para fijar el cronograma de implementación.

Oportunamente, las Resoluciones N° 9 del 6 de enero de 2017, N° 198 de fecha 19 de abril de 2017, N° 314 de fecha 27 de junio de 2017 y N° 315 de fecha 27 de junio de 2017, del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, dispusieron la implementación obligatoria del sistema “CONTRAT.AR” para las contrataciones de Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y licencias, en los organismos del Estado.

Resta mencionar que en julio de 2017, la República Argentina presentó su Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. En ese marco, una de las iniciativas propuestas en conjunto por la Oficina Nacional de Contrataciones y la Dirección Nacional de Datos e Información Pública, fue la de “Implementación del Estándar de Datos para las

Contrataciones Abiertas (EDCA)”.

El compromiso asumido es el de avanzar en la instrumentación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) de la Open Contracting Partnership en los sistemas “COMPR.AR” y “CONTRAT.AR”, así como promover la sensibilización de actores estatales y externos sobre las potencialidades de la implementación de dicho Estándar.

En el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, la República Argentina se comprometió a publicar información en formatos abiertos sobre el ciclo de vida de las contrataciones de obra pública. Se publicará también documentación respaldatoria de las contrataciones y se conformará una mesa de trabajo multiactor (gobierno, sociedad civil, sector privado) con la finalidad de proponer reformas a la normativa vigente, mejoras en la gestión de obras y publicación de nuevos datasets, en el marco de las competencias de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).

Se espera alcanzar una mejora integral del Sistema de Contrataciones de Obra Pública, que favorezca su transparencia, integridad y eficiencia, y que ponga en valor -y amplíe- los avances alcanzados a través de la implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, compromiso desarrollado por la ONC en el marco del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

En cuanto a las formulaciones previas de las condiciones de participación surgen en primera instancia de las normas que rigen el procedimiento y asimismo de los pliegos de bases y condiciones particulares.

En ese orden de ideas, resulta oportuno mencionar que, en la República Argentina, en lo concerniente a la elaboración de los pliegos, el artículo 36 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 prescribe que los pliegos de bases y condiciones particulares deben ser elaborados para cada procedimiento de selección, por las respectivas unidades operativas de contrataciones de las jurisdicciones y entidades contratantes, sobre la base de los pedidos efectuados por las unidades requirentes, y deberán ser aprobados por la autoridad que fuera competente en cada caso. Deben contener las especificaciones técnicas, las cláusulas particulares y los requisitos mínimos que indicará el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Por su parte, el artículo 37 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 estipula: *“Las especificaciones técnicas de los pliegos de bases y condiciones particulares deberán elaborarse de manera tal que permitan el acceso al procedimiento de selección en condiciones de igualdad de los oferentes y no tengan por efecto la creación de obstáculos injustificados a la competencia en las contrataciones públicas.*

Deberán consignar en forma clara y precisa:

- a) Las cantidades y características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación, con su número de catálogo correspondiente al Sistema de Identificación de Bienes y Servicios que administre la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o al que en el futuro se dicte.*
- b) Si los elementos deben ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados.*
- c) Las tolerancias aceptables.*
- d) La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de sustentabilidad que deberán cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores.*

Las especificaciones técnicas deberán ser lo suficientemente precisas para permitir a los oferentes determinar el objeto del contrato y formular una adecuada cotización y para permitir a las jurisdicciones y entidades contratantes evaluar la utilidad de los bienes o servicios ofertados para satisfacer sus necesidades y adjudicar el contrato”.

En cuanto al **criterio de selección de las ofertas**, el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 establece: “... La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso”.

Precisamente, en materia de preferencias, puede citarse a título de ejemplo la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437, reglamentada por el Decreto N° 800 del 5 de septiembre de 2018.

Dicho régimen establece preferencias en favor de las ofertas de bienes de origen nacional cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), cuando dichas ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y en un ocho por ciento (8%) para el resto de las empresas, y se verifiquen los restantes presupuestos expresamente establecidos en las aludidas normas.

A su vez, el Anexo II a la Disposición ONC N° 63/16 se encuentran previstos los requisitos mínimos que deben contener los pliegos de bases y condiciones particulares, indicándose en el punto 31 -en cuanto aquí interesa- la necesidad de estipular el criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos para determinar el orden de mérito, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

Sin perjuicio de lo reseñado previamente, cuando la complejidad o el monto del procedimiento de selección lo justifiquen, o en procedimientos en que no fuere conveniente preparar por anticipado las especificaciones técnicas o las cláusulas particulares completas, corresponderá que el titular de la unidad operativa de contrataciones autorice la apertura de una etapa previa a la convocatoria, para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares (v. artículo 8 del Decreto N° 1023/01 y artículos 26 y 45 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y 10 a 13 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16.

La convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares deberá efectuarse mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, con diez días corridos, como mínimo, de antelación a la fecha de finalización del plazo

para formular observaciones, en la forma y por los medios que establezca el Órgano Rector. Durante todo ese plazo cualquier persona podrá realizar observaciones al proyecto de pliego sometido a consulta pública. Durante el lapso previsto en la convocatoria para la formulación de las observaciones, la Unidad Operativa de Contrataciones podrá convocar a reuniones para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares o promover el debate entre los interesados acerca del contenido del mismo.

Los criterios técnicos, económicos y jurídicos que surjan de las observaciones efectuadas por los interesados, en la medida en que se consideren pertinentes, serán utilizados por la Unidad Operativa de Contrataciones para incluir en el respectivo proyecto de pliego que someta a consideración de las autoridades competentes.

En el caso en que se hubiera realizado la etapa de observaciones al proyecto de pliego, en el acto administrativo de autorización de la convocatoria, elección del procedimiento y aprobación del pliego de bases y condiciones particulares se deberá efectuar una evaluación concreta y razonada de cada una de las observaciones formuladas.

Finalmente, en lo que respecta a la publicación de las condiciones de participación y/o reglas de licitación, corresponde remitir a la información brindada en el literal a), a efectos de evitar reiteraciones innecesarias.

Con respecto a la aplicación criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos:

De acuerdo con la normativa aplicable en la República Argentina, será hábil para contratar con la Administración Nacional toda persona humana o jurídica con capacidad para obligarse, que no se halle incurso en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y que se encuentre preinscripta en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento en que los actuados sean remitidos a la Comisión Evaluadora, debiendo estar inscripta y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación (v. artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 y la Comunicación General ONC N° 63/17).

A su vez, ello se complementa con las pautas para la inelegibilidad expresamente contempladas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16. En esta materia, amerita destacarse la incorporación en la normativa vernácula desde el año 2016 de DOS (2) causales de inelegibilidad novedosas, previstas en los incisos h) e i) del referido artículo. En estos casos, deberá desestimarse la oferta:

“h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i)Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras

subsista dicha condición”.

Respecto de esto último, se encuentra en análisis la información a la que puede accederse en los sitios web del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo a los fines de delimitar los alcances del pedido para lograr, por un lado, la integración con los registros de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y el acceso a la información particular que corresponde.

En otro orden de cosas, el artículo 66 del citado Reglamento regula -con vocación de taxatividad- las **causales de desestimación no subsanables de las ofertas**. Fuera de tales supuestos, cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

Luego, respecto de las propuestas admisibles presentadas por oferentes hábiles y elegibles, se deberá seleccionar la oferta más conveniente, aplicando los criterios de evaluación y selección contemplados en los pliegos de bases y condiciones particulares.

En cuanto a los mecanismos tendientes a garantizar la legalidad de los procedimientos contractuales, cabe mencionar a las **impugnaciones** contra el dictamen de evaluación en los procedimientos de etapa única o bien contra el dictamen de preselección en los procedimientos de etapa múltiple y los recursos contra los actos administrativos que se dicten durante la sustanciación del procedimiento de selección o durante la ejecución contractual.

Las referidas impugnaciones se encuentran reguladas en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, mientras que los recursos se encuentran regulados en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017); ello sin perjuicio de todas las presentaciones, denuncias u observaciones que podrían efectuarse en cualquier momento del trámite.

La toma de vista es uno de los principales mecanismos de control del procedimiento, por parte de los interesados.

Concretamente, el artículo 4 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 garantiza el acceso a los expedientes por los cuales tramiten procedimientos de selección a cualquier persona que acredite un interés.

El artículo 5º del mencionado Reglamento prevé que toda denuncia, observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones, fuera de las expresamente reguladas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional podrá ser tramitada fuera del expediente del procedimiento de selección, y en principio no dará lugar a la suspensión de los trámites. Sin embargo, la jurisdicción o entidad contratante podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante decisión fundada, suspender el trámite por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Tratase de una medida cautelar en sede administrativa.

A su vez, según el artículo 6, los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se registrarán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

En su artículo 73 el Reglamento estipula que los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres días hábiles administrativos de su comunicación, mientras que quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los tres días hábiles administrativos de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78, inciso d) del presente reglamento. A renglón seguido, el artículo 74 aclara que si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

De este modo, de conformidad con la normativa vigente, tanto oferentes como quienes no revistan tal calidad se encuentran facultados para impugnar el dictamen de evaluación de las ofertas, siempre que lo hagan dentro del plazo fijado al efecto y previa integración -en ambos casos- de la garantía de impugnación, la cual configura una medida razonable que tiende a disuadir presentaciones carentes de fundamentación y desalentar conductas abusivas que persiguen como única finalidad el aplazamiento de la finalización de un procedimiento de selección, en detrimento del interés público comprometido.

Según la ONC, la práctica administrativa de los últimos años da cuenta de que la mentada garantía se presenta como una herramienta razonablemente idónea en pos de desalentar planteos infundados, meramente dilatorios o esencialmente enderezados a entorpecer los procedimientos de selección.

En cuanto a la **Disposición ONC N° 62/16** mediante la cual se aprobó el manual de procedimiento para las contrataciones que se gestionen aplicando el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el N° 1030/16, la misma contempla lo siguiente:

“ARTÍCULO 29.- IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Si se recibieran impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá verificar si se constituyó la pertinente garantía. Si la misma no se hubiese constituido, o no lo estuviera en la forma debida, cualquiera fuera la omisión o defecto, deberá intimar al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite”.

“ARTÍCULO 30.- TRÁMITE DE LAS IMPUGNACIONES. La Unidad Operativa de Contrataciones podrá remitir la impugnación, en el caso de versar sobre cuestiones técnicas, al área técnica de la jurisdicción o entidad contratante con competencia en la materia, a la unidad requirente de los bienes o servicios objeto del procedimiento o bien dar intervención nuevamente a la Comisión Evaluadora, para que se expidan sobre la impugnación presentada. La Comisión Evaluadora no volverá a emitir un dictamen de evaluación, sino que producirá un informe con su opinión. Por su parte, cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas podrá solicitar la intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico.”

“ARTÍCULO 31.- ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. (...) Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la finalización del procedimiento. La Unidad Operativa de Contrataciones remitirá dicho acto administrativo a la autoridad competente para emitirlo, de acuerdo a las pautas sobre competencia establecidas en el

artículo 9° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”.

“ARTÍCULO 66.- IMPUGNACIONES A LA PRESELECCIÓN. Los oferentes e interesados podrán impugnar el dictamen de preselección dentro de los DOS (2) días de notificados, previa integración de la garantía correspondiente.

Todas las impugnaciones planteadas serán resueltas por la autoridad competente en el acto administrativo que resuelva la preselección. La Unidad Operativa de Contrataciones deberá notificar a todos los oferentes el acto administrativo que resuelva la preselección dentro de los TRES (3) días de emitido”.

Por último, el Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o. 2017) establece que los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos, pudiendo deducirlos quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo (v. artículos 73 y 74).

En los principales recursos se encuentran regulados en el Reglamento de Procedimientos Administrativos en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 84.- Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 82.

ARTÍCULO 85.- Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, éste será resuelto por el delegante.

ARTÍCULO 86.- El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los TREINTA (30) días, computados desde su interposición, o, en su caso, de la presentación del alegato -o del vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido la prueba.

ARTÍCULO 87.- Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho.

ARTÍCULO 88.- El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de CINCO (5) días de oficio o a petición de parte según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los CINCO (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.

ARTÍCULO 89.- Recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho no será indispensable fundar nuevamente el

jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.

ARTÍCULO 90.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE (15) días de notificado y será elevado dentro del término de CINCO (5) días y de oficio al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, el Ministerio o la Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, de un Ministro o de un Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el recurso será resuelto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.

ARTÍCULO 91.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de TREINTA (30) días, a contar desde la recepción de las actuaciones por la autoridad competente, o en su caso de la presentación del alegato -o vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido prueba. No será necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio.

ARTÍCULO 92.- Cualquiera fuera la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico, el mismo tramitará y se sustanciará íntegramente en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio o de la Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto; en aquellos se recibirá la prueba estimada pertinente y se recabará obligatoriamente el dictamen del servicio jurídico permanente.

Si el recurso se hubiere interpuesto contra resolución del Jefe de Gabinete de Ministros, de Ministro o de Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; cuando corresponda establecer jurisprudencia administrativa uniforme, cuando la índole del interés económico comprometido requiera su atención, o cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo estime conveniente para resolver el recurso, se requerirá la intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 93.- Salvo norma expresa en contrario los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas generales que para los mismos se establecen en esta reglamentación.

ARTÍCULO 94.- Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanadas del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las universidades nacionales- procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.

ARTÍCULO 95.- La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.

ARTÍCULO 96.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, el Ministro o el Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el ente autárquico, será competente para resolver en definitiva el recurso de alzada.

ARTÍCULO 97.- El recurso de alzada podrá deducirse en base a los fundamentos previstos por el artículo 73, in fine. Si el ente descentralizado autárquicamente fuere de los creados

por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales, el recurso de alzada solo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto, salvo que la ley autorice el control amplio. En caso de aceptarse el recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, pudiendo sin embargo modificarlo o sustituirlo con carácter excepcional si fundadas razones de interés público lo justificaren.

ARTÍCULO 98.- Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los artículos 90, primera parte; 91 y 92”.

En materia de conflictos de interés, el Decreto N° 202/2017 estableció procedimientos y mecanismos especiales para los casos en que pudiera existir una vinculación particular relevante entre un interesado en contratar u obtener el otorgamiento de algunos de los actos mencionados en el artículo 1° de la norma referida precedentemente, del Estado por una parte, y el Presidente y el Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, demás ministros y autoridades de igual rango y/o los titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar o aprobar cualquiera de las formas de relación jurídica allí contempladas.

La citada norma especificó aquellos vínculos entre los funcionarios y las personas que deben ser considerados relevantes a los fines de aplicar nuevas reglas y procedimientos especiales que, sumados a los mecanismos existentes, aseguren los más altos estándares de integridad, rectitud, transparencia, imparcialidad y defensa del interés general.

El Decreto mencionado dispuso la obligación de toda persona de presentar una Declaración Jurada de Intereses” cuando se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

La citada norma en su artículo 4° dispone que en caso de existir un supuesto de vinculación alcanzado por la norma, el organismo o entidad en cuyo ámbito se desarrolle el respectivo procedimiento deberá adoptar al menos uno de los siguientes mecanismos: Pacto de Integridad; Testigo Social; Veeduría especial de organismo de control y/o Audiencia Pública, en los términos reglamentados por la Resolución de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° RESOLUCIÓN OA N° RESOL-2017-11-APN-OA#MJ, de fecha 19 de mayo de 2017.

Asimismo, mediante la Comunicación General ONC N° 76, del 19 de junio de 2017, este Órgano Rector fijó las siguientes pautas:

1. Los interesados que se pretendan incorporar en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) además de la información y documentación que deben completar y presentar de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC N° 64/16, deberán:

a) Completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en el portal Trámites a distancia (TAD) luego de realizar la pre-inscripción en COMPR.AR.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los datos que correspondan.

2. Los interesados que ya estuvieran incorporados en el SIPRO deberán:

a) Ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses”.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017. c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los datos que correspondan.

3. La obligación de manifestar con igual carácter que la declaración jurada obrante en el SIPRO está actualizada, se tendrá por cumplida con la sola presentación de la oferta.

4. En los procedimientos de selección que se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, COMPRAR, la obligación de presentar la “Declaración Jurada de Intereses” junto con la oferta se tendrá por cumplida una vez presentada y actualizada en el SIPRO.

5. En los procedimientos de selección que no se realicen por COMPR.AR, la “Declaración Jurada de Intereses” se deberá acompañar en cada oportunidad en que presenten ofertas, además de presentarla y actualizarla en el SIPRO.

Con el fin de suministrar la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017-, las unidades operativas de contrataciones deben:

a) Informar los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado;

b) A tal efecto deberán acompañar dicha nómina, en las convocatorias que remitan para difusión en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sistema electrónico de contrataciones, o bien en los procedimientos en que no se difunda la convocatoria adjuntarla en las invitaciones y en los pliegos.

En su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones, la ONC tiene la función de dictar **cursos de capacitación** a entidades y jurisdicciones sobre la aplicación de la normativa vigente en materia de contrataciones de la Administración Pública Nacional.

En virtud de ello viene desarrollando tareas de capacitación en ética y transparencia en contrataciones públicas. El esfuerzo de la prevención se ha ido centrando en la generación de mecanismos y herramientas orientadas a la transparencia en la toma de decisiones públicas, sobre el fundamento de que resulta imprescindible la creación de sistemas (COMPR.AR / CONTRATAR) que combinen la transparencia con la mejora en la eficiencia y la calidad de la gestión administrativa, lo cual permite optimizar y encauzar los procedimientos contractuales hacia una mejor gestión.

En razón de lo expuesto, se adjuntan a la presente los cursos de capacitación llevados a cabo durante el año 2018.

Asimismo, en relación a este punto resulta necesario destacar la sanción de la **Ley N° 27.401 estableció un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas**, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal; concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal y balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que aquí interesa, el artículo 22 del citado cuerpo legal prevé que las personas jurídicas comprendidas en dicho régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.

Agrega el artículo bajo mención que el Programa de Integridad que se exige deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.

A partir de ese marco conceptual, el artículo 23 de la referida Ley determina los elementos mínimos que un Programa de Integridad deberá contener y enumera también una serie de elementos, mientras que el artículo 24 contempla que la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, **será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que:**

- a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a Ministro; y
- b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto delegado N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos.

Resta señalar, al respecto, que mediante la Resolución de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN RESOL-2018-27-APN- OA#MJ se aprobaron los **LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY N° 27.401 DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS** que como ANEXO I forman parte integrante de la aludida resolución.

La Oficina Anticorrupción desarrolló y publicó una serie de recomendaciones para

fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas efectuadas en el marco de la emergencia por COVID-19 con el fin de robustecer la integridad en cada espacio institucional. En el marco de la emergencia sanitaria, estas recomendaciones tienen como objetivo fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia por el COVID-19. A través de la Resolución 5/20, se aprobaron y difundieron un conjunto de buenas prácticas que surgen del análisis de varios procesos de contrataciones públicas.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-32057444-apn-oapte_-_recomendaciones.pdf

Asimismo, el Decreto 558/1996 y sus normas complementarias y modificatorias, establecen que las compras y contrataciones del sector público nacional se deberán someter al control del **Sistema de Precios Testigo elaborado por la SIGEN**.

Tanto en el Plan Anual SIGEN 2018 como en el 2019, se han incluido en dos acápites del Mapa de Riesgo del Sector Público Nacional (publicado) lo relacionado a la integridad y lo relacionado a la integridad de las compras y contrataciones.

La Ley 27.275 (*"Ley de Acceso a la Información Pública"*) establece que los sujetos obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos: *"g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales, de las sociedades o empresas proveedoras"*.

Integridad y transparencia en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19

El mundo atraviesa una situación inusitada, una pandemia que ha obligado a los países de todo el mundo a tomar decisiones y adoptar políticas para hacerle frente. Es una crisis global que ha puesto a los Estados en el centro de la escena y con ellos la variedad de políticas adoptadas. Es una situación de total excepcionalidad que ha demandado por parte del Estado Nacional respuestas rápidas y extraordinarias cuya modalidad de implementación cobran relevancia y le imprimen una impronta propia a la gestión.

En el marco de la emergencia sanitaria, la Oficina Anticorrupción desarrolló una serie de recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia por el COVID-19. A través de la Resolución 5/20, se aprobaron un conjunto de buenas prácticas que surgen del análisis de varios procesos de contrataciones públicas.

Estas recomendaciones se encuentran publicadas en el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción y fueron difundidas a todos los ministerios nacionales, al PAMI y la ANSES. En línea con esas recomendaciones, el día 9 de junio la Oficina Anticorrupción, en conjunto con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Empleo y Gestión Pública de Jefatura de Gabinete y la Sindicatura General de la Nación y con la participación de la Oficina Nacional de Contrataciones, se llevó a cabo la primera edición del Taller virtual "Recomendaciones para Fortalecer la Transparencia e Integridad de las compras y contrataciones tramitadas en el marco de la Emergencia COVID-19" que apunta a transferir conocimiento en materia transparencia, políticas de integridad, acceso a la información y rendición de cuentas.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-32057444-apn-oapte_-_recomendaciones.pdf

En la esfera del **Ministerio Público Fiscal** el Plan de Transparencia Institucional determinó que el sistema de administración de justicia (del que participa el MPF) debe ser transparente en su gestión presupuestaria, en el manejo de las compras y contrataciones que realiza en ejercicio de sus prerrogativas administrativas.

En función de ello se elaboró un Régimen de Compras y Contrataciones para la Procuración General de la Nación, que fijó las normas básicas que se deben observar en los procedimientos de adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios de toda índole así como las obligaciones y derechos que de ellos emergen. Se contempló un sistema de comunicación de las contrataciones, de modo tanto de resguardar los derechos de los oferentes como de rendir cuentas a la comunidad.

Mediante **Resolución PGN N° 1107/14**, del 2 de junio de 2014, se aprobó un nuevo “Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Esta resolución buscó establecer mecanismos más transparentes, ágiles y eficientes en la gestión de los recursos económicos y financieros del organismo, adecuando los estándares a los estándares vigentes en ese momento para la Administración Pública Nacional en función de las necesidades del organismo.

En los considerandos de esta resolución también se tomaron en cuenta los compromisos asumidos al adherir la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sus ejes rectores son los principios de legalidad, transparencia, practicidad y sencillez de los procedimientos, modernización de la gestión y actualización tecnológica y de responsabilidad social en las contrataciones.

Con relación al principio de **legalidad**, la reglamentación delimitó los alcances del régimen, estableciendo de manera expresa los contratos comprendidos. Al mismo tiempo, también se incorporan los principios generales aplicables a la contratación administrativa previstos en las normas generales (Decreto n° 1023/01) y comúnmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia. Por último, la legalidad también se encuentra garantizada a través de la aplicación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

En cuanto al principio de **transparencia en las contrataciones**, la Resolución N° 1107/14 adoptó la publicidad de la totalidad de los actos administrativos emitidos en los procedimientos contractuales y de los pliegos licitatorios a emplearse, tanto en el Boletín Oficial de la Nación como en el sitio web institucional. La transparencia también se encuentra garantizada mediante el establecimiento de cuerpos específicos para la evaluación de ofertas y la recepción de bienes y servicios, asegurando el control por oposición entre instancias distintas a las intervinientes en el procedimiento de selección.

La Secretaría General de Administración Dirección Unidad Operativa de Contrataciones - Departamento de Compras y Contrataciones - Departamento de Contratos Inmobiliarios, es la unidad operativa para la gestión de las contrataciones dentro del MPF.

A través del sitio de Transparencia Activa del MPF (<<https://www.mpf.gob.ar/contrataciones/licitacion/>>) se puede acceder libremente a toda la información pública sobre las convocatorias y contrataciones en curso.

23. Párrafo 2 del artículo 9

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:

- a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
- b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
- c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;
- d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y
- e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El Presupuesto Nacional es la LEY anual que sanciona el Congreso de la Nación, donde planifica los ingresos que recibirá el Estado Nacional y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población.

El Presupuesto es una herramienta dinámica y flexible. Dado que es una estimación de ingresos y de gastos realizada en forma anticipada, pueden producirse situaciones que provoquen modificaciones durante el año. (Ej.: un desastre natural que requiera de fondos para atender la emergencia.)

Normativa relativa al Presupuesto

- Ley 24156: Disposiciones generales de la administración financiera y de los sistemas de control
- Ley 11672: Permanente de presupuesto - complementaria
- Ley N° 27275: Derecho de acceso a la información pública
- Decreto 79/2017: Reglamento general del acceso a la información pública para el poder ejecutivo nacional

La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del Sistema Presupuestario, conforme a lo establecido por La Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. La Oficina Nacional de Presupuesto interviene en la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los Presupuestos de la Administración Pública Nacional.

En el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto está disponible la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, correspondiente a cada ejercicio fiscal desde el año 2001, específicamente en la sección Presupuesto/ Leyes de Presupuesto, seleccionando el año de interés. <https://www.economia.gob.ar/onp/>

En la República Argentina la Constitución Nacional estipula que el presupuesto debe ser enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso antes del 15 de septiembre del año anterior al que se está presupuestando, para que este pueda ser analizado.

La sanción del presupuesto es la sanción de una LEY y por lo tanto debe cumplir con todos los pasos legales que esto requiere, cumpliendo las normativas vigentes y la constitución nacional.

Con la promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Ley Nº 24.156, se establece la normativa básica en la materia, en particular la que se relaciona con el Sistema Presupuestario del Sector Público Nacional.

A continuación se examinarán las normas presupuestarias a partir la Constitución Nacional:

La Ley Nº 24.156 y su reglamentación, y las que se refieren al presupuesto público en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, en la Ley Nº 24.629, de Reforma del Estado, en la Ley Nº 25.152, de Administración de los Recursos Públicos o de Solvencia Fiscal, y en la Ley Nº 25.917, de Responsabilidad Fiscal.

NORMAS LEGALES BÁSICAS

1. CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

La Constitución sancionada en 1853, para la Nación Argentina, y reformada en 1994, presenta los siguientes aspectos relacionados con el Sistema Presupuestario Público:

ARTICULO 4º: Se refiere a que el Gobierno Federal, provea los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional e indica, al efecto, sus principales fuentes del financiamiento.

ARTICULO 75: Mediante este artículo se establecen las facultades que se otorgan al Congreso Nacional. Tales facultades son varias y significativas, pero las expresamente referidas al presupuesto público son las siguientes:

En materia de recursos:

- Legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación (Inc. 1).

- Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias (Inc. 2).

Para un mayor detalle de la legislación vigente ver: Digesto de Normas de Administración Financiera del Sector Público Nacional. Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

- Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, bajo determinadas circunstancias (Inc.2).

- Instituir regímenes de coparticipación con las provincias (Inc. 2).

- Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado (Inc.3).

- Contratar empréstitos (Inc.4).

En materia de transferencias de competencias, servicios o funciones, éstas no se podrán

realizar si no existe la respectiva asignación de recursos (Inc.2).

En materia de gastos:

- Se indican las características que debe tener la distribución entre la Nación y las provincias, destacando que se debe efectuar tomando en cuenta la relación directa existente con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas (Inc.2).

- Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Nación (Inc.7).

- Se abre la posibilidad de acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas sean insuficientes para cubrir sus gastos ordinarios (Inc.9).

En relación a la Ley de Presupuesto anual:

Una de las atribuciones más importantes que corresponde al Congreso Nacional es la que se establece en el inciso 8 del artículo en análisis.

En efecto, en dicho inciso se otorga al Congreso la responsabilidad de fijar el presupuesto de la Administración Pública Nacional, determinando su periodicidad anual. De igual modo, se deja instituida la vinculación entre el presupuesto y el planeamiento al señalar que el presupuesto se debe formular considerando el programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas.

Ese mismo inciso establece que el Congreso aprobará o desechará la Cuenta de Inversión.

ARTICULO 85: Desde el punto de vista presupuestario, por este artículo se establece uno de los aspectos centrales del proceso presupuestario público, como es el control externo del Sector Público Nacional. Este control externo constituye una atribución propia del Poder Legislativo, siendo la Auditoría General de la Nación el organismo de asesoramiento técnico del órgano de control.

Dentro de las funciones específicas que se asignan a la Auditoría General de la Nación se encuentran las de controlar la legalidad, gestión y auditoría, tanto de la administración central como descentralizada, así como la de intervenir en la aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos, que corresponde al Poder Legislativo.

ARTICULO 99: En este artículo se señalan las atribuciones que se le asignan al Presidente de la República. En materia presupuestaria se destaca el inciso 10, que menciona la facultad de supervisión al Jefe de Gabinete de Ministros sobre las atribuciones que, en materia presupuestaria, contempla el artículo 100, que a continuación se analiza.

ARTICULO 100: En su inciso 1, atribuye al "Jefe de Gabinete de Ministros" el ejercicio de la administración general del país. Ello debe interpretarse en concordancia con el artículo 99, inciso 1, que dispone que el presidente de la Nación es el Jefe del Gobierno y responsable político de la administración general del país.

En lo específicamente referido a la administración presupuestaria, el Jefe del Gabinete de Ministros, además del manejo de los negocios de la Nación, que en forma general se le asigna, tiene la misión de remitir al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. De igual forma se le asigna competencia para hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional, Incisos 6 y 7, respectivamente.

OTROS ARTÍCULOS: La Constitución contiene una serie de artículos que, aún cuando no

expresan explícitamente su relación con el presupuesto, tienen que ver con éste toda vez que es aprobado por ley. Es el caso de los artículos 52, y 77 al 84 y 99, inciso 3, primer párrafo. Este último, se refiere a la promulgación de las leyes y a los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Así, en el artículo 52, se atribuye a la Cámara de Diputados, en forma exclusiva, la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Por su parte, en los artículos 77 al 84, se establecen normas relacionadas con el proceso de formación de las leyes y, siendo la de presupuesto una de ellas, el contenido de los artículos es fundamental, en especial en la fase correspondiente a la discusión y la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

2. LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (LEY Nº 24.156)

La base jurídica fundamental del proceso presupuestario se halla consagrada en el Título II, del Sistema Presupuestario, de la Ley Nº 24.156 y su Decreto Reglamentario (Nº 1.344/07)

Desde el punto de vista metodológico, los comentarios se harán considerando, en primer término, las normas presupuestarias contenidas en la ley mencionada, y luego, se analizarán los aspectos centrales de su reglamentación.

En los puntos que siguen, se hará un comentario general de las características de la ley en materia presupuestaria ya que en los diversos capítulos donde se analiza el proceso presupuestario se efectúa un análisis pormenorizado de dicha norma legal.

Ley genérica en materia presupuestaria

Como ocurre con la casi totalidad de las leyes, la de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es una Ley genérica, en el sentido de que en ella no aparecen detalles procedimentales. Es así como establece los aspectos estructurales básicos y generales, así como los elementos centrales que conforman el proceso presupuestario, diferenciando el correspondiente a la Administración Nacional del de las empresas públicas y entes públicos no comprendidos en la Administración Nacional. La ley se encuentra reglamentada mediante el Decreto Nº 1.344/07.

Ámbito de aplicación de la Ley

En sus artículos 1º y 8º, se determina el ámbito de aplicación de la ley, al indicar, de manera expresa, que el mismo es el Sector Público Nacional conformado por:

Administración Nacional, la que está integrada por:

- Administración Central
- Organismos Descentralizados (Incluidas las Instituciones de Seguridad Social)

Empresas públicas bajo sus diversas formas jurídicas:

- Empresas
- Sociedades del Estado
- Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria
- Sociedades de Economía Mixta

- Otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria.

El artículo 8º fue modificado incorporando los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, y Entes Públicos excluidos expresamente del Presupuesto Nacional (Art. 8º Ley Nº 25.827).

Es aplicable, además, en lo relativo a la rendición de cuentas, a las organizaciones privadas a las que se les acuerden subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.

El Presupuesto Público y su inserción dentro del Sistema de Administración Financiera Pública

La organización de la Administración Financiera, tiene un carácter sistémico. Es por esta razón, que los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad y los referidos al control, tanto interno como externo, se encuentran estrechamente interrelacionados, en cuanto a su normatividad, operatividad e información que generan, ello sin desmedro de las características particulares de cada uno. La integración de los sistemas está prevista en los artículos 5º y 7º.

El Decreto Nº 1.344/07 establece que las Secretarías de Hacienda y Finanzas conforman el órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Organización del Sistema Presupuestario Público

En el Título IV, se comentará la organización actual del sistema presupuestario público. En este punto sólo se reiteran, por su importancia, algunos aspectos centrales de tal organización previstos en la Ley:

El artículo 16 determina que sea la Oficina Nacional de Presupuesto el órgano rector del sistema presupuestario público nacional.

El artículo 18 de la ley, por su parte, establece que todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional integran el sistema presupuestario público, determinándose las funciones de dichas unidades en el Decreto Nº 1.344/07, antes mencionado.

Conceptos de entidad y jurisdicción

La Ley define, en el artículo 9º, los conceptos de entidad y jurisdicción.

Son jurisdicciones las siguientes:

a) Institucionales

- Poder Legislativo

- Poder Judicial

- Ministerio Público

- Presidencia de la Nación, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional,

b) Administrativo Financieras

- Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública

- Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del

Tesoro. En esta jurisdicción se incluyen los gastos originados por los compromisos asumidos por el Tesoro Nacional y que por sus características especiales no pueden asignarse a las jurisdicciones indicadas en la Ley.

En el artículo 9º de la ley, se define entidad como "toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio".

Periodicidad del presupuesto

En el artículo 10 de la ley se determina la periodicidad anual del presupuesto, al indicar que el ejercicio presupuestario comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

En el artículo 41, por su parte, se establece la caducidad del presupuesto al afirmar que las cuentas de recursos y gastos se cierran el 31 de diciembre del año presupuestario y que, con posterioridad a dicha fecha, no se podrán asumir compromisos ni devengarse gastos con cargo a ese ejercicio.

Continuidad en la ejecución

El principio de la continuidad presupuestaria se encuentra presente en varias normas de la ley.

No obstante, es el artículo 15 y el Decreto Nº 1.344/07 que lo reglamenta, en donde aparece expresamente señalado.

En tales normas se requiere que las jurisdicciones y entidades públicas, en cuyos presupuestos se contemplen créditos presupuestarios para contratar obras, bienes y servicios cuya ejecución exceda el ejercicio presupuestario, incluyan información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física.

En el Reglamento de la Ley se indica a las jurisdicciones y entidades públicas que deben remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto, en ocasión de presentar sus anteproyectos de presupuesto, información que contenga como mínimo: monto total del gasto, incidencia de éste en cada ejercicio fiscal y cronograma de financiamiento y de ejecución física.

Prórroga del Presupuesto

El artículo 27 señala que si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia al año anterior con los siguientes ajustes, que deberá introducir el Poder Ejecutivo en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados:

. En los Presupuestos de Recursos:

a) eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;

b) suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;

- c) excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;
- d) estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;
- e) incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.

. En los Presupuestos de Gastos:

- a) eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haber cumplido los fines para los cuales fueron previstos;
- b) incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;
- c) incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;
- d) adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

Estructura de la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional.

En la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se establece (Sección I del Capítulo II. "Del presupuesto de la Administración Nacional"), el contenido y las características de la ley de presupuesto general. En dicho capítulo se detallan los siguientes aspectos:

Artículo 19º. Determina, como estructura de la Ley de Presupuesto, la siguiente:

Título I: Disposiciones Generales

Título II: Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central.

Título III: Presupuesto de Recursos y Gastos de los organismos descentralizados.

A su vez, el Título I en el presupuesto se desagrega en capítulos referidos al Presupuesto de Gastos y Recursos; la Delegación de Facultades; las Normas sobre Gastos; las Normas sobre Recursos; los Cupos Fiscales; las Operaciones de Crédito de Público, etc.

Artículo 20º. Indica que las disposiciones generales que se incluyen en la Ley de Presupuesto, constituyen normas complementarias de las establecidas en la Ley de Administración Financiera y rigen para cada ejercicio.

Dichas normas deben ser las que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte, no pudiendo contener disposiciones de carácter permanente ni reformar o derogar leyes vigentes, crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. De igual forma, se incluirán, formando parte del Título I, los cuadros agregados con la visión global del presupuesto y de sus principales resultados.

El artículo en análisis fue reglamentado por el Decreto Nº 1.344/07, para incluir en las disposiciones generales las siguientes clasificaciones:

- Económica y por rubro de recursos.
- Por finalidad, función y clasificación económica de los gastos.
- Jurisdiccional y económica de los gastos.
- Económica y por objeto del gasto.
- Jurisdiccional y por finalidades y funciones del gasto.
- Por finalidad, función y objeto del gasto.
- Jurisdiccional del gasto, según la fuente de financiamiento.
- Cuenta de ahorro-inversión-financiamiento y sus resultados.

Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional

El artículo 55 de la Ley Nº 24.156 establece que la Oficina Nacional de Presupuesto deberá preparar anualmente el presupuesto consolidado del sector público, para su presentación al Poder Ejecutivo Nacional antes del 31 de marzo del año de su vigencia para su aprobación. Dicho Poder tiene que remitirlo posteriormente, al Congreso Nacional para su conocimiento.

Dicho Presupuesto contendrá como mínimo la siguiente información:

- a) Una síntesis del Presupuesto de la Administración Nacional;
- b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado;
- c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico;
- d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el Sector Público Nacional;
- e) Información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros;
- f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía.

3. LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO

Otra de las leyes que regulan los aspectos relacionados con el proceso presupuestario público es la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, ley de vieja data que, por costumbre legislativa, incorpora a través de las leyes anuales de presupuesto general de la Administración Nacional, una serie de artículos, en la medida que se considere que su vigencia deba superar la del ejercicio presupuestario.

Dicha ley fue parcialmente derogada por la aplicación del artículo 137, inciso c, de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Nº

24.156, en donde se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional la ordenación del texto no derogado de dicha Ley, aspecto que se cumple con la puesta en vigencia mediante Decreto Nº 1.812/93. La Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, con texto ordenado, continúa con las características de la derogada, en el sentido que se la modifica cada año con los artículos que el Congreso Nacional decida incorporarle. Cabe señalar que el último texto actualizado y ordenado es el Decreto Nº 1.110/05. Dicha norma incorpora un ordenamiento temático que facilita la búsqueda de los artículos que se agrupan en tres títulos, los que, a su vez, se dividen en capítulos. La estructura de la Ley es la siguiente:

Título I. Administración Financiera

Capítulo I. Sistema Presupuestario

Capítulo II. Sistema de Contabilidad Gubernamental

Capítulo III. Sistema de Tesorería

Capítulo IV. Sistema de Crédito Público

Capítulo V. Sistema de Control Interno

Capítulo VI. Seguridad Social

Capítulo VII. Personal y Salarios

Capítulo VIII. Recursos Públicos

Capítulo IX. Cupos Fiscales

Título II. Actividad Institucional del Estado Nacional

Capítulo I. Relación Nación - Provincias

Capítulo II. Empresas Públicas y Entes Residuales

Capítulo III. Creación de Fondos Fiduciarios

Capítulo IV. Universidades Nacionales

Capítulo V. Organización del Estado

Título III. Otros Aspectos del Funcionamiento del Estado

Capítulo I. Administración de Bienes

Capítulo II. Inembargabilidad de Fondos Públicos

Capítulo III. Caducidad de Derechos para Accionar contra el Estado

Capítulo IV. Artículos no Clasificados en los Capítulos Precedentes

Dentro de las normas permanentes incluidas en el texto ordenado, dentro del Capítulo I, se destacan:

Artículo 1º, mediante el cual se niegan los pagos de subsidios a instituciones de las que no se compruebe, previamente, su existencia y funcionamiento y que demuestren poder financiar el 25% de su presupuesto con recursos propios, ajenos al subsidio.

Artículo 2º, que prohíbe a las instituciones subvencionadas por el Estado, el uso de más del 50% de las sumas percibidas para la atención de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

Artículo 3º, en donde se establece el régimen de los gastos de carácter reservado y/o secretos y los organismos autorizados para ello.

Artículo 4º, mediante el cual se autoriza a los presidentes de la Cámaras del Congreso Nacional a reajustar los créditos de sus presupuestos, dentro del total de los créditos autorizados, debiendo al respecto comunicar a la Jefatura de Gabinete de Ministros las modificaciones que se fueren efectuando.

Artículo 5º, por el cual se autoriza al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional debiendo comunicar al Jefe de Gabinete de Ministros las modificaciones que se dispusieran, dentro del respectivo total de créditos autorizados.

4. LEY DE REFORMA DEL ESTADO

La Ley Nº 24.629 de Reforma del Estado, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 22 de febrero de 1996, contiene en su capítulo I un conjunto de normas vinculadas con la elaboración y ejecución del Presupuesto Nacional, que complementan lo previsto en la Ley Nº 24.156. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

i. En materia de formulación y presentación se contempla:

- elaboración de un anexo con la clasificación geográfica de los gastos;
- obligación del Poder Ejecutivo Nacional de elevar al Congreso de la Nación, antes del 30 de junio de cada año, un informe sobre los aspectos más relevantes que contendrá el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente;

ii. En materia de ejecución se prevé:

- obligatoriedad del Poder Ejecutivo Nacional de presentar la ejecución trimestral del presupuesto al Congreso Nacional, dentro de los treinta días de vencido el trimestre respectivo;
- toda ley que autorice gastos debe incluir el financiamiento de los mismos;
- obligación de reducir los aportes del Tesoro cuando se obtenga financiamiento proveniente de uso del crédito para gastos ya previstos en el Presupuesto.

5. LEY DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

La ley Nº 25.152, denominada Ley de Administración de los Recursos Públicos o de Solvencia Fiscal, contiene, entre otras prescripciones las referidas a los límites al gasto y déficit del Sector Público no Financiero, creación de organismos descentralizados y empresas públicas mediante la sanción de las leyes, celebración de acuerdos programas; instituye el Programa de Evaluación de Calidad del Gasto; crea el Fondo Anticíclico Fiscal; establece la información que debe contener el mensaje de remisión del Presupuesto General de la Administración Nacional, que envía el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación (el mensaje debe incorporar el Presupuesto de Divisas del Sector Público Nacional y un Presupuesto Plurianual de por lo menos tres años) y establece el carácter público de la información de carácter físico y financiero.

6. LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Ley Nº 25.917 consagra un Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal por medio del cual se homogeneizan las reglas fiscales y financieras para la Nación y las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en la medida de su adhesión, cuyo seguimiento, control y aplicación de sanciones se realizan a través de una única autoridad de aplicación conformada por un Consejo Federal que se integra con la representación de las jurisdicciones precedentemente mencionadas.

Éste se constituye en el ámbito federal por excelencia para consensuar y coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno y de las provincias entre sí. La Ley Nº 25.917 está estructurada en diversos capítulos que abarcan aspectos relevantes en materia de comportamiento fiscal.

El primero se refiere a la transparencia y a la gestión pública; fundamentalmente contiene normas acerca de la cobertura presupuestaria y la publicidad de los presupuestos, información que debe brindarse en forma actualizada y regular, utilizando metodologías para presentar estadísticas que sean comparables entre todas las jurisdicciones.

El segundo trata el gasto público, una de cuyas reglas es que el aumento nominal del gasto primario, excluidos los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito y los gastos de capital destinados al desarrollo social y económico financiado con cualquier uso del crédito, no debe superar la tasa de variación nominal del Producto Bruto, previéndose solamente excepciones para aquellas jurisdicciones que tengan un perfil sostenible de la deuda, es decir que deban hacer frente al pago de servicios en concepto de intereses y amortizaciones con montos que no superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. En tal caso, o cuando el incremento nominal de recursos supere el del PBI, la restricción aludida en el total del gasto primario, solo regiría para el gasto corriente primario.

El tercer capítulo está referido a los ingresos públicos y en él se indica como debe efectuarse su cálculo, teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria del ejercicio anterior, utilizando la metodología que se considere más conveniente técnicamente, debiéndose aclarar y justificar las modificaciones introducidas en la política tributaria. Asimismo, obliga a elaborar estimaciones del gasto tributario, originado en leyes que establecen desgravaciones o diferimientos impositivos.

El cuarto capítulo versa sobre un aspecto central, el equilibrio financiero; establece que tiene que transformarse en superávit en aquellas jurisdicciones donde el monto de la deuda origine servicios que superen el 15% de los ingresos corrientes netos de transferencias a municipios.

La obligación de ejecutar presupuestos superavitarios debe ser acorde con la implementación de planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda. Asimismo, tanto el Gobierno Nacional, como los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben constituir fondos anticíclicos a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos fiscales.

El quinto capítulo se refiere al endeudamiento, tanto de la Nación como de las provincias. Con relación al endeudamiento público se establece la coordinación necesaria para alcanzar un escenario de sustentabilidad que posibilite preservar la prestación de los servicios básicos.

En función de dicho objetivo se fijan pautas conforme a las cuales el Gobierno Nacional, las Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán hacer uso del crédito. En tal sentido, aquellas jurisdicciones cuyos servicios de la deuda superen el porcentaje anteriormente citado de sus recursos corrientes, tendrán severas restricciones para acceder a nuevos endeudamientos.

El capítulo sexto crea el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el que debe derivadas de su incumplimiento.

Se prevé que los Gobiernos Provinciales inviten a sus Municipios a adherir al régimen, ampliando así la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares, coordinando la difusión de la información fiscal relevante.

La Ley Nº 25.917 fue reglamentada por el Decreto Nº 1.731/04 y suspendida transitoria y parcialmente, al igual que la Ley 25.152, por la Ley Nº 26.530.

7. OTRAS NORMAS JURÍDICAS

Además de las leyes que se han comentado anteriormente, son muchos los decretos, resoluciones y actos administrativos dictados en materia presupuestaria, a los que puede recurrir consultando el Digesto de Normas de Administración Financiera del S.P.N. (Secretaría de Hacienda - Contaduría General de la Nación).

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

En la página web de la Oficina Nacional de Presupuesto (<https://www.economia.gob.ar/onp/>) se encuentra disponible información referida al proceso de adopción del presupuesto más reciente (correspondiente al año 2020).

Allí mismo aparece detallada toda la información referida al mensaje de remisión y Proyecto de ley de Presupuesto y todas la planillas anexas referentes a la composición del gasto por finalidad, función y carácter. Se detallan estadísticas sobre:

- Ejecución Presupuestaria
- Evaluación Presupuestaria
- Empresas públicas, fondos Fiduciarios y otros Entes
- Normativa, manuales e instructivos y soportes de información del Sistema presupuestario

Asimismo, el portal Presupuesto Abierto <https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/> pone al alcance de todos los ciudadanos información y datos en formato abierto, relativa al Presupuesto Nacional. En dicha plataforma se pueden visualizar tanto los gastos presupuestados y ejecutados como los recursos estimados y recaudados. El gasto se puede visualizar por jurisdicción, finalidad y función, objeto y ubicación geográfica. Se publican además, análisis transversales del presupuesto con perspectiva de género y niñez.

Por otra parte, es necesario mencionar la existencia de organizaciones no gubernamentales especializadas en materia presupuestaria y transparencia, tales

como:

- Asociación Argentina de Presupuesto público
- Asociación Internacional de Presupuesto público
- Asociación Civil por la igualdad y la justicia
- Iniciativa global de transparencia fiscal
- Alianza de gobierno abierto
- Asociación de contadores generales de la República Argentina
- Centro de implementación de políticas para la equidad y el crecimiento.

24. Párrafo 3 del artículo 9

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en este punto cabe señalar que las funciones mencionadas en el párrafo 3 son desarrolladas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Contaduría General de la Nación.

Información disponible en:

- <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/normativa>
- <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/marcoconceptualcontable>
- <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/manualcontabilidadgubernamental>
- <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/cuentainversion>
- <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/informesgestionciudadano>
- <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/informesgestiongerencial>

25. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

10. Información pública

26. Apartado a) del artículo 10

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción

de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

A partir de la sanción de la **Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública** <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm>, en septiembre de 2016, la República Argentina comenzó a dar un correcto cumplimiento a esta disposición.

El 29 de septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública que estableció, como órgano garante de la correcta aplicación de la norma en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados a la Agencia de Acceso a la Información Pública (en adelante, AAIP) <https://www.argentina.gob.ar/aaip>.

La AAIP es un ente autárquico que funciona con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y la protección de los datos personales.

El objetivo de la Agencia de Acceso a la Información Pública es, por un lado, aumentar los índices y una cultura de transparencia del sector público nacional mediante el ejercicio del acceso a la información pública; y, por el otro, aumentar una cultura de respeto a la privacidad mediante la protección de los datos personales.

La misión de la Agencia de Acceso a la Información Pública es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y una cultura respetuosa de la privacidad.

La Agencia está a cargo de un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional tras un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantiza la idoneidad

del candidato <<https://www.argentina.gob.ar/acceso-informacion-publica/selecciondirector>>.

Mediante la Resolución 274-E/2017

[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277131/norma.htm)

[279999/277131/norma.htm](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277131/norma.htm) del 19 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional propuso un candidato a director de la Agencia.

El 17 de agosto de 2017 se realizó la audiencia pública para evaluar sus antecedentes.

Estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros; representantes de los ministerios de Producción, de Justicia y Derechos Humanos, y del Interior, Obras Públicas y Vivienda; diputados nacionales, así como ciudadanos que se inscribieron para participar de la misma. Video disponible: <<https://youtu.be/8auzHmc3ujE>>

El 29 de agosto, en cumplimiento de la ley, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 685/2017 <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169788/20170830> que oficializó la designación del Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Estructura

En cumplimiento de las competencias y funciones de la AAIP (art. 24 inc. a de la ley 27.275) se elaboró el primer nivel organizativo de la estructura de la Agencia que se aprobó el 16 de noviembre de 2017 mediante la Decisión Administrativa JGM N°1002/17 <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/174813/20171116>. En tal sentido se creó la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública (DNAIP), la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) y la Dirección de Informática e Innovación (DII).

El 5 de diciembre de 2017 mediante la Resolución 1E/2017

<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/175758/20171206>

se elaboró y aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la AAIP, conformada por dos direcciones con Nivel 3 de Función Ejecutiva: Dirección de Políticas de Información Pública y Dirección de Protección de la Privacidad.

Presupuesto

En cumplimiento de las competencias y funciones de la AAIP (art. 24 inc. b de la ley 27.275) se elaboró el Presupuesto Anual. A posteriori, el art. 16 de la ley 27.431 <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305347/norma.htm>>, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2018, asignó la suma de \$43.368.000 solicitada por la AAIP.

Las asignaciones para su ejecución están dispuestas en la Decisión Administrativa 06/2018:

<https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2018/ley/pdf/decadm.pdf>

En el anexo correspondiente a la Agencia de Acceso a la Información Pública se puede consultar la asignación PARCIAL, según el artículo 1 de la Decisión Administrativa 06/2018, que se le otorgó a este organismo (<https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2018>).

Todo este trabajo de armado y fortalecimiento institucional se realizó durante los primeros meses de la entrada en vigencia de la Ley 27.275 ya que, sin personal, presupuesto y una designación transparente e independiente de su titular no hubiera

sido posible poner en funcionamiento un órgano garante como el establecido por la ley.

En paralelo con la creación de estructura y de institucionalidad, se pusieron en marcha los mecanismos para que la ciudadanía pueda cumplir con su derecho de acceso a la información pública en manos del Estado. A su vez, y trabajando en conjunto las dos direcciones de la AAIP para, también, cumplir con la protección de los datos personales.

Así, se establecieron los **procedimientos de solicitudes de acceso a la información** [<https://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica>](https://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica) en todos los sujetos obligados de la Ley 27.275 - mucho más numerosos que los que abarcaba el Decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública en el ámbito del PEN. A la vez, como la ley establece la instancia de reclamo ante un incumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados, se diseñó el trámite online y el circuito administrativo para resolver este incumplimiento [<https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-incumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica>](https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-incumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica)

Desde la entrada en vigencia de la ley (29 de septiembre de 2017) al 29 de septiembre de 2018 se realizaron más de 3000 solicitudes de acceso a la información pública a alguno de los sujetos obligados y más de 150 reclamos por incumplimiento. Los reclamos son resueltos por la Agencia y pueden terminar en una resolución de rechazo al reclamo o de intimación al sujeto obligado a que entregue la información. Pueden leerse todas las resoluciones tomadas por la AAIP en la web:

<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/reclamos-en-numeros>.

A su vez, de acuerdo a la Resolución AAIP N° 4 E/2018

<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178438/20180205>

[<https://www.boletinoficial.gob.ar/>](https://www.boletinoficial.gob.ar/) se publican los nombres de los organismos que no cumplen con las intimaciones de entregar información conforme a lo resuelto por esta Agencia de Acceso a la Información Pública en los términos del artículo 17 inciso b) de la Ley N° 27.275 [<https://www.argentina.gob.ar/que-organismos-no-cumplen-con-la-ley-de-acceso-la-informacion-publica>](https://www.argentina.gob.ar/que-organismos-no-cumplen-con-la-ley-de-acceso-la-informacion-publica)

Por otro lado, si los sujetos obligados entregan la información solicitada en los plazos de resolución de un reclamo, se realiza un informe consignando ello. Se pueden ver los informes de los casos en la web de la AAIP: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa>

Para una buena implementación de la ley es necesario que los sujetos obligados estén comprometidos en los principios que ella defiende. Para ello, la Agencia solicita a las máximas autoridades de los ministerios, los organismos descentralizados, las empresas públicas y otros sujetos obligados que nombren a un responsable de acceso a la información pública que vele por el cumplimiento de la ley en cada organismo. También, la AAIP realiza reuniones y capacitaciones con los responsables designados a fin de aunar criterios, establecer procedimientos claros y eficientes y resolver dudas que surjan del ejercicio de la implementación. Los datos de contacto de los responsables se encuentran en la página web para que la ciudadanía pueda contactarlos:

[<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables>](https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables)

Otra de las disposiciones novedosas de la Ley 27.275 es la **incorporación de las obligaciones de transparencia activa** que se describen en el artículo 32. Así, los sujetos obligados deben cumplir con la publicación proactiva, en formatos reutilizables, de cierta cantidad de información. La Agencia, junto con el Ministerio de Modernización, en su

momento, diseñó una sección que debe ser completada por todos los ministerios que componen el PEN. Así, en sus páginas web oficiales se debe publicar información relacionada con las autoridades, la nómina de personal, las escalas salariales, las declaraciones juradas, el presupuesto, los permisos y concesiones, entre otras cosas. Se puede ver un ejemplo de esta sección en <https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia>

A partir del 1 de junio de 2018 los organismos centralizados de la Administración Pública Nacional sumaron una sección de transparencia activa en sus sitios web y la Agencia comenzó a monitorear su cumplimiento en base a un índice realizado. Los resultados pueden verse aquí:

<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva> Esto es un trabajo en progreso ya que cada mes se relevan los datos de los ministerios para mostrar su nivel de cumplimiento.

La Agencia realizó un instructivo para mostrar cómo se debe cumplir con esta sección que fue adaptado también para organismos descentralizados que, a partir de septiembre de 2018, deben también publicar su información de transparencia activa.

La Ley nacional, además de crear a la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del PEN exige a los demás poderes del Estado que creen agencias con características similares a las de la AAIP. Así, se formó la Mesa de Coordinación Institucional que está integrada por representantes de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura. Su objetivo es coordinar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los distintos poderes de nuestro país.

Con el mismo espíritu la Ley dispuso la creación del Consejo Federal para la Transparencia cuyo fin es la cooperación técnica entre las distintas jurisdicciones y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Creado por el artículo 29 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, el Consejo Federal para la Transparencia está constituido por un representante de cada una de las provincias, un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ha sumado un representante del Poder Ejecutivo Nacional. La primera reunión del Consejo se realizó el 28 de junio de 2018 en el Salón Sur de la Casa Rosada. Asistieron representantes del Poder Ejecutivo Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

-2018: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-encuentro-del-consejo-federal-para-la-transparencia>

-2020: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-reunion-del-ano-del-consejo-federal-para-la-transparencia>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Para cumplir con estos objetivos la Agencia desarrolló en 2018 políticas y herramientas necesarias para que se implemente la normativa en materia de acceso a la información pública, se mejore la aplicación de las regulaciones en materia de protección de datos personales, se ejecuten acciones que promuevan mejores prácticas, medidas de

transparencia activa y mecanismos de provisión de información que garanticen el efectivo ejercicio del derecho a saber y el respeto del derecho a la privacidad.

Entre las principales acciones de la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública están:

1. Efectuar la gestión e implementación de la Ley N° 27.275, y sus Decretos Reglamentarios, en los procedimientos de acceso a la información pública:
<<https://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica>> y
<<https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-incumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica>>
2. Gestionar los sistemas de información pública y estadísticas de provisión de información, en el marco de la Ley 27.275: <<https://www.argentina.gob.ar/solicitudes-de-acceso-la-informacion-en-numeros>>
3. Asistir en la capacitación de los poderes públicos a nivel nacional, provincial y municipal en materia de acceso a la información pública y registro de audiencias por gestión de intereses: <<https://www.argentina.gob.ar/node/53172/noticias?nodo=53172>>
4. Realizar estudios y análisis de normas, procesos, resultados e impacto en materia de acceso a la información pública: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa>
5. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad e inclusión de las personas que enfrentan barreras y/o limitantes para el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información pública:
<<https://www.argentina.gob.ar/noticias/acceder-ahora-es-mas-facil>>
6. Organizar y desarrollar las actividades de difusión y capacitación respecto de la normativa vigente en materia de derecho de acceso a la información pública:
<<https://www.argentina.gob.ar/node/37875/noticias>>
7. Brindar apoyo administrativo y técnico al Consejo federal para la Transparencia:
<<https://www.argentina.gob.ar/consejo-federal-para-la-transparencia>> y
-2018: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-encuentro-del-consejo-federal-para-la-transparencia>
-2020: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-reunion-del-ano-del-consejo-federal-para-la-transparencia>

Resoluciones adoptadas

A fin de dar acabado cumplimiento a la implementación de la Ley 27.275 la AAIP publica en su página web y en el Boletín Oficial de la República Argentina las resoluciones sobre reclamos resueltos, criterios adoptados, procedimientos establecidos, etc.

En 2018 se publicaron:

- **Resolución 2/2018:** Reclamo sobre solicitud de acceso a la información pública de particular contra Gendarmería
<https://argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_aaip_02-2018.pdf>
- **Resolución 3/2018:** Reclamo sobre solicitud de acceso a la información pública de organización no gubernamental contra AFIP
<https://argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2018-3-apn-aaip_-_afip.pdf>
- **Resolución 4/2018:** Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en

la aplicación de la Ley N° 27.275

<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178438/20180205>

- **Resolución 5/2018:** Procedimiento para intervención de las direcciones nacionales de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en los casos en los que se vean afectados dichos derechos
<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178439/20180205>
- **Resolución 48/2018:** Nuevos criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275.
<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/189039/20180730>

Entre las principales acciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales están:

1. Recepción de denuncias por supuestas vulneraciones a la ley 25.326 y 26.951
2. Inscripción, renovación y actualización de bases de datos
3. Registro de documentos cuestionados.
4. Visado de consentimientos informados y proyección de sanciones por violaciones a las leyes 25.326 y 26.951.

Denuncias recibidas como autoridad de aplicación de la Ley 26.951- Registro Nacional “No Llame”

Durante el 2019 se registraron en el Registro Nacional No Llame:

- 41.952 denuncias.
 - Se iniciaron 21 expedientes nuevos.
 - Se establecieron un total de 30 resoluciones sancionatorias por el monto de \$63.356.460.
 - Se emitieron 17 resoluciones y 12 disposiciones mediante las cuales se rechazaron recursos administrativos.
- <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/registro-infractores>

Denuncias recibidas y acciones como Órgano de Control de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Los titulares de datos personales pueden presentar su consulta o denuncia ante la DNPDP, en caso que consideren vulnerado alguno de los derechos consagrados en la Ley N° 25.326: derecho de acceso, rectificación, actualización, supresión, o confidencialidad
<https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/derechos>

Asimismo, la DNPDP, conforme lo establecido por el art. 29 de la Ley 25.326, asistió y elaboró criterios interpretativos sobre el alcance y la aplicación, para casos específicos, de la normativa vigente en materia de protección de datos personales
<https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa>.

Por Disposición DNPDP N° 06 del 4 de julio de 2008 se estableció el “Procedimiento de Control en la Ejecución de los Formularios de Consentimiento Informado”. Esta normativa se encuentra en revisión por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Cuando es requerido, la DNPDP realiza el visado y revisión de los párrafos relativos a la confidencialidad a suscribir por los pacientes que se sometan a investigaciones médicas, con el fin que se respeten los principios de la Ley 25.326 y que el posterior tratamiento de los datos obtenidos por los laboratorios y profesionales intervinientes, se realice conforme a la normativa vigente. En el período cubierto en este informe se han aprobado setenta y nueve (79) formularios.

Registro Nacional de Bases de Datos

<https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/reclama>

La Ley N° 25.326, en su artículo 21, creó el Registro Nacional de Bases de Datos. Se aprobaron 584 formularios de renovación/inscripción/validación.

Durante 2019:

- Se inscribieron 3.672 responsables.
- Se registraron 3.275 bases privadas y 162 bases pública

Consultas vía mail/ telefónicas/ personales: En promedio 700 por mes.

<https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables>

Registro Nacional de Documentos Cuestionados.

<https://www.argentina.gob.ar/inscribir-un-documento-perdido-o-robado-en-el-registro-de-documentos-de-identidad-cuestionados>

Este registro tiene como función principal organizar y mantener actualizada una nómina informatizada en la que consten el número, tipo y ejemplar de los documentos de identidad que fueran denunciados por las autoridades públicas competentes y/o sus propios titulares con motivo de pérdida, hurto, robo o cualquier otra alteración.

Total: 1201 documentos denunciados.

Agrupadas según su origen:

Denuncias recibidas en soporte papel por comisarías y fiscalías: 267.

Denuncias recibidas por particulares damnificados: 125.

Denuncias recibidas por correo electrónico por comisarías y fiscalías: 809.

Durante 2019 se incorporaron 11.017 documentos en el Registro Nacional de Documentos cuestionados

Consultar la estadística completa del 2019 en:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe2019_web.pdf

Modernización de la gestión

Se implementaron dos trámites a distancia (TAD) vinculado con las áreas de la DNPD:

Documentos cuestionados <https://www.argentina.gob.ar/inscribir-un-documento-perdido-o-robado-en-el-registro-de-documentos-de-identidad-cuestionados> y

denuncias <https://www.argentina.gob.ar/denunciar-incumplimientos-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales>. Por otro lado, se trabajó con diferentes dependencias

del Ministerio de Modernización para readecuar los procedimientos de inscripción, modificación y baja de las bases de datos personales de carácter privado, público estatal

<https://www.argentina.gob.ar/registrar-bases-de-datos-personales-publicas> y público no estatal, en consonancia con las nuevas competencias asignadas por la Ley 27.275, el Decreto N° 746/2017 y su similar N° 899/17.

En el caso del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tal como se informó en los puntos precedentes, mediante la **Resolución PGN N° 914/13**, del 16 de mayo de 2013, el MPF creó el Plan de Transparencia Institucional del organismo que, entre otras cosas, plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso a la información y la participación ciudadana. Se tuvo en cuenta que tanto el derecho al acceso de la información pública como la transparencia son exigencias propias del sistema republicano de gobierno y su ejercicio constituye una valiosa herramienta para fortalecer las instituciones.

De esta manera, tanto por medio de programas de comunicación como de políticas

públicas, el MPF fue desarrollando distintos instrumentos para acercar a la población la información relevante sobre su tarea y rendir cuentas sobre ésta, así como también se buscó facilitar el conocimiento de derechos fundamentales y el acceso a la justicia para hacerlos valer.

Para esto, se renovó el portal web institucional del MPF <<http://www.mpf.gov.ar/>> y se creó el sitio Fiscales.gob.ar <<http://www.fiscales.gob.ar/>>, que incidieron en forma directa en la mayor calidad institucional.

Otro trabajo del MPF a través del cual se promueve el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, es el cuadernillo que colecciona los dictámenes de la Procuración General de la Nación sobre la materia, y su publicación en el sitio institucional de Internet. Estos cuadernillos, elaborados por la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, fueron pensados como una herramienta de trabajo para la tarea de los fiscales y de todos los integrantes del MPF; así como de aquellos interesados en profundizar sobre la incorporación de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno. Estas publicaciones recopilan, analizan y sistematizan los dictámenes más relevantes elaborados por la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años (desde el 2012), y se actualizan periódicamente.

Esta colección de cuadernillos fue inaugurada con la temática de libertad de expresión y acceso a la información pública. El mismo se encuentra disponible y puede ser consultado libremente en <<https://www.mpf.gob.ar/biblioteca/coleccion-de-dictámenes-de-la-pgn/>>

27. Apartado b) del artículo 10

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

[...]

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública se simplificaron los procedimientos administrativos para facilitar el acceso a la información pública en manos del Estado.

Una de las medidas tomadas fue la de enviar notas a las máximas autoridades de los ministerios, organismos descentralizados y empresas del Estado para solicitar el nombramiento o designación de un responsable de acceso a la información en concordancia con el artículo 30 de la Ley 27.275. Así, desde la página web de la AAIP se mantiene actualizada la lista de contactos de Responsables para que la ciudadanía pueda comunicarse ante cualquier duda o consulta con quienes deben velar por el cumplimiento de la norma en cada organismo:

<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables>>

En 2017, antes de la entrada en vigencia de la ley de Acceso a la Información Pública, aún con el decreto 1172/03 se diseñó el trámite de solicitud de acceso a la información pública para ser realizado por la **plataforma de Trámites a Distancia**:

<<https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico>>. Sin embargo, sólo podían acceder a este trámite virtual quienes tuvieran clave fiscal nivel 2, lo que resultaba restrictivo para muchas personas.

Así, desde la Agencia de Acceso a la Información Pública, se trabajó para adecuar el trámite y a partir de julio de 2018 se pueden realizar los trámites ante la AAIP solo ingresando el DNI lo que garantiza el principio de no discriminación e igualdad para todas las personas.

También, como la Ley incorpora la posibilidad de realizar una denuncia por incumplimiento ante la falta de respuesta o respuesta no satisfactoria por parte de los sujetos obligados, la AAIP diseñó el trámite **“Reclamo por incumplimiento”** que también se puede realizar de manera online con sólo registrar el DNI:

<<https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-incumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica>>

Las políticas adoptadas en materia de transparencia activa también constituyen simplificación en los procedimientos de búsqueda de información en manos del Estado o de entendimiento e interpelación de las decisiones que se toman en los poderes públicos. Así, todos los ministerios de la Nación tienen una sección en donde publican las obligaciones del artículo 32 en sus páginas de internet que la ciudadanía puede consultar antes de realizar una solicitud de información o para completar su búsqueda. Además, la AAIP controla los niveles de cumplimiento de esas obligaciones:

<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva>>

Otro aspecto destacable para el cumplimiento de esta disposición lo constituye un importante **paquete de reformas para la Modernización del Estado**, a saber:

Mediante el Decreto N° 434/16 se aprobó el Plan de Modernización del Estado, para la administración pública centralizada y descentralizada y para empresas y sociedades del Estado. El plan tiene como objetivo promover la eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios de la administración al ciudadano, y estructurándose en cinco ejes:

- i. plan de tecnología y gobierno digital;
- ii. gestión integral de los recursos humanos;
- iii. gestión por resultados y compromisos públicos;
- iv. gobierno abierto e innovación pública; y
- v. estrategia país digital.

Otras normas complementan dicho plan apuntalando sus objetivos. Este es el caso del Decreto N° 1273/16, que dispone que los organismos del Sector Público Nacional intercambien entre sí la información pública que produzcan o esté en su poder; o del Decreto N° 336/17, que aprueba los “Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos”.

En 2016 se implementó el “Sistema de Gestión Documental Electrónica”, una plataforma unificada que permite gestionar de manera integral la totalidad de documentos y actuaciones administrativas y facilita el acceso de los ciudadanos a la administración en forma remota. Entre los beneficios que aporta la utilización de este sistema se destacan: el progreso en la eficiencia de la administración pública; la promoción de la transparencia; la mejora en la comunicación y los servicios hacia la ciudadanía; la estandarización de todos los procedimientos de gestión de gobierno; y la despapelización de la administración pública.

Con el objetivo de agilizar la migración del papel hacia la Gestión Documental Electrónica se ha puesto en funcionamiento el Centro de Digitalización Documental (CDD). Dicho centro procesa millones de imágenes digitales por mes para todo el PODER EJECUTIVO NACIONAL y brinda asesoramiento, capacitación y entrenamiento para todos los organismos que así lo requieran.

El Decreto N° 1063/2016 habilitó la implementación de medios electrónicos centralizados para la gestión de transferencias y asistencias, mediante los módulos “Gestor de Asistencias y Transferencias” (GAT) y “Registro Integral de Destinatarios” (RID), componentes del Sistema de GDE, para facilitar y transparentar las transferencias de recursos monetarios y no monetarios realizadas en el marco de las políticas sustantivas que desarrollan los distintos organismos públicos. El

mismo Decreto aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que funciona como un medio de interacción del ciudadano con la administración que le permite a aquél remitir presentaciones y recibir notificaciones por medios electrónicos.

A lo anterior se sumó el módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM), a través del Decreto N° 1306/16, que permite cargar y actualizar la información contenida en un registro por medios electrónicos y administrar el legajo de documentos que respaldan dicha información. Esto es relevante ya que en el Sector Público Nacional existe una gran cantidad de registros que fueron creados por diferentes normas de acuerdo a la actividad específica a la que se refieren, lo cual implica que cada una de las entidades y jurisdicciones registre de manera aislada al solicitante, generando para la administración duplicidad e inconsistencias de registros, además de su desactualización. Esta herramienta permite una mejor gestión de la información, volviendo a los registros administrativos más accesibles para su control y posibilitando su actualización permanente.

La plataforma TAD facilita la interacción con el Estado a empresas y ciudadanos, y ya procesó más de dos millones de solicitudes de CUATROCIENTOS TREINTA MIL (430.000) usuarios.

La plataforma permite hacer más de NOVECIENTOS (900) trámites. Se hizo un estudio comparativo a partir de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL (351.000) trámites ya finalizados y los resultados demuestran que TAD permite ahorrar más de la mitad del tiempo respecto del sistema tradicional (presencial y en papel) por mesa de entrada (Carta de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS #11 - Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, abril 2018).

A noviembre de 2020 se pueden realizar más de 2100 trámites a distancia.

Desde mediados de 2016, hasta diciembre de 2018 el sistema procesó NOVENTA Y DOS COMA NUEVE (92,9) millones de documentos, creados por más de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL (263.000) usuarios registrados.

Por su parte el Decreto N° 29/18 aprobó la implementación del sistema SUBASTAR, que permite realizar en forma electrónica los procedimientos de subasta pública que realiza el Sector Público Nacional, y de esta manera -entre otras operaciones- dotar de mayor transparencia y accesibilidad a las ventas de bienes prescindibles que realiza el Estado.

Este conjunto de sistemas transversales se ven reforzados por el Decreto N° 733/18 que prevé la tramitación de documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos que realice el Estado Nacional se realicen en forma digital completa, remota, simple, automática e instantánea, así como buscar el cumplimiento del principio de no requerir al administrado dos veces la misma información o documentación.

La digitalización ha permitido mejorar la accesibilidad a la base de datos con toda la historia de publicaciones del Boletín Oficial incorporando herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar la búsqueda y acceso a la información. Además, las ediciones electrónicas del BORA se certifican mediante la utilización de la Red Blockchain Federal Argentina.

Normas de simplificación, modernización y desburocratización:

En junio de 2018 se sancionaron tres importantes leyes destinadas a la simplificación, la modernización y la desburocratización de la administración para favorecer a los sectores productivos y de infraestructura.

La Ley N° 27.444 se concentra en aspectos de Desarrollo Productivo de la Nación y tiene por objetivo dinamizar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y las sociedades comerciales, a la vez que promueve su crecimiento por medio de créditos y otras herramientas financieras, fiscales y jurídicas.

En ese mismo sentido se sancionó la Ley N° 27.445 sobre la simplificación y desburocratización para desarrollar la infraestructura, que agiliza y promueve el impulso de actividades portuarias, la aviación civil, y la mejora del tránsito y seguridad vial dentro del país.

Por su parte, se aprobó la Ley N° 27.446 que establece, entre otras medidas, la validez probatoria de los documentos oficiales firmados digitalmente en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica (GDE) y en el Sistema de Administración de Documentación Electrónica (SADE) y los equipara con los formatos tradicionales. Además, con el fin de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dota de nuevas herramientas a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF).

Finalmente, el Decreto N° 891/17 establece las denominadas Buenas Prácticas en materia de Simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones. Dicho decreto determina que las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión. También propone una mejora continua de procesos a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios.

Información adicional disponible en:
<<https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica>>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Algunos de los trámites que se han simplificado desde la entrada en vigencia de la Ley 27.275 y la puesta en marcha de la Agencia de Acceso a la Información Pública:
<<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/tramites>>>.

Informes de gestión:

Asimismo, en este punto es deseable destacar que la República Argentina publica una gran cantidad informes de manera periódica sobre situaciones de prevención y control de riesgos corrupción en la administración pública.

Por su parte la Oficina Anticorrupción confecciona y publica desde su creación por ley en el año dos informes de gestión cada año: el Informe semestral y el Informe anual, ambos disponibles en: <https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/informes-de-gestion>

Además, nuestro país reporta a diversos mecanismos de seguimiento de implementación

de disposiciones relativas a convenciones internacionales contra la corrupción, trabajo del cual surgen informes periódicos sobre el estado de situación y los avances de las políticas anticorrupción a nivel nacional lo cuales son publicados tanto en las páginas web de dichos organismos (UNCAC; MESICIC, Working Group en Bribery, Estudio de Integridad de OCDE etc) como en el apartado de actuación internacional de la O.A.(<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/actuacion-internacional>).

De igual modo, en su carácter de organismos de control la auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), hacen públicos sus informes, estableciendo procedimientos pormenorizados para su planificación, redacción, aprobación y publicación. Ver en: www.agn.gob.ar y www.sigen.gob.ar

De acuerdo a lo establecido en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (artículo 24 - inciso j), la Agencia publica anualmente su Informe de Rendición de Cuentas de Gestión. <https://www.argentina.gob.ar/aaip/informe-gestion>

28. Apartado c) del artículo 10

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

[...]

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El acceso a la información pública es una de las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para, entre otras cosas, controlar a la administración pública. Ello trae consigo, entonces, evitar los riesgos de corrupción por parte de los poderes públicos al exponer mucha información de áreas sensibles (por ejemplo, contrataciones de obra pública o de personal). Así, la publicación de los informes de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa
<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva>> constituye una ventana en la que la ciudadanía puede encontrar mucha información para poder ejercer un control de los actos de gobierno de manera acabada y, así quizá, prevenir actos de corrupción. <https://www.argentina.gob.ar/aaip/informe-gestion>

También, a partir del tablero de control sobre la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública por parte de los sujetos obligados con sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que se encuentra publicado en la página de la AAIP se puede ver la totalidad de los expedientes con algunos datos mínimos respecto a la solicitud producida, y el estado de los mismos, a la vez que saber el promedio de días en que un organismo tarda en responder una solicitud y las resoluciones de la Agencia por materia y por organismo reclamado. Esta actualización se realiza de manera automática lo que ayuda a evitar la discrecionalidad en los reportes manuales.

De acuerdo a la Resolución AAIP N° 4 E/2018
<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178438/20180205>
<<https://www.boletinoficial.gob.ar/>> se publican los nombres de los organismos que no cumplen con las intimaciones de entregar información conforme a lo resuelto por esta Agencia de Acceso a la Información Pública en los términos del artículo 17 inciso b) de la Ley N° 27.275: <<https://www.argentina.gob.ar/que-organismos-no-cumplen-con-la-ley-de-acceso-la-informacion-publica>>

La **Sindicatura General de la Nación (SIGEN)** expone anualmente el **Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional (SPN)**, el cual está orientado a contribuir en la definición de la estrategia de control, como así también apoyar la coordinación de las actividades de control y la supervisión que programen los componentes del Sistema de Control Interno. En ese sentido, se elaboró el Mapa de Riesgos correspondiente al año 2018 para definir la

estrategia de control para el año 2019.

La metodología implementada a partir del año anterior permite obtener información de sustancial utilidad para planificar auditorías con un enfoque basado en riesgos. Para ello, se redefinieron los formularios en el Sistema Mapa de Riesgos (SMR) con el objeto de obtener una mayor cantidad de datos para su análisis posterior.

Auditorías basadas en riesgo:

En la elaboración del Mapa de Riesgos, se tuvieron en cuenta los 8 grandes Objetivos del Gobierno Nacional y las 100 iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes organismos y entes de la Administración Pública Nacional, en tanto constituyen los actuales desafíos del Estado Cabe destacar que dichos Objetivos se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), entendiendo que en ambos casos el propósito es propender al desarrollo económico, promover el desarrollo humano y social y fortalecer las instituciones del País. Tal como se señala desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Objetivo de Gobierno de Desarrollo Humano Sostenible es el de mayor número de asociaciones con los ODS de Naciones Unidas.

En su carácter de órgano rector del Sistema de Control Interno, la SIGEN incorpora las buenas prácticas, las innovaciones y los avances tecnológicos actuales que contribuyen al logro de una mejora en sus actividades, lo cual impacta favorablemente en los organismos/entes involucrados. En este marco, es dable entender al control interno como un sistema donde las partes integran el todo: la responsabilidad de las autoridades superiores, la coordinación entre las actividades de la SIGEN y el accionar de las Unidades de Auditoría Interna. Todo ello, otorga una visión integral e integrada del SPN. Entre otras fuentes, la implementación y seguimiento de las acciones correctivas resultantes de las actividades de control y supervisión, y la realización anual de una evaluación de riesgos sobre el SPN, permiten identificar organismos y aspectos que requieren especial atención, haciendo foco en las causas y facilitando la optimización de recursos.

La gestión de riesgos supone considerar la amplitud de eventos potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos. A continuación se mencionan algunas consideraciones sobre la Gestión de Riesgos:

- Es un proceso interactivo que debe contribuir a la mejora organizacional a través del perfeccionamiento de los procesos.
- Puede ser aplicada a todos los niveles de una organización, es decir, en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales.
- También puede ser aplicada a proyectos específicos, para sustentar decisiones o para administrar riesgos.
- Para cada fase del Proceso de Gestión de Riesgos deberían mantenerse registros adecuados, suficientes como para satisfacer a una auditoría externa o una certificación independiente.
- No sólo considera la identificación y tratamiento de riesgos, sino también las oportunidades que contribuyan al logro de los objetivos.
- La aplicación del marco teórico del Proceso de Gestión de Riesgos siempre debe

adecuarse a la entidad y al sector al que ésta pertenece.

La SIGEN coordina sus actividades orientándolas a lograr que la gestión del SPN alcance los 5 objetivos de gobierno de una manera más eficaz, eficiente y transparente, enfocando sus esfuerzos en el adecuado empleo de sus recursos en el marco legal vigente. Disponer del Mapa de Riesgos del SPN permite a la SIGEN y a las UAIs, contar con una herramienta de sustento objetivo para la planificación de las actividades y la afectación de recursos para el desarrollo de las distintas tareas, permitiendo una mejor focalización en aquellos aspectos de mayor riesgo y distribuir de forma óptima los recursos, sin descuidar el universo de control. El propósito es enfocarse hacia una función preventiva y de apoyo al proceso de toma de decisiones, a fin de cumplir con la misión, los objetivos y las metas institucionales. Por otra parte, el Mapa de Riesgos está relacionado con la Matriz de Riesgos del SPN, actualmente en desarrollo, mediante la cual se establece y registra una línea de base por objetivos de cada organismo/ente y, a su vez, los planes de mitigación que se propongan por parte de las máximas autoridades para tratar los riesgos que pudieran impactar en el cumplimiento de los objetivos de Gobierno.

Definición de Riesgo: La Definición de Riesgo según la Norma ISO 31.000 es la siguiente: “Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.”

En tal sentido, se entiende que el riesgo es todo evento contingente que, de materializarse, puede impedir o comprometer el logro de los objetivos. Se trata de un proceso interactivo que debe favorecer el progreso de la organización, mediante el perfeccionamiento de los métodos tendiendo al alcance de los objetivos.

Al respecto, se definen los diferentes parámetros a considerar en el presente informe, del modo siguiente:

Impacto: consecuencias potenciales que puede provocar en la organización la materialización del riesgo. Resultado de un evento que afecta la consecución de los objetivos.

Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo aunque este no se haya presentado nunca.

En el contexto de estas variables, el análisis de riesgo, proporciona la base para su valoración y para las decisiones a tomar respecto a las alternativas de tratamiento del mismo; siendo el uso sistemático de la información disponible un elemento indispensable para comprender la naturaleza y el nivel de riesgo.

En general, dicho nivel, consiste en determinar con qué frecuencia o probabilidad puede ocurrir un evento, y la valoración del impacto de sus consecuencias.

Riesgo = Probabilidad x Impacto

Elaboración del Mapa de Riesgos: La elaboración del Mapa de Riesgos es anual y considera como riesgo principal a aquel relativo al incumplimiento de los objetivos del SPN, ya sean globales o específicos, impactando en la misión de cada ente. El resultado del mismo brinda una calificación de riesgo por organismo el cual se expone en una matriz general de riesgo del SPN. Al adoptarse como nivel de análisis el Sector Público Nacional en su conjunto, dicho “mapeo” implica considerar la totalidad de las funciones

asociadas a la actividad gubernamental y el universo de las entidades que lo integran.

De acuerdo a las características del universo de control de SIGEN y de la organización de las actividades propias del control, a fines de su tratamiento en el Mapa de Riesgos, los entes se desagregan en los siguientes grupos principales:

- Entes del Estado Nacional
- Empresas y Sociedades del Estado Nacional
- Empresas con participación mayoritaria del Estado Nacional
- Empresas con participación igualitaria o minoritaria del Estado Nacional
- Empresas en liquidación

El grupo Entes del Estado Nacional incluye a la Administración Central, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social, entes no incluidos en el Presupuesto de la Administración Nacional, entes interjurisdiccionales y las Universidades Nacionales.

La definición de unidad de análisis o ente en la administración central se acota al concepto de independencia en el manejo de fondos y/o diversidad temática. La independencia en el manejo de fondos está asociada a la existencia de un Servicio Administrativo Financiero (SAF).

Complementan el grupo Entes del Estado Nacional, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social incluidos en el Presupuesto de la Administración Nacional, como así también otros entes del Sector Público Nacional no incluidos en el Presupuesto, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales y los organismos interjurisdiccionales como son el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de Planificación.

El proceso de elaboración del Mapa de Riesgos comprende las etapas de estimación del impacto, determinación de la probabilidad, e identificación del riesgo; en base a la información obtenida a partir de los datos relevados mediante diversos cuestionarios, de acuerdo al tipo de ente:

1. Datos Generales. Contexto Interno y Externo
2. Evaluación del Sistema de Control Interno
3. Gobierno Societario (de corresponder)
4. Ambiente de Integridad/Anticorrupción
5. Ambiente de Integridad de Compras
6. Datos Complementarios.

Cabe señalar que los cuestionarios 1 a 5 refieren a la probabilidad de ocurrencia y el cuadro de "Datos Complementarios", se utiliza para el cálculo del impacto.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Información adicional sobre el Mapa de Riesgos del Sector Pública Nacional disponible en:

<<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mapa-de-riesgos-2018-spn.pdf>>

29. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público

30. Párrafo 1 del artículo 11

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En relación a las medidas que refuerzan la integridad en la esfera del Poder Judicial en la República Argentina, con respecto a la conducta de los miembros del poder judicial, debe tenerse en cuenta primeramente los preceptos contenidos en los artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional, los cuales se refieren a la posibilidad del juicio político frente a la mala conducta de los jueces, o delitos en el ejercicio de su función, así como artículos 114 y 115 que determinan la creación y competencia del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial.

Todo sistema jurídico es progresivo y perfectible, pero en lo que refiere a las conductas de los integrantes del poder Judicial de la Nación se cuenta con un Reglamento para la Justicia Nacional (Acordada del 17/12/1952 y sus modificaciones) dictado por la corte suprema de Justicia de la Nación. Dicho reglamento enumera y advierte una serie de deberes y obligaciones, especialmente en su artículo 8, y resulta equiparable básicamente a un Código de Ética Judicial. Por supuesto data de muchos años atrás, pero fija reglas claras y elementales, omnicomprensivas para todos los magistrados, funcionarios e incluso empleados judiciales.

Más recientemente, la Ley 24937 resultó modificada por la 26080, que regula el régimen sancionatorio de los jueces, de competencia exclusiva del Consejo de la Magistratura, y en el Artículo 14 enumera las conductas consideradas faltas disciplinarias.

En la mencionada Ley 24937 y sus modificatorias se asigna al Consejo de la Magistratura la potestad de recibir e instruir denuncias contra magistrados y de abrir el proceso de remoción ante el Jurado -artículo 7° inc 7-.

En su título II y a partir del artículo 21 abarca la constitución y funciones de este jurado de enjuiciamiento de magistrados, el cual debe llevar adelante el proceso de remoción en plazo improrrogable de 180 días, dentro del cual se decide la remoción o reposición en el cargo del juez acusado.

En el artículo 25 se enumeran, de forma orientativa más no taxativa, diversas causales de mal desempeño o mala conducta, las que resultan ser más amplias y son justificadas en cada caso particular en el marco del juicio de responsabilidad política tramitado por el Jurado.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de la Magistratura ha puesto de

manifiesto mediante algunos de sus fallos la conveniencia de incorporar como legislación interna los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial” y el “Código Iberoamericano de Ética Judicial”, a fin de proporcionar mayor confianza a la sociedad, que en definitiva es la destinataria de las conductas y decisiones de los integrantes del poder judicial.

En lo referente al **procedimiento de selección de magistrados**, se describirán a continuación los recaudos adoptados, en cuanto a mecanismos de Transparencia, por la normativa (Ley 24.937 y sus modificatorias) y los reglamentos aplicables (Reglamento de Concurso (R.C), Resolución 7/14 y sus modificatorias).

Inscripción:

Generada una vacante dispone la normativa que se deberá sortear el jurado que intervendrá en la sustanciación de la vacante (art 2° R.C.). El sorteo se realiza mediante un sistema informático, sometido a auditoría permanente de la Dirección general de tecnología (DGT), conforme los parámetros indicados en la ley y el reglamento.

Integrado el jurado y llamado el respectivo concurso se abre un período de inscripción, vencido el cual la Comisión controla el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los inscriptos; controlándose que no tengan condena penal firme por delito doloso, procesados por delito doloso, inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, excluidos de la matrícula profesional, et. (arts 16 y 17 RC)

Concluido el control se publica la lista de inscriptos abriéndose un período de 5 días hábiles para impugnar a los postulantes en cuanto a su idoneidad para el cargo (art 19RC).

Sustanciación del examen de oposición (art 31 y 32 RC):

En esta etapa se extreman los recaudos de seguridad de la prueba en sí como la identidad/anonimato de los participantes.

Los exámenes que propone el jurado se reciben en sobre cerrado, con la firma del o los jurados que lo representan en la Secretaría de la comisión y se reservan en caja fuerte hasta el momento del sorteo del caso a la hora del inicio del examen.

Los postulantes rinden en computadoras provistas por el Consejo, sin conexión a internet y con la plantilla del examen instalada, identificada con un número.

Terminada la prueba se reciben los exámenes papel y se colocan en un sobre cerrado y separado de las fichas de identificación personal, depositándose en una caja fuerte de la Comisión hasta el momento de la recodificación de cada examen.

En el procedimiento de codificación se reemplaza la clave numérica con la que rindieron los postulantes por una alfabética, remitiéndose copia a los jurados, para la corrección de los exámenes, identificados por esta nueva clave.

Vista de Impugnaciones (art 37, 38 y 39 RC): Elaborada la calificación por el jurado y los antecedentes por el Consejero Precalificador, el Presidente y el Secretario, con el procedimiento establecido por el reglamento de concursos y la resolución 116/18, proceden a develar las claves alfanuméricas y a identificar los postulantes mediante sus fichas personales y asignarles las notas correspondientes, como las del resto de los postulantes que realizaron el examen de oposición

Ternas: (arts 40 a 44 RC) vencido dicho plazo e informadas las impugnaciones por la

subcomisión interviniente (aprobado dicho informe en Comisión) se cita a entrevistas personales a un número suficiente de candidatos, conforme las vacantes del concurso que se trate. Previo a las mismas se realizan exámenes de aptitud psicológica y psiquiátrica a cada uno de ellos. En estas entrevistas se requiere a los postulantes, bajo juramento, que actualice los antecedentes penales -certificado de reincidencia- de los ternados.

Las resoluciones, los dictámenes e informes (con excepción del informe del jurado por estar codificado) producidos durante el proceso de selección, son publicados en la Página web del Poder Judicial de la Nación; como asimismo, los cv de los postulantes y de los jurados que intervienen en los distintos concursos.



REFERENCIAS

SORTEO

Art. 1. Confección de los listados de jurados.

Art. 2. Sorteo e integración de jurados

Art. 3 y 4. Notificación del sorteo a los jurados titulares y suplentes

LLAMADO A CONCURSO

Art. 5. Llamado a Concurso, publicidad y difusión

Art. 6. Plazos de inscripción y fechas de pruebas de oposición

Art. 49. Convocatoria a concursos con anterioridad a la producción de vacantes

INSCRIPCIÓN

Art. 21 al 24. Recusación y remoción del Jurado

Art. 25 al 28. Convocatoria a Jurados

CONVOCATORIA A JURADO

Art. 7. Acreditación de Identidad

Art. 8. Requisitos legales y reglamentarios

Art. 9. Aceptación de las pautas del reglamento y modo de comunicación del proceso de concursos

Art. 10 a 13. Datos y certificación a incorporar al legajo.

Art. 14. Registro de Antecedentes de Aspirantes

Art. 15 al 17. No admisión de antecedentes fuera de plazo y motivos de inscripciones a las que no se les de curso

Art. 18. Acta de inscriptos

Art. 19. Publicación del listado de inscriptos y sus cvs. Plazo para impugnaciones a la idoneidad

Art. 20. Resolución de las impugnaciones

Art. 50. Inscripción de magistrados: plazo mayor a tres (3) años desde la toma de posesión del cargo.

PRUEBA DE OPOSICIÓN ESCRITA Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES

Art. 30. Etapas de procedimiento ante la Comisión

Art. 31. Prueba de oposición escrita. Confirmación de asistencia al examen. Temarios y Casos presentados por el jurado

Art. 32. Examen (modalidad, anonimato, etc)

Art. 33. Puntaje prueba de oposición y plazo de corrección

Art. 34. Sorteo de Consejero relator

Art. 35. Pautas correctivas para evaluación de antecedentes

Art. 36. Acta de puntaje de antecedentes

ENTREVISTAS

PERSONALES

Art. 37. Orden de mérito preliminar (antecedentes mas oposición)

Art. 38. Impugnaciones

Art. 39. Sorteo de Subcomisión para resolver impugnaciones

Art. 40 y 41. Convocatoria a entrevistas y dictamen

Art. 42. Examen psicológico y psicotécnico

Art. 43. Causales de exclusión

Art. 47. Concursos múltiples (ampliación de convocatoria a entrevistas y ternas vinculantes)

APROBACIÓN DEL INFORME Y ELEVACIÓN DE LA TERNA AL PLENARIO

Art. 44. Dictamen con la terna

AUDIENCIA PÚBLICA

Art. 45. Convocatoria del Plenario

Art. 46. Decisión del Plenario

Art. 48. Listas complementarias

ELEVACIÓN DE LA TERNA Y DESIGNACIÓN

Ley 24.937 Art. 7 inc. 10. Facultad del Plenario (aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados)

Poder Judicial y Participación Ciudadana:

Con respecto a medidas que refuerzan la integridad del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación ha impulsado normativa innovadora y una serie de iniciativas que ofrecen mecanismos de participación abiertos a la ciudadanía.

- **Plenarios, Comisiones y Audiencia Pública Periódica de Información**

Los Plenarios del Consejo y las reuniones de las Comisiones, son abiertas al público. La agenda de encuentros y los órdenes del día se publican en la página web del Consejo (www.consejomagistratura.gov.ar).

La audiencia pública es una instancia de divulgación, que se lleva a cabo anualmente en distintos puntos del país, con el objetivo de dar a conocer las tareas realizadas en el Consejo. Los ciudadanos tienen la oportunidad de participar y realizar preguntas que son respondidas por los Consejeros.

- **Cocreación de metas de gobierno abierto**

El Consejo forma parte del Plan de Acción de Argentina frente a la Alianza para el Gobierno Abierto. La iniciativa implica trabajar junto a la sociedad civil para desarrollar e implementar reformas de gobierno abierto, que se traducen en metas concretas en el marco de planes de acción que son presentados anualmente.

- **Selección de magistrados**

Impugnación a candidatos: Una vez inscriptos los participantes al concurso, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial publica el listado con sus respectivos currículum vitae en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura y se habilita el plazo para las impugnaciones respecto de la idoneidad de los postulantes. La impugnación es una instancia y un espacio abierto a la ciudadanía que está contemplado en el reglamento.

Entrevistas y audiencias: A medida que avanza el concurso, se realizan las entrevistas personales a los candidatos que hayan aprobado instancias de evaluación previa. Las entrevistas son a puertas abiertas, es decir, que cualquier persona puede concurrir a presenciarlas. Posteriormente, tienen lugar las Audiencias Públicas en el Plenario del Consejo a los ternados en los concursos, en las cuales se permite asimismo la participación de los presentes. La Comisión de Selección publica de forma actualizada información sobre el estado de avance de los concursos, nuevos llamados, resoluciones, curriculums de los jurados, etc.

- **Denuncias a magistrados**

Cualquier persona puede realizar una denuncia contra un magistrado que considere que haya incurrido en una falta disciplinaria o una causal de remoción.

Autonomía financiera del Poder Judicial:

En el caso del Poder Judicial de la Nación, esta situación se rige por la ley 23.853 (1990), la cual establece que su presupuesto debe ser atendido con cargo a las rentas generales y con recursos específicos propios del citado poder y, además, que los recursos de "Rentas generales" se conformarán con el equivalente del tres y medio por ciento (3,5 %) de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, más el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo Nacional en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el inciso 42 -Construcciones- de acuerdo al presupuesto preparado por la Corte Suprema de Justicia. En este caso también se establece que el Poder Judicial debe preparar su presupuesto, que deber ser remitido al Poder Ejecutivo para su incorporación al proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional que se presenta anualmente ante el Honorable Congreso.

El Poder Judicial de la Nación cuenta además con recursos específicos propios, tales como tasas de justicia, el producto de la venta o locación de bienes, efectos secuestrados en causas penales, objetos comisados, rezago, el producido de multas, importes liquidados por instituciones financieras originados en razón de inversiones dispuestas por jueces, etc.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

A partir del compromiso asumido para el III Plan de Acción de Argentina frente a la Alianza para el Gobierno Abierto "**Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a los magistrados**" que tiene como objetivo mejorar la cantidad y calidad

de información disponible sobre los procesos de denuncia a los jueces, se publica el estado de las denuncias en trámite en formatos abiertos y se incluyen más datos desagregados sobre las mismas como el número de expediente, carátula, juez denunciado, fuero, denunciante, consejero, número de orden, presentación de la denuncia, fecha de notificación y estado procesal.

Información disponible en:

<<http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/expedientesentramite>>

Además, se encuentra disponible el dataset sobre los expedientes culminados de las denuncias a magistrados en

<<http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/expedientesculminados>>

Consejo de la Magistratura de la Nación y Participación ciudadana:
<<http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset>>.

En este link podrá encontrarse información referida a varios aspectos que regulan la conducta de los miembros del Poder Judicial, así como otras medidas que garantizan transparencia en el proceso judicial.

- Normativa de acceso a la información pública
- Resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información
- Concursos concluidos
- Estado de expedientes en trámite de denuncias a magistrados
- Expedientes culminados de denuncias a magistrados
- Nómina de personal
- Ejecución presupuestaria
- Escalas salariales
- Juicios políticos
- Mapa dinámico de concursos
- Portal de Auditorías
- Delegaciones regionales de la Escuela Judicial
- Reglamento de selección de magistrados
- Misiones y funciones por área del Consejo de la Magistratura de la Nación
- Normativa de la auditoría de relevamiento de causas de narcotráfico
- Normativa de la auditoría de relevamiento de causas de corrupción
- Normativa de la auditoría de gestión de la Justicia Nacional del Trabajo
- Informes de homicidios dolosos CABA
- Contrataciones públicas y licitaciones
- Consejo de la Magistratura de la Nación, Administración General
- Estadísticas del Poder Judicial de la Nación

Creación de la Secretaria de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Frente a los nuevos desafíos por parte de la sociedad civil, que reclama mayor celeridad y eficacia en la prestación del servicio de justicia -desafíos que repercuten en la imagen y prestigio que el poder judicial tiene en nuestra sociedad-, resulta necesario contar con una política de desarrollo institucional que permita afrontar esos retos. Por tal motivo,

resulta necesario generar los instrumentos adecuados para llevar adelante los nuevos procesos de institucionalización, cambio y comunicación tendientes al incremento de los niveles de calidad eficiencia en la prestación del servicio de justicia en sentido amplio, todo ello en el marco de un programa de gobierno abierto.

A este fin, se modificó la estructura del organigrama actual, creando la Secretaría de Desarrollo Institucional logrando que la tarea de la Corte y de los demás tribunales inferiores adquiriera una importante difusión entre el público en general, contribuyendo de un modo notable la transparencia de su acción.

Esta nueva estrategia de política comunicacional debe involucrar no solo la relación con la prensa sino la comunicación con el propio Poder Judicial, con otras instituciones con organismos de la sociedad civil para así desarrollar nuevos públicos interesados en su tarea jurisdiccional. En ese contexto, la CSJN ha generado una estructura que le permite proyectar las transformaciones necesarias para que la prestación del servicio de justicia sea más eficiente, eficaz y transparente

<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=112497>

El consejo de la Magistratura de la Nación hizo expresa referencia a los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial” y el “Código Iberoamericano de Ética Judicial”, en el fallo dictado en razón del enjuiciamiento del Dr. Eduardo Freiler

<https://docplayer.es/65569025-Jurado-de-enjuiciamiento-de-magistrados-de-la-nacion.html>

31. Párrafo 2 del artículo 11

2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El Ministerio Público Fiscal es una parte fundamental en la administración de justicia, compuesta por el Poder Judicial y los Ministerios Públicos: Fiscal y de la Defensa. En su conjunto, conforman las tres partes en un proceso criminal.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de justicia. Se encuentra a cargo del Procurador General de la Nación, que es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Nación, según el mecanismo que fue anteriormente descripto (art. 9, inc. a, y 11 de la ley 27.148).

Conforme al **Artículo 120 de la Constitución Nacional**, *“el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”*.

El rol que le corresponde a los fiscales, en materia penal, es el de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, así como ejercer la acción penal pública, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación para todos los delitos federales (arts. 1 y 3 de la ley 27.178; art. 33, inciso 1), apartado e), del Código Procesal Penal de la Nación).

La competencia de los magistrados del MPF, alcanza a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos y reprimidos por el Código Penal de la Nación y las demás leyes complementarias vigentes, que hayan sido cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no hayan sido transferidos a la justicia local según el mecanismo establecido en la ley 26.702, y de los delitos correspondientes al fuero criminal y correccional federal en todo el país (la Ciudad de Buenos Aires y el resto del territorio distribuido en 14 jurisdicciones).

Según el **artículo 33 del Código Procesal Penal, al fuero criminal y correccional federal** le corresponde entender en los siguientes delitos: a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o extranjeros; b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos; c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o

representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados por el Congreso; d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la Capital; e) Los delitos previstos por los artículos 142 bis, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal. (Apartado sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.886 B.O. 5/5/2004.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/94769/norma.htm>).

En razón de ello, todo delito cometido mediante un acto de corrupción que afecte a las rentas públicas nacionales u obstruya y corrompa el buen servicio de los empleados de los tres órdenes de gobierno federal debe ser investigado y juzgado por jueces y fiscales federales.

En la instancia del proceso correspondiente a la instrucción (Libro II del Código Procesal Penal de la Nación), el Ministerio Público Fiscal cuenta con 12 fiscalías en lo criminal y correccional federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en el resto del país hay 93 fiscalías federales con competencia penal para la etapa de instrucción, distribuidas en sus 14 jurisdicciones. Luego, tanto en la capital como en el resto de las jurisdicciones del país hay fiscalías ante las cámaras federales de apelaciones y ante los tribunales orales federales. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, también hay fiscalías ante la Cámara Federal de Casación Penal y procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos ellos con competencia sobre todo el territorio del país.

Asimismo, frente a la necesidad de contar con una mayor especialización en la investigación y enjuiciamiento de delitos complejos como los de corrupción, el Ministerio Público Fiscal ha ido incorporando estructuras dependientes de la Procuración General de la Nación que abordan problemáticas particulares. El Procurador General de la Nación, como máxima autoridad del MPF tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de los intereses generales de la sociedad. Por eso es que en la estructura del MPF se pueden conformar unidades especializadas, que tienen como fin mejorar el desempeño del trabajo.

En esa dirección la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, introducida en 2015 mediante la Ley 27.148, formalizó el surgimiento de: a) procuradurías especializadas, b) unidades fiscales especializadas; y c) direcciones generales.

Si bien las procuradurías y las unidades fiscales especializadas pueden llevar adelante investigaciones preliminares (art. 8 de la Ley 27.148), como regla general ellas no pueden ejercer por sí mismas la acción penal pública en una causa que ya se encuentre judicializada.

Las procuradurías especializadas tienen por función investigar los casos de su competencia; pudiendo coadyuvar en la sustanciación de investigaciones judicializadas, cuando sean convocados por los fiscales intervinientes. En esos las procuradurías podrán ejercer todas las funciones y facultades del Ministerio Público Fiscal de la Nación previstas en el Código Procesal Penal y las leyes penales especiales.

Estas, asimismo, tienen por objeto diseñar estrategias de investigación; planificar la política de persecución penal, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Procurador General de la Nación; disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos especializados en su materia; o proponer al Procurador General de la Nación capacitaciones, proyectos legislativos y reglamentarios, así como la celebración de

convenios, entre otros.

Por lo tanto el rol principal de estas unidades especializadas es la de investigar preliminarmente las hipótesis delictivas que se encuentren comprendidas dentro de sus respectivas materias (aquí sí con un criterio de especialización). En caso de corroborar los extremos necesarios sobre la probabilidad de comisión de un delito promover la acción penal mediante la formulación de una denuncia y, en caso de ser requerido por el fiscal del caso, coadyuvar en la sustanciación del proceso judicial en sus distintas etapas e instancias procesales.

Para el caso de los delitos de corrupción, criminalidad económica y lavado de dinero, vinculados con la corrupción, la Procuración General cuenta con dos procuradurías especializadas: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ambas cuentan con equipos de fiscales, funcionarios y empleados especializados en este tipo de investigaciones.

Conforme al artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación, la etapa de instrucción tiene por objeto comprobar la existencia de un hecho delictivo, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad; individualizar a los partícipes; su la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes, el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, etc.; y comprobar la extensión del daño causado por el delito.

El sistema procesal argentino, en el ámbito federal, pasó de ser netamente inquisitivo a uno de corte mixto. Debe ponerse de resalto que en la actualidad se encuentra en marcha un proceso de implementación gradual del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, sancionado en 2014 por ley 27.063. Con esta reforma el Ministerio Público se encuentra en un proceso de adaptación de cara a un sistema penal acusatorio, que implicará nuevos desafíos para la institución.

Según el artículo 194 del Código Procesal Penal, la dirección de la instrucción se encuentra a cargo de los jueces, quienes son los encargados de conducir las investigaciones de los hechos cometidos en sus jurisdicciones, pudiendo llevar adelante aquellas medidas conducentes para el descubrimiento de la verdad (allanamientos, intervenciones telefónicas, pedidos de informes, etc.).

Los fiscales, en los procesos penales, son quienes llevan adelante la representación del MPF en cada una de las investigaciones que les toque intervenir. Esta representación se ejerce mediante la producción de dictámenes, para que el juez decida la cuestión que están tratando.

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 196, los jueces pueden delegar la dirección de las investigaciones de los delitos de acción pública de competencia criminal en los agentes fiscales de sus jurisdicciones, pudiendo reasumir su investigación cuando lo estimen conveniente.

En algunos supuestos, legalmente establecidos corresponde a los fiscales conducir la investigación, como por ejemplo, cuando no hay un autor del delito identificado o cuando el juez así lo dispone.

La investigación de estos delitos se inicia por denuncia, tanto de organismos públicos como de particulares, en cuyo caso debe existir una actividad de impulso por parte del MPF -a través de los fiscales que lo componen- que es el titular de la acción pública que nace del delito, y sin cuyo requerimiento no es posible que el juez dé inicio a un proceso

por esta clase de delitos. También los procesos penales pueden iniciarse por la actividad preventiva de las fuerzas de seguridad.

Por lo tanto, en materia penal, el MPF tiene asignada las funciones de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera y promover y ejercer la acción pública en las causas criminales en todos los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras su competencia no haya sido transferida a la jurisdicción local (leyes 24.946, 27.148 y art. 5 del CPPN).

Para nuclear y coordinar el accionar del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación puede emitir instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, sugiriendo la adopción de medidas necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público y diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.

La acción penal es ejercida por los representantes del MPF en razón de la competencia asignada por la materia (arts. 22 a 33 del CPPN), el territorio (art. 37 del CPPN) y la instancia procesal en que se encuentre la sustanciación de una causa. El artículo 26 de la ley 24.946 y 8 de la ley 27.148 faculta también a los integrantes del MPF a realizar investigaciones preliminares que les permita solicitar y producir información tendiente a la identificación de fenómenos criminales que orienten la constatación de hipótesis delictivas. Por medio de la Resolución PGN N°121/06, del 11 de septiembre de 2006, se instruyó a los señores Fiscales con actuación en materia penal de todo el país, a que den noticia a los señores Fiscales Generales desde, sobre la realización de investigaciones preliminares a la existencia de actuaciones judiciales, informando el objeto al que se acotarán.

Una de las políticas de la Procuración General de la Nación para mejorar la calidad técnica de sus agentes es la permanente oferta de cursos de capacitación, en sus modalidades presenciales, a distancia y cursos externos. Para ello la Procuración General de la Nación cuenta con la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DGCE), que tiene como función proponer e implementar modelos y estrategias de capacitación para mejorar el desempeño institucional y fortalecer la labor de los fiscales y sus equipos de trabajo (art. 35, inc. K, Ley 27148). A tales efectos, diseña planes estratégicos de capacitación según niveles, ejes y áreas temáticas (Res. PGN 52/18).

Por otro lado, frente a la necesidad de contar con una mayor especialización en la investigación y enjuiciamiento de delitos complejos, el MPF ha ido incorporando estructuras dependientes de la Procuración General de la Nación que abordan problemáticas particulares. El Procurador General de la Nación, como máxima autoridad del MPF tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de los intereses generales de la sociedad. Por eso es que en la estructura del MPF se pueden conformar unidades especializadas, que tienen como fin mejorar el desempeño del trabajo.

En cuanto concierne específicamente a la persecución de la criminalidad económica, y con la finalidad de que los fiscales puedan desarrollar acciones efectivas sobre el aspecto patrimonial del delito, la ley orgánica estipuló la instrumentación de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (artículos 33 y 35 de la ley 27.418).

Por otra parte, el MPF tiene un rol no penal que surge del art. 120 de la Constitución

Nacional y de la reglamentación de los arts. 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148: la defensa de la Constitución Nacional y de los intereses generales de la sociedad.

Este conjunto de funciones no penales no había quedado suficientemente delineado hasta la sanción de la **Ley N° 27.148**, como sí sucedía con su rol penal.

A la par de la asignación de nuevos roles, funciones y deberes, el legislador ha dotado al MPF de un novedoso y amplio ámbito de legitimación para actuar, mucho más proactivo y dinámico que permite resultados más acordes a las demandas sociales actuales.

Este nuevo conjunto de funciones y deberes consolidan una legitimación más amplia del MPF, un rol requirente del MPF en materia no penal, en contraposición del tradicional rol de “guardián de la ley”, limitado al control de legalidad y debido proceso.

En particular, el artículo 1 de la ley 27.148 establece como misión general del MPF **promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad**. En especial, tiene por **misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes**.

Consecuentemente, el MPF tendrá entre sus funciones no penales, las siguientes:

- Velar por la efectiva vigencia de la CN y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte (art. 1 ley 27.148).
- Procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (art. 1 ley 27.148).
- Dictaminar en las causas que lleguen a su conocimiento de la CSJN, siempre que exista controversia sobre la interpretación o aplicación directa de una norma de la CN, o de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte (art. 1 ley 27.148).
- Dictaminar en cualquier otro asunto que la CSJN requiera su dictamen fundado en razones de gravedad institucional o por la importancia de las normas legales cuestionadas (art. 1 ley 27.148)
- Intervenir según circunstancias e importancia del asunto, en casos presentados en cualquier tribunal federal o nacional con competencia sobre la Ciudad de Buenos Aires, siempre que se cuestione la vigencia de la CN o de los instrumentos internacionales. (art. 2 ley 27.148).
- Velar por el debido proceso legal (art. 31 inc. [a] ley 27.148)
- Intervenir en aquellos casos en los que una norma especial lo determine. (art. 2 y art. 31 inc. [d] de la Ley 27.148)
- Peticionar en las causas en trámite donde esté involucrada la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en especial en los conflictos en los que se encuentren afectados:
 - Intereses colectivos o difusos. (art. 2 y art. 31 inc. [b] de la ley 27.148)
 - Un interés y/o una política pública trascendente (art. 2 y art. 31 inc. [b] de la ley 27.148)
 - Normas de orden público y leyes no disponibles por los particulares (art.

2 y art. 31 incs. [b] y [e] de la ley 27.148).

- El acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes. (art. 1, art. 2, art. 31 inc. [b] y art. 36 de la ley 27.148)
- Cuando se trate de una manifiesta asimetría entre las partes. (art. 2 y art. 31 inc. [b] de la ley 27.148)
- Cuando estén amenazados o vulnerados los derechos humanos, las garantías constitucionales o la observancia de la CNA. (art. 1, art. 2 y art. 31 inc. [b] de la ley 27.148)
- Conflictos de competencia y jurisdicción de los órganos jurisdiccionales (art. 2 y art. 31 inc. [e] de la ley 27.148)
- Intervenir en aquellos casos en los que una norma especial lo determine. (art. 2 y art. 31 inc. [d] de la Ley 27.148)
- Intervenir en todos los procesos relativos a:
 - Estado civil y nombre de las personas (art. 31 inc. [f] de la ley 27.148).
 - Venias supletorias (art. 31 inc. [f] de la ley 27.148)
 - Declaración de pobreza (art. 31 inc. [f] de la ley 27.148)
 - Procesos judiciales en los que se solicite la ciudadanía argentina (art. 31 inc. [f] de la ley 27.148)
- Conocer los reclamos y necesidades de los distintos sectores sociales, manteniendo informada a la comunidad (art. 36 de la ley 27.148)
- Ser parte en la alzada en los supuestos del art. 51 de la Ley 24.522. (art. 276 de la ley 24.522)
- Poner en acto (promover) la actuación de la justicia y el acceso a la justicia (art. 120 CN; arts.1, 2 y 36 de la ley 27.148)
- Emitir dictámenes en los asuntos puestos a su consideración (arts. 2 y 89 de la ley 27.178, art. 28 de la ley 24.946)
- Ser tenido por parte, accionar y peticionar y realizar demás actos procesales propios de la parte, como ofrecer y producir prueba, recusar, requerir nulidades, plantear inconstitucionalidades, interponer recursos, etc.; pudiendo efectuar toda petición tendiente al cumplimiento de su misión y en defensa del debido proceso (art. 31 inc. [b] de la ley 27.148).
- Peticionar el dictado de medidas cautelares y dictaminar sobre su procedencia. (art. 31 inc. [b] de la ley 27.148).
- Interponer acciones previstas en la ley 24.240 (art. 31 inc. [b] de la ley 27.148 y art. 52 de la ley 24.240)
- Alegar la nulidad absoluta de los actos jurídicos (art. 387 del CCCN).
- Intervenir en la gestión de los conflictos, facilitando su resolución alternativa a la

Con respecto a la autarquía del MPF, el artículo 120 de la Constitución Nacional - introducido en la reforma constitucional de 1994- le otorgó autonomía funcional y autarquía financiera al MPF. El ejercicio de este segundo atributo es una condición necesaria para el cabal ejercicio de la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

La autarquía financiera supone la plena capacidad del MPF de administrar sus propios recursos, en particular, aquellos provenientes de los fondos asignados anualmente a través de la ley de presupuesto del Estado.

Esta condición garantiza la independencia que la Constitución Nacional le confirió al MPF respecto de los restantes órganos y poderes del Estado; condición que, a su vez es propia de las bases del Estado de Derecho, del principio de división de poderes y de la forma republicana de gobierno (arts. 1°, 5°, 31 y concordantes de la CN). Ello supone, entre otros factores, que el MPF no esté subordinado en su desempeño a las decisiones de otra autoridad, incluso en el plano económico y financiero.

En junio de 2015, se sancionó una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 27148, que en su artículo 38, ratificó el principio de autarquía financiera, determinando que, para asegurar esa condición, el MPF contará con un presupuesto de recursos y gastos atendido con cargo al Tesoro nacional y con recursos propios.

Con relación a la programación presupuestaria el artículo 41 de la ley comentada le asignó a la Procuración General de la Nación, como máxima autoridad del MPF (Cfr. Arts. 10 y 11 de la ley 27.148) el deber de elaborar el presupuesto anualmente. Para este proceso se deben tener en cuenta las pautas técnicas establecidas para las jurisdicciones y entidades del sector público nacional y observando los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.

Así, el proyecto de presupuesto debe ser remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su incorporación al Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional; pudiendo el Procurador General de la Nación disponer las reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al MPF, en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Según el artículo 42, segundo párrafo, el Poder Ejecutivo sólo podría disponer modificaciones en las erogaciones del MPF, en la medida en que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.

En otro orden de ideas, en relación con la ejecución presupuestaria, el segundo párrafo del artículo 39, de la ley 27.148, establecía que el Banco de la Nación Argentina debía transferir diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al MPF.

Ello, tenía por objeto garantizar la automaticidad en el desembolso de los recursos presupuestarios del MPF, sustrayendo de este modo la efectiva remisión de los mismos de las decisiones de gestión presupuestaria que administra el Tesoro Nacional (fijación de cuotas presupuestarias y demás mecanismos que pueden condicionar el efectivo desembolso de los fondos presupuestarios).

Sin embargo, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 257/2015, el Poder Ejecutivo Nacional sustituyó el artículo 39 de la ley N° 27.148, que establecía la forma en

que se conformarían los recursos del MPF provenientes del Tesoro nacional, fijando que *“Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150 [ley de implementación progresiva del Código Procesal Penal aprobado por Ley N° 26.063], se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación, De La Comisión Bicameral De Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el Ministerio Público Fiscal de la Nación”*.

Por otro lado, en su artículo 7, el Decreto 257/2015 modificó la Ley de Presupuesto del período 2016, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias referidas al MPF. Este poder asignado al Jefe de Gabinete trastocó también el artículo 42 de la Ley 27.148.

Dada la postergación del programa progresivo de implementación del nuevo Código Procesal Penal y a la falta de convocatoria de la Comisión Técnica encargada de establecer el Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MPF, la situación normativa se ha retrotraído a la fijada en el artículo 22 de la Ley 24.946, pero con la posibilidad de que el Jefe de Gabinete de Ministros efectúe las reestructuraciones presupuestarias que estime necesarias.

Cada año el MPF es incluido en el presupuesto general de la Nación, dentro de la jurisdicción 10, programa 16 atinente al ejercicio de la acción pública y defensa de la legalidad. La asignación de los créditos presupuestarios para ese programa pueden ser consultados en el portal de Internet de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano rector del sistema presupuestario e interviene en la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los Presupuestos de la Administración Pública Nacional (ver <https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos>).

Como se informó anteriormente en el párrafo 2, del artículo 9, con respecto a la asignación del crédito presupuestario para el MPF, en la sección de Transparencia Activa del portal institucional se publican anualmente las planillas correspondientes al MPF. Esta información puede ser consultada libremente en <https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/ejecucion/>.

Del mismo modo, en el sitio de Transparencia Activa del MPF se publican las planillas correspondientes a la ejecución presupuestaria desagregada por trimestre de cada año.

De la comparación entre el crédito asignado y los gastos en personal correspondientes al MPF se demuestra que cerca de un 94.3%, en promedio, del presupuesto asignado al organismo, es destinado a los gastos en personal de los recursos humanos con los que ya cuenta la institución.

32. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

12. Sector privado

33. Párrafos 1 y 2 del artículo 12

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en:

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;

b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales;

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo;

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

¿Cumple su país estas disposiciones?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones de la Convención.

1. Normas y procedimientos diseñados para prevenir la corrupción:

Nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas:

El 8 de noviembre de 2017, la República Argentina sancionó la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal empresarial por delitos de corrupción, la cual entró en vigencia el 1 de marzo de 2018. Esta norma permite sancionar a las empresas por delitos de corrupción y persigue dos objetivos principales:

- (i) fomentar la auto-organización empresarial para la prevención de la corrupción a través de la implementación de programas de integridad; y
- (ii) promover la cooperación entre el sector público y el sector privado, previendo a tales fines la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos.

Respecto de los sujetos alcanzados por la ley, se trata de las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, es decir, principalmente sociedades comerciales constituidas bajo cualquiera de las figuras previstas en la Ley N° 19.550, así como también asociaciones civiles y fundaciones. En tanto sociedades comerciales, resultan alcanzadas las Empresas de Propiedad Estatal (EPEs) conformadas como sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria (o total).

En cuanto a los delitos alcanzados, se trata de los siguientes:

- a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los arts. 258 y 258 bis del Código Penal;
- b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el art. 265 del Código Penal;
- c) Concusión, prevista por el art. 268 del Código Penal;
- d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los arts. 268 (1) y (2) del Código Penal;
- e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el art. 300 bis del Código Penal.

Con relación al modelo de responsabilidad, la ley dispone que las personas jurídicas son responsables por los referidos delitos cuando hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Además, la responsabilidad se extiende a los supuestos en los cuales quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuese de manera tácita.

En cuanto al modelo de imputación de la ley argentina, se trata de un modelo vicario, en el que se transfiriere a la persona jurídica la responsabilidad por la acción delictiva llevada adelante por la persona física. No se requiere para la imputación examen alguno sobre la configuración de la organización interna o las características del control y supervisión implementadas por la persona jurídica sobre sus dependientes o partes relacionadas.

Este control será un parámetro para la graduación de la pena e incluso podría eximir de responsabilidad a la persona jurídica si se combina con otros factores (autodenuncia espontánea y devolución del beneficio ilícito).

La ley prevé la responsabilidad sucesiva, en tanto dispone que ésta se transfiriere a aquellas sociedades que resulten luego de un proceso de transformación societaria. Aclara sin embargo que subsiste la responsabilidad penal en aquellas sociedades que, de manera encubierta o meramente aparente, continúen su actividad económica y

mantengan la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

Lineamientos para la implementación de programas de integridad:

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.401, la República Argentina reglamentó la referida ley a través del Decreto N° 277/18, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 6 de abril de 2018. La norma estableció en su artículo 1 que *“La OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS establecerá los lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401”*.

Adicionalmente, el Decreto aclaró en el artículo 2 que *“El monto de los contratos a los que refiere el inciso a) del artículo 24 de la Ley N° 27.401, es aquel establecido en el Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 -o el que en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados”*.

Por último, en su artículo 3 estableció que *“La existencia del Programa de Integridad conforme los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condición necesaria para contratar con el Estado Nacional en todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acreditada junto con el resto de la documentación que integra la oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso de contratación disponga el organismo que realice la convocatoria”*.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 277/2018, se elaboró un documento borrador de Lineamientos para la implementación de Programas de Integridad. El mismo fue sometido a consulta pública durante el mes de agosto de 2018 a través de una plataforma online (<<https://www.argentina.gob.ar/lineamientos-para-la-implementacion-de-programas-de-integridad>>) y también se llevó a cabo un encuentro presencial el día 4 de septiembre de 2018 en Casa Rosada para debatir el contenido del documento con expertos de la comunidad especializada. En particular, asistieron al encuentro representantes de empresas, de estudios jurídicos, de asociaciones empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales, académicos y especialistas, y miembros del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial.

En ese marco, durante el mes de septiembre de 2018 se realizaron los ajustes necesarios al documento en base a los aportes recibidos en las distintas instancias de participación. Finalmente, el día 4 de octubre de 2018 fueron aprobados a través de la Resolución 27/2018 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Oficina Anticorrupción los “Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”.

El objetivo de dichos Lineamientos consiste en brindar información útil a empresas, organizaciones de la sociedad civil, otras personas jurídicas, agencias estatales, operadores del sistema de justicia y otros agentes para interpretar y cumplir la Ley N° 27.401, prevenir, detectar y remediar hechos de corrupción, implementar Programas de Integridad adecuados, evaluarlos y aplicar las consecuencias de la referida Ley. Se trata de una guía interpretativa que no reemplaza las evaluaciones propias de cada organización para que el Programa exprese su cultura de integridad y responda a sus

riesgos, necesidades y desafíos.

Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina:

A través de la Decisión Administrativa 85/2018 de Jefatura de Gabinete de Ministros, se aprobaron los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina, que constituyen un conjunto de buenas prácticas de gobernanza y gestión de empresas en donde el Estado es accionista. Su principal objetivo es comunicar a las empresas las expectativas que el Estado tiene con relación a cómo las mismas deben organizarse y funcionar. Los Lineamientos establecen 7 reglas de buen gobierno, las que se encuentran alineadas con estándares internacionales como las Directrices de Gobierno Corporativo para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las 7 reglas incluyen definiciones en materia de 1) Transparencia 2) Integridad 3) Responsabilidad Social 4) Gerencias y Directorios 5) Gestión Presupuestaria 6) Compras 7) Auditoría y Control Interno.

El Comité de Buen Gobierno, creado por Resolución 1/2018 de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, monitorea el nivel de cumplimiento de los referidos Lineamientos por parte de las empresas a través de cuestionarios y reuniones periódicas con sus representantes.

Principios de Buen Gobierno en entidades deportivas:

La Oficina Anticorrupción empezó a desarrollar en 2018 una línea de trabajo sobre integridad y buen gobierno de entidades deportivas. En abril 2019 elaboró un informe denominado “Integridad y Buen Gobierno de Entidades Deportivas”, que exhibe los resultados de un estudio exploratorio que tuvo por objetivo relevar el nivel de implementación de iniciativas y buenas prácticas en materia de Transparencia y Rendición de cuentas, Integridad y Cumplimiento, y Participación, por parte de las organizaciones deportivas. El relevamiento tomó como muestra 56 confederaciones y federaciones deportivas de alcance nacional. El informe fue presentado en la primera conferencia internacional sobre Integridad y Buen Gobierno de Entidades Deportivas, que la Oficina Anticorrupción organizó el 11 de abril de 2019 en conjunto con la Agencia de Deporte Nacional y el Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD), con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires.

Adicionalmente, la OA publicó los Principios de Buen Gobierno en Entidades Deportivas disponible en <https://www.argentina.gob.ar/noticias/principios-de-buen-gobierno-en-entidades-deportivas-nueva-publicacion-de-la-oa>.

Este documento busca promover buenas prácticas de transparencia e integridad en la gobernanza de las organizaciones deportivas. Se encuentra estructurado siguiendo los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas; Integridad y Cumplimiento; y, Participación. Cada uno de ellos se asocia a determinados lineamientos claves. En el mismo podrán encontrarse definiciones teóricas básicas, y herramientas prácticas y ejemplificativas que las entidades deportivas pueden utilizar para implementar políticas de buen gobierno de acuerdo a sus riesgos, su dimensión y su capacidad económica.

Guía para la implementación de programas de integridad en PyMEs:

La Oficina Anticorrupción publicó una Guía para la implementación de programas de integridad en pequeñas y medianas empresas, en consistencia con la Ley 27.401. El documento constituye un paquete de herramientas que busca brindar a las PyMEs consejos e instrumentos prácticos para que puedan analizar en qué medida cuentan con programas de integridad adecuados con relación a sus riesgos, dimensión y capacidad económica; o bien para que incorporen programas nuevos o mejoren los existentes. La Guía está disponible en el sitio web del organismo https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_pymes.pdf.

Actualización del Código de Gobierno Societario de la Comisión Nacional de Valores:

La Comisión Nacional de Valores actualizó su Código de Gobierno Societario a través de la Resolución General 797/2019. Se trata de un instrumento de protección de los derechos de los inversores, de los acreedores y del público en general, que funciona también como una herramienta orientada a incentivar una cultura de buena gobernanza dentro de las emisoras que participan en el Régimen de Oferta Pública. El Código de Gobierno Societario tiene como objetivo educacional que las sociedades comprendan la lógica detrás de las recomendaciones y que éstas sean recibidas como una oportunidad para mejorar su gobernanza y cultura empresarial, con beneficios operativos, reputacionales y estratégicos.

Contrataciones:

En diciembre de 2018 se dictó el Decreto N° 1169/18 que incorpora el formulario del Programa de Integridad, el cual tiene por objetivo que los oferentes de las contrataciones y concesiones de obra pública declaren la implementación de programas de integridad de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 27.401.

Ventanilla Única de Comercio Exterior:

En diciembre de 2018 se puso en funcionamiento la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), una plataforma digital que centraliza y permite que todos los trámites de comercio exterior se puedan realizar en forma on line y desde cualquier parte del país. De esta manera se ahorra tiempo y burocracia: la Ventanilla permite reducir en un 65% el tiempo y en un 5% los costos de los procesos a través de la digitalización del 80% de los trámites necesarios, lo que además promueve mayor transparencia.

2. Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción:

Canal de denuncias de la Oficina Anticorrupción:

Toda persona que desee denunciar un hecho de corrupción, puede realizarla de tres maneras distintas y por diferentes canales ante la Oficina Anticorrupción (por Internet a través de un formulario, personalmente o por correo postal). Los denunciantes pueden elegir si efectuar una denuncia anónima, con identidad reservada o con identificación. Las denuncias deben versar sobre hechos vinculados a organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

3. Medidas encaminadas a promover la transparencia de las entidades privadas:

Creación del Registro Nacional de Sociedades:

La Secretaría de Innovación Pública (ex Secretaría de Gobierno de Modernización Administrativa), con la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos, puso a disposición del público una única base de datos nacional con información de sociedades accionarias y no accionarias argentinas, de sociedades extranjeras, de asociaciones civiles y de fundaciones, según lo disponen las leyes N° 26.047 y 27.444. La base busca reducir costos y tiempos de búsqueda de los usuarios al informar el domicilio social registrado por cada persona jurídica, a partir del cual se puede inferir la jurisdicción local de registro de la persona jurídica consultada. También informa el número de identificación registral local cuando está disponible.

<https://www.argentina.gob.ar/justicia/registro-nacional-sociedades>

4. Medidas encaminadas a prevenir conflictos de intereses sobre antiguos funcionarios en entidades privadas:

Simulador de conflictos de intereses:

La Oficina Anticorrupción desarrolló una herramienta digital que permite a los funcionarios públicos actuales, a los futuros, o aquellos funcionarios que dejan su cargo, advertir si se encuentran ante un conflicto de intereses. El resultado que se obtiene en el simulador está basado en la normativa utilizada en casos ya resueltos por la Oficina Anticorrupción.

Se trata de una plataforma gratuita, cuya consulta sólo toma 10 minutos (disponible en: http://simulador.anticorruptcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1).

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

-Carta de Jefatura #2 <<https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/41190-empresas-publicas-para-el-crecimiento>>
- Empresas públicas para el crecimiento, abril de 2017. (disponible en www.casarosada.gob.ar)

-Carta de Jefatura de Gabinete #11
<<https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/42529-carta-de-jefatura-de-gabinete-11-integridad-transparencia-y-lucha-contra-la-corruptcion>> - Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, abril de 2018.

-Informe "Integridad y Buen Gobierno De Entidades Deportivas"
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_integridad_y_buen_gobierno_de_entidades_deportivas.pdf elaborado por la Oficina Anticorrupción. El estudio tiene por objetivo relevar el nivel de implementación de iniciativas y buenas prácticas

en organizaciones vinculadas a la práctica y promoción deportiva en base a normativa local y estándares reconocidos a nivel internacional.

-Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), la cual constituye un paquete de herramientas que busca brindar a esas empresas consejos e instrumentos prácticos para que puedan analizar en qué medida cuentan con programas de integridad adecuados con relación a sus riesgos, dimensión y capacidad económica; o bien para que incorporen programas nuevos o mejoren los existentes.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_pymes.pdf.

34. Párrafo 3 del artículo 12

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:

- a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
- b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;
- c) El registro de gastos inexistentes;
- d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;
- e) La utilización de documentos falsos; y
- f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La República Argentina ha establecido medidas con respecto a:

Delito de balances e informes falsos agravados:

Como se dijo en el punto anterior, uno de los delitos abarcados por la Ley 27.401 es el de balances e informes falsos agravados, previsto por el art. 300 bis del Código Penal, que consiste esencialmente en publicar, certificar, o autorizar un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias falsas o incompletas, con el fin de ocultar la comisión de los delitos cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional. En esos casos se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de dos a cinco veces el valor falseado en los documentos y actos referidos.

Auditorías:

En cuanto a los estándares de calidad de las auditorías, la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores 762/2018 establece que los auditores externos deberán mantener un sistema de control de calidad y presentar informes al comité de auditoría de la empresa auditada.

35. Párrafo 4 del artículo 12

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Argentina nunca ha permitido la deducción impositiva de sobornos. La ley impositiva de ganancias contempla listas de gastos deducibles y no deducibles, y los sobornos no están expresamente cubiertos por ninguna de ellas. No es posible deducir los “quebrantos netos provenientes de operaciones ilícitas” (artículo 95, inciso j) ni de sobornos como gastos[RR2] .

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Informe de la evaluación de OCDE a Argentina

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cohecho_evaluacion_argentina-oa.pdf>

36. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Según la información reportada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sería interesante profundizar el conocimiento relativo a las normativas internacionales relacionadas a la prevención de la corrupción y normas contables y de auditoría en el sector privado, y su relación y/o aplicación en el sector público.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(LA) Asistencia legislativa: describa el tipo de asistencia

Capacitación en normativas internacionales relacionadas a la prevención de la corrupción y normas contables y de auditoría en el sector privado, y su relación y/o aplicación en el sector público.

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

El 19 de marzo de 2018 la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información financiera (UIF) suscribieron un acuerdo para fortalecer la prevención, detección y colaboración con la justicia penal en investigaciones vinculadas al lavado de activos y la corrupción.

Entre los diversos programas de cooperación celebrados entre ambos organismos, se puede mencionar el "Proyecto StAR", promovido y auspiciado por el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas y organizado en conjunto con la Procuración del Tesoro de la Nación. El objetivo de este Proyecto fue brindar asistencia técnica a las autoridades de nuestro país en cuanto a las mejores prácticas para la recuperación de activos de origen ilícito.

13. Participación de la sociedad

37. Párrafo 1 del artículo 13

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que esta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

- a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;
- b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;
- c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;
- d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
 - i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;
 - ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en septiembre de 2016, permite cumplir con gran parte de la normativa relativa al cumplimiento de este artículo de la CNUCC.

A un año de su sanción, el 29 de septiembre de 2017, la ley entró en vigencia, estableciendo a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como órgano garante de su correcta aplicación de la ley en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados. Así se garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información a la ciudadanía, derecho humano esencial para las sociedades democráticas como así también herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción.

Esta norma incorpora estándares internacionales que fueron desarrollándose a medida en que los países implementaban sus leyes. Se disponen obligaciones de transparencia activa tendientes a aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones. También, se dispusieron de manera taxativa las excepciones al acceso a la información que se encuentran en su artículo 8.

Entre esas excepciones están aquellas que protegen los datos personales para garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros como también las excepciones

referidas a la información clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior: *“La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas”*.

La AAIP incorporó entre sus funciones la de ser la Autoridad de Aplicación y órgano de control de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326 (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm>), todo ello de acuerdo a lo establecido por Decreto N° 899/17, (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285903/norma.htm>) que sustituyó el artículo 29 del Anexo I del Decreto N° 1558/01, (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70368/texact.htm>).

Es importante destacar que, de acuerdo a la ley vigente, la AAIP es un ente autárquico que funciona con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y cuyo objeto es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y la protección de los datos personales; tendiendo a que la ciudadanía tenga más y mejor información, actualizada y oportuna, para poder participar de la cosa pública.

La facilitación de los trámites de solicitud de acceso a la información como así también el de los reclamos ante un incumplimiento, constituyen una forma de aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones. Es por ello que en la sección de “Transparencia” que todos los organismos públicos están obligados a completar existe un ítem relacionado con la **“participación ciudadana”**. Allí se debe consignar todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones (solicitudes, denuncias) o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Cada organismo debe informar el link de cada consulta vigente o formulario de participación, e informar teléfonos, direcciones y horarios de atención. Esto debe estar actualizado permanentemente.

Todas estas medidas constituyen una garantía para que el público acceda de manera eficaz a la información en manos del Estado. A su vez, la AAIP participa de diversas actividades organizadas tanto por sociedad civil como por otras oficinas públicas y hasta organismos internacionales en donde difunde y da a conocer las actividades de la Agencia como así sus principios y estándares que persigue y defiende.

En relación al inc d)i, sobre el respeto y la protección de los derechos y reputación de terceros, la AAIP es órgano garante de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, lo cual le otorga competencia para realizar diferentes acciones tales como:

- El **Proyecto de Ley de Protección de los Datos Personales**: desde el año 2016 se realiza un proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar la ley vigente. Para ello, fueron convocados actores provenientes del sector privado, del ámbito académico y de la sociedad civil. Con todos los aportes se redactó el Mensaje 147/2018 Proyecto de Ley de Protección de los Datos Personales. Versión enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para someter a su consideración
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mensaje_ndeg_147-2018_datos_personales.pdf

- La Resolución 47/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública referida a "Medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y conservación de los datos personales en medios informatizados y no informatizados" de julio de 2018. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/medidas-de-seguridad-recomendadas-para-el-tratamiento-de-datos-personales>
- La Resolución 15/2018 que aprobó un nuevo diseño para el cartel que identifica a las zonas con videovigilancia. La imagen de una persona constituye un dato de carácter personal. Las actividades de videovigilancia requieren del tratamiento de este tipo de imágenes, por lo tanto, conforman bases de datos y se encuentran alcanzadas por la Ley de Protección de Datos Personales. De acuerdo a la normativa vigente, se debe informar previamente al público la existencia de cámaras de seguridad (sin que sea necesario precisar su ubicación puntual), los fines para los que se captan las imágenes y los datos de contacto del responsable de la base de datos, para que las personas puedan ejercer sus derechos como titulares de datos personales. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevo-cartel-para-senalizar-las-areas-con-videovigilancia>
- La Resolución 12/2018 de la AAIP que derogó la Disposición 6/2005 y aprobó los nuevos isologotipos que permiten identificar a las bases de datos inscriptas en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales. La nueva normativa contempla un isologotipo para las bases de datos personales públicas y otro para las privadas; para utilizarlos es necesario solicitar autorización a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública quien, una vez concedida, remitirá el correspondiente archivo al responsable de la base de datos. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevos-isologotipos-para-identificar-las-bases-de-datos-personales-registradas>

Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto:

En el marco de su membresía en la Alianza para el Gobierno Abierto, la República Argentina desarrolló el III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto que es implementado desde agosto de 2017 hasta junio de 2019.

El Plan es impulsado por el gobierno nacional y contiene iniciativas de apertura estatal vinculadas a la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación y uso de las tecnologías. El III Plan de Acción Nacional se elaboró a partir del trabajo colaborativo liderado por el equipo de la Secretaría de Innovación Pública (ex Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto), junto a organizaciones de la sociedad civil y con la participación de los tres poderes del Estado. Se formularon 44 compromisos de reforma que resultaron del trabajo en conjunto entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos de control externo.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tercer_plan_accion_nacional_gobierno_abierto_argentina_2017.pdf

Asimismo, el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto está conformado por 15 compromisos que buscan desarrollar políticas transformadoras para solucionar problemáticas concretas de agenda pública. Los compromisos son resultado de un proceso de cocreación entre gobierno y sociedad civil y serán implementados a nivel nacional en un plazo de 2 años, al igual que el Plan de Acción de Congreso Abierto incluido como anexo.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacion

Con relación a otras instancias de promoción de la participación de la ciudadanía y otros actores en los procesos de adopción de decisiones debe destacarse la introducción de una herramienta clave como es el portal <https://consultapublica.argentina.gob.ar/>.

Se trata de una plataforma de consulta pública desarrollada en base a la tecnología DemocracyOS, una plataforma online de código abierto especialmente diseñada para informar, debatir y votar propuestas públicas.

Este canal de diálogo y debate permite la interacción entre el gobierno y la comunidad, al tiempo que promueve la participación ciudadana y fortalece la democracia.

En cuanto a la actividad de la Oficina Anticorrupción pueden citarse algunos ejemplos de promoción de procesos participativos y/o consultas públicas en la discusión de medidas orientadas al diseño e implementación de políticas de integridad:

- Mesa nacional de gobierno abierto
- Consulta pública/Proceso participativo del Proyecto de Ley de Ética Pública
- Consultas públicas/ Proceso participativo del Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Convocatoria al Consejo Asesor para el seguimiento de la implementación de las iniciativas incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023
- Consulta pública/ Proceso participativo sobre lineamientos de integridad para el sector privado
- Consulta pública/ Proceso participativo sobre Decretos 201 y 202
- Consulta pública sobre guía para la implementación de programas de integridad en PyMEs

Ampliación del Consejo Asesor del Plan Nacional Anticorrupción

Con el objetivo de “alcanzar un espacio robusto, plural, federal y amplio para el seguimiento de las iniciativas contenidas en el Plan Nacional Anticorrupción 2019 - 2023 (PNA)”, la Oficina Anticorrupción (OA), a través de la Resolución 20/2020, realizó modificaciones normativas para ampliar la conformación del Consejo Asesor del Plan.

El Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas incorporadas al PNA tiene la función de monitorear sus iniciativas, elaborar informes de seguimiento y difundirlos, elaborar propuestas no vinculantes de mejoras, incorporaciones y actualizaciones al Plan, producir y difundir información y evacuar consultas.

La OA, en coordinación con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SFI), se encuentra en un proceso de revisión y fortalecimiento de las iniciativas contenidas en el PNA en función de las novedades y desafíos actuales y futuros de los organismos, contemplando principalmente una mirada transversal de la transparencia en la gestión pública.

Esta revisión “permitió identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos, entendiendo como imprescindible aspirar a una genuina participación ciudadana en los procesos de diseño, implementación y seguimiento de las políticas de integridad,

transparencia y lucha contra la corrupción”, se explica en la Resolución.

En este sentido, el fortalecimiento del PNA exige de una participación plural y diversa que permita arribar a una estrategia integral federal e inclusiva de prevención de la corrupción y de la transversalización de la transparencia en la gestión de gobierno.

Esta reconfiguración del Consejo Asesor va en el mismo sentido que lo expresado tanto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en el Estudio sobre Integridad en Argentina (2019) realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para la OA resulta oportuno ampliar el Consejo Asesor de modo que refleje cabalmente una representación federal y de diversos sectores y con perspectiva de género según lo establecido por la Resolución Nº 21/2019.

La Resolución 20/2020 establece que “El CONSEJO estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con interés y/o reconocida trayectoria en la temática. Se procurará una representación equilibrada de cada uno de estos sectores y que exista diversidad federal y de género en la integración del CONSEJO. En el caso de las personas jurídicas, se les requerirá que designen una persona para que las represente en el CONSEJO, la que deberá tener facultades suficientes para decidir en nombre de la institución, y un suplente para el caso de que el representante titular deba ser reemplazado. Se invitará a participar de las reuniones del CONSEJO a los organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en materia de control, transparencia y/o lucha contra la corrupción”. Además, la OA, en coordinación con la SFI, podrá incorporar nuevos miembros al Consejo.

El listado de organismos integrantes del Consejo Asesor es el siguiente:

- Asociación Argentina de Ética y Compliance
- Contadores Forenses
- Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham)
- Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe)
- Cámara de Exportadores de la República Argentina (C.E.R.A)
- Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional
- Consejo Federal del Notariado Argentino
- Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
- Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)
- World Compliance Association
- Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK)
- Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)
- Capítulo Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
- Universidad de San Andrés (UDES)
- Directorio Legislativo
- Cultura Democrática
- Cámara Argentina de Comercio y Servicios
- Unión Argentina de Proveedores del Estado

- Poder Ciudadano
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
- Nuestra Mendoza
- Salta Transparente
- Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)
- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables Fundeps
- Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
- Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
- Fundación Mujeres en Igualdad
- Asociación de Personal de Organismos de Control
- "Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales SEDE ARGENTINA Flacso"
- Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP)
- Facultad de Trabajo Social - UNER
- Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La página web de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) <https://www.argentina.gob.ar/aaip> reúne información sobre las acciones llevadas adelante para aplicar las medidas descriptas precedentemente.

Así se pueden destacar:

- Las resoluciones de carácter particular adoptadas por la Agencia ante la presentación de reclamos por incumplimiento de algún sujeto obligado por la ley: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa>
- A su vez, se redactaron resoluciones de carácter general que abarcan criterios orientadores sobre las disposiciones de la ley para una mejor comprensión por parte de la ciudadanía: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa>
- Se trabajó junto con el entonces Ministerio de Modernización de la Nación (actualmente la secretaría de Innovación Pública) para adaptar los sistemas informáticos a la nueva normativa (hasta septiembre de 2017 estaba vigente un decreto sólo para el PEN) y así responder a los principios de celeridad y facilitación en el acceso a la información: <http://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica> hoy se pueden realizar las solicitudes de manera presencial o íntegramente a distancia, vía internet.
A su vez, la ley incorpora el trámite “reclamo de acceso a la información” ante el silencio de la administración o cuando el solicitante no está conforme con la respuesta brindada. Para ello se diseñó un nuevo trámite totalmente online: <https://www.argentina.gob.ar/reclamar-por-incumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica>

- Como parte de la política de transparencia y acceso a la información y para garantizar el acceso eficaz del público a la información, se trabajó junto con los Ministerios de la APN para ayudarlos a cumplir con las obligaciones de disponer de manera proactiva información en sus páginas web (Transparencia activa Art. 32). Se realizaron reuniones con responsables web y de acceso a la información, se redactaron instructivos y se colaboró en la puesta en funcionamiento de una solapa de “Transparencia” en cada sitio ministerial. A partir del 1 de junio de 2018 los organismos centralizados de la Administración Pública Nacional sumaron una sección de transparencia activa en sus sitios web. Una vez hecho ello, se diseñó un índice para observar el nivel de cumplimiento de estos sujetos obligados con respecto al listado presente en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública:
<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparencia activa>>
- La Ley de Acceso a la Información Pública establece que todos los poderes del Estado Nacional, y diversos organismos públicos y privados deben garantizar el derecho a la información a toda persona física y jurídica. Cada organismo debe nombrar un responsable de acceso a la información que tramitará las solicitudes y servirá de enlace con la Agencia en los temas planteados por la Ley. Se realizó un relevamiento de cada organismo y se puso a disposición de la ciudadanía los datos de contacto de cada uno:
<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables>>
- El proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar la ley vigente. Para ello, fueron convocados actores provenientes del sector privado, del ámbito académico y de la sociedad civil.
<https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/proyecto-ley-datos-personales>
- Política modelo de protección de datos personales para organismos públicos
<<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5554233a01.pdf>>

Portal de Consulta Pública: <https://consultapublica.argentina.gob.ar/ayuda/acerca>

Cómo funciona:

<<https://drive.google.com/file/d/0B6plaXO3RncLUkhUSEVaVmlseTQ/view>>

Estadísticas: (desde el inicio de su funcionamiento en 2017)

- Consultas en total: 31
- Total de ejes: 273
- Total comentarios: 1388
- Comentarios atendidos: 1055
- Cantidad de participantes: 664

Descripción de los Términos y Condiciones regulan el uso de la Plataforma de Consulta Pública (Sitio Web) en donde se brinda información sobre proyectos de ley y propuestas de los organismos de la Administración Pública.

La plataforma de Consulta Pública es un sitio web desarrollado por la Secretaría de Innovación Pública (ex Secretaría de Gobierno de Modernización) que promueve la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas. Esta herramienta favorece la generación de espacios de colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, para co- diseñar y co-producir valor público.

El acceso al Sitio Web es libre y gratuito. Requiere inscripción previa a través de un formulario que deberá ser completado por el Usuario. De esta forma los ciudadanos podrán inscribirse y crear una contraseña que les permitirá acceder a la plataforma. La información personal suministrada por el Usuario al momento de inscribirse en el Sitio Web está protegida con una clave, y sólo podrá ser modificada por el mismo Usuario. El Sitio Web está destinado únicamente a Usuarios mayores de 16 años cumplidos, de modo que cualquier registro de uso o acceso al Sitio Web por cualquier menor de esa edad no está autorizado.

Al momento de la inscripción el Usuario asume el compromiso y la responsabilidad de:

- No proporcionar información personal falsa ni crear cuentas a nombre de terceros sin su autorización.
- No crear más de una cuenta personal.
- No crear otra cuenta sin permiso expreso del Administrador, en caso de que este último haya inhabilitado la cuenta original.
- Mantener la información de contacto exacta y actualizada.
- No compartir la contraseña ni permitir a otra persona acceda a su cuenta y notificar al Administrador ante cualquier uso no autorizado de su clave.
- El Administrador se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o de cancelar un registro previamente aceptado.

El Usuario es el único responsable del contenido que suba, publique o muestre en el Sitio Web, garantizando que el mismo no infringe derechos de terceros.

En relación a los aportes, colaboraciones, comentarios y votaciones que los Usuarios realicen con respecto a las iniciativas propuestas en el Sitio Web, las mismas NO son de carácter vinculante, obligatorio y/o impositivo sobre el documento final.

Se encuentra terminantemente prohibido: Hostigar, acosar, amenazar, acechar, realizar actos de vandalismo hacia otros Usuarios, infringir los derechos a la intimidad de otros Usuarios, solicitar información personal identificable de otros Usuarios con el propósito de hostigar, atacar, explotar, violar la intimidad de los mismos; publicar de manera intencionada o con conocimiento injurias o calumnias; publicar, con el intento de engañar, contenido que es falso o inexacto; intentar

usurpar la identidad de otro Usuario, promover, defender o mostrar pornografía, obscenidad, vulgaridad, blasfemia, odio, fanatismo, racismo y/o violencia. y/o vulnerar los derechos establecidos en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

Cada iniciativa/propuesta publicada en el Sitio Web tendrá un moderador responsable de hacer cumplir estos Términos y Condiciones de uso. El moderador será designado por el organismo originante de la propuesta.

El Administrador garantiza la debida protección integral de los datos personales almacenados en el Sitio Web así como también el acceso a la información que sobre el mismo se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional y la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

En noviembre de 2020 se puso en funcionamiento **El Mapa de la Acción Estatal**. Es una plataforma que integra, sistematiza y grafica qué hace el Estado. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236506/20201026>.

Constituye un sistema de información sobre la Acción Estatal, es decir describe y cuantifica los bienes, servicios, regulaciones y transferencias que proporciona el Estado.

Permite visualizar qué resultados producen estas intervenciones y cómo impactan en la realidad, constituyéndose en un instrumento de planificación, seguimiento y evaluación a medida de cada jurisdicción.

Al trabajar sobre el modelo de cadena de valor público permite analizar la acción estatal a fin de mejorar sus procesos y la calidad de la intervención estatal como también integrar la dimensión ética de la gestión pública y sus dispositivos de integridad y transparencia.

La plataforma -construida con software libre- proporciona información sobre las políticas públicas de forma dinámica en la web, a la que tendrán acceso -a través de dispositivos diferenciados- tanto las autoridades gubernamentales como la ciudadanía.

¿Qué permite el Mapa?

Saber qué hace el Estado: integra, a partir de criterios comunes y en un mismo lugar, a la Acción Estatal, reflejando de forma directa la creación de valor por parte del Estado.

Toma de decisiones: brinda información sustancial para la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas públicas.

Planificación, seguimiento y evaluación: en tanto herramienta de gestión interna, facilita la gestión de la política pública a lo largo de todo su ciclo, desde el diseño, implementación y evaluación.

Sistematización de la información: el sistema permitirá generar reportes por tipo de acción estatal, sector de política pública, servicios ciudadanos, jurisdicción, objetivos estratégicos, programas, indicadores, resultados, etc. A su vez, se

integrará con otras bases de datos preexistentes que permitan conocer los procesos de agregación de valor del Estado.

38. Párrafo 2 del artículo 13

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Oficina Anticorrupción: canales de denuncia

<<https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion>>

La Agencia de Acceso a la Información Pública desarrolló la política de transparencia activa de todos los ministerios y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional de acuerdo al artículo 32 de la Ley 27.275. Allí, en los incisos l) y o) describen la información que todos los sujetos obligados deben publicar relacionada con todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones (solicitudes, denuncias) o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Se debe informar del formulario de participación si correspondiera, teléfonos, direcciones y horarios de atención.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La información que se detalla a continuación resume los avances que diferentes organismos públicos del Estado Argentino han ido diseñando e implementado en pos de dar cumplimiento a las disposiciones de la CNUCC a fin de que el público tenga acceso a diferentes canales de denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la Convención.

•Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE):

Canal de Denuncias Interno. Apertura de un canal de denuncias interno, ágil, que será atendido por el instructor sumariante de la Agencia. Se prevé cada 3 semestres una revisión del sistema adoptado, con el objeto de realizar un balance de su implementación e incorporar las mejoras que se consideren necesarias.

•Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP):

-Creación y puesta en marcha del canal ético. Incluirá formulario electrónico, que permitirá realizar denuncias por violación del Código de Ética, en forma anónima o reservada. Desarrollo de política antirepresalias y de confidencialidad de la

información. Protocolos de actuación y Guía del denunciante.
-Investigación de denuncias con componente interno, con enfoque estratégico basado en análisis de riesgo.

●Agencia Nacional de Discapacidad:

Creación de área de denuncias de fraude en tramites por otorgamiento de pensiones por discapacidad (por incumplimiento de requisitos).

●Comisión Nacional de Valores (CNV):

Manual de Procedimientos de denuncias

●Ministerio de Cultura:

Establecimiento de canal de denuncias de corrupción y creación de un área técnica especializada para el tratamiento de denuncias.

●INTERCARGO Ministerio de Transporte:

Canal de Denuncias "Línea Transparente". Habilitar más canales de denuncias para todos los integrantes de INTERCARGO, oferentes, proveedores, o cualquier ciudadano

●Ministerio de Seguridad:

-MAPA DE DENUNCIAS SOBRE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD: Mediante la utilización de programas de cruce de información, tales como el "i2", el "Tableau" y otros, se buscará trazar un mapa de denuncias que se investigan y que interrelacionen personas investigadas, zonas geográficas de la comisión de los hechos, interrelación entre personas, vehículos utilizados, etc.

-Implementación de un protocolo consensuado con la Justicia Federal para la judicialización de las denuncias de corrupción en las Fuerzas Policiales y de Seguridad que evite el dispendio de recursos que implica saturar a la justicia con denuncias sin asidero alguno o incluso inconsistentes.

-Ampliar la difusión del Sistema de Protección Administrativa para Fuerzas de Seguridad mediante afiches, sitios web de las fuerzas y todos los medios que contribuyan a un mayor alcance de sus características.

-Puesta en funcionamiento de una línea de denuncias de acceso rápido "134", gratuita y a disposición las 24 horas los 365 días del año. Además de otros canales institucionales de ingreso de denuncias tales como un formulario de denuncias web (<https://denunciasweb.minseg.gob.ar/>) y dos direcciones de correo electrónico (denuncias@minseg.gob.ar y juntoavos@minseg.gob.ar). Los datos personales otorgados por quien denuncia resultan protegidos a través de distintas medidas administrativas y técnicas que permiten mantener la confidencialidad y así resguardar la seguridad del denunciante.

●Ministerio de Transporte:

-Canal de denuncias "Línea Transparente". Para integrantes del Ministerio, oferentes, proveedores, y demás partes interesadas.

-Protocolo de Tramitación de denuncias. Pautas y criterios de actuación ante denuncias.

●Oficina Anticorrupción (OA):

Elaboración de proyecto de ley de protección de denunciantes que incluya un

procedimiento claro para efectuar denuncias y solicitar protección, garantías adecuadas de protección de la identidad del denunciante y remedios adecuados ante actos de represalias contra funcionarios y empleados de la APN.

•INAES:

El Instituto cuenta con un Centro de Denuncias, como canal de recepción de los reclamos y denuncias de particulares, referentes a cooperativas y mutuales, contando con un Manual de Procedimientos aprobado por Resolución de Directorio.

En cada página web de los ministerios de la APN se puede ver la solapa “Transparencia” y allí el ítem “Participación Ciudadana” donde se encontrará esta información. Como ejemplo:

<<https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/participacion>>

39. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

14. Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

40. Apartado a) del párrafo 1 del artículo 14

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de conformidad con el artículo 14 incisos 7 y 10 de la Ley 25.246 cuenta con la facultad de regular los mecanismos de supervisión, fiscalización e inspección in situ de los Sujetos Obligados, establecidos en el art. 20 de la citada Ley (incluyendo en ellos a bancos e instituciones financieras no bancarias), y efectuar en forma directa o por medio de convenios de colaboración con los organismos reguladores naturales de la actividad, el control en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en relación a las medidas exigidas en el presente artículo de la Convención.

En el caso de las instituciones financieras, las cuales cuentan con órganos de contralor específicos BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en adelante BCRA), COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (en adelante CNV), SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (en adelante SSN) y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (en adelante INAES) - deben proporcionar a la UIF la colaboración en el marco de su competencia. Ello, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta la UIF para realizar las supervisiones de manera directa a las instituciones financieras.

En tal sentido, originariamente la Resolución UIF N° 104/2010 reglamentaba el Procedimiento de Supervisión del Cumplimiento de la normativa de **Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)** por parte de los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246. Dicha regulación, fue reemplazada posteriormente por la Resolución UIF N° 154/2018, que establece el enfoque basado en riesgos aplicado a las supervisiones llevadas a cabo por la UIF y los organismos de contralor específicos de los sujetos obligados. La normativa citada, establece la directiva del deber de colaboración y regulan los procedimientos de supervisión que sean llevados exclusivamente por la UIF, o en colaboración con el BCRA, CNV, SSN e INAES, a efectos de evaluar el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados que se encuentren bajo su órbita de contralor, de las obligaciones establecidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por la normativa dictada por esta Unidad, y por las disposiciones complementarias dictadas por los citados Órganos.

Asimismo, la Resolución UIF N° 97/2018 reglamenta el deber de colaboración del BCRA

con la UIF para los procedimientos de supervisión de entidades financieras y cambiarias.

En el marco de las supervisiones que efectúe el BCRA de acuerdo a la Ley N° 25.246, prestará toda la colaboración debida a efectos de evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados contemplados en los incisos 1 y 2 de la mencionada Ley, de las obligaciones en materia de PLA/FT, de acuerdo a la normativa vigente. En ese marco, el BCRA debe elaborar un plan bienal de supervisión con un enfoque basado en riesgo, determinando la frecuencia y alcances de las Supervisiones en base a los riesgos identificados de LA/FT y en función de los resultados que arroje la Matriz de Riesgos vigente a tales fines, el cual debe ser remitido a la UIF para su revisión y aprobación. Las inspecciones previstas en el Plan de Supervisión elaborado por el BCRA, así como las no previstas en dicho Plan, pueden ser llevadas a cabo por el BCRA o por la UIF, ya sea en forma separada o conjunta.

Las instituciones financieras están sujetas a supervisión basada en riesgo, lo cual implica considerar 1) identificación o diagnóstico; 2) medición y control; 3) monitoreo y mitigación.

Además de la función registral y de contralor que realizan los Registros Públicos, o los organismos de contralor específicos (CNV, INAES, BCRA y SSN), **la verificación del beneficiario final** está a cargo de los diferentes Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley N° 25.246, al momento de tratar con sus Clientes.

A tal efecto, el inciso 1º, apartado a) del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246, vinculado a identificación de sus clientes, insta a los Sujetos Obligados del artículo 20 en los siguientes términos:

“...En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control.

Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones. En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto...”.

En ese sentido, la Resolución UIF E 30/2017 que regula las obligaciones en materia de PLA/FT de las Entidades Financieras así como también la Resolución UIF E 21/2018 para el mercado de capitales, y la Resolución UIF E 28/2018 para el sector de seguros, establecen la obligación de identificar a los propietarios/beneficiarios finales, ya sea por medio de información o documentación que permita identificar la estructura de control del Cliente.

De igual modo se encuentra establecida dicha obligación para el resto de los sujetos

obligados establecidos en el artículo 20 de la Ley 25.246, mediante las regulaciones sectoriales establecidas por la UIF en materia de PLA/FT.

Asimismo, se encuentra establecida la obligación de los sujetos obligados de reportar las operaciones sospechosas de LA/FT. Ello surge del artículo 21 bis de la Ley 25.246 que en su parte pertinente indica: “1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:...d) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada; e) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto”.

En esa línea, la Resolución UIF N° 50/2011 establece la obligación de los sujetos obligados de registrarse en la UIF a través del SRO, sistema que le permitirá la comunicación con la UIF así como también realizar los reportes sistemáticos mensuales (RSM) regulado por la Resolución UIF N° 70/2011 y sus modificatorias, y los reportes de operaciones sospechosas (ROS) ya sea en materia de LA/FT, regulado por la Resolución UIF N° 29/2013 y sus modificatorias.

Finalmente y ante el incumplimiento a las obligaciones en materia de PLA/FT, la UIF tiene facultades de imponer sanciones de multa y medidas correctivas a los sujetos obligados conforme lo previsto en el Capítulo IV de la Ley 25.246, previo sumario administrativo. Dicho procedimiento se encuentra regulado en la Resolución UIF N° 111/2012 y las resoluciones con multa se encuentran publicadas en la página web de la UIF.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Con fecha 6 de enero de 2017 se publicó el sumario administrativo emitido por la UIF a American Express Argentina S.A. por deficiencias formales del manual de procedimientos, en la política de identificación y conocimiento del cliente y en la definición del perfil del cliente.

Link al sumario: <<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/003-17.pdf>>

Link a la Res. UIF N° 30-E/2017:

<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275996/norma.htm>>

Link a la Res. UIF N° 104/2010:

<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=169583>>

Link a la Res. UIF N° 154/2018:

<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318170/norma.htm>>

Link a la Res. UIF N° 50/2011:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180771/texact.htm>

Link a la Res. UIF Nº 70/2011:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/182612/texact.htm>

Link a la Res. UIF Nº 29/2013:

<<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=208510>>

Link a la Res. UIF Nº 156/2018 (modificatoria de las Res. UIF Nº 50/2011 y 70/2011):

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318172/norma.htm>

Link a la Res. UIF Nº 111/2012:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/198664/texact.htm>

Link a las sanciones aplicadas por la UIF em materia de PLA/FT:

<<https://www.argentina.gob.ar/registro-de-antecedentes-de-sumarios>>

Regulación UIF en materia de PLA/FT por sujeto obligado:

<https://www.argentina.gob.ar/uif/normativa-uif/resoluciones-aplicables-cada-sujeto-obligado>

41. Apartado b) del párrafo 1 del artículo 14

1. Cada Estado Parte:

[...]

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En virtud de dar cumplimiento a disposiciones de esta naturaleza la República Argentina ha suscripto los siguientes instrumentos internacionales en la materia:

- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Ley N° 26.139);
- Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal con la República de Sudáfrica (Ley 27.018),
- Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur junto con su acuerdo complementario suscripto por Bolivia y Chile (Leyes N° 26.004 y 26.973);
- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con República Popular China (Ley N° 26.882);
- Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal con la República Tunecina (Ley N° 26.611);
- Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal con la República Portuguesa (Ley N° 26.440);
- Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal suscripto con el Gobierno de la República Francesa (Ley N° 26.196);
- Tratado de Cooperación con los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal (Ley N° 26.137)
- Convenio Sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, suscripto con la República de El Salvador (Ley N° 25.911).

En lo que a la UIF respecta, en el marco de sus facultades de recibir, tratar y transmitir información, establecidas en el art. 6º de la Ley 25.246, y que hacen a sus tres funciones esenciales, puede intercambiar información incluyendo aquella accesible u obtenible directa o indirectamente, en particular, en su calidad de centro nacional de recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas, entre otros. Esto, sin perjuicio de otra información que pueda intercambiar con otras agencias nacionales, en especial organismos de aplicación de ley, por ejemplo, en su rol de colaborador con la justicia, donde además tiene la facultad de actuar como querellante.

Además, la UIF responde a los pedidos de colaboración de los jueces que estén

investigando en otras causas en las cuales la UIF no haya tomado el rol de querellante.

Conforme el inciso 9° del artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la UIF posee la facultad para intercambiar información, en base a los acuerdos y contratos celebrados con organismos nacionales e internacionales.

En este contexto, corresponde mencionar que la **UIF es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera** y que, como tal, adhirió a sus principios rectores y utiliza la plataforma web provista por este grupo para el intercambio seguro de inteligencia financiera con contrapartes, siempre que se detecten conexiones o vínculos con jurisdicciones del exterior que ameriten el intercambio. Vale decir también que esta UIF, a través de dicha plataforma, efectúa divulgaciones espontáneas de información a sus contrapartes extranjeras para aquellos casos en los que se entiende apropiado.

Asimismo, utiliza la **Red de Recupero de Activos del GAFILAT (RRAG)**, organismo regional intergubernamental miembro de GAFI, respecto de los cuales la UIF también es parte. Esta Red cuenta con una plataforma electrónica, y su funcionamiento se centra principalmente en perseguir los activos procedentes del crimen, promover el intercambio de información, colaborar en las investigaciones respecto de la temática, actuar como asesores de las autoridades nacionales competentes, proporcionar colaboración entre entidades y coadyuvar a las buenas prácticas y experiencias. Para ello, cuenta con puntos de contacto en los países miembros de GAFILAT, dado por un miembro de UIF, uno del Ministerio Público y un contacto policial de cada país.

A su vez, en su rol de colaborador con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, dado en la interacción generada en el marco de investigaciones judiciales en trámite, intervención que podría darse también bajo la figura de querellante, la UIF cursa solicitudes de información a sus contrapartes extranjeras a pedido de dichas agencias de aplicación de ley. En estos casos, y ponderando los principios rectores aludidos que plantean la obligatoriedad de resguardar la confidencialidad y seguridad de la información, la misma es provista con carácter de “inteligencia”. Esto implica que no puede ser aportada directamente al expediente judicial como prueba, salvo autorización expresa del aportante de la información. Ante esta situación, se sugieren medidas en los informes de inteligencia a través del cual se pretende recabar evidencia para demostrar la existencia de los extremos que surjan de la información de inteligencia proporcionada habilitando la posibilidad de otros mecanismos de cooperación internacional que el juez actuante podría utilizar para su reconstrucción, como ser el pedido vía exhorto judicial. La tramitación de tales requerimientos se efectúa mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con intervención del Ministerio de Justicia.

Existen otros medios de cooperación internacional utilizados por la UIF, generados en el contexto de ejercicios conjuntos, intercambios en foros de debate internacional o directo para análisis conjunto de casos, entre otros. En este marco, se mencionan los siguientes proyectos de intercambio de experiencias con organismos internacionales:

-AUDIF (Argentina - US Dialogue on Illicit Finance /Diálogo Argentina - Estados Unidos sobre delitos contra el orden económico y financiero) fue acordado por los gobiernos de Estados Unidos y Argentina durante la visita del Secretario Lew en 2016. Tiene como objetivo identificar las amenazas de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos contra el orden económico y financiero de interés mutuo y en desarrollar e implementar estrategias e iniciativas conjuntas para enfrentarlas. AUDIF es presidido por la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros (TFFC) del Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas de la República Argentina y participan importantes agencias de cada uno de los países.

Objetivos principales:

- Identificar las amenazas, tendencias y tipologías de los delitos contra el orden económico y financiero y los delitos de corrupción que resulten de interés mutuo.
- Fortalecer la cooperación entre Argentina / EEUU y sus respectivos regímenes/programas de ALA/CFT.
- Mejorar la comunicación y el intercambio de información entre los gobiernos, incluidos los países vecinos, los reguladores, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el sector privado de la Argentina para contrarrestar los delitos contra el orden económico y financiero.

-Se encuentra vigente el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de prevención y combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las UIFs de Argentina y Chile”, en el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Chile y la República Argentina celebrado el 26/08/2017. El objetivo principal es el intercambio de conocimientos y experiencia sobre procesos de detección de LA/FT en el ámbito de la regulación, gestión y tratamiento de los reportes de operaciones sospechosas entre la UIF Argentina y la UAF de Chile. El mismo ha sido aprobado por las cancillerías de ambos países para ser desarrollado en el lapso total de dos años. En febrero y mayo de 2018 se realizaron 2 visitas de un total de 5 previstas.

Este proyecto, se ha replicado con las jurisdicciones de Uruguay y Suiza.

-Finalmente, resulta dable señalar que la UIF ha suscripto memorandos de entendimientos (MOU) con las Unidades de Inteligencia Financiera de 46 países, a fin de facilitar el intercambio de información y colaboración en la materia. No obstante, en los casos en los que no existen acuerdos o memorandos de entendimiento, es igualmente posible intercambiar información por el principio de reciprocidad.

Pais/ Organismo	Fecha de Firma	Resolución UIF	Escaneados
Albania	30 de Marzo de 2010	47/11	Si
Antillas Holandesas	06 de Agosto de 2009	205/09	Si
Australia	23 de Junio 2004	07/04	Si
Bangladesh	16 de Octubre de 2013	38/14	Si
Belgica	24 de Junio de 2004	06/04	Si
Bolivia	7 de Diciembre de 2016	18/17	Si
Brasil	09 de Agosto de 2016	188/16	Si
Canada	09 de Diciembre de 2005	10/05	Si
Chile	5 de Agosto de 2016	24/17	Si
China	30 de Octubre de 2015	01/16	Si
Colombia	28 de Julio 2016	140/16	Si
Corea del Sur	22 de Febrero de 2017	49/17	Si
Costa Rica	13 de Diciembre de 2013	105/14	Si
Cuba	5 de Diciembre de 2014	68/15	Si
Ecuador	27 de Septiembre de 2007	227/07	Si
El Salvador	23 de Julio de 2003	32/03	Si
España	28 de Febrero de 2003	03/03	Si
Estados Unidos	21 de Marzo de 2016	57/16	Si
Francia	04 de Marzo de 2009	101/09	Si
GAFILAT	19 de Diciembre de 2014	238/15	Si
Georgia	19 de Marzo de 2014	311/14	Si
Grecia	26 de Marzo de 2010	35/11	Si
Guatemala	07 de Agosto de 2003	12/03	Si
Honduras	02 de Febrero de 2004	05/04	Si
Indonesia	14 de marzo de 2018	si	si
Israel	04 de Marzo de 2009	74/09	Si
Japon	01 de Septiembre de 2011	15/12	Si
Macedonia	03 de Marzo de 2010	54/10	Si
Mexico	01 de Octubre de 2010	196/10	Si
Monaco	10 de Junio de 2015	240/15	Si
Nicaragua	09 de julio de 2015	268/15	Si
Panama	5 de Agosto de 2016	189/16	Si
Paraguay	5 de Agosto de 2016	23/17	Si
Peru	27 de noviembre de 2012	428/13	Si
Polonia	22 de Octubre de 2008	12/09	Si
Portugal	28 de Abril de 2005	05/05	Si
Rumania	29 de Junio de 2005	07/05	Si
Rusia	27 de Mayo de 2009	160/09	Si
Serbia	22 de Enero de 2013	138/13	Si
Singapur	22 de Junio 2010	180/10	Si
Sint Maarten	27 de Enero de 2015	193/15	Si
Sudafrica	24 de Enero de 2013	107/13	Si
Turquia	27 de Enero de 2015	194/15	Si
Uruguay	12 de Diciembre de 2016	22/17	Si
Vaticano	24 de Julio de 2014	341/15	Si
Venezuela	03 de Julio de 2003	19/03	Si

En lo que hace a la colaboración entre agencias del Estado, la UIF ha firmado convenios de colaboración con la Oficina Anticorrupción (OA) y el Ministerio de Seguridad en materia de PLA/FT con el objeto de lograr mayor eficiencia y seguridad.

Link acuerdo UIF-OA: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/acuerdo-de-cooperacion-entre-la-oficina-anticorrupcion-y-la-unidad-de-informacion>

Link acuerdo UIF- Ministerio de Seguridad: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-uif-firma-convenio-de-colaboracion-con-el-ministerio-de-seguridad-para-combatir-delitos>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

En este punto, se entiende oportuno mencionar a modo de ejemplo el intercambio dado entre sus contrapartes extranjeras, para un periodo de

tiempo que comprende enero a septiembre de 2018:

- SIE (Solicitud de Información Enviada): 188
- SIR (Solicitud de Información Recibida): 83
- DEE (Divulgación Espontánea Enviada): 58
- DER (Divulgación Espontánea Recibida): 202

Asimismo, en relación a la diseminación que la UIF efectúa como resultado del tratamiento de la información que recibe, corresponde mencionar que, para igual periodo, emitió 628 Informes de Inteligencia al Ministerio Publico Fiscal y/o al Poder Judicial, según corresponda.

42. Párrafo 2 del artículo 14

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Si bien el transporte transfronterizo de efectivo (ingreso y egreso) se encuentra regulado y bajo control de la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP), resulta oportuno informar que la UIF cuenta con acceso en línea, a bases de datos del citado organismo que le permiten conocer, en el marco del tratamiento de la información y de las investigaciones en curso, si una persona determinada cuenta con registros de movimientos de trasportes transfronterizos de fondos. Para el caso de entenderlo necesario, tiene además facultades para requerir información adicional.

Además, la Resolución UIF E 30/2017 establece obligaciones de debida diligencia del cliente (DDC) en relación a las cuentas de corresponsalía transfronterizas. Al respecto el artículo 33 de la norma citada establece lo siguiente: *“ARTÍCULO 33.- Cuentas de corresponsalía transfronteriza. Con respecto a las Cuentas de corresponsalía transfronteriza, las Entidades deberán, siguiendo un enfoque basado en riesgo, evaluar la aplicación de medidas de Debida Diligencia tendientes a:*

a) Reunir suficiente información sobre la institución representada que le permita comprender la naturaleza de los negocios de la institución a la cual le presta el servicio de corresponsalía y determinar, a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de su supervisión y si ha sido objeto de una investigación sobre LA/FT o una acción regulatoria.

b) Evaluar los controles de LA/FT de la institución a la cual le presta el servicio de corresponsalía.

c) Obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales.

d) Constatar que el banco representado haya llevado a cabo la Debida Diligencia sobre los Clientes que tienen acceso directo a las cuentas de la Entidad y que puede brindar la información relevante en materia de Debida Diligencia cuando la Entidad lo solicite.

En ningún caso se abrirá cuenta alguna a los denominados "Bancos Pantalla", es decir, a entidades financieras constituidas en un territorio o jurisdicción en el que no tengan presencia física -medios materiales y dirección- que permita ejercer una gestión real desde dicho territorio. Asimismo, las Entidades deberán constatar que las instituciones representadas no permitan que sus cuentas sean utilizadas por Bancos Pantalla.”

43. Párrafo 3 del artículo 14

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:

- a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;
- b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y
- c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no contengan información completa sobre el remitente.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Las disposiciones legales relacionadas con las transferencias de fondos son reguladas por el Banco Central de la República Argentina.

Respecto de las cuentas de corresponsalía transfronteriza, el artículo 33 de la Resolución UIF N° 30-E/2017 establece que las entidades deberán aplicar medidas de debida diligencia con un enfoque basado en riesgo; se remite a lo transcrito en el punto 42. Párrafo 2 del artículo 14.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La UIF dispuso en el **Artículo 40 de la Resolución N° 30/2017: “Transferencias electrónicas”**

En relación a las transferencias electrónicas se deberá considerar lo siguiente:

- a) En las transferencias electrónicas locales, las Entidades deberán obtener la siguiente información: (i) nombre completo o denominación social del ordenante, (ii) número de CUIT, CUIL, CDI o documento nacional de identidad del ordenante, (iii) número de cuenta del beneficiario, (iv) Clave Bancaria Uniforme (CBU) del beneficiario, (v) número de CUIT, CUIL, CDI o Documento Nacional de Identidad del beneficiario, (vi) movimiento de fondos (importe y moneda de la transferencia).*
- b) En las transferencias electrónicas de fondos desde y hacia el exterior, las Entidades deberán obtener la siguiente información: (i) nombre completo o denominación social del ordenante, (ii) domicilio o número de Documento Nacional de Identidad o número de CUIT, CUIL, CDI o CIE del ordenante, (iii) número de identificación del Cliente en la entidad ordenante, (iv) nombre completo y denominación social del beneficiario, y (v) número de transacción.*
- c) En el caso de que una Entidad sea intermediaria entre el ordenante y la beneficiaria, deberá garantizar que la totalidad de la información circule con las transferencias, sin pérdida de datos o campos.*

- d) Las anteriores reglas resultan de aplicación incluso en los casos en los que ordenante y beneficiario coincidan.
- e) Las Entidades que actúen como intermediarias o beneficiarias de transferencias de fondos deben contar con políticas y procedimientos basados en los Riesgos de LA/FT para determinar (i) cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la información requerida sobre el ordenante y/o el beneficiario; y (ii) la acción de seguimiento apropiada.

Asimismo, en el caso de las remesas, el **Artículo 18 de la Resolución UIF N° 66/2012** dispone en sus incisos a y b:

Los Sujetos Obligados deberán:

a) cuando actúen como Entidad Ordenante: i) identificar al ordenante (conforme artículos 11 a 17 y 20, según corresponda) y al beneficiario (nombres y apellidos completos; tipo y número de Documento Nacional de Identidad o equivalente y domicilio -calle, número, localidad, provincia y país-) y ii) indicar número de cuenta (cuando se utilice para realizar la operación) o asignar a la operación un número único de individualización que permita su trazabilidad.

El Sujeto Obligado deberá adoptar todos los recaudos necesarios al momento de incorporar los datos del ordenante, para asegurarse que la información sea completa y exacta.

La información deberá permanecer con la transferencia, a través de la cadena de pagos.

b) cuando actúen como Entidad beneficiaria: i) tomar medidas necesarias para identificar las transferencias que carezcan de la información requerida sobre el ordenante y/o beneficiario; ii) identificar y verificar la identidad del beneficiario (conforme artículos 11 a 17, según corresponda, si no ha sido previamente verificada)."

Además el Artículo 25, inciso II, de la Resolución UIF N° 66/2012 dispone respecto de las circunstancias que deberán especialmente valoradas para identificar inusualidades y posibles operaciones sospechosas: "(II) Cuando una transferencia electrónica de fondos sea recibida sin la totalidad de la información que la deba acompañar."

En todos los casos, los sujetos obligados deben tener la garantizar la guarda de la información de las operaciones durante **10 años**.

Link a la Res. N° 30-E/2017:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275996/norma.htm>

Con respecto a las **Cuentas de corresponsalía transfronteriza**, las Entidades Financieras y Cambiarias deberán, siguiendo un Enfoque Basado en Riesgo, evaluar la aplicación de Medidas de Debida Diligencia tendientes a:

a) Reunir suficiente información sobre la institución representada que le permita comprender la naturaleza de los negocios de la institución a la cual le presta el servicio de corresponsalía y determinar, a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de su supervisión y si ha sido objeto de una investigación sobre LA/FT o una acción regulatoria.

b) Evaluar los controles de LA/FT de la institución a la cual le presta el servicio de

corresponsalía.

c) Obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales.

d) Constatar que el banco representado haya llevado a cabo la Debida Diligencia sobre los Clientes que tienen acceso directo a las cuentas de la Entidad y que puede brindar la información relevante en materia de Debida Diligencia cuando la Entidad lo solicite.

44. Párrafo 4 del artículo 14

4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

A modo de ejemplo, la Resolución UIF N° 97/2018 que regula la colaboración del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la supervisión de las entidades financieras, en su Artículo 1º se establece que:

“ARTICULO 1º.- Objeto. La presente reglamentación tiene por objeto establecer los lineamientos marco para la implementación del sistema de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (también denominado como PLA/FT) de las entidades financieras y cambiarias comprendidas en los incisos 1 y 2 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, con un enfoque basado en riesgo de acuerdo a los estándares establecidos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), estableciendo así los roles y responsabilidades para una efectiva coordinación en la colaboración que le corresponde al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (en adelante BCRA) con esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante UIF) en los términos del inciso 7 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.”

Es decir, la resolución citada recepta las recomendaciones del GAFI, aplicando un enfoque basado en riesgos. Del mismo modo, las Resoluciones que emite la UIF en materia de PLA/FT mencionan entre sus considerandos las recomendaciones GAFI así como acuerdos que se hayan efectuado en el ámbito regional, interregional o multilateral en materia de PLA/FT.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Link a las Resoluciones UIF en materia de PLA/FT:

<https://www.argentina.gob.ar/uif/normativa/resoluciones>

45. Párrafo 5 del artículo 14

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

46. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

..

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

UIF: En su función de regulador del sistema preventivo de LA/FT, la UIF, junto con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra en proceso de revisión y modificación de todo el marco regulatorio aplicable a los Sujetos Obligados, a fin de modernizar, racionalizar y mejorar la eficiencia del proceso de gestión de riesgos de LA/FT que estos actores del sector privado deben implementar a fin de cumplir con sus obligaciones en la materia.

V. Recuperación de activos

51. Disposición general

225. Artículo 51

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención, incluidos los procedimientos jurídicos aplicados en su país para aceptar solicitudes de recuperación de activos y el plazo para darles cumplimiento, a la luz de los problemas que enfrentan los países en lo relativo al proceso de recuperación de activos habida cuenta de las diferencias en materia de ordenamientos jurídicos y de la complejidad de sus procedimientos.

En los últimos años, Argentina realizó cambios significativos en su legislación, políticas y regulaciones relacionadas con la recuperación de activos.

En relación a la normativa interna de Argentina, el decomiso de los bienes producidos de cualquier delito está previsto en el Código Penal Argentino, el artículo 23 del Código Penal establece que en todos los casos en que recayese condena, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho (instrumentos) y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito.

Artículo 23 del Código Penal de la Nación:

“ARTÍCULO 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.

Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.

Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor

comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima. (Párrafo sustituido por art. 20 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012).

En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. (Párrafo incorporado por art. 6º de la Ley N° 26.683 B.O. 21/06/2011).

Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. (Párrafo incorporado por art. 6º de la Ley N° 26.683 B.O. 21/06/2011).

El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.

El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”.

Aquella referencia a las “ganancias” y al “producto o provecho” del delito, fueron introducidas al Código Penal por medio de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, Ley N° 25.188 (año 1999). Anteriormente el Código Penal hacía referencia a la posibilidad de decomisar los instrumentos y los “efectos” del delito, aunque la jurisprudencia no era unánime en cuanto al concepto de ese término.

En relación con el alcance del decomiso, si bien en el Código Penal no existe una definición concreta de qué se entiende por “producto del delito”, esta norma sí hace una clara referencia a las ganancias derivadas del delito, por lo cual la determinación de este concepto queda librada a los jueces según las condiciones particulares de cada caso.

Por eso en lo que respecta a las ganancias o beneficios derivados de un delito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en reiterados precedentes que “los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional

estricto la razón de justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficios” (Cfr. CSJN Fallos: 283:66; 254:320; 320:277 del 05/03/1997; 320:1038 del 19/05/1997; 320:1472 del 15/07/1997; 320:1717 del 12/08/1997; 321:2947 del 12/11/1998; 323: 929 del 04/05/2000 y 325:3118 del 26/11/2002).

El artículo 23 del Código Penal hace extensivo el alcance del decomiso a terceros ajenos al proceso penal en dos supuestos: a) cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos; o b) cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.

La posibilidad de decomisar bienes de personas jurídicas también está prevista en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas (n° 27.401), que además de establecer sanciones de contenido económico proporcionales y disuasivas, determina que en todos los casos previstos en esta ley serán de aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en el Código Penal.

Dentro de este régimen legal, el principio de recuperación de activos también está previsto en el artículo 9°, ya que uno de los requisitos exigidos para la eximición de pena es que la persona jurídica hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido. Asimismo, en el marco de los acuerdos de colaboración previstos en el artículo 18, se expresa que las personas jurídicas deberán restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito; abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena; o realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado.

En segundo lugar, en relación con la reparación de perjuicios, es el artículo 29 del Código Penal el que establece la facultad del juez penal de ordenar la reparación del daño producido por el delito.

Este artículo establece que:

ARTÍCULO 29.- “La sentencia condenatoria podrá ordenar:

1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.
3. El pago de las costas.”

El artículo 14 y subsiguientes (arts. 14 a 17) del Código Procesal Penal de la Nación regulan el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal en el que sea promovida la acción penal por cualquier delito, incluidos los previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. De este modo, según el

artículo 14, la acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la pretensión resarcitoria civil podrá ser ejercida por el titular de aquélla, por sus herederos en relación a su cuota hereditaria, representantes legales o mandatarios, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo tribunal en que se promovió la acción penal. Asimismo, los artículos 87 a 96 regulan las formalidades, facultades y deberes del actor civil dentro del proceso penal.

Debe tenerse presente que los institutos previstos por los artículos 23 y 29 del Código Penal argentino para el decomiso de los bienes producidos por el delito y la restitución o reparación del daño ocasionado por el delito, respectivamente, requieren de una sentencia previa. En el caso del artículo 23 deberá ser una sentencia condenatoria contra los autores y partícipes del delito, mientras que en el caso del artículo 29, el artículo 16 del Código Procesal Penal establece que la absolución del procesado no impedirá al tribunal penal pronunciarse sobre la acción civil, en la sentencia. Lo cierto es que ambas figuras requieren de una sentencia definitiva.

Los activos que son productos de o instrumentos usados para los delitos de lavado de activos, cualquiera de sus delitos determinantes y/o el delito de financiamiento del terrorismo se encuentran sujetos a decomiso en los términos de lo previsto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación Argentina.

En relación a esto último, el Art. 305 del Código Penal estipula que, en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo y sin necesidad de condena penal, aquellos bienes sobre los cuales hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiese ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Jurisprudencialmente, nuestro país cuenta con distintos antecedentes de decomiso sin condena o decomiso anticipado.

Independientemente de la vía penal, en enero de 2019, se promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 62/2019, que complementa la legislación de fondo estableciendo un régimen procesal de acción civil para extinción de dominio, con el objetivo de agilizar el procedimiento de recupero de activos que son objeto/provecho del delito, dejando a salvo los derechos de terceros adquirentes de buena fe, en determinadas circunstancias.

A modo de resumen, a continuación se destacan los puntos centrales de la nueva reglamentación:

Crea una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación, que será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares, junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones en el fuero Federal Civil y Comercial, mediante un proceso sumarísimo.

El demandante debe demostrar que los bienes fueron incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de la presunta comisión del delito investigado y que su incorporación no corresponde razonablemente a los ingresos

de su tenedor, poseedor o titular, o que representan un incremento patrimonial injustificado, proviene directa o indirectamente de uno de los delitos previstos en el DNU (art. 5°).

Es requisito de admisibilidad de la demanda de extinción de dominio que todos los bienes que sean objeto de extinción de dominio hayan sido previamente cautelados por el juez penal interviniente en la investigación del delito que los originó.

Luego de la medida cautelar en sede penal y la demostración del origen ilícito en sede civil, el demandado podrá producir prueba para demostrar que los bienes provenían de ingresos legítimos.

Busca alcanzar: A) bienes susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. B) La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso anterior; C) También incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de esos bienes.

Alcanza a los acusados de delitos relacionados a estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo. También el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Y el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.

No se requiere sentencia firme de condena en la acción penal. Es independiente. Sólo un grado de probabilidad respecto de la vinculación de los bienes con el delito (estándar requerido para las medidas cautelares en sede penal).

Durante el proceso, la administración de los bienes muebles e inmuebles estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Introduce la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, el colaborador eficaz, fijando una compensación de hasta el 10 por ciento de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.

Establece la prescripción de la acción a los 20 años.

Para asegurar los bienes que puedan quedar alcanzados por el decomiso o por la reparación de daños, el ordenamiento legal contiene disposiciones para la localización, rastreo y congelamiento preventivo de activos. Con esa finalidad los párrafos 9° y 10°, del artículo 23 del Código Penal autorizan la adopción de medidas cautelares desde el inicio del proceso penal, ya que establecen que: “El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas

cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.

El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”.

Respecto a la normativa argentina sobre Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley N° 24.767), ésta prevé en su art. 1 que la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél, y que las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda.

Dicha Ley contiene normas específicas sobre cooperación internacional en materia de decomiso. Es así que en su Parte IV la Ley establece los procedimientos específicos para el reconocimiento y cumplimiento de condenas dictadas en el extranjero; dedicándose el capítulo III, del Título I de esta Parte, a las órdenes de multa o decomiso de bienes, dictadas en un país extranjero, que podrán ser ejecutables en la República Argentina, por vía de la Asistencia Jurídica Internacional.

En concreto, el artículo 95 y siguientes de la Ley establecen la posibilidad de esa ejecución y requisitos (artículo 95), la posibilidad de compartir los bienes obtenidos a través de la ejecución de la orden de decomiso (artículo 96), el procedimiento y rol del Ministerio Público Fiscal (artículo 97, 98, 100 y 101), a saber:

Artículo 95 Ley 27.767:

“Las condenas de multa o decomiso de bienes dictadas en un país extranjero, serán ejecutables en la República Argentina, a solicitud de un tribunal de aquel país, cuando:

- a) La infracción fuese de competencia del Estado requirente, según su propia legislación;
- b) La condena sea definitiva y esté firme
- c) El hecho que la motiva constituya infracción punible para la ley argentina, aun cuando no tuviera previstas las mismas penas
- d) No se dieran las circunstancias del artículo 8° párrafos a) y d)
- e) La pena no se haya extinguido según la ley del Estado requirente
- f) El condenado no hubiese sido juzgado en la Argentina o en cualquier otro país

por el hecho que motiva el pedido

g) El condenado hubiese sido personalmente citado y se haya garantizado su defensa

h) No existieren las razones especificadas en el artículo 10.

La ayuda no podrá consistir en la aplicación de una pena de prisión por conversión de la multa.”

En cuanto a las normas de cooperación para el decomiso definitivo de activos, la mencionada Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, en sus artículos 67 y 68, prevé reglas para la asistencia en la investigación y juzgamiento de delitos, entre los que se incluyen medidas como el secuestro de bienes o registros domiciliarios. En estos casos se requerirá que el hecho que motiva el pedido de asistencia constituya un delito en la Argentina.

El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales tienen jerarquía superior a las leyes.

En ese sentido, los últimos Tratados de asistencia jurídica firmados por la Argentina poseen normativa sobre cooperación en materia de bienes (tratados bilaterales con China, Colombia, El Salvador, Francia, México, Portugal, Suiza, Canadá, Australia, Perú, España, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica, Corea, Túnez, Rusia, Mercosur, Bolivia y Chile). En general, dicha normativa establece un compromiso para ambos Estados de cooperar en materia de bienes, incluyendo el decomiso a través de una solicitud de asistencia jurídica, haciendo referencia a la legislación interna con relación al procedimiento a seguir. Los acuerdos y tratados se pueden consultar en el siguiente

link: <https://www.mpf.gob.ar/cooperacion-ai/normativa/?pag=0&class=cssPaginadorNumero>

La normativa en materia de cooperación internacional para fines de decomiso la completan las convenciones que poseen normativa sobre cooperación internacional, esto son tratados internacionales que no son específicos sobre cooperación pero poseen regulación sobre la materia, entre las que se encuentra, por supuesto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado el criterio de obligatoriedad en el cumplimiento de los tratados y convenciones con independencia del derecho interno. Así ha sostenido “el desconocimiento de estos preceptos podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia de represión del delito (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) (Fallo del 19 de octubre de 2000, "Ralph, Nelson Eliseo s/ extradición en causa 'Jefe de Operaciones Dpto. Interpol s/ captura". Este precedente del máximo tribunal se refiere a la cooperación internacional para la extradición, pero los principios jurídicos que emanan de este fallo pueden ser aplicados de igual modo en materia de cooperación para la ejecución de todo tipo de condenas incluidas las de decomiso y restitución de activos.

La República Argentina forma parte de las siguientes redes en materia de

cooperación penal:

-Red de Cooperación de la Organización de Estados Americanos.

-IberRed (utilizado para cooperación penal, civil y comercial).

-RRAG de GAFILAT (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT).

-Red Especializada de “Fiscales contra la Corrupción” de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

A través de su Unidad de Información Financiera (UIF), forma parte del Grupo Egmont, de intercambio de información referida al lavado de activos y al financiamiento de terrorismo.

A su vez, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y otros organismos con facultades reguladoras, participan con los Estados Unidos de América del “US-Argentina Dialogue on Illicit Finance (AUDIF)”. Dicho Diálogo tiene por objeto la cooperación para enfrentar las actividades ilícitas financieras. Entre otras iniciativas, se trabaja en el facilitamiento de la cooperación e intercambio de información en casos de criminalidad económica y lavado de activos (test cases).

Por su parte, la Policía Federal Argentina es miembro de INTERPOL, a través de un Departamento específico, y consecuentemente de la Red Mundial de Puntos de Contacto sobre Recuperación de Activos.

Algunos de los tratados más relevantes con que cuenta el país en materia de cooperación penal internacional, son los siguientes:

- i. Bilaterales: Australia: Ley 24038; Canadá: Ley 25460; Colombia: Ley 25348; El Salvador: Ley 25911; España: Ley 23708; Estados Unidos: Ley 24034; Francia: Ley 26196; Italia: Ley 23707; México: Ley 26137; Perú: Ley 25307; Portugal: Ley 26440; Sudáfrica: Ley 27.018, Corea: Ley 26.782, Túnez: Ley 26.611, Rusia (de fecha 12/07/2014).
- ii. Regionales: Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del MERCOSUR: Ley 25095; Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile: Ley 26004; Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal: Ley 26139.
- iii. Convenciones con normativa sobre cooperación jurídica: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas: Ley 24072; Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: Ley 25632; Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Protocolo

contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Convención Interamericana contra la Corrupción: Ley 24759; Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción: Ley 26097; Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales: Ley 25319.

- iv. Tratados bilaterales o multilaterales sobre extradición: Australia: Ley 23729; Bélgica: Ley 2239; Brasil: Ley 17272; Corea: Ley 25303; España: Ley 23708; Estados Unidos: Ley 25126; Italia: Ley 23719; Países Bajos: Ley 3495; Paraguay: Ley 25302; Perú: Ley 26082; Reino Unido: Ley 3043; Suiza: Ley 8348; Uruguay: Ley 25304; Tratado de Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889): Ley 3192; Tratado Interamericano de Extradición: Decreto Ley 1638/1956.

La República Argentina ya comunicó a Uruguay el cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada en vigencia del Acuerdo Marco de Recuperación de Activos suscrito en Montevideo el 2 de abril de 2019.

Asimismo, la República Argentina ha comunicado el cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada en vigencia del Acuerdo Marco de Recuperación de Activos del MERCOSUR suscrito en diciembre de 2018, convirtiéndose en el primer país en hacerlo.

Como firmante de la Convención Para Combatir El Cohecho De Servidores Públicos Extranjeros En Transacciones Comerciales Internacionales, la República Argentina es miembro del Working Group on Bribery de la OECD y miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción participan regular y activamente de las reuniones de agencias de cumplimiento de la ley al amparo de este comité (Law Enforcement Officials Informal Meeting).

A nivel regional, la Argentina preside la red latinoamericana Latin America & Caribbean Anti-Corruption Law Enforcement Network, cuya primera reunión se hizo en Buenos Aires en Septiembre de 2018.

Con anterioridad, en Argentina, el recupero de activos provenientes o producto de los hechos de corrupción, no constituía un objetivo expreso en las investigaciones, aunque se presentaban recursos en los procesos penales con esa finalidad.

Para el desarrollo de la función de recuperos de activos como parte de las investigaciones y la actuación en los procesos, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) formaron parte de una iniciativa de asistencia técnica del Banco Mundial en el marco del programa Stolen Assets Recovery (StAR). Incluyó asesoramiento estratégico, coordinación entre organismos y capacitación. De esta manera, se incorporó de forma regular la actividad de detección y aseguramiento de activos con miras a su recupero, como parte del protocolo de investigaciones.

Particularmente, la Oficina Anticorrupción (OA) participó en los equipos de trabajo que promovieron los anteproyectos de ley de Extinción de Dominio, y brindó colaboración en la redacción del Régimen de la Acción Civil para la Extinción de

Dominio y el Recupero de Activos aprobado mediante Decreto N° 62/2019.

Asimismo, entre ambos organismos (OAY UIF) se celebró un convenio con el objeto de establecer canales de comunicación y acciones de cooperación a fin de prevenir y detectar la comisión de delitos vinculados al lavado de activos provenientes de la corrupción, de conformidad a las competencias relativas a cada parte.

En este sentido, se estableció un canal de intercambio de información, asistencia mutua en investigaciones, coordinación y actuación en querellas. Además, se coordinó la participación común en procesos de cooperación internacional para el recupero de activos (Argentine and US Dialogue in Financial Crimes con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de US -AUDIF-; Iniciativa StAR del Banco Mundial).

La OA aportó su experiencia derivada de los casos investigados para colaborar en la elaboración de algunas normas del nuevo marco regulatorio de prevención de LA-FT (Resolución 30/2018 y concordantes de UIF).

Contribución con el Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad creó unidades especializadas en materia de corrupción en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

De esta forma, la Oficina Anticorrupción recuperó el auxilio de fuerzas policiales en sus tareas de investigación de campo, que se había dejado de utilizar en el pasado a pesar de las facultades legales habilitantes.

A su vez, el Ministerio de Seguridad estableció canales de recepción de denuncias e información y recompensas a los ciudadanos que hicieran aportes útiles a las investigaciones más importantes en materia de corrupción, cooperando con la actividad de la OA.

En conjunto con funcionarios de esa cartera se promovió un marco legal de recupero de activos más ágil y se trabajó en la redacción primero, e implementación práctica luego, del DNU de extinción de dominio.

Se brindó capacitación específica en materia de investigación y en particular sobre el nuevo marco de responsabilidad corporativa a agentes de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

Intercambio con Estados Unidos

La cooperación internacional en la investigación de casos de corrupción tuvo un capítulo importante con los EEUU.

En primer lugar se tomó parte del Argentine and US Dialogue in Financial Crimes con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de US -AUDIF- junto con la UIF y la autoridad central de intercambio (MINJUS). Eso permitió la cooperación mutua en el avance de investigaciones concretas algunas ya en con acusación fiscal en ambos países.

Al mismo tiempo, se realizaron procesos de cooperación e intercambio en otros casos de interés.

Como parte de esta cooperación, en 2017 se promovieron reuniones con jueces y fiscales que llevaban adelante importantes investigaciones de corrupción (vinculadas al proceso Lava jato en Brasil) con autoridades del DOJ y el FBI en Washington y Buenos Aires.

Por otra parte y en el marco de la cooperación entre países, en 2017 dos profesionales de la OA realizaron capacitaciones en Estado Unidos, permitiendo fortalecer vínculos de cooperación.

En este sentido, una integrante de la Oficina Anticorrupción formó parte de un seminario de intercambio del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales, en el marco del Proyecto de Rendición de Cuentas en el Gobierno (Julio - Agosto 2017). Este proyecto exploraba el compromiso estadounidense con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en todos los niveles de su gobierno. Los participantes examinaron los métodos utilizados para prevenir la corrupción, fomentar el liderazgo ético y la transparencia y asegurar la rendición de cuentas a los ciudadanos. Los participantes exploraron el rol que desempeñan las ONG, los grupos de defensa y los medios de comunicación como "guardianes", así como la forma en que los medios de comunicación y redes sociales se utilizan cada vez más para supervisar la buena gobernanza. También, examinaron las cuestiones relativas a las denuncias, el impacto de la Ley de acceso a la información y la promoción de la iniciativa de datos abiertos.

Por otro lado, un abogado especializado de la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción participó del seminario de capacitación titulado "Anti-Corruption and Model Law: Executive Policy and Development Symposium" del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Su objetivo fue brindar a los participantes un conocimiento más profundo acerca de metodologías de inteligencia, análisis e investigación de los delitos de corrupción y delitos relacionados con los procesos de contratación pública. El Seminario proporcionó así un programa de capacitación en materia de justicia penal y políticas públicas que vincula la teoría y la ciencia de la justicia penal con la formulación y ejecución de políticas públicas eficaces y responsables.

Intercambio con Brasil

Al tomar conocimiento de revelaciones en Brasil y en EEUU vinculadas a hechos de corrupción y gran corrupción en Argentina, se procuró favorecer un canal de asistencia entre fiscales y autoridades de ambas jurisdicciones. Se presentaron dudas sobre marco normativo para aceptar la cooperación internacional, por cuanto existían restricciones al uso de la evidencia o información en el marco de soluciones de acuerdo. Esto afectó la capacidad de respuesta de Argentina ante el avance de las investigaciones derivadas del esquema multinacional de sobornos conocido como Lava Jato.

La OA promovió formalmente en las causas y en el marco institucional, una solución negociada con base en las convenciones internacionales. A partir de esa posición, participó de un proceso multiagencias para elaborar un proyecto de acuerdo que permitiera superar la dificultad. Ello derivó, a través del Ministerio Público Fiscal, en un

acuerdo especial con fiscales de Brasil para cada caso, que fue aprobado por resolución del Procurador General.

Asimismo, la Autoridad Central Argentina ha establecido un diálogo fluido con las Autoridades Centrales de Chile, Brasil, Perú y Estados Unidos de América a través del intercambio de correos electrónicos para transmitir y recibir solicitudes de MLA.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la Autoridad Central Argentina apoya y asiste a las autoridades judiciales solicitantes, asesorando sobre los requisitos formales y sustantivos del MLA y estableciendo contactos informales previos con la Autoridad Central extranjera para minimizar los riesgos de demora o rechazo. Es de destacar que las investigaciones relacionadas con la corrupción o casos de soborno.

Los casos de soborno tienen un componente patrimonial, por lo que es vital promover la cooperación previa informal entre las unidades de inteligencia financiera.

Es relevante destacar que en casos relacionados con la corrupción, las Autoridades Centrales se han enviado mutuamente información espontánea (notitia criminis). La Autoridad Central argentina usualmente individualizó los tribunales y fiscales nacionales que se beneficiarían de esta información y les envió esta oferta.

En la misma línea, la Autoridad Central interactúa activamente con otras Autoridades centrales con el objetivo de acelerar los procedimientos relacionados con casos urgentes de corrupción, a través de comunicaciones por correo electrónico y teléfono, así como teleconferencias. En este sentido, en casos de corrupción que incluyen solicitudes de asistencia judicial recíproca, la AMF argentina ha desempeñado un papel central en la obtención de información a través de las autoridades de esos territorios sobre la legislación local aplicable y las etapas procesales para completar cualquier paso necesario para el cumplimiento de las solicitudes, siguiendo de los casos y compartir cualquier detalle con los jueces intervinientes argentinos con el fin de avanzar con la cooperación judicial de manera efectiva y a su debido tiempo.

En los procedimientos de MLA (Mutual Legal Assistance), si se solicitan medidas de recuperación de activos (confiscación, congelación o incautación de bienes) normalmente implica la presentación de información adicional para establecer el título o la propiedad de los bienes, los detalles de la cuenta bancaria o la participación en una corporación, que normalmente está en alta mar. En este contexto, la coordinación y la comunicación fluida entre las unidades de inteligencia, fiscales, jueces y la Autoridad Central es esencial para lograr la ejecución exitosa de la medida.

En estos casos, se promueven las asistencias técnicas y el contacto previo entre las autoridades policiales y se consideran una buena práctica.

La Autoridad Central apoya a los jueces y fiscales, antes y durante la ejecución de la solicitud de MLA, con cooperación informal, a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos sobre cómo mejorar las solicitudes de MLA con asesoramiento técnico, o mediante el uso de estos mismos canales con otras autoridades centrales para comunicarse directamente con respecto al estado de cumplimiento de las solicitudes. Asimismo, la Autoridad Central brinda la posibilidad de enviar las solicitudes de asistencia

judicial recíproca a algunos países por correo electrónico, lo que acelera y hace más eficiente el diálogo entre las autoridades. Esta buena práctica aumenta la posibilidad de tener resultados positivos en las solicitudes de MLA.

Con respecto a las investigaciones de soborno en el extranjero donde se aplica la Convención Antisoborno de la OCDE o la CNUCC, la Autoridad Central ha enviado, a solicitud de la Corte interviniente, nacional o extranjera, varias notas que solicitan el estado de las solicitudes de MLA tanto a los Tribunales nacionales como a Autoridades centrales extranjeras dependiendo de si se trata de una solicitud activa o pasiva. A pedido de los jueces intervinientes, y para acelerar los procedimientos pendientes, la Autoridad Central Argentina solicita información a otras Autoridades centrales sobre el estado de los MLA incompletos. En un sentido similar, y más allá de la demanda de otras Autoridades Centrales, la Autoridad Central Argentina solicita información de estado a los jueces locales que intervienen cuando la finalización de las solicitudes de MLA aún está pendiente en sus oficinas.

Además, la Autoridad Central de MLA, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto, organizó varios cursos de capacitación relacionados con la recuperación de activos, a fin de fortalecer la cooperación entre los diferentes organismos que participan en las solicitudes y respuestas del rogatorio. letras. Por ejemplo, la Conferencia sobre “Cómo hacer cumplir la Convención Antisoborno de la OCDE” que tuvo lugar el 1 de marzo de 2018, el “Taller sobre la Convención Antisoborno de la OCDE” el 31 de octubre de 2017 y el Séptimo Seminario sobre Delincuencia Internacional Cooperación el 5 de diciembre de 2016, donde se plantearon temas relacionados con la recuperación de activos.

Por su parte, la Ley N° 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal le otorgó al Ministerio Público Fiscal de la Nación un rol central tanto en materia de asistencia jurídica como de detención preventiva, extradición y ejecución de condenas de multa o decomiso de bienes, dictadas en un país extranjero, al otorgarle participación en la tramitación y ejecución de los pedidos de asistencia jurídica internacional. Dicha normativa expresamente establece que el Ministerio Público representa el interés por la ayuda si la asistencia requiriese la intervención de un juez. Incluso, la mencionada ley habilita a que el Ministerio Público Fiscal ejecute los pedidos de asistencia. En materia de condenas de multa o decomiso de bienes la ley le asignó al Ministerio Público Fiscal la función de representar el interés por la ejecución en el trámite judicial.

La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DGCRI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, colabora con los Fiscales para garantizar un adecuado cumplimiento de colaboración solicitada por otros Estados y en pedidos que deban realizarse desde Argentina a otros países. La DGCRI fue creada mediante la Ley 27.148 y por Resolución PGN N° 426/16, y a ella se le asignó la misión de coordinar todas las actividades concernientes a la cooperación internacional, para lograr una rápida y eficaz respuesta a los requerimientos de las distintas fiscalías, procuradurías especializadas, unidades fiscales especializadas y direcciones generales.

Esta Dirección brinda asesoramiento a los fiscales y procuradurías en materia de cooperación internacional, efectuando el seguimiento de todos los procesos de asistencia

jurídica y extradición, tanto pasivos como activos, interviniendo a requerimiento de los fiscales federales, en el proceso en cualquier etapa, incluso en los juicios de extradición. Asimismo, posee una base de datos con información sobre todos los pedidos de extradición, los dictámenes de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los fallos que se dictan en consecuencia.

Asimismo, este Ministerio Público Fiscal es parte de acuerdos interinstitucionales entre Ministerios Públicos, espacios de articulación y de las redes de transmisión de información que fueron enumeradas al inicio (foros tales como la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPPM), la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IBERRED) y la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP).

En el marco de esta última, se ha suscripto el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP, instrumento que posibilita la colaboración directa entre Ministerios Públicos.

Adicionalmente, el Ministerio Público Fiscal tiene puntos de contacto en la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), integrada por puntos de contacto de todos los países miembros del GAFILAT más Francia y España, que representan tanto a las autoridades policiales, fiscales o ministerios públicos, unidades de inteligencia financiera u otras autoridades centrales relevantes en la materia. La RAAG fue creada con el objetivo de facilitar la cooperación internacional para la identificación y localización, tendiente a la recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas.

El Ministerio Público Fiscal utiliza, dentro del ámbito de IBERRED, la red Iber@, es un sistema de comunicación seguro para los puntos de contacto que la conforman. Se destaca también el intercambio que se tiene con organismos tales como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o la Agencia de la Unión Europea para la cooperación en justicia penal (Eurojust), con los cuales se articula a los fines de prestar colaboración.

En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal ha ido fortaleciendo su política de actuación en materia de recupero de activos.

En el año 2009, mediante las Resoluciones Nro. 129/2009 y 134/2009, el entonces Procurador General de la Nación, dictó instrucciones generales para todos los fiscales para que, una vez acreditados mínimamente los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, tengan o no delegada la instrucción en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal, requieran al juez interviniente el embargo preventivo de los bienes que correspondan (Res. 129/09); y que, en el marco de las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica, los fiscales realicen -en forma simultánea a las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del hecho ilícito-, la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas (Res. 134). En ambas resoluciones se citaron los compromisos asumidos por la República Argentina al suscribir la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como un justificativo de las medidas propuestas.

Asimismo, con el objetivo de desarrollar una política activa, en el año 2014 y por Resolución PGN N° 339/2014, se creó en el ámbito de la Procuración General Nación la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), como una unidad de asistencia a las fiscalías y procuradurías intervinientes en casos de criminalidad económica compleja, entre la que se encuentran los casos por hechos de corrupción.

Entre los fundamentos de dicha resolución se reconoció que la República Argentina se había comprometido internacionalmente a avanzar en acciones concretas para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos, a partir de la firma de diversas convenciones. Entre ellas se citaron expresamente: la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otras.

A la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes le fue asignada la misión central de desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad compleja y el crimen organizado.

Entre las funciones encomendadas se encuentran las de: (a) diseñar programas de acción dirigidos a incrementar la eficiencia en el recupero temprano de activos; (b) proyectar estrategias y protocolos de investigación para el recupero de activos de origen delictivo; (c) proponer reformas legislativas en aras de hacer más eficiente el recupero de activos y la administración de bienes durante el proceso; (d) generar una base de datos con la información disponible sobre medidas judiciales tendientes a lograr el recupero de activos, bienes decomisados y su destino; (e) solicitar a las fiscalías y organismos competentes en la materia la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; (f) realizar publicaciones sobre la materia; (g) sugerir, a solicitud de los fiscales, medidas tendientes a lograr el recupero temprano de activos de origen ilícito.

De este modo la Dirección brinda asistencia técnica y colaboración a las Procuradurías especializadas dependientes de la Procuración General de la Nación y a las Fiscalías de todo el país con competencia en delitos federales (entre los que se encuentran los casos de corrupción contra la Administración Pública Nacional) y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyas competencias no hayan sido transferidas a la justicia local.

Dicha colaboración es prestada en cada una de las distintas etapas que supone el proceso de recupero de activos, desde la investigación patrimonial, dirigida a identificar y localizar los bienes pasibles de decomiso o restitución (instrumentos, objeto, producto y provecho del delito). Luego en la etapa precautoria, orientada a asegurar los bienes identificados a fin de que durante el transcurso del proceso no se realicen actos que impidan su ejecución, y en todos aquellos supuestos en los cuales la medida cautelar suponga el desapoderamiento del bien al imputado (secuestro del automotor, clausura de inmuebles, intervención o administración judicial etc.), asiste en el diseño de estrategias

de administración de activos, que permitan conservar el valor de los bienes durante el proceso (sin asumir la gestión de los activos incautados). Finalmente, la restitución, reparación y en su caso, el decomiso, son medidas que únicamente serán de cumplimiento efectivo si se obtienen luego de haber transitado exitosamente esas distintas fases o etapas.

Otra de las áreas específicas dentro de la Procuración General de la Nación, dirigida a una mayor eficiencia en investigaciones complejas de delitos económicos, es la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones (en adelante DAFI).

DAFI fue creado por el artículo 33 de la Ley N ° 27.148 y por la Resolución PGN N ° 2635/2015. Se le asignaron funciones específicas para mejorar el procesamiento en casos de delincuencia organizada y otros fenómenos criminales relevantes, cuya investigación implica técnicas económicas y contables complejas.

Sus funciones principales consisten en asesorar a los fiscales en casos complejos; producir informes y opiniones sobre asuntos económicos y contables; cooperar en investigaciones penales en la identificación de activos de origen ilícito; sugiera y promueva medidas probatorias para la investigación de maniobras complejas, actúe en casos judiciales relevantes como expertos calificados y sugiera programas de capacitación sobre asuntos de su especialidad a la Procuración General.

Entre las herramientas desarrolladas por DAFI destinadas a facilitar la investigación de asuntos económicos y financieros se encuentra la "Plataforma Virtual de Investigación Financiera". Esta plataforma virtual se lanzó en 2016 como una herramienta útil de gestión de los aspectos económicos de un delito. Está disponible para todos los miembros del Ministerio Público Fiscal a través del sitio institucional de Intranet, y cuenta con consultas de información ordenadas por la agencia para ser consultadas, pautas y tutoriales, y permite generar un requisito y una solicitud de apoyo en investigaciones financieras.

Asimismo, en 2017, DAFI publicó la "Guía de Investigación Financiera", que fue diseñada como una herramienta dinámica que permite estandarizar los métodos manejados por los miembros de PPO en investigaciones financieras.

Para tal fin, se realizó una compilación que cubre tanto las experiencias obtenidas de las investigaciones encargadas por los fiscales, como la experiencia acumulada por los miembros del DAFI. También se tuvo en cuenta la información reunida en el "Manual de Investigación de Activos" desarrollado por la antigua Oficina de Coordinación y Seguimiento de delitos contra la Administración Pública (OCDAP), y los documentos derivados de varias Resoluciones Generales de la Procuración General. Era entonces un Manual de construcción dinámica y colectiva, cuyos contenidos también están disponibles en la Plataforma Virtual para Investigaciones Financieras y se actualizan periódicamente.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

El trabajo conjunto de la DGRADB con las Procuradurías y Fiscalías de todo el país, permitió inmovilizar bienes mediante distintas medidas cautelares, con el fin de hacer efectivos los embargos ordenados por más de 95 mil millones de pesos en la justicia federal. A continuación se exponen las medidas solicitadas y obtenidas según el tipo de bien durante el período 2015-2019, período en el cual brindó colaboración en 181 casos:

Bienes: Medidas cautelares solicitadas
Medidas cautelares Obtenidas

- Dólares: 15.631.188	17.584.786
- Euros: 3.991.037	3.991.037
- Pesos 175.709.065	183.815.522
- Inmuebles: 816	1.092
- Automotores: 1.444	5.914
- Moto vehículo 66	187
- Maquinarias 441	457
- Embarcaciones 27	35
- Aeronaves 0	5

Asimismo, la intervención temprana en causas complejas permitió generar novedosos precedentes judiciales en relación a medidas cautelares adecuadas para ese tipo de criminalidad, como son aquellas que afectan a estructuras jurídicas complejas, destinadas a hacer cesar la comisión del delito y evitar que se consolide su provecho. A continuación se enumeran los resultados obtenidos en este sentido:

Medidas Cautelares 2015-2019	Solicitadas	
Obtenidas		
- Congelamiento/embargo de productos bancarios	557	378

- Intervención de personas jurídicas 57	78	
- Cancelación de CUIT 6	16	
- Inhibición general de bienes 242	276	
- Prohibición de Innovar en Fideicomisos	22	26
- Anotación de Litis 15	16	
- Prohibición de Innovar de Cajas de Seguridad	5	5
- Embargo/prohibición de Innovar de composición accionaria	179	137

Fuente: DGRA en base a las colaboraciones solicitadas hasta julio de 2019

Por su parte, en el marco de la asistencia técnica y colaboración que la Dirección brinda a las Fiscalías Federales que actúan en la instancia de juicio, se han obtenido decomisos definitivos en causas complejas, cuyo detalle se expone en el siguiente cuadro:

Decomiso 2015-2019	Resolución Judicial
Cantidad Inmuebles	133
Cantidad de Vehículos	106
Aeronaves	4
Pesos	29.111.627
Dólares	80.301
Euros	8.145
Participaciones societarias	49
Productos bancarios	115

Fuente: DGRA en base a las colaboraciones solicitadas hasta julio de 2019

Del total de los bienes decomisados definitivamente, cabe destacar que numerosos casos responden a decomisos sin necesidad de condena penal (art. 305 CP) que fueron obtenidos en causas de lavado de activos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes, cuyo detalle se expone a continuación:

- 67 inmuebles
- 9 automotores
- \$ 69.642
- USD 74.571
- € 8.145
- 11 participaciones sociales

Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)

En 2018, 17 fiscalías contaron con la asistencia de DAFI por primera vez y el 59% de los fiscales que solicitaron la asistencia de DAFI habían solicitado asistencia antes. Después de 5 años de trabajo, DAFI puede brindar apoyo a once de las doce fiscalías federales en CABA y otras 55 en el resto del país.

En el período comprendido entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, se proporcionaron 107 informes técnicos y respuestas a los fiscales en 97 casos. Esas solicitudes provienen de varios foros y jurisdicciones judiciales: el 74% provino de la jurisdicción para asuntos penales federales (que incluye la jurisdicción de delitos económicos); 13% de la jurisdicción comercial; y otro 12% de la jurisdicción penal de la Ciudad de Buenos Aires.

En dicho período, se analizaron 389.312 hojas (138% más que en 2017), participaron 363 entidades legales en las maniobras abordadas, y DAFI realizó 2277 medidas probatorias (116% más que en 2017).

El tiempo promedio para dar una respuesta el año pasado fue de 58 días, esto incluye el período entre la recepción de la solicitud y el final de la colaboración.

Cerca del 60% del trabajo se centró en el apoyo en casos de relevancia institucional con una gran complejidad técnica. Entre estos casos, se pueden destacar los que involucran a funcionarios públicos o ex funcionarios. Con respecto al delito de lavado de dinero, se puede mencionar, entre otros, el apoyo brindado por DAFI en el caso denominado "Carbón Blanco" que involucraba activos provenientes del narcotráfico.

Durante 2018, DAFI terminó un informe de expertos y continuó ayudando en la redacción de otros 5 informes que continúan en 2019.

Como se mencionó anteriormente, en 2016 DAFI desarrolló la Plataforma virtual para investigaciones financieras, que puso a disposición de todos los fiscales una guía detallada de las diferentes agencias a las que se puede solicitar información para investigaciones financieras. Durante 2018 se realizaron una serie de mejoras en esa plataforma, destinadas a facilitar el trabajo del profesional en sus investigaciones. Hasta ahora, la plataforma cuenta con información de 189 agencias, tanto locales como extranjeras, y un sistema de clasificación implementado que puede proporcionar la información solicitada, ya sea mediante notas o consultas web. Las agencias que

recopilan información de diferentes fuentes que simplifican la investigación financiera se destacaron en la plataforma.

Finalmente, se produjeron listas de verificación que permiten a los profesionales realizar un seguimiento de las agencias solicitadas, incluida la información sobre las solicitudes presentadas y las respuestas recibidas.

Oficina Anticorrupción (OA)

En los casos de gran corrupción y delitos económicos complejos en los que el OA fue querellante, se han producido incautaciones y medidas cautelares por un monto de \$ 325,109,648,122.00 entre 2016 y 2018. Esto se dirigió tanto a personas físicas como jurídicas.

Otras causas relacionadas:

1. Causa n°. 1338: “B., A. A. y otros s/inf. art. 174 inc. 5° en función del art. 173 inc. 7° del Código Penal”

Causa n°. 1338 caratulada “B., A. A. y otros s/inf. art. 174 inc. 5° en función del art. 173 inc. 7° del Código Penal” (conocida como Tandanor); en el mes de septiembre del 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, condenó a 3 personas como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y a otras 3 como partícipes secundarias. Asimismo, ordenó la inmediata restitución al Estado Nacional Argentino del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN). Finalmente, también dispuso la reposición al estado anterior de la comisión del delito a fin de retrotraer la situación de dominio del paquete accionario de la sociedad Talleres Navales Dársena Norte SA al momento anterior al proceso licitatorio e inscribir esas acciones a nombre del Estado Nacional Argentino.

2. Causa 17.459/2018: “M., H. D. y otros s/ lavado de activos”

Otra causa que cuenta con requerimientos de asistencia jurídica internacional tendientes a hacer efectivos en el exterior medidas de afectación sobre una gran cantidad de inmuebles es la causa n° 17.459/2018, caratulada “M., H. D. y otros s/ lavado de activos”, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, Secretaría n° 21. En ella se investiga a la esposa y allegados a un ex secretario presidencial (fallecido), por el delito de lavado de activos proveniente de los hechos de asociación ilícita y cohecho investigados en la causa n° 9608/2018, caratulada “F., C. E. y otros s/ asociación ilícita y otros”, del mismo juzgado federal n° 11.

Se ordenó trabar embargos sobre los bienes de los procesados por la suma de \$3.000.000.000 respecto de C. P., E. M. H. O. M., S. E. T., C. A. G., M. A. P., M. J. P. y F. C. Z.; \$ 1.500.000.000, en el caso de Jorge Isidro Bounine; y \$ 1.000.000.000 en relación a otros procesados, considerando que el nombrado no habría intervenido directamente en el conjunto de las operaciones desarrolladas, el embargo impuesto se readecuó a la suma de \$ 600.000.000.

Respecto de L. A. G., L.D.L, R.H. L y G. S. D. ponderando el alcance de sus intervenciones dentro de operaciones desarrolladas en el país, las cautelares se reajustaron a la suma de \$ 432.000.000. Asimismo, se estimó que esta misma cautela

lucía razonable respecto de E. M., en función de su intervención como testafierro en la propiedad de una de las propiedades en EE.UU. y su participación en una de las sociedades off shore.

En relación a M. G. D y O. F. P., ponderando las particularidades de su conducta y que la misma cesó durante la primera etapa de la maniobra, se estimó razonable reajustar el embargo establecido por el a quo a la suma de \$ 200.000.000.

Asimismo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Secretaría N 21 dispuso decomisar en forma definitiva el inmueble situado en la calle Julieta lantieri 1331/1363 "Chateau Puerto Madero"; decomisar en forma definitiva el inmueble sito en el edificio Ocean Fort, de la ciudad de Miami, del estado de Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica y una embarcación registrada bajo el nombre Sea Ray Cummins 410D.

Finalmente, el 18 de junio del corriente año se dispuso decomisar en forma definitiva los inmuebles identificados en Ciudad de Buenos Aires (9); Provincia de Buenos Aires (3); Provincia de Santa Cruz (20); Provincia de Neuquén (3); Tierra del Fuego (1).

El juez a cargo de la investigación envió, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como Autoridad Central en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con los Estados Unidos de América -Ley n° 24.034-, dos requerimientos de asistencia jurídica internacional a la Autoridad Central de ese país a fin de asegurar el recupero de una gran cantidad de bienes inmuebles radicados en esa jurisdicción.

Se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias que registren la sucesión de M. D.y otros, librándose oficios de la UIF y el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, se dispuso el congelamiento de cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos de Norteamérica librándose un exhorto a la autoridad judicial de tal país, en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el Gobierno de los Estados Unidos de América, ley 24.034. En el marco de dicha rogatoria, se requirió la colaboración a efectos de identificar y conocer los movimientos e la totalidad de los productos bancarios, financieros y/o societarios que registren los nombres y sociedades implicadas, registren o hayan registrado en dicha jurisdicción.

Por su parte se dispuso el congelamiento de los productos bancarios, todos del Banco Mercantil del Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos. A tal fin se libro el exhorto a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion - ley 26.097- la Convencion Internaiconal contra la delincuencia organizada Transnacionales -ley 25.632- y la Convencion Interamericana contra la corrupcion -ley 24.759-.

Se suma el congelamiento de la firma ROYAL STONES LIMITED, del Citibank Limited de la Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la Republica Popular China. A tal efecto y conforme lo covnenido en al Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción - ley 26.097- y ofreciendo reciprocidad en casos análogos, se exhorto a las autoridades de la la Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China.

3. Causa n° 2.806 (CFP 12.441/2008): “L., J. F. y otros s/ enriquecimiento ilícito”:

El 28 de agosto de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1, dictó sentencia en la causa Causa n° 2.806 (CFP 12.441/2008). Condenó a L., J. F. a la pena de seis años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 -inc. 3º-, 45 y 268 (2) del C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.); a M. A.D., E. G. Y E. R. G., como partícipes del delito de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, decomisar los ocho millones novecientos ochenta y dos mil cuarenta y siete dólares (U\$S 8.982.047), ciento cincuenta y tres mil seiscientos, diez euros (153.610 €) y ciento cincuenta y nueve mil ciento catorce pesos (\$ 159.114) y los relojes marca Rolex modelo Oyster Perpetual y marca Omega, modelo Speed, oportunamente incautados. Decomisar la propiedad de la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Luján, Tigre, Provincia de Buenos Aires (art. 23 del C.P. y Acordada n° 2/2018 de la C.S.J.N.), tasada en u\$s 680.000.

Posteriormente, con fechas 1 y 6 de abril de 2020, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria provocada por el COVID - 19, una parte importante del dinero decomisado por el Tribunal a través de la sentencia de fecha 12 de junio de 2019, fue destinado a dos Instituciones Hospitalarias (al Hospital de Pediatría Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”, la suma de \$1.275.700.- y U\$S 2.000.000.-, y al Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, la suma de U\$S 3.200.000.-) con destino a satisfacer necesidades prioritarias de asistencia médica, insumos para la atención de los pacientes, aparatología e investigación contra la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ello en aras de brindar a lo incautado un fin concreto de utilidad pública (art. 23 del Código Penal y Acordada N° 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

4. Causa n°3017/13 “B, L. A. y otros s/encubrimiento”:

En la causa se investiga el delito de lavado de activos de origen ilícito que podría provenir de una “desmedida e irregular asignación de obra pública a L. B...”. Se realizó un trabajo que permitió individualizar activos pertenecientes a catorce personas físicas y catorce personas jurídicas involucradas en los hechos investigados y respecto de los que se postuló, su embargo preventivo para asegurar el decomiso del producto o provecho de los delitos investigados y las penas pecuniarias. Así, el juez a cargo de la causa dispuso el embargo preventivo en relación a 269 inmuebles; 1496 automotores; 4 embarcaciones; el embargo de las acciones que detentan los imputados en 58 sociedades anónimas y de las tenencias de cuotas partes en 10 sociedades de responsabilidad limitada. Todo ello, para hacer efectivos los embargos decretados en la causa y que ascienden a un monto de \$1.131.000.000. Actualmente la causa se encuentra en las instancias finales del juicio oral y público.

En marzo de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, en línea con lo solicitado por la Fiscalía General Federal N° 2 a cargo de Abel Córdoba ratificó la solicitud de congelamiento realizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de esta ciudad, mediante exhorto internacional de fecha 12 de agosto de 2016, de una cuenta en Suiza y solicitó a las autoridades de ese país la remisión y/o repatriación de los fondos líquidos existentes en la misma, los cuales ascenderían a una suma superior a los USD 850.000. Tal remisión de fondos se podrá

hacer efectiva una vez que haya sentencia firme de condena.

Por su parte, también a partir de una solicitud de la Fiscalía General Federal N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, con fecha 16 de octubre de 2018 la Corte Suprema de la Mancomunidad de las Bahamas ordenó, entre otras medidas, el bloqueo de activos en dos cuentas de aquel país por un valor de € 2.981.646,12, 1 y € 1.009.391,16, respectivamente.

En el alegato efectuado por la Oficina Anticorrupción, constituida como parte querellante en la presente causa, se requirió expresamente al Tribunal Oral, en los términos de los artículos 23 y 305 del Código Penal, se proceda al decomiso definitivo de los bienes cautelados que constituyen el objeto de las distintas maniobras investigadas, entre ellos:

i.- Las sumas de € 2.981.646,12.- y € 1.009.391,16.- que se encuentran bloqueadas, por orden de la Suprema Corte de la Mancomunidad de Bahamas y a pedido del Tribunal, en cuentas del Banco CBH de Bahamas.

ii.- La suma de U\$S 850.000.- cautelados en el Banco Lombard Odier de Suiza.

iii.- La suma de U\$S 194.950.- cautelados en un broker bursátil local.

iv.- Distintas aeronaves, bienes muebles e inmuebles.

Y asimismo, adhiriendo al requerimiento formulado por la Unidad de Información Financiera (UIF), se solicitó la remisión de exhortos a la Mancomunidad de las Bahamas, a la Confederación Suiza y a los Emiratos Árabes, a los efectos de hacerles saber la eventual sentencia y solicitarles procedan a la remisión de los fondos obrantes en cuentas bancarias a nombre de las personas físicas y jurídicas investigadas en la causa y que fueron transferidos desde las cuentas individualizadas en la acusación.

5. Causa N° 12.446/08 (Fiscalnet N° 28517/17) portada “J., R. s/ enriquecimiento ilícito”.

Se investiga por enriquecimiento patrimonial injustificado del ex Secretario de Transporte de la Nación, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores del denominado “período de sospecha”, mediante operaciones de compraventa de bienes con la participación de más de 25 personas interpuestas. En el curso de la investigación se dictaron medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de 19 imputados y 6 personas jurídicas, con fines de asegurar el decomiso de los bienes producto y/o provecho de los delitos investigados como así también la pena de multa prevista en forma conjunta a la de prisión. Concretamente, se decretó el embargo preventivo de 16 inmuebles, 13 automotores, una embarcación y se dispuso el congelamiento de 10 productos bancarios.

Entre los bienes recuperados en el marco de la causa, cabe destacar el barco Altamar modelo 64 matrícula DL2153AC que el ex funcionario habría adquirido a través de la firma extranjera off shore Dalia Ventures LLC al astillero de la firma Altamar Yacht S.A. por un millón de dólares estadounidenses, en febrero de 2009. Gracias a las tareas llevadas a cabo durante la instrucción del caso, se determinó que la embarcación estaba amarrada en el Puerto de Piriápolis, República del Uruguay, bajo bandera estadounidense desde diciembre de 2012 y que registraba deuda por amarre. La justicia federal dispuso el secuestro de la embarcación. Finalmente, la embarcación Altamar llegó a nuestro territorio, a raíz del pedido de cooperación solicitado por el magistrado interviniente a su par de Uruguay, y quedó a disposición

del juzgado interviniente en el caso. Cabe mencionar que el Estado argentino debió hacer frente a la deuda de amarre para concretar la medida cautelar.

Asimismo, con fecha 14 de mayo de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 a partir de una solicitud de la Fiscalía General N° 3 y la DGRADB dispuso el embargo de un inmueble que se encuentra ubicado en Porto Alegre, República Federativa del Brasil, por considerarlo producto indirecto del delito.

6. Causa n°5048/16/2 “Grupo Austral y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

En la causa se investiga el desvío de fondos públicos a partir de la asignación desmedida e irregular de obra pública a las empresas de un sujeto ligado a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En el mes de noviembre del año 2017, el juez a cargo de la causa hizo lugar a todas las medidas cautelares solicitadas por el Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11. De ese modo, se dispuso el embargo preventivo para asegurar el decomiso del producto o provecho de los delitos investigados, la indemnización civil, las penas pecuniarias y las costas del proceso. Así las cosas, se trabó efectivamente el embargo de 94 inmuebles; 30 automotores; 1 embarcación y 16 productos bancarios. Todo ello, para hacer efectivos los embargos decretados en la causa y que ascienden a un monto de \$75.000.000.000.

7. Causa N° 6219/01, caratulada “M. C. S. y otros s/ delito de acción pública”.

En la causa, que ya se encuentra en etapa de juicio, se investiga a los funcionarios públicos involucrados en la sustracción del “Predio Ferial de Palermo” del ámbito de la administración pública, mediante su transferencia ilícita a particulares ajenos a la administración y a precio vil. En el mes de septiembre del año en curso (2018) el Tribunal Oral Federal 2 hizo lugar a la medida cautelar de Anotación de Litis del Inmueble, solicitada por la titular de la Fiscal General N° 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. La medida procura asegurar al Estado el recupero del bien que ha sido objeto del delito ante el eventual dictado de la sentencia condenatoria (art. 29 CP).

8. Causa “Av. Posible delito de acción pública - infracción leyes 24.469, 19.365 y art. 303 Código penal” (FN: 35-310/2016; FCT 3084/2016). Fiscalía Federal de Paso de los Libres.

En la causa de referencia se investiga la comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo, cuyo delito precedente es entre otros el encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público que tiene como procesado un ex fiscal de Paso de Libres, en la provincia de Corrientes, y a otros funcionarios. Se obtuvieron medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de 13 imputados y 3 personas jurídicas, con fines de asegurar el decomiso de los bienes producto y/o provecho de los delitos investigados como así también de aquellos activos que fueron utilizados como instrumento. En ese marco, se decretó el embargo preventivo de 14 inmuebles, 20 automotores y de una embarcación. Respecto de otros 7 vehículos pertenecientes a terceros allegados a los imputados, se ordenó la traba de la medida de anotación de litis. También dictó el embargo preventivo para asegurar el decomiso de \$ 1.044.127,85; U\$S 89.024; R\$

229.132; CH\$ 25.000; € 400 y UR\$ 100, dinero que había sido secuestrado en el marco de los allanamientos efectuados en la causa. Con relación a los productos bancarios, dispuso la prohibición de innovar respecto de una caja de seguridad y el congelamiento por noventa días de 14 cuentas corriente en pesos y 28 cajas de ahorro (8 de las cuales eran en dólares).

Actualmente la causa se encuentra elevada a juicio.

9. Causa N° 10505/2017 portada “G., A. A. s/ enriquecimiento ilícito”, del registro del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás.

En las actuaciones se investiga por enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado de un funcionario de la Administración General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (DGA/AFIP). Dicho enriquecimiento ilícito se habría configurado mediante operaciones de compraventa de bienes y la conformación de activos bancarios tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, valiéndose de la participación de su círculo familiar como personas interpuestas.

En el curso de la investigación se dictaron medidas cautelares de orden patrimonial con fines de asegurar el decomiso de los bienes producto y/o provecho de los delitos investigados como así también la pena de multa prevista en forma conjunta a la de prisión. Concretamente, se decretó el embargo preventivo de 12 inmuebles, 6 vehículos y una embarcación. Sumado a ello, se dispuso el congelamiento de un producto bancario radicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos en la que tenía depósitos en dólares estadounidenses e inversiones en títulos y acciones, fondos, bonos y rentas fijas y productos estructurados (Efectivo: U\$S 69.519,13; Títulos y acciones: U\$S 201.820; Fondos: U\$S 57.704. Bonos y Rentas Fijas: U\$S 228.216,47 Productos estructurados: U\$S 93.195).

Por otra parte, también se realizaron solicitudes de cooperación internacional con fines de decomiso fundadas en la CNUCC en casos de corrupción privada, ya que el art. 22 de la CNUCC penaliza la malversación o peculado de bienes en el sector privado, por lo que ésta resulta aplicable en los términos previstos en su artículo 3, párrafo 1, es decir al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de tales delitos.

10. Causa n°: 16072/16 y 24168/14 Carátula: “B. E. J. y otros s/estafa y otros” y “B. E. J. y otros s/infracción art 303 y otro”.

Se investiga al grupo Hope Funds liderado por B. E. J. , quien a través de la mecánica delictiva conocida como “estafa piramidal” perjudicó a una cantidad de víctimas que se aproximaba al millar de personas. Las exorbitantes sumas captadas se desviaron en beneficio del grupo económico y sus integrantes, en su mayoría destinadas a la adquisición de bienes duraderos tanto en el país como en el exterior.

En el marco de la causa a partir de lo solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 12 de CABA a cargo de la Dra. Mángano se inmovilizaron los siguientes bienes en el exterior:

- 10 inmuebles en Panamá, cuyo embargo se dictó el 18 de diciembre de 2017.
- 13 cuentas en Panamá con un total de USD 144.513,701 depositados en ellas; cuyo

embargo y repatriación se dispuso el 22 de noviembre de 2018.

- 2 cuentas bancarias en Barbados, cuyo congelamiento se ordenó el 21 de marzo de 2019.

11. Causa FLP 2436/2015 Carátula: “SOEME y otros s/ inf. art. 303 y asociación ilícita” en la que se investiga el delito de lavado de activos, administración fraudulenta y asociación ilícita cometidos en el ámbito sindical.

Se inmovilizaron bienes en el exterior conforme el siguiente detalle:

- 3 automóviles marca Ferrari y 2 motos en la República Oriental del Uruguay (ROU)
- 2 establecimientos rurales en Playa Verde, Maldonado, ROU;
- joyas; depósitos por USD 119.000 ROU;
- 5 inmuebles en Maldonado, ROU;
- USD 6655826; 5740 euros; \$8397 pesos argentinos; \$26.826 pesos uruguayos; \$6,10 reales; \$10.500 francos; y \$500 florines; 4 monedas de color dorado.

Las medidas se ordenaron con fecha 20 de junio de 2018 a partir de una solicitud de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, conjuntamente con la PROCELAC y la DGRADB.

12. Causa “Legajo N° 4 - Denunciante: M. R. H. s/ legajo de actuaciones complementarias / peticiones” 19769/2018/4 del registro del Juzgado Federal de Caleta Olivia.

En la causa se investigan múltiples estafas en perjuicio de una gran cantidad de personas jubiladas en las provincias de Santa Cruz, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lavado de activos.

El 21 de junio del año en curso, el Juzgado Federal de Caleta Olivia a partir de lo solicitado por el MPF ordenó el embargo preventivo de 10 inmuebles -tres de los cuales se encuentran ubicados en el vecino país de Uruguay-, 3 automotores y participaciones sociales en 2 sociedades. Por otro lado, también se dictaron las siguientes medidas cautelares: a) prohibición de innovar de la cuota parte de un fondo común de inversión y de 3 cajas de seguridad; y b) congelamiento por 90 días de 10 productos bancarios, 8 de ellos radicados en nuestro país y los restantes en Uruguay.

13. Causa “ALSOGARAY”: alcance del decomiso

Sobre el alcance del decomiso del producto del delito, en el caso “ALSOGARAY” el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, al condenar a una ex funcionaria por el delito de enriquecimiento ilícito sentó el criterio de que “los efectos indirectos del delito, esto es los objetos adquiridos con los directamente obtenidos por él, son alcanzados por el concepto legal” -en alusión al Artículo 23 del Código Penal-. El fundamento del decomiso y de la extensión del mismo hacia las ganancias indirectas se basa, según el fallo comentado, en el “sentido ético que debe tener la norma para impedir que el autor del ilícito pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos”.

Al confirmar ese fallo condenatorio, la Cámara Federal de Casación Penal también sostuvo que “Los “efectos” provenientes del delito son, principalmente, los objetos

que forman el delito y los que son su resultado, obtenidos o producidos mediante el injusto, sea que se encuentren en el mismo estado o en otro diferente -como valor de uso o de cambio- (cfr.: Zaffaroni, Eugenio Raúl, "Derecho Penal. Parte General.", Ed. Ediar, Bs. As., junio de 2002, pág. 988). De manera que cierto es que la previsión legal no restringe en ese aspecto el significado de dicha expresión, encontrando sustancial fundamento también en la prevención, en orden a excluir la posibilidad de que de un delito castigado por el Estado resulte un remanente de lucro para el delincuente; es decir, que su principal sentido es el de impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido, como lo destaca el tribunal, imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos".

Intercambio de información: UIF, GAFILAT (RRAG), Red Segura del Grupo Egmont.

La UIF ha trabajado en base a cooperación recíproca en la investigación de casos concretos vinculados al crimen organizado transnacional conjuntamente con otros países. Este organismo cuenta con la facultad y los mecanismos legales necesarios, que le permiten suscribir convenios y memorandos de entendimiento con Organismos análogos de otros países, destacándose para el año 2017 investigación conjunta en casos complejos con EEUU y Colombia.

En relación a los mecanismos de intercambio de información de la RRAG -GAFILAT y la Red Segura del Grupo Egmont, la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con los siguientes datos estadísticos:

I. Estadísticas relativas a intercambio de información por medio de la Red Segura del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (ESW)*:

- SIE (Solicitud de Información Enviada): 188
- SIR (Solicitud de Información Recibida): 83
- DEE (Divulgación Espontánea Enviada): 58
- DER (Divulgación Espontánea Recibida): 202

* Fecha de corte: enero a septiembre 2018.

II. Estadísticas relativas a intercambio de información por medio de la Red de Recupero de Activos de GAFILAT (RAGG)*:

En relación al uso que tuvo la misma se verificó lo siguiente: en el año 2016 se recibió un total de 9 solicitudes y se envió 1 requerimiento, en el año 2017 se incrementó a 17 solicitudes recibidas, y a septiembre de 2018 se registran 8 solicitudes recibidas.

III. Estadísticas relativas a suscripción de Memorandos de Entendimiento con UIF's extranjeras (MOU's)*:

En el marco de las facultades reseñadas respecto de la UIF para suscribir acuerdos con homólogas extranjeras u organismos internacionales, entre otros para el intercambio de información, la UIF Argentina suscribió 46 MOU's con sus homólogas extranjeras y organismos multilaterales

* Fecha de corte: septiembre 2018. A su vez se remite al cuadro que detalla los MOU en la respuesta al artículo 14.

IV. Casos de éxito: naturalmente, existen numerosos casos en los cuales se han articulado alguno o varios de los mecanismos de cooperación internacional reseñados. Sin embargo, al sólo efecto de ilustrar lo analizado hasta aquí, reseñaremos uno de esos casos, de especial relevancia:

Lavado de Activos a través de Inversiones Inmobiliarias, Servicios Gastronómicos y Servicios de Producción de Espectáculos Relacionados con el Tráfico de Drogas

Información recibida de OFAC dió lugar a una investigación, la cual reveló que una red ilícita estaba llevando a cabo actividades comerciales en Argentina. Esta red estaba vinculada a un individuo, J.B.P.C., que era sospechoso de integrar una organización criminal. J.B.P.C., su familia y socios comerciales también eran accionistas en una cantidad de compañías en todo el mundo. Más específicamente, se sospechaba que tres empresas argentinas (dos compañías operativas y una empresa administrativa) desarrollaban ambiciosos proyectos inmobiliarios en todo el país. El presidente y accionista principal de esas compañías era el Sr. B, abogado y amigo de J.B.P.C. Esta persona brindaba conocimiento y experiencia sobre cómo desarrollar los negocios. El análisis adicional reveló que J.B.P.C. era accionista de otras dos compañías que aparecieron como propietarias de la tierra donde se llevarían a cabo importantes desarrollos inmobiliarios. La información tributaria recopilada por las autoridades reveló que estas empresas recibieron asesoramiento contable por parte del Sr. C, que era contador público. También era accionista y miembro del Directorio de las empresas en cuestión. Asimismo, también se detectaron otras operaciones de J.B.P.C. efectuadas durante el mismo período. Las mismas estaban vinculadas a dos compañías argentinas adicionales que brindaban servicios de bar, servicios de café y servicios de producción de espectáculos. Con respecto a una de las compañías que figura en la lista de OFAC, se descubrió que la totalidad de las acciones de dicha compañía eran propiedad de los parientes más cercanos de J.B.P.C. Del mismo modo, los cargos ejecutivos fueron ocupados por sus socios y parientes cercanos. Otra empresa, también vinculada a J.B.P.C., abrió una oficina en Argentina con la ayuda de otro abogado, el Sr. D. La investigación de esta causa fue llevada a cabo por la UIF-Argentina en coordinación con otras Fuerzas de Seguridad nacionales, así como con contrapartes extranjeras de Colombia (UIF-Colombia) y de los Estados Unidos (OFAC y DEA). La sólida cooperación internacional fue crucial para el éxito de esta investigación, y los esfuerzos conjuntos condujeron a un número significativo de búsquedas simultáneas en Argentina, así como en la otra jurisdicción extranjera donde J.B.P.C. dirigió la mayoría de sus negocios ilegales. Como resultado, J.B.P.C., el Sr. B y su esposa, el Sr. C. y el Sr. D. fueron detenidos. Sus bienes también fueron incautados. Actualmente, están siendo procesados en Argentina.

226. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/2019, el primer gran desafío consiste en consolidar la aplicación de nuestra legislación sobre recupero de activos a los estándares internacionales, superando la concepción tradicional del decomiso como sanción penal al condenado, y por consiguiente sujeto al sistema de garantías que rige el juicio penal, y abordarlo como una herramienta orientada al recupero de activos, que persigue bienes en función de su origen ilícito. Esto permitiría mejorar y hacer más eficientes los mecanismos disponibles para el recupero de activos.

Por otra parte, se debe mejorar la instancia previa al congelamiento preventivo de los bienes a través de medidas cautelares. La experiencia en los casos concretos permite advertir que las medidas exitosas fueron las que contaron con una investigación patrimonial previa, que permita llegar a la instancia cautelar con bienes ya identificados y localizados. Por el contrario, como sucedió en muchos casos, cuando estas medidas se ordenan en una instancia avanzada del proceso (por ejemplo, al dictar el auto de procesamiento) y en forma genérica, sin identificar activos concretos (con lo cual en la práctica no se inmoviliza ningún bien), las mismas se tornan ineficientes. Por último se ha observado que muchas veces las medidas ordenadas no quedan efectivamente trabadas porque se descuidan aspectos formales como su inscripción registral o la notificación al afectado.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(OT) Otros aspectos: sírvase especificar

En este contexto, se solicita asistencia técnica para: (1) la realización de capacitaciones dirigidas a jueces y fiscales con el objetivo de acercarles modelos internacionales en la materia para una mejor aplicación de la normativa mencionada; (2) el fortalecimiento institucional dirigido a la detección de bienes en el exterior y a una aplicación más efectiva del decreto (UIF, OA y MPF); (3) la realización de capacitaciones dirigidas a funcionarios de la OA sobre investigación digital forense (adquisición, conservación, documentación, análisis y presentación de evidencias digitales), y en particular, la individualización, acceso y utilización de bases de datos públicas internacionales, que permitan identificar bienes muebles, inmuebles, o cualquier otro bien pasible de registración para su eventual incautación, embargo y ulterior decomiso; (4) la realización de capacitaciones dirigidas a funcionarios de la OA sobre mercado financiero (regulaciones y prácticas bancarias, banca electrónica y transformación digital de los servicios financieros, normas internacionales de información financiera (NIIF), prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, etc.).

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

En el marco del **Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado**

(PacCTO), el 24/04/2018 se realizó el "Taller de especialización en recupero de activos en el MPF". El encuentro, contó con la participación de fiscales y funcionarios del organismo y del fiscal de la Audiencia Nacional de España Marcelo de Azcárraga.

Tuvo como objetivo intercambiar experiencias e identificar las principales dificultades en torno al decomiso de bienes en causas vinculadas al crimen organizado. Los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar articuladamente con las diferentes áreas especializadas del MPF, entre ellas la Dirección de Recuperación de Activos y la Dirección de Análisis Económico y Financiero para lograr avances eficaces en la materia.

El PacCto es un programa de asistencia técnica entre la Unión Europea y América Latina que promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países de ambas regiones, busca reforzar capacidades y facilitar la cooperación internacional.

La OA y la UIF son parte de una iniciativa de asistencia StAR del Banco Mundial.

Además, se cuenta con la siguiente **asistencia técnica del BID**:

Nombre del proyecto: "Strengthening the Integrity of Financial Systems Improving the Capacity to Prevent Money Laundering and Terrorist Financing III".
Número: RG-T3218.

Fecha de inicio del proyecto: julio de 2018

Objetivo: Apoyar a los países en sus esfuerzos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de las Normas del GAFI.

52. Prevención y detección de transferencias del producto del delito

227. Párrafo 1 del artículo 52

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En Argentina, la Inspección General de Justicia (IGJ), mediante la Resolución N° 7/15 define al beneficiario final como: "Personas humanas que tengan como mínimo el veinte por ciento (20%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica".

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), define al beneficiario final como: "personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE por ciento (20%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. La identificación del Beneficiario Final debe conducir a una persona física y no a otra persona jurídica".

En la Resolución N°30-E/2017, la UIF define al "Propietario o Beneficiario" como toda persona humana que controla o puede controlar, directa o indirectamente, una persona jurídica o estructura legal sin personería jurídica, y/o que posee, al menos, el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce su control final, de forma directa o indirecta.

Cuando no sea posible identificar a una persona humana deberá identificarse y verificarse la identidad del Presidente o la máxima autoridad que correspondiere."

La Resolución General N° 7/15 de la IGJ regula a las sociedades como los sujetos obligados a informar sobre sus dueños y accionistas. En su versión actualizada, esta resolución establece con precisión la normativa sobre los trámites y procesos de registro de personas jurídicas. Entre tales normas, el artículo 518 se encarga, por ejemplo, de solicitar la información que permita identificar

beneficiarios finales de sociedades nacionales, binacionales, sociedades constituidas en el extranjero y/o de registración o modificación de contratos asociativos o contratos de fideicomiso, mediante un régimen específico de declaraciones juradas al respecto. Con tal objetivo, también resultan de utilidad los artículos 206, 213, 217, en tanto exigen la individualización de los socios mediante la presentación de información sobre éstos sin la limitación de un porcentaje mínimo del capital social o los derechos de voto (tal como lo propusiera la definición de beneficiarios finales).

Las disposiciones del párrafo anterior que exigen la presentación de información sobre los socios sin tener un límite de porcentaje mínimo del capital o de derechos de voto, resulta de gran utilidad para identificar a otros posibles beneficiarios finales de estas sociedades. Ello radica en que muchos beneficiarios finales pueden no tener el control directo de determinado porcentaje de capital social o derechos de voto, pero pueden llegar a tenerlo indirectamente. En el marco de una investigación de quién resulta ser el verdadero beneficiario final, tener información sobre los demás socios que ostentan menores porcentajes puede ser un punto de partida.

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE y el GAFI, el nuevo Decreto 27/2018 (de fecha 10/01/2018, que entró en vigor el 30/05/18 después de que la Ley 27.444 fuera aprobada por el Congreso) prevé varias enmiendas a la Ley 26047.

De acuerdo con este nuevo régimen, el Registro Nacional de Sociedades funciona bajo la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lleva sus funciones a un nivel federal sin la necesidad de que los registros locales provinciales se adhieran. De hecho, el Registro Nacional de Sociedades es la única base de datos de entidades corporativas a nivel federal. Para cumplir con la Ley 27.444 (Anexo 29), la nueva Decisión Administrativa 312/2018 creó la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, Concursos y Quiebras (DNRSCQ), dentro de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El DNRSCQ organiza y ejecuta la base de datos nacional para entidades corporativas, mientras que la ex Secretaría de Gobierno de Modernización (actual Secretaría de Innovación Pública) desarrolla y mantiene el desarrollo del software. El plan de trabajo detallado a continuación tuvo como objetivo:

- Conceder acceso público inmediato a cualquier persona de una base de datos federal nacional de entidades corporativas y asociaciones civiles, independientemente de su jurisdicción de registro.
- Proporcionar un sistema de búsqueda abierto, fácil de usar y directo de entidades corporativas y asociaciones civiles existentes.
- Materializar un sistema uniforme de identificación de entidades corporativas y asociaciones civiles para todos los registros estatales.

Para cumplir con esos propósitos, la DNRSCQ otorgará, en un formato abierto y gratuito, información pública de todas las entidades (nacionales o extranjeras) registradas ante las 24 provincias del país, según lo exige la Ley 27.444. La

implementación del Registro Nacional de Empresas se lleva a cabo en diferentes fases.

- Primera fase: acceso abierto a la Ley de base de datos 27.444. La Secretaría de Modernización proporcionó el desarrollo de software para el funcionamiento de la base de datos corporativa en marzo de 2019. La carga de la información de la base de datos corporativa comenzó también en marzo de 2019 y se actualiza mensualmente. Las búsquedas y consultas relacionadas con entidades corporativas serán gratuitas y abiertas. El sistema de búsqueda y la plataforma de usuario están disponibles desde el 9 de mayo de 2019 a través de la página web de RNS:
<<https://www.argentina.gob.ar/justicia/registro-nacional-sociedades>>

En esta etapa, cualquier persona tiene acceso libre para buscar en la base de datos corporativa de la Dirección, ya sea por número CUIT (identificación personal) o por razón social. La base de datos proporciona la razón social completa, el tipo legal, la fecha de incorporación, el domicilio social y fiscal, el número de identificación del registro provincial (cuando esté disponible) y la fecha de actualización. Además, la base de datos incluye entidades corporativas locales y extranjeras como lo exige la Ley 27.444. El permitir la búsqueda por el número de CUIT, único para cada entidad corporativa, se evita los riesgos de homonimia. Dado que uno de los datos que se brinda es el domicilio social registrado, se reducen costos y tiempos de búsqueda de los usuarios ya que se podrá inferir la jurisdicción local de registro de la persona jurídica consultada, y a partir de allí, acceder al registro estatal apropiado. Además, evita que los consultores realicen búsquedas individuales en las 24 provincias argentinas. Completada esta primera fase, Argentina cumple con la solicitud de WGB (párr.131 Fase 3 bis) de tener un registro nacional de empresas con información sobre todas las empresas argentinas a nivel federal, lo que permite a los fiscales y jueces obtener información corporativa.

- Segunda fase: Más allá de la recomendación de la WGB, y con el objetivo de continuar el desarrollo del Registro Corporativo Nacional, la segunda fase de la implementación consiste en hacer coincidir la información con los registros estatales. El DNRSCQ dividirá la base de datos corporativa por jurisdicción estatal y enviará una lista de confirmación de entidades corporativas a cada jurisdicción. Mediante dicha confirmación, la Dirección espera superar las deficiencias de comunicación actuales con los registros estatales debido a (1) indexación e identificación no uniformes de entidades corporativas a nivel local, (2) la necesidad de un sistema de software interrelacionado que no esté actualmente en funcionamiento, (3) en algunos casos, archivos pendientes de digitalización; etc. De la lista de entidades corporativas, el registro estatal confirmará el registro corporativo efectivo (o no) de cada CUIT en dicha jurisdicción.

Por otra parte, y en concordancia con el cumplimiento de este principio, la Resolución IGJ N° 3/16 dejó sin efecto “toda norma que de cualquier modo limite o restrinja el acceso a la información en el ámbito de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA”. Esta resolución fue de gran relevancia dado que así se dejó sin efecto el artículo de la Resolución IGJ N° 1/15 que enmarcaba una

restricción al acceso a la información en caso de sociedades anónimas y a sociedades en comandita por acciones. Mediante aquella disposición no se podía conocer quiénes eran los directores o socios mayoritarios de estas sociedades, dificultando así la identificación del beneficiario final de una sociedad anónima y de las sociedades en comandita por acciones.

En otro aspecto, la excepción que prevé la no obligación de informar a la IGI resulta de aquellos socios correspondientes a una sociedad anónima sujeta a cotización y oferta pública. En ese caso, es la Comisión Nacional de Valores (CNV) quien debe llevar el control de la información otorgada las sociedades con esas características. De este modo, a través de la Resolución General N° 687 de ese organismo, se plantea el deber de los accionistas, sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, de informar a la sociedad sus beneficiarios finales.

Así, las sociedades deberán “remitir vía AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, como “información restringida a la CNV” bajo el título “Beneficiarios Finales”, la información sobre el/los beneficiario/s final/es. A tal fin, deberá constar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión.”

La Ley de Mercado de Capitales establece que “las informaciones recogidas por la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de sus facultades de inspección e investigación, tienen carácter secreto”. Sin embargo, el artículo 27 de la mencionada ley establece:

“Las restricciones y limitaciones contenidas en la presente ley; los artículos 39 y 40 de la ley 21.526, modificada por la ley 24.144; 53 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; 74 de la ley 20.091, relativas a la difusión de información obtenida en el ejercicio de sus funciones por la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la Nación, entidad autárquica actuante en la órbita de la Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente, y los funcionarios y empleados de dichos organismos, no regirán ante los requerimientos formales que se efectúen entre sí con respecto a tales informaciones, siempre que sean efectuados por la máxima autoridad de cada una de las entidades. Tampoco regirán las restricciones y limitaciones mencionadas ante los requerimientos efectuados por la Unidad de Información Financiera en el marco de la ley 25.246 y sus modificatorias.”

La resolución UIF No. 76/2019, publicada el 29 de julio de 2019, tiene como objetivo principal (i) aclarar quién es el titular del medio de pago electrónico y físico (tarjetas de crédito, tarjetas de compra, cheques de viajero, etc.) y las obligaciones de los sujetos obligados como entidades informantes, y (ii) implementar un enfoque basado en riesgo KYC (Know your Customer) para la industria. En la misma línea de la resolución anterior 30/2017, establece la obligación de identificar a los beneficiarios reales de los clientes.

Mediante dicha Resolución, este organismo se encuentra habilitado para intercambiar información en materia de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la CNV y la Superintendencia de Seguros de la Nación (los denominados “Órganos de Contralor Específicos”), los Organismos que cumplan funciones similares a los mencionados en otros países (“Organismos similares extranjeros”), las Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos homólogos extranjeros.

Por otro lado, también se ha celebrado un Convenio de Cooperación suscrito entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal (PROCELAC) “a los fines de fortalecer acciones de cooperación, respaldo, coordinación e integración mutua (Resolución PGN 1177/2013)”.

Asimismo, la Resolución N° 30-E/2017 de la Unidad de Información Financiera define y limita a aquellos que deben ser considerados "Personas Expuestas Políticamente" a los fines de las normas "antilavado". Es así que quedan comprendidos en el alcance de PEP los funcionarios públicos extranjeros, los funcionarios públicos nacionales, los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades, apoderados candidatos o miembros relevantes de partidos políticos, las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales, las autoridades y representantes legales de las obras sociales, y las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas que reciban fondos públicos destinados a terceros. En todos los casos la normativa detalla puntualmente a cada una de las PEPs. Además se incluye a quienes, por cercanía o afinidad, tengan vínculos personales o jurídicos con las PEPs detalladas.

Existen diversos dispositivos destinados a regular a las entidades financieras a los fines de llevar adelante medidas de debida diligencia incluso y particularmente con foco en aquellas transacciones llevadas adelante por personas expuestas políticamente (PEPs).

En materia de conocimiento del cliente, así como de la debida diligencia que se requiere a los fines de identificación del beneficiario final en el sector financiero, en la República Argentina rige la Resolución UIF N° 30-E/2017 emitida por la Unidad de Información Financiera, la cual prevé tres niveles de debida diligencia (simplificada, estándar y reforzada) según se trate de clientes de riesgo bajo, medio o alto, conforme a la parametrización de riesgos que el propio sujeto obligado del sector financiero establezca.

Esa misma norma dedica un capítulo entero (aquel identificado con el N° III, a partir del artículo N° 21) a regular la tarea de debida diligencia y a la política de identificación y conocimiento del cliente.

Asimismo, y respecto de lo establecido por el Art. 52 de la Convención (respecto de que las políticas de debida diligencia e identificación del beneficiario final y aquellas personas que revisten el carácter de PEP's no deben entorpecer el curso de los negocios que lleve adelante el sujeto obligado) cabe indicar que dicha norma, fue consensuada con el propio sector regulado, y la Unidad de Información Financiera emitió una guía interpretativa y de

implementación de la regulación, brindando herramientas a los sujetos obligados para que puedan implementar las políticas y mecanismos que manda la norma sin que ello conspire contra el correcto desempeño de sus negocios. No resulta ocioso mencionar, que la regulación del sector financiero adopta un enfoque basado en riesgos, delegando en los sujetos obligados aplicar sus recursos de acuerdo a los riesgos que ellos mismos hayan identificado, reconociendo la estructura y funcionamiento de su negocio.

La obligación de identificación y debida diligencia del cliente, de identificación del beneficiario final, y de reporte de operaciones sospechosas de LA/FT, se encuentra regulada por la UIF para todos los sujetos obligados mencionados en el artículo 20 de la Ley 25.246. En todas las regulaciones, se establecen procedimientos especiales y reforzados de identificación de acuerdo a los montos operados o la calidad de PEP del cliente, así como también la obligación de prestar especial atención a las tipologías identificadas en cada sector.

-Link a la Res. N° 30-E/2017:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275996/norma.htm>

-Link a la guía de implementación de la Res. N° 30-E/2017:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_la_implementacion_resolucion_uif_n30_4oct2017.pdf

-Link a la Res. 11/2011 y su modificatoria 134/2018 (PEP's): ver anexo Resolution 134/2018

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/177979/texact.htm>

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316668/norma.htm>

-Link a las Regulaciones UIF en materia de PLA/FT por sujeto obligado:

<https://www.argentina.gob.ar/uif/normativa-uif/resoluciones-aplicables-cada-sujeto-obligado>

-Link a la Resolución UIF N° 104/2016 sobre actualización de montos:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265014/norma.htm>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Para crear conciencia sobre la importancia de mejorar la calidad de los informes

presentados por las entidades informantes a la UIF, tres ejercicios de retroalimentación se dirigieron al sector privado (sector financiero, sectores de valores y seguros) para mostrar los resultados de la evaluación de la calidad de los Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) realizados por la División de Análisis Estratégico de la UIF. Estos ejercicios se realizaron específicamente con aquellas entidades que presentaron la mayor cantidad de informes. Cabe destacar que los tres sectores mencionados representan el 66% del total de ROS recibidos en 2017 (Anexo 39). Cabe mencionar que los tres ejercicios fueron realizados por el Jefe de la UIF argentina y los jefes de cada una de las agencias reguladoras. Se han desarrollado diferentes mesas redondas, conferencias, sesiones de capacitación y acciones conjuntas con diferentes partes interesadas del sistema AML / CFT para aclarar las expectativas regulatorias, guiar a las entidades reguladas en la implementación del enfoque basado en el riesgo, fortalecer la confianza mutua en su capacidad como proveedores de información para la UIF, y para lograr una cultura de cumplimiento mejor y más eficiente en términos de AML / CFT. La UIF ha participado y coordinado diferentes eventos, con la participación de expertos internacionales y locales. Con esto, la UIF busca diversificar el conocimiento entre las diferentes entidades informantes del sistema AML / CFT y expandir la retroalimentación en todo el país.

228. Apartado a) del párrafo 2 del artículo 52

2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Según información proporcionada por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA), a través de la Resolución N° 30-E/2017 la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció los Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que las Entidades Financieras deben adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de (LA/FT).

El Artículo 5° de dicha Resolución identifica como “Factores de Riesgo de LA/FT” que las Entidades deben considerar, a los fines de confeccionar la autoevaluación y gestionar los riesgos identificados del cliente, tanto al inicio y durante toda la relación comercial, entre otros, los atributos o características de los clientes el carácter de persona humana o jurídica, la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y el carácter público o privado.

Se obliga al Oficial de Cumplimiento de las Entidades a evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementadas para identificar a las PEP -Artículo 12°- y en todos los casos deberá conformarse la Declaración Jurada de PEP por parte del cliente -Artículo 21°-.

Así también, el Artículo 25 establece que, para cuando se trate de los órganos, entes y demás estructuras jurídicas que conforman el Sector Público Nacional, así como también los que conforman los Sectores Públicos Provinciales y Municipales, las Entidades deben exclusivamente identificar a la persona humana que operará la cuenta y obtener copia fiel del instrumento en el que conste la asignación de la competencia para ejecutar dichos actos, ya sea que lo aporte el Cliente, o bien, lo obtenga la Entidad a través de las publicaciones en los Boletines Oficiales correspondientes.

El Artículo 38 dispone que para el monitoreo transaccional de organismos nacionales, provinciales, municipales, entes autárquicos y toda otra persona jurídica de carácter público, las Entidades deberán tener en cuenta en función

del riesgo que éstos y sus operaciones presenten, poniendo foco especial en el destino de los fondos. En tal sentido, deben prestar especial atención a aquellas operaciones cuyo destinatario no sea también un Organismo o Ente de carácter público.

Por otra parte, la Guía para la implementación de R 30-E/2017 de la UIF, aclara que el monitoreo de los “organismos públicos” como clientes de las Entidades, deben ser tratados como tales en lo que respecta a la debida diligencia, debiendo los sujetos obligados realizar un monitoreo de la actividad, acorde con los riesgos y la operatoria de cada uno de ellos. Asimismo, aclara que lo que se espera es que los sujetos obligados incorporen estas operaciones a sus sistemas de monitoreo, teniendo en cuenta el enfoque basado en riesgos, sin que ello trabe o entorpezca el funcionamiento del sector público.

En lo que hace al poder de policía de la UIF, las regulaciones particulares de los sujetos obligados (sector financiero y no financiero), son comprensivas del estándar internacional promovido por GAFI y los acuerdos o convenios internacionales que haya suscripto el país.

Puntualmente y en lo que refiere a las directrices sobre tipos de personas jurídicas y/o tipologías relacionadas con el LA/FT, la Resolución UIF E 30/2017 que regula el sector financiero es comprensiva de los riesgos inherentes a ciertos tipos de personas jurídicas y demás factores de riesgo a tener en cuenta de acuerdo a las tipologías identificadas en dicho sector, ya que incorpora el enfoque basado en riesgos.

Su Artículo 24 describe la debida diligencia de identificación de los clientes personas jurídicas:

“ARTÍCULO 24.- Identificación de Clientes personas jurídicas.

Los Clientes personas jurídicas deberán ser identificados a través de los documentos acreditativos de su constitución y personería, obteniendo los siguientes datos:

a) Denominación o Razón Social.

b) Fecha y número de inscripción registral.

c) CUIT, CDI, o Clave de Inversores del Exterior (CIE), o la clave de identificación que en el futuro fuera creada por la AFIP. Este requisito será exigible a extranjeros, en caso de corresponder.

d) Copia del contrato o escritura de constitución.

e) Copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición de su original.

f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia, país y código postal).

g) Número de teléfono de la sede social y dirección de correo electrónico.

h) Actividad principal realizada.

i) Identificación de los apoderados, en los términos del artículo 23.

j) Nómina de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente.

k) Titularidad del capital social. En los casos en los cuales la titularidad del capital social presente un alto nivel de atomización por las características propias del ente, se tendrá por cumplido este requisito mediante la identificación de los integrantes del órgano de administración o equivalente y/o aquellos que ejerzan el control efectivo del ente.

l) Identificación de Propietarios/Beneficiarios finales. A los fines de identificar a los Propietarios/Beneficiarios finales de la persona jurídica, se podrán utilizar declaraciones juradas del Cliente, copias de los registros de accionistas proporcionados por el Cliente u obtenidos por el Sujeto Obligado, o toda otra documentación o información pública que identifique la estructura de control del Cliente. Cuando la participación mayoritaria de los Clientes personas jurídicas corresponda a una sociedad que lista en un Mercado local o internacional autorizado y esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, se los exceptuará del requisito de identificación previsto en este inciso.”

Asimismo, el artículo 5º de la normativa citada establece los factores de riesgo a tener en cuenta en la confección de la autoevaluación del sujeto obligado: “Factores de Riesgo de LA/FT.

A los fines de confeccionar la autoevaluación de riesgos y gestionar los riesgos identificados, cada Entidad deberá considerar, como mínimo, los factores de Riesgos de LA/FT que a continuación se detallan:

a) Clientes: los Riesgos de LA/FT asociados a los Clientes, los cuales se relacionan con sus antecedentes, actividades y comportamiento, al inicio y durante toda la relación comercial. El análisis asociado a este factor deberá incorporar, entre otros, los atributos o características de los Clientes como la residencia y nacionalidad, el nivel de renta o patrimonio y la actividad que realiza, el carácter de persona humana o jurídica, la condición de PEP, el carácter público o privado y su participación en mercados de capitales o asimilables.

b) Productos y/o servicios: los Riesgos de LA/FT asociados a los productos y/o servicios que ofrece cada Entidad, durante la etapa de diseño o desarrollo, así como durante toda su vigencia. Esta evaluación también deberá realizarse cuando la Entidad decida usar nuevas tecnologías asociadas a los productos y/o servicios ofrecidos o se realice un cambio en un producto o servicio existente que modifica su perfil de Riesgo de LA/FT.

c) Canales de distribución: los Riesgos de LA/FT asociados a los diferentes modelos de distribución (banca personal en oficinas con presencia del Cliente, banca por Internet, banca telefónica, uso de cajeros para ejecución de transacciones, operatividad remota, entre otros).

d) Zona geográfica: los Riesgos de LA/FT asociados a las zonas geográficas en las que ofrecen sus productos y/o servicios, tanto a nivel local como internacional, tomando en cuenta sus índices de criminalidad, características económico-financieras y socio-

demográficas y las disposiciones y guías que autoridades competentes o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitan con respecto a dichas jurisdicciones. El análisis asociado a este factor de Riesgo de LA/FT comprende las zonas en las que opera cada Entidad, así como aquellas vinculadas al proceso de la operación.

Los factores de Riesgo de LA/FT detallados precedentemente constituyen la desagregación mínima de información acerca del nivel de exposición de cada Entidad a los Riesgos de LA/FT en un determinado momento. A dichos fines, cada Entidad, de acuerdo a las características de sus Clientes y a la complejidad de sus operaciones y/o productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas, podrá desarrollar internamente indicadores de riesgos adicionales a los requeridos por la presente.”

Todo ello se complementa con las guías de aplicación e interpretación emitidas por la UIF en la materia.

Link a la Guía de Aplicación de la Resolución UIF N° 30 E/2017:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_la_implementacion_resolucion_uif_n30_4oct2017.pdf

Se emitió la Resolución 134/2018 de la UIF (Anexo 38); reemplazando así la Resolución 11/2011 (esta resolución entró en vigencia desde marzo de 2019).

Entre las modificaciones más relevantes introducidas por esta nueva Resolución, vale la pena mencionar:

Las nuevas categorías de PPE en nuestro país. Se elaboró teniendo en cuenta las funciones que antes o actualmente desempeñaba la PPE y, en su caso, si son miembros de la familia o asociados cercanos de las personas que desempeñan funciones públicas. Esta lista incluye las autoridades, representantes legales, candidatos o miembros relevantes de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel internacional, nacional o distrital, así como otros funcionarios públicos que desempeñan funciones públicas a nivel subnacional y local.

El deber de llevar a cabo la debida diligencia sobre las PPE utilizando un enfoque basado en el riesgo en lugar de un criterio relacionado con el tiempo.

(Artículo 6- f. Duración del cargo: dos años después de la finalización de las funciones públicas, la situación del cliente o beneficiario real debe evaluarse a través de un enfoque basado en el riesgo, teniendo en cuenta la relevancia de la función desempeñada, el poder para disponer y / o administrar fondos, y la duración del servicio, entre otros factores relevantes de evaluación de riesgos).

La relación con un cliente que ya no realiza una función pública prominente se basa ahora en una evaluación de riesgos y no en un límite de tiempo preestablecido.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

229. Apartado b) del párrafo 2 del artículo 52

2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:

[...]

b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La Unidad de Información Financiera (UIF) recibe regularmente las alertas de los sujetos obligados, a través del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que permite el contacto con una operación inusual que amerita el reporte.

Dentro de las pautas objetivas que deben ser especialmente valoradas a los fines de detectar inusualidades y que puedan ser reportadas por un ROS, la regulación sectorial establece a mero título enunciativo:

“Art. 21. - Reporte de Operaciones Sospechosas. Los sujetos obligados deberán reportar, conforme lo establecido en el Artículo 21 Inciso b) de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación de Terrorismo.

Deberán ser especialmente valoradas, las siguientes circunstancias, que se describen a mero título enunciativo:

- Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de los mismos;
- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes;
- Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad, hagan presumir que se trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección y/o reporte de las operaciones;

- Ganancias o pérdidas continuas en operaciones realizadas repetidamente entre las mismas partes;
- Cuando los clientes se nieguen a proporcionar datos o documentos requeridos por el sujeto obligado o bien cuando se detecte que la información suministrada por los mismos resultare ser falsa o se encuentre alterada;
- Cuando los clientes intenten evitar dar cumplimiento a la presente normativa u otras normas legales de aplicación a la materia;
- Cuando se presenten indicios sobre la ilegalidad del origen, manejo o destino de los fondos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el sujeto obligado no cuente con una explicación;
- Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o costos de las transacciones, incompatible con el perfil económico del mismo;
- Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados "paraísos fiscales" o identificados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL;
- Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas personas físicas revistieren el carácter de autorizadas y/o apoderadas en diferentes personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u organizaciones estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad principal sea la operatoria "off shore".
- Cuando de la actuación profesional se advierta la presencia de:
 1. Activos entregados en garantía a entes que operen en países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL, que alcancen el VEINTE POR CIENTO (20%) del activo total del ente.
 2. La formación de empresas o fideicomisos sin aparente objeto comercial o de otra índole.
 3. El uso de asesores financieros o de otra naturaleza para hacer figurar sus nombres como directores o representantes, con poca o ninguna participación en el negocio.
 4. Compra/venta de valores negociables en circunstancias inusuales en relación a la operatoria que constituye el objeto social del ente, por montos que alcancen totalizados el VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos por ventas del ejercicio.
 5. Solicitud de gestiones de negocios en países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.
 6. Transacciones con filiales, subsidiarias o empresas vinculadas constituidas en países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o

no cooperativos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.

7. Pagos de sumas de dinero por servicios no especificados que totalizados alcancen el DIEZ POR CIENTO (10%) de los pagos por compras del ejercicio.

8. Préstamos a consultores o personal de la propia empresa cuyos saldos promedio anuales alcancen el DIEZ POR CIENTO (10%) del activo total del ente.

9. Compra/venta de bienes o servicios a precios significativamente superiores o inferiores a los precios del mercado.

10. Transacciones inusuales, en relación a la operatoria normal del ente, con empresas registradas en el exterior.

11. Pagos a acreedores comerciales o financieros o a tenedores de valores negociables, en efectivo, cheques al portador o mediante transferencias a cuentas bancarias numeradas, por importes que totalizados alcancen un VEINTE POR CIENTO (20%) de los pagos totales del ejercicio.

12. Ingresos de fondos por endeudamiento recibido en efectivo o mediante transferencias desde cuentas bancarias sin titular identificable o desde países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.

13. Aportes de capital o aportes a capitalizar, recibidos en efectivo o mediante transferencias desde cuentas bancarias sin titular identificable o desde países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.

14. Inversiones en activos físicos o proyectos por montos que alcancen el VEINTE POR CIENTO (20%) del activo total del ente, destinadas a actividades cuya generación de flujos de fondos resulten insuficientes para justificarlas económicamente.

15. Clientes que brindan como garantía de sus operaciones activos radicados en centros "offshore".

16. Cobranzas anticipadas de préstamos comerciales o financieros otorgados por el ente por montos que alcancen el VEINTE POR CIENTO (20%) del total de préstamos.

17. Clientes que presentan cambios de modalidades súbitos o irregulares en el tipo de operaciones realizadas.

18. Cancelación anticipada de deudas por importes que alcancen totalizados el VEINTE POR CIENTO (20%) del endeudamiento promedio anual de la empresa en el último ejercicio.

19. Transacciones con contrapartes estructuradas bajo figuras fiduciarias sin posibilidad de identificación de personas físicas o jurídicas.

20. Comisiones de ventas u honorarios a agentes que parezcan excesivos en relación con los que abona normalmente la entidad.

30. Compra de valores negociables que conserve el asesor financiero en nombre

del cliente, cuyo monto alcance el DIEZ POR CIENTO (10%) del activo total del ente.

31. Recupero de activos en gestión, litigio o desvalorizados, por importes que alcanzan el VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos anuales del cliente.

32. Existencia de sociedades en las que se participe, directa o indirectamente, en un porcentaje superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital social, cuyos domicilios legales se encuentren en países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.

33. Solicitud para realizar en nombre del cliente operaciones financieras de cualquier índole, sin que haya una causa justificada.

34. Compra/venta de metales preciosos y obras de arte por importes que alcancen el DIEZ POR CIENTO (10%) de los activos del cliente.

35. Giros y transferencias efectuados al exterior no relacionados con la operatoria comercial habitual del cliente, por importes que alcancen el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos por ventas anuales.

36. Depósitos en efectivo de grandes sumas en cuentas bancarias relacionadas con la operatoria habitual o de fondos recibidos en operatorias no habituales.

37. Transferencia electrónica de fondos que no son cursadas a través de una entidad financiera, por importes que alcancen el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos por ventas anuales.

38. Compra/venta de activos no relacionados con la operatoria correspondiente al objeto principal del cliente, cuyo monto alcance el DIEZ POR CIENTO (10%) de su activo total.

39. Contratación de pólizas de seguros de vida con prima de pago único, con cargo a los resultados de la Sociedad, con la posterior cancelación anticipada y rescate.

40. Contratación de pólizas de seguro de vida para personas de bajo nivel de ingresos, habiendo celebrado las mismas por montos elevados y con cargo a los resultados de la Sociedad, y;

41. Contratación de pólizas de seguros de vida con prima única, para los Directores, con cargo a los resultados de la Sociedad, con la posterior cancelación anticipada y rescate, con recupero contra los resultados de la Sociedad.”

Link a la Resolución UIF N° 65/2011:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/182611/texact.htm>

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Durante 2017, para crear conciencia entre las diferentes partes interesadas sobre la necesidad de trabajar de manera coordinada y responsable para abordar los desafíos planteados por los delitos de lavado de dinero y soborno, la UIF (Unidad de Información Financiera) realizó tres seminarios sobre la lucha contra el soborno extranjero. Jueces, fiscales y oficiales de cumplimiento a nivel nacional participaron de estos eventos. Los temas abordados en estos seminarios fueron: mejores prácticas para evitar el lavado del producto del soborno nacional y extranjero, y ii) transparencia y beneficiario real.

Durante 2018, la UIF elaboró y luego difundió a las entidades informantes locales y ciertos países extranjeros designados relevantes (a través de Egmont Secure Web) un documento confidencial que contiene tipologías de lavado de dinero que involucran transacciones comerciales con un país extranjero. Este documento incluye diferentes indicadores de advertencia para detectar estructuras de corrupción pública generalizadas, así como recomendaciones a entidades informantes y diferentes jurisdicciones para estar alerta y evitar ser utilizados por funcionarios del gobierno para lavar el producto de la corrupción.

230. Párrafo 3 del artículo 52

3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La Resolución 30-E/2017 de la UIF establece en su Artículo 7 que el Sistema de Prevención de LA/FT debe considerar, al menos, entre otros elementos de cumplimiento, las políticas y procedimientos de registración, archivo y conservación de la información y documentación de Clientes, beneficiarios, operaciones u otros documentos requeridos, conforme a la regulación vigente.

Adicionalmente, en el Artículo 17 de dicha Resolución dispone que las Entidades deben conservar los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por Clientes durante un plazo no inferior a DIEZ (10) años, contados desde la fecha de la operación. El archivo de tales documentos debe estar protegido contra accesos no autorizados y debe ser suficiente para permitir la reconstrucción de la transacción; la documentación de los Clientes y Propietarios/Beneficiarios, recabada a través de los procesos de Debida Diligencia, por un plazo no inferior a DIEZ (10) años, contados desde la fecha de desvinculación del Cliente; los documentos obtenidos para la realización de análisis, y toda otra documentación obtenida y/o generada en la aplicación de las medidas de Debida Diligencia, durante DIEZ (10) años, contados desde la fecha de desvinculación del Cliente.

Como así también, deben desarrollar e implementar mecanismos de atención a los requerimientos que realicen las autoridades competentes con relación al Sistema de Prevención de LA/FT que permita la entrega de la documentación y/o información solicitada en los plazos requeridos.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

231. Párrafo 4 del artículo 52

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La normativa del Banco Central de la República Argentina <http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Textord/t-ayccef.pdf> establece en lo referido a la Autorización y composición del capital de Entidades Financieras que, dentro de los “Requisitos de la Solicitud”, que a los fines de verificar que la entidad solicitante del exterior no se trata de un “banco pantalla”, la entidad financiera deberá presentar certificación de la autoridad de supervisión del país de origen en la que conste que dicha entidad realiza negocios en la jurisdicción en la que está autorizada para llevar a cabo la actividad financiera, mantiene registro de operaciones en su domicilio, está sujeta a inspección por parte de la autoridad competente en materia del negocio financiero y, además, que emplea a personal directivo y administrativo a tiempo completo en su domicilio social.

Estos requisitos también resultan exigibles en el caso de “Modificación de la composición accionaria” punto 5.1. del referido T.O., en el caso en que la adquirente del capital sea una entidad financiera del exterior, a los fines de verificar que no se trata de un “banco pantalla”.

Por otra parte, para las transferencias de fondos desde y hacia el exterior (T.O. “EXTERIOR Y CAMBIOS”) las entidades deberán incluir en las transferencias de fondos con el exterior y en sus respectivos mensajes, información completa respecto del ordenante y del beneficiario, tales como apellidos y nombres completos o denominación social, según corresponda; domicilio o número de DNI o número de CUIT, CUIL, CDI o CIE; y número de identificación del cliente en la entidad ordenante y del beneficiario, según corresponda; y número de transacción.

En caso de retransferencias de fondos a corresponsales de otras entidades locales o la devolución de los fondos al emisor, o cualquier otra retransferencia de fondos, sólo se deberá realizar a partir de que se completen los datos faltantes de las transferencias recibidas en la cuenta de corresponsalía de la entidad local. En su participación en la cadena de pagos de transferencias electrónicas de fondos las entidades locales deberán verificar el cumplimiento de la información mínima requerida (tanto del ordenante como del beneficiario).

Deben mantener pendientes de liquidación en el mercado de cambios y/o de acreditación en cuentas locales en moneda extranjera las transferencias de fondos que no contengan la mencionada información mínima del ordenante y/o del beneficiario hasta tanto se complete.

Asimismo, el artículo 33 de la Res. UIF N° 30 E/2017, previamente mencionada prohíbe la vinculación con “bancos pantalla”.

“ARTÍCULO 33.- Cuentas de corresponsalía transfronteriza.

Con respecto a las Cuentas de corresponsalía transfronteriza, las Entidades deberán, siguiendo un enfoque basado en riesgo, evaluar la aplicación de medidas de Debida Diligencia tendientes a:

a) Reunir suficiente información sobre la institución representada que le permita comprender la naturaleza de los negocios de la institución a la cual le presta el servicio de corresponsalía y determinar, a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de su supervisión y si ha sido objeto de una investigación sobre LA/FT o una acción regulatoria.

b) Evaluar los controles de LA/FT de la institución a la cual le presta el servicio de corresponsalía.

c) Obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales.

d) Constatar que el banco representado haya llevado a cabo la Debida Diligencia sobre los Clientes que tienen acceso directo a las cuentas de la Entidad y que puede brindar la información relevante en materia de Debida Diligencia cuando la Entidad lo solicite.

En ningún caso se abrirá cuenta alguna a los denominados "Bancos Pantalla", es decir, a entidades financieras constituidas en un territorio o jurisdicción en el que no tengan presencia física -medios materiales y dirección- que permita ejercer una gestión real desde dicho territorio. Asimismo, las Entidades deberán constatar que las instituciones representadas no permitan que sus cuentas sean utilizadas por Bancos Pantalla."

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

232. Párrafo 5 del artículo 52

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones sobre la necesidad de que las autoridades competentes de Argentina compartan información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, se han celebrado una serie de Convenios de cooperación vigentes suscriptos por el BCRA con entidades pares extranjeras:

1. SUDÁFRICA: el 13 de marzo 2006 se concretó la suscripción de un Memorando de Cooperación Amplio entre el South African Reserve Bank y el BCRA, que fue antecedente del Memorando de Entendimiento en Materia de Supervisión Bancaria entre las autoridades Correspondientes, suscripto en Julio de 2007.

2. RUSIA: el 9 de noviembre de 2009 se firmó un Memorando de Cooperación entre el Banco Central de la Federación Rusia y el Banco Central de la República Argentina.

3. CHINA: el 18 de julio de 2014 entró en vigencia el Convenio de Cooperación en Materia de Estadísticas entre Ministerio de Comercio de la República Popular China y el BCRA.

4. ECUADOR: el 21 de mayo de 2014 se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central del Ecuador y el Banco Central de la República Argentina.

En líneas generales, los convenios incluyen aspectos sobre los cuales las autoridades intercambian información. Asimismo, establecen la forma y oportunidad de dicha colaboración, y contribuyen a generar o fortalecer vínculos con instituciones de similar objeto, a la vez que posibilita la mejora de los recursos y mecanismos internos en virtud del intercambio de información, experiencias y conocimientos. Es por ello que se mantiene una constante actualización de los documentos, teniendo en cuenta las modificaciones orgánicas, funcionales y los requisitos adicionales de cooperación en la materia que fijan las normativas nacionales e internacionales. Asimismo, se promueve un permanente contacto con instituciones bancarias públicas de otros países o bloques, a los fines de mantener, reforzar, crear o actualizar esos vínculos mediante generación de negociación de nuevos convenios.

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE SUPERVISIÓN BANCARIA

País Fecha	Materia Denominación	Institución
Alemania Kreditwesen Bahamas 19/05/2010 Brasil 26/08/1999 Cayman Islands 13/02/2008 Chile 30/11/1994 China de China China 05/05/2014	Supervisión Bancaria 02/02/2001 Supervisión Bancaria Memorando de Entendimiento Supervisión Bancaria Protocolo de Cooperación Supervisión Bancaria Memorando de Entendimiento Supervisión Bancaria Resolución Supervisión Bancaria 05/10/2011 Lavado Activos Memorando de Entendimiento Financiación Terrorismo Supervisión Bancaria Protocolo de Cooperación Supervisión Bancaria Declaración de Cooperación Supervisión Bancaria Enmienda Supervisión Bancaria Segunda Enmienda Supervisión Bancaria Memorando de Entendimiento Supervisión Bancaria 19/09/2000 Supervisión Bancaria 19/11/2009 Supervisión Bancaria Memorando de Entendimiento Supervisión Bancaria Memorando de Entendimiento Supervisión Bancaria Memorando de Entendimiento	Bundesaufsichtsamt für das Memorando de Entendimiento Central Bank of the Bahamas Banco Central de Brasil Cayman Islands Monetary Authority Superintendencia de Bancos Comisión de Regulación Bancaria Memorando de Entendimiento People's Bank of China Banco de España Federal Reserve y OCC OCC, Fed y adhirió la FDIC OCC, Fed, FDIC y adhirió la OTS Banca d'Italia Comisión Nacional Bancaria y de Memorando de Entendimiento Superintendencia de Bancos del Memorando de Entendimiento Financial Services Authority South African Reserve Bank Banco Central del Uruguay

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

233. Párrafo 6 del artículo 52

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

234. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

53. Medidas para la recuperación directa de bienes

235. Apartado a) del artículo 53

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En nuestro ordenamiento procesal civil y comercial nacional, no existen restricciones de capacidad jurídica que impidan que un Estado extranjero reclame bienes adquiridos directa o indirectamente mediante la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la Convención.

El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce a los Estados extranjeros como personas jurídicas públicas (art. 146), con lo que éstos podrían intervenir en juicio acreditando su relación con los bienes en cuestión y/o los daños ocasionados por el delito (arts. 1716, 1737, 1740 y 1772), ya sea en un proceso civil autónomo, o en el marco de una acción civil ejercida en el mismo proceso penal en el que se investigue la comisión de alguno de los delitos tipificados con arreglo a la Convención (arts. 14 a 17 del Código Procesal Penal de la Nación).

También un Estado parte perjudicado podría presentarse como actor civil en un procedimiento local por lavado de activos si el delito determinante se hubiera cometido en dicho país y éste acreditara su propiedad anterior de los bienes decomisados o los daños sufridos por el delito. Una situación similar podría presentarse en una investigación local por soborno transnacional, en cuyo caso el país extranjero cuyo funcionario público hubiera sido sobornado por un empleado de una empresa exportadora argentina podría, como actor civil en el procedimiento local, acreditar los daños sufridos y recuperar el producto del delito que hubiera obtenido el individuo argentino.

Debe tenerse presente, además, que la intervención como parte de un Estado extranjero determinará la competencia federal, ya sea ante el fuero criminal y correccional federal en los casos en que decida instar la acción civil dentro del proceso penal () o una acción civil independiente ante el fuero civil y comercial federal, pero no la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional; 14/17 y 87/96 del Código Procesal Penal de la Nación; Ley 48; y 24, inciso 1° del Decreto-Ley 1285/58).

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

236. Apartado b) del artículo 53

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

[...]

b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Una vez establecida la capacidad jurídica para accionar civilmente, ya sea en un proceso civil o en el marco del proceso penal, los Estados extranjeros tendrían derecho a ser indemnizados o resarcidos por los daños y perjuicios derivados del delito cometido en el territorio Argentino, en los términos de los arts. 29 y 30 del Código Penal. De conformidad con el art. 29 del CP, la sentencia condenatoria puede ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias, así como la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba y el pago de las costas.

Asimismo, el artículo 30 del mismo cuerpo legal establece que *“La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente: 1. La indemnización de los daños y perjuicios. 2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 4. El pago de la multa”*.

237. Apartado c) del artículo 53

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

[...]

c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El artículo 23 del Código Penal dispone expresamente, en relación al decomiso, que las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, deben ser decomisadas en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios. Sin embargo esta norma exceptúa del decomiso a los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Es decir que si los bienes obtenidos a partir del hecho ilícito pertenecen a un Estado extranjero la restitución o la reparación de los daños en favor del Estado extranjero damnificado tendrán prioridad sobre el decomiso de las ganancias del delito.

Así lo dispone también el art. 29 Código Penal antes citado, cuando establece que la sentencia condenatoria puede ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.

Ese orden de prioridades entre la restitución y reparación (art. 29 del CP) y el decomiso de las ganancias del delito (art. 23 del CP), se encuentra claramente establecido en el artículo 30 de Código Penal, el cual establece que *“La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente: 1. La indemnización de los daños y perjuicios. 2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 4. El pago de la multa”*.

La restitución es una medida accesoria de la condena, de naturaleza civil, que puede ser dispuesta por el juez, aún de oficio, sin necesidad de que se hubiera instaurado oportunamente la acción civil. Correlativamente, el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para solicitarla, en ejercicio de su función constitucional de actuar en defensa de la legalidad (art. 120 de la C.N.). Es decir que no es necesario que el Estado extranjero se constituya como actor civil en el proceso penal para que los Tribunales locales puedan reconocer su legítima propiedad sobre los bienes y

ordenar su restitución.

238. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO) previamente mencionado en otros artículos entre la Unión Europea y América Latina, ha brindado asistencia técnica, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia.

Con fecha 24/04/2018 se realizó en ese marco el "Taller de especialización en recupero de activos en el MPF", con el objetivo de intercambiar experiencias e identificar las principales dificultades en torno al decomiso de bienes en causas vinculadas al crimen organizado. Los participantes, que fueron en su mayoría Fiscales Federales coincidieron en la necesidad de trabajar articuladamente con las diferentes áreas especializadas del MPF especialmente la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones para lograr avances eficaces en la materia.

54. Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación

239. Apartado a) del párrafo 1 del artículo 54

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Teniendo en cuenta la pirámide normativa en la Argentina y resoluciones uniformes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los últimos años, debe destacarse que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción puede ser utilizada como base normativa para requerir y brindar también, mediante un pedido de cooperación jurídica internacional, medidas respecto de bienes, entre ellas la ejecución en nuestro país de órdenes de decomiso dictadas por autoridades extranjeras. Ante la ausencia de Tratado específico de cooperación o ausencia de normativa sobre decomiso en los Tratados vigentes, puede utilizarse la Convención como base jurídica para requerir cooperación.

Sin perjuicio de ello, debe destacarse que la Argentina posee una normativa interna sobre cooperación jurídica internacional, la **Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley N° 24.767)**, acorde con los estándares requeridos por la Convención de Naciones contra la Corrupción, que garantiza la asistencia sin necesidad de la existencia de un Tratado específico que la regule y que, además, contiene normativa específica sobre cooperación internacional en materia de decomiso.

Así, la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, contiene normas específicas sobre la ejecución, en nuestro país, de órdenes de decomiso dictadas por un tribunal extranjero (capítulo III de la Ley N° 24.767).

El artículo 95 y siguientes de la Ley establecen la posibilidad de esa ejecución y sus requisitos (artículo 95), la posibilidad de compartir los bienes obtenidos a través de la ejecución de la orden de decomiso entre el Estado requirente y la República Argentina (artículo 96), el procedimiento y rol del Ministerio Público Fiscal (artículos 97, 98, 100 y 101).

El artículo 95 de la Ley 24.767, establece que:

“Las condenas de multa o decomiso de bienes dictadas en un país extranjero, serán ejecutables en la República Argentina, a solicitud de un tribunal de aquel país, cuando:

a) La infracción fuese de competencia del Estado requirente, según su propia legislación

b) La condena sea definitiva y esté firme

c) El hecho que la motiva constituya infracción punible para la ley argentina, aun cuando no tuviera previstas las mismas penas

d) No se dieran las circunstancias del artículo 8° párrafos a) y d)

e) La pena no se haya extinguido según la ley del Estado requirente

f) El condenado no hubiese sido juzgado en la Argentina o en cualquier otro país por el hecho que motiva el pedido

g) El condenado hubiese sido personalmente citado y se haya garantizado su defensa

h) No existieren las razones especificadas en el artículo 10

La ayuda no podrá consistir en la aplicación de una pena de prisión por conversión de la multa.”

Es importante destacar que a los efectos de garantizar la efectiva y rápida cooperación internacional, la Ley 27.767 le asigna un rol esencial al Ministerio Público Fiscal, ya que pone en su cabeza la representación del interés por la cooperación (artículo 74) y específicamente en materia de ejecución de órdenes de decomiso la representación del interés por la ejecución. Asimismo, participa activamente en el procedimiento de ejecución de las solicitudes.

En virtud de ello, el MPFN tiene un rol central en materia de cooperación jurídica internacional y específicamente en la ejecución de las órdenes de decomiso. Dicho rol en la cooperación formal se complementa con la cooperación informal o directa, entre autoridades equivalentes de distintas de distintas jurisdicciones, que permite hacer más rápida y eficiente la cooperación formal.

Más allá que la recuperación de activos de carácter transnacional requiere, generalmente, de una solicitud de asistencia jurídica internacional, transmitida a través de Autoridades Centrales, determinadas etapas de la cooperación en materia de bienes (especialmente la identificación) pueden ser cumplidas a través de la cooperación informal, esto es el intercambio de información efectuado de manera directa entre Instituciones (por ejemplo, a través del contacto directo entre Fiscales).

Por otro lado, **la cooperación internacional de carácter informal** resulta fundamental a los fines de complementar la cooperación formal, ya sea al momento de preparar el pedido de asistencia jurídica obteniendo información que facilite su ejecución, al momento de su ejecución y posteriormente para obtener detalles o aclaraciones de la información o documentación proporcionada.

Dicha cooperación informal utilizada de manera complementaria a los canales formales, permite, por ejemplo obtener anticipadamente información sobre los bienes, requisitos o los canales para la solicitud de las medidas; pudiéndose así

disminuir los tiempos de respuesta y hacer más eficiente la cooperación internacional.

A efectos de potenciar la cooperación informal desde el Ministerio Público Fiscal se propicia, a través de un Acuerdo de cooperación interinstitucionales, la cooperación directa entre Ministerios Públicos, la utilización de la RRAG de GAFILAT (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT), así como de otras redes de cooperación informal, tal como IberRed y la cooperación a través de las vías establecidas por INTERPOL.

La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, creada mediante la ley N° 27.148 y con organización interna y funciones específicas dispuestas por Resolución PGN N° 426/16, tiene un área de Asistencia Jurídica encargada de la cooperación internacional en materia de recupero de activos en las diferentes etapas, ya sea para la identificación, congelamientos, secuestro o decomiso de bienes; en otras palabras, participa de las diferentes etapas de las solicitudes de asistencia jurídica, recibiendo los pedidos que son enviados al MPFN para su ejecución y asesorando a los Fiscales respecto al rol asignado por la Ley. Esta Dirección participa activamente en la confección de los pedidos de asistencia de los Fiscales federales dirigidos al extranjero, proporcionando normativa aplicable, modelos y efectuando observaciones sobre los proyectos de pedidos de ayuda y colabora con las Fiscalías en las necesidades de cooperación internacional que éstas tengan con relación a los bienes, desde el análisis de la mejor vía para requerir la cooperación internacional (cooperación formal, cooperación interinstitucional, utilización de Redes, INTERPOL, etc.), la confección de los requerimientos (especialmente los formales), seguimiento de pedido e impulso para su pronto cumplimiento.

Asimismo, colabora ante requerimientos formulados por otros Estados relacionados con bienes, encausando y enmarcando los pedidos así como colaborando en su cumplimiento.

Dichas funciones de apoyo y asistencia a los Fiscales en materia de cooperación internacional en materia de bienes se realizan de manera conjunta y coordinada con la **Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGDRADB)**, área específica de la Procuración General de la Nación encargada de asistir a los Fiscales en materia de recuperación de activos.

Sobre las funciones de estas dos direcciones de la Procuración General de la Nación y el rol del Ministerio Público Fiscal en la asistencia jurídica internacional y la ejecución de condenas extranjeras de decomiso de bienes, se dio cuenta en la información brindada en el artículo 51.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es Autoridad de Aplicación del **Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos de América (aprobado por Ley 24.034)**.

En el inciso 1 del Artículo 5 de dicho Tratado se establece: “1. La autoridad central

del Estado requerido cumplirá sin dilación con la solicitud o, cuando proceda, la transmitirá a la autoridad competente. Las autoridades competentes del Estado requerido no ahorrarán esfuerzos para cumplir con la solicitud. Los tribunales del Estado requerido estarán facultados para expedir citaciones, órdenes de registro y cualquier otra orden necesaria para cumplir con la solicitud”.

Además el artículo 14 del Tratado prevé como medidas objeto de la solicitud el registro, embargo y secuestro y el artículo 16, la asistencia en procedimientos de incautación (Artículo 16- Asistencia en procedimientos de incautación):

1. Si la autoridad central de una de las Partes llega a tomar conocimiento de la existencia de frutos o instrumentos de delitos en el territorio de la otra parte que puedan incautarse o, de otro modo, embargarse según las leyes de ese Estado, podrá informarlo a la autoridad central de la otra parte. Si la otra parte tiene jurisdicción al respecto podrá presentar esa información a sus autoridades, para que decidan si debe adoptarse alguna medida. Dichas autoridades decidirán conforme a las leyes de su país y, por medio de su autoridad central, informarán a la otra Parte del resultado de tal decisión.
2. Las partes contratantes se asistirán mutuamente, en la medida que lo permitan sus leyes respectivas, en los procedimientos relativos a la incautación de los frutos e instrumentos de delitos y a las indemnizaciones a las víctimas de delitos, así como en la ejecución de las multas dispuestas por orden judicial.
3. La parte requerida que tenga en su poder los bienes incautados los enajenará de conformidad con sus propias leyes, En la medida que lo permitan sus leyes, y según los términos que se consideren razonables, cualquiera de las dos Partes podrá transferir bienes, o el producto de su enajenación, a la otra Parte.

240. Apartado b) del párrafo 1 del artículo 54

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

[...]

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El artículo 303 del código Penal incorporado en el año 2011 por la Ley 26683, tipifica el delito de lavado de activos y establece que *“Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.”*

En su inc. 5 dispone que *“Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión”*.

Cabe aclarar que, en nuestra legislación, cualquier delito, incluidos aquellos contra la administración pública (dentro de los cuales se ubican los delitos previstos por la Convención), puede ser ilícito precedente en un caso de lavado de activos.

Asimismo, para todos los delitos resulta aplicable el art. 23 del Código Penal, el cual establece que *“En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros [...] cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos, o cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste”*.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

A modo ilustrativo podemos mencionar lo ocurrido en el marco del Expediente CFP 2468/2015, "EXHORTO: Solicitante Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en autos: "Fiscalía de la República ante el Tribunal de Milán. Expte. 2973/2015", originado en una rogatoria internacional impulsada por la Fiscalía de La República Italiana ante el Tribunal de Milán.

Los representantes del Ministerio Público italiano fundaron la rogatoria internacional informando que se estaba llevando a cabo una investigación originada en la quiebra de un Hospital de Milán, la que desembocó en el hallazgo de importantes "fondos no declarados" depositados en cuentas en el extranjero, por parte del indicado centro de salud y de una Fundación. Se agregó que dichos fondos fueron utilizados para la comisión de numerosos delitos de corrupción de funcionarios públicos.

En ese orden, se refirió que del análisis de la documentación bancaria y contable de las sociedades extranjeras en las que los imputados resultaban beneficiarios económicos, así como de las declaraciones del fiduciario suizo que gestionaba dichas sociedades y otra información recabada, había quedado demostrado que parte de dichas sumas fueron transferidas a cuentas corrientes cuya titularidad era de una sociedad radicada en Argentina, respecto de la cual se solicitaban los referidos embargos.

Por ello, ante la posibilidad de que en las maniobras objeto de dicho proceso penal hayan intervenido ciudadanos residentes en este país no alcanzados por la investigación efectuada en el extranjero, cuyas conductas pudieran resultar perseguibles penalmente en Argentina, la PROCELAC inició una investigación preliminar y, sobre la base de la información producida, denunció a varias personas físicas y jurídicas por lavado de activos de origen delictivo (art. 303 CP).

241. Apartado c) del párrafo 1 del artículo 54

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

[...]

c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

¿Cumple su país esta disposición?

(P) Sí, en parte

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En el plano interno, los artículos 23 y 305 del Código Penal permiten el decomiso definitivo y anticipado de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados, respecto de las operaciones de lavado de activos. Para estos casos no será necesaria la condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiese ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.

Más allá de que este apartado se trate de una cláusula no mandatoria de la Convención, existe la posibilidad de que las autoridades argentinas brinden asistencia jurídica internacional a efectos de permitir el decomiso de esos bienes, cuando la sentencia de decomiso en el Estado requirente es previa o independiente de la condena penal por los hechos.

El artículo 95 de la Ley 24.764 refiere se *“las condenas de multa o decomiso de bienes dictadas en un país extranjero”*, con independencia del régimen de ejecución de condenas privativas de libertad o de inhabilitación. De acuerdo con su texto que ya fue citado, las únicas exigencias para la ejecución de estas sentencias en la República Argentina, son: que se dicten por un Estado competente (según la legislación del requirente); que se trate de sentencia definitiva y esté firme; que el hecho constituya infracción penal el país; que no exista un proceso pendiente en la Argentina o en otro país por los mismos hechos y contra la misma persona; que en el proceso en el país requirente se haya respetado la garantía de defensa y el derecho a ser oído; que no se verifiquen *“especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”*; o el pedido *“evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el o la religión de las personas involucradas...”*

Lo cierto es que en la Argentina aún no se han recibido solicitudes de asistencia jurídica internacional en los términos planteados por el artículo 54.1.c) de la Convención, por lo que las autoridades no se han expedido respecto a esta disyuntiva.

En otro orden de ideas, si la sentencia de decomiso en el Estado requirente hubiera sido pronunciada por un tribunal civil o una autoridad administrativa, la Argentina ha suscripto diversos tratados sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Este tipo de mecanismos expresamente receptan las sentencias en materia de reparación y restitución de bienes pronunciados en jurisdicción penal. Como ejemplos pueden citarse el Acuerdo entre las Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, de 2002, aprobado por Ley 25.935 (art. 18). El art. 20, inciso f) del citado acuerdo establece que las sentencias tendrán eficacia si no contrarían manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitare el reconocimiento y/o la ejecución; el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, suscripto el 27/6/92, entre los Estados Partes del Mercosur (Ley 24.578); las Convenciones Interamericanas sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Ley 22.921); el Tratado entre la República Argentina y la República Popular China sobre asistencia Judicial en Materia Civil y Comercial (Ley 26.672); el Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial entre la República Argentina y la República Tunecina (Ley 26.667); el Tratado de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa suscripto con la Federación de Rusia (Ley 25.595); la Convención de Cooperación Judicial suscripto con la República Francesa (Ley 24.107); el Acuerdo sobre Cooperación Judicial en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa con la República Federativa del Brasil (Ley 24.108); la Convención de Asistencia Judicial y de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil, firmada con la República Italiana (Ley 23.720). El artículo 16 del tratado bilateral sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito entre la República Argentina y los Estados Unidos de América (Ley 24.034) también prevé mecanismos para la asistencia en procedimientos de incautación.

En enero de 2019, se promulgó el **Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 62/2019**, que complementa la legislación de fondo estableciendo un **régimen procesal de acción civil para extinción de dominio**, con el objetivo de agilizar el procedimiento de decomiso y recupero de activos que son objeto/provecho del delito, dejando a salvo los derechos de terceros adquirentes de buena fe, en determinadas circunstancias.

A modo de resumen, a continuación se destacan los puntos centrales de la nueva reglamentación:

- Crea una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación, que será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares, junto con los fiscales, presentará las demandas e

impulsará las acciones en el fuero Federal Civil y Comercial, mediante un proceso sumarísimo.

- El demandante debe demostrar que los bienes fueron incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de la presunta comisión del delito investigado y que su incorporación no corresponde razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o que representan un incremento patrimonial injustificado, proviene directa o indirectamente de uno de los delitos previstos en el DNU (art. 5°).
- Es requisito de admisibilidad de la demanda de extinción de dominio que todos los bienes que sean objeto de extinción de dominio hayan sido previamente cautelados por el juez penal interviniente en la investigación del delito que los originó.
- Luego de la medida cautelar en sede penal y la demostración del origen ilícito en sede civil, el demandado podrá producir prueba para demostrar que los bienes provenían de ingresos legítimos.
- Busca alcanzar: a) bienes susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. B) La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso anterior; C) También incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de esos bienes.
- Alcanza a los acusados de delitos relacionados a estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo. También el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Y el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.
- No se requiere sentencia firme de condena. Sólo un grado de probabilidad respecto de la vinculación de los bienes con el delito (estándar requerido para las medidas cautelares en sede penal).
- Durante el proceso, la administración de los bienes muebles e inmuebles estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

- Introduce la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, el colaborador eficaz, fijando una compensación de hasta el 10 por ciento de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.
- Establece la prescripción de la acción a los 20 años.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La jurisprudencia argentina ha receptado el instituto en análisis. En efecto, en septiembre de 2016 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó el decomiso definitivo y anticipado a favor del Estado y con fines sociales de una importante cantidad de dólares por *“la presunta ilicitud del origen de las divisas”* y por encontrarse en rebeldía uno de los imputados. Si bien el delito fue calificado como contrabando de divisas, por no poderse corroborar el destino final de los activos, la persona que los ingresó al país arribó en un vuelo privado junto a funcionarios públicos, en misión oficial. También se adoptó igual solución, en octubre del mismo año, en un caso de lavado de activos en el que los imputados estaban prófugos. En esa ocasión, el juez a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata consideró pertinente la medida por entender que estaban acreditados los supuestos de procedencia exigidos por los art. 23 y 305 del Código Penal y estimó, respecto del decomiso anticipado, que *“...Este no es un caso de pena anticipada, lo cual está proscripto por nuestra CN, sino una solución frente a supuestos en que los bienes se encuentran en una situación que podría implicar un enriquecimiento sin causa lícita y que el imputado no se encuentre a derecho para ejercer sus defensas o que reconozca ese origen ilícito de los bienes...”*.

242. Apartado a) del párrafo 2 del artículo 54

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La ley argentina de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley N° 24.767) y los tratados multilaterales y bilaterales firmados con otras naciones contemplan normas adecuadas para que las autoridades de la República Argentina brinden asistencia jurídica a los fines del embargo preventivo e incautación de bienes.

El trámite de las medidas necesarias para satisfacer los requerimientos de las autoridades extranjeras debe prestarse a la luz del principio general de cooperación establecido en el artículo 1° de la ley 24.767, en el sentido de que *“la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél”*; requiriendo así mismo que *“Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda”*.

En lo que respecta a las medidas cautelares, el art. 23 del Código Penal dispone en sus párrafos 9 y 10 que: *“El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho”*.

Por su parte el art 518 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) en su último párrafo dice que *“las medidas cautelares podrán dictarse antes del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen”*.

La jurisprudencia de nuestro país ha convalidado la facultad de los jueces de adoptar medidas precautorias sobre los bienes, desde el inicio de las actuaciones, es decir, antes del auto de procesamiento e incluso antes de la convocatoria a prestar

declaración indagatoria, siempre que se encuentren configurados los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Por su parte art. 98 de la Ley N° 24.767 dispone que durante la tramitación del procedimiento de decomiso (ejecución de una orden extranjera) podrán adoptarse medidas cautelares.

A modo ilustrativo podemos mencionar los embargos ordenados en el marco del expediente CFP 2468/2015, *"EXHORTO: Solicitante Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en autos : "Fiscalía de la República ante el Tribunal de Milán,. Expte. 2973/2015"*, en el cual como correlato de una rogatoria internacional impulsada por la Fiscalía de La República Italiana ante el Tribunal de Milan, el entonces titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dispuso, con fecha 18 de mayo de 2015 trabar embargo sobre:

- 1) Las cuentas corrientes y cajas de ahorro de una sociedad;
- 2) La totalidad de acciones, participaciones y obligaciones negociables correspondientes a la misma firma;
- 3) Tres inmuebles pertenecientes a la sociedad.

Los representantes del Ministerio Público italiano fundaron la rogatoria internacional informando que se estaba llevando a cabo una investigación originada en la quiebra de un Hospital de Milán, la que desembocó en el hallazgo de importantes "fondos no declarados" depositados en cuentas en el extranjero, por parte del indicado centro de salud y de una Fundación. Se agregó que dichos fondos fueron utilizados para la comisión de numerosos delitos de corrupción de funcionarios públicos.

En ese orden, se refirió que del análisis de la documentación bancaria y contable de las sociedades extranjeras en las que los imputados resultaban beneficiarios económicos, así como de las declaraciones del fiduciario suizo que gestionaba dichas sociedades y otra información recabada, había quedado demostrado que partes de dichas sumas fueron transferidas a cuentas corrientes cuya titularidad era de la sociedad radicada en Argentina, respecto de la cual la justicia italiana solicitó los referidos embargos.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

243. Apartado b) del párrafo 2 del artículo 54

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

[...]

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tal como se ha informado en relación con los artículos precedentes, la ley argentina de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley N° 24.767) y los tratados multilaterales y bilaterales firmados con otras naciones contemplan normas adecuadas para que las autoridades de la República Argentina brinden asistencia jurídica a los fines del embargo preventivo e incautación de bienes.

El trámite de las medidas necesarias para satisfacer los requerimientos de las autoridades extranjeras debe prestarse a la luz del principio general de cooperación establecido en el artículo 1° de la ley 24.767, en el sentido de que *“la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél”*; requiriendo así mismo que *“Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda”*.

En lo que respecta a las medidas cautelares, el art. 23 del Código Penal dispone en sus párrafos 9 y 10 que: *“El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho”*.

Por su parte el art 518 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) en su último párrafo dice que *“las medidas cautelares podrán dictarse antes del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen”*.

La jurisprudencia de nuestro país ha convalidado la facultad de los jueces de adoptar

medidas precautorias sobre los bienes, desde el inicio de las actuaciones, es decir, antes del auto de procesamiento e incluso antes de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, siempre que se encuentren configurados los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Por su parte art. 98 de la Ley N° 24.767 dispone que durante la tramitación del procedimiento de decomiso (ejecución de una orden extranjera) podrán adoptarse medidas cautelares.

A ello cabe agregar, en el sentido informado en la respuesta al artículo 51, que con el objetivo de desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos y fenómenos criminales, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad económica compleja se creó en el ámbito de la Procuración General Nación la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes que luego fue incorporada a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación (art. 33 inc. g de la Ley 27.148).

De este modo la Dirección brinda asistencia y colaboración a las Fiscalías de todo el país, en cada una de las distintas etapas que supone el proceso de recupero de activos, desde la investigación patrimonial, dirigida a identificar y localizar los bienes pasibles de decomiso o restitución (instrumentos, objeto, producto y provecho del delito). Luego en la etapa precautoria, orientada a asegurar los bienes identificados a fin de que durante el transcurso del proceso no se realicen actos que impidan su ejecución, y en todos aquellos supuestos en los cuales la medida cautelar suponga el desapoderamiento del bien al imputado (secuestro de automotor, clausura de inmuebles, intervención o administración judicial, etc) asiste en el diseño de estrategias de administración de activos, que permitan conservar el valor de los bienes durante el proceso (sin asumir la gestión de los activos incautados). Finalmente, la restitución, reparación y en su caso, el decomiso, son medidas que únicamente serán de cumplimiento efectivo si se obtienen luego de haber transitado exitosamente esas distintas fases o etapas.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

1- Causa N° 3017/13 “Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento”

En la causa se investiga el delito de lavado de activos de origen ilícito que podría provenir de una “desmedida e irregular asignación de obra pública a Lázaro Báez...”. Se realizó un trabajo conjunto entre la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 y la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN, que permitió individualizar activos pertenecientes a catorce personas físicas y catorce personas jurídicas involucradas en los hechos investigados y respecto de los que se postuló su embargo preventivo para asegurar el decomiso del producto o provecho de los delitos investigados y las penas pecuniarias. Así, el juez a cargo de la causa hizo lugar a todas las medidas cautelares solicitadas y dispuso el embargo preventivo en relación a 269 inmuebles; 1496 automotores; 4 embarcaciones; el embargo de las acciones que detentan los imputados en 58 sociedades anónimas y de las tenencias de cuotas partes en 10 sociedades de responsabilidad limitada. Todo

ello, para hacer efectivos los embargos decretados en la causa y que ascienden a un monto de \$1.131.000.000.

Actualmente la causa se encuentra en la etapa final del juicio oral y público, y la Fiscalía ante el Tribunal Oral Criminal Federal solicitó la intervención de esta Dirección para asistir en la producción de la prueba vinculada a la recuperación de los activos involucrados.

2- Causa N° 12.446/08 (Fiscalnet N° 28517/17) portada “Jaime, Ricardo s/ enriquecimiento ilícito” en la cual se investiga por enriquecimiento patrimonial injustificado al ex funcionario durante el período en que ejerció el cargo público de Secretario de Transporte de la Nación, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores del denominado “período de sospecha”, mediante operaciones de compraventa de bienes con la participación de más de 25 personas interpuestas. En el curso de la investigación se dictaron medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de 19 imputados y 6 personas jurídicas, con fines de asegurar el decomiso de los bienes producto y/o provecho de los delitos investigados como así también la pena de multa prevista en forma conjunta a la de prisión. Concretamente, se decretó el embargo preventivo de 16 inmuebles, 13 automotores, una embarcación y se dispuso el congelamiento de 10 productos bancarios.

Entre los bienes recuperados en el marco de la causa, cabe destacar el barco Altamar modelo 64 matrícula DL2153AC que el ex funcionario habría adquirido a través de la firma extranjera off shore Dalia Ventures LLC al astillero de la firma Altamar Yacht S.A. por un millón de dólares estadounidenses, en febrero de 2009. Gracias a las tareas llevadas a cabo durante la instrucción del caso, se determinó que la embarcación estaba amarrada en el Puerto de Piriápolis, República del Uruguay, bajo bandera estadounidense desde diciembre de 2012 y que registraba deuda por amarre. La justicia federal dispuso el secuestro de la embarcación. Finalmente, la embarcación Altamar llegó a nuestro territorio, a raíz del pedido de cooperación solicitado por el magistrado interviniente a su par de Uruguay, y quedó a disposición del juzgado interviniente en el caso. Cabe mencionar que el Estado argentino debió hacer frente a la deuda de amarre para concretar la medida cautelar.

3- Causa N° 5048/16/2 “Grupo Austral y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

En la causa se investiga el desvío de fondos públicos a partir de la asignación desmedida e irregular de obra pública en favor de un grupo empresario encabezado por una persona allegada a un ex presidente. En el mes de noviembre del año 2017, el juez a cargo de la causa dispuso el embargo preventivo para asegurar el decomiso del producto o provecho de los delitos investigados, la indemnización civil, las penas pecuniarias y las costas del proceso. Así las cosas, se trabó efectivamente el embargo de 94 inmuebles; 30 automotores; 1 embarcación y 16 productos bancarios. Todo ello, para hacer efectivos los embargos decretados en la causa y que ascienden a un monto de \$75.000.000.000.

4- Causa N° 6219/01, caratulada “Menem, Carlos Saúl y otros s/ delito de acción pública”.

En la causa, que ya se encuentra en etapa de juicio, se investiga a los funcionarios

públicos involucrados en la sustracción del “Predio Ferial de Palermo” del ámbito de la administración pública, mediante su transferencia ilícita a particulares ajenos a la administración y a precio vil. En el mes de septiembre del año en curso (2018) el Tribunal Oral Federal 2 hizo lugar a la medida cautelar de Anotación de Litis del Inmueble solicitada por la titular de la Fiscal General N° 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. La medida procura asegurar al Estado el recupero del bien que ha sido objeto del delito ante el eventual dictado de la sentencia condenatoria (art. 29 CP).

5- Causa “Av. Posible delito de acción pública - infracción leyes 24.469, 19.365 y art. 303 Código penal” (FN: 35-310/2016; FCT 3084/2016). Fiscalía Federal de Paso de los Libres.

En la causa de referencia se investiga la comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo, cuyo delito precedente es entre otros el encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público que tiene como procesado a un ex fiscal de la ciudad Paso de Libres, en la provincia de Corrientes, y a otros funcionarios. Se obtuvieron medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de 13 imputados y 3 personas jurídicas, con fines de asegurar el decomiso de los bienes producto y/o provecho de los delitos investigados como así también de aquellos activos que fueron utilizados como instrumento. En ese marco, se decretó el embargo preventivo de 14 inmuebles, 20 automotores y de una embarcación. Respecto de otros 7 vehículos pertenecientes a terceros allegados a los imputados, se ordenó la traba de la medida de anotación de litis. También dictó el embargo preventivo para asegurar el decomiso de \$ 1.044.127,85; U\$S 89.024; R\$ 229.132; CH\$ 25.000; € 400 y UR\$ 100, dinero que había sido secuestrado en el marco de los allanamientos efectuados en la causa. Con relación a los productos bancarios, dispuso la prohibición de innovar respecto de una caja de seguridad y el congelamiento por noventa días de 14 cuentas corriente en pesos y 28 cajas de ahorro (8 de las cuales eran en dólares).

Actualmente la causa se encuentra elevada a juicio, y la Fiscalía ante el Tribunal Oral Criminal Federal solicitó la intervención de esta Dirección para asistir en la producción de la prueba vinculada a la recuperación de los activos involucrados.

244. Apartado c) del párrafo 2 del artículo 54

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

[...]

c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

A los efectos de establecer el tipo de medida cautelar aplicable en un caso concreto, el Código Procesal Penal de la Nación sólo establece, en su art. 518, el embargo y la inhibición general de bienes. Sin embargo, ello no impide al juez penal valerse de otras medidas cautelares que resulten de aplicación en el proceso penal, como la intervención o administración judicial, la medida de no innovar o de no contratar, secuestro, anotación de litis o bien, las medidas genéricas establecidas en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Respecto a las medidas cautelares en sí, el artículo 520 del Código Procesal Penal de la Nación, establece que estas se regirán por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

“Artículo 520.- Con respecto a la sustitución del embargo o inhibición, orden de los bienes embargables, forma y ejecución del embargo, conservación, seguridad y custodia de los bienes embargados, su administración, variaciones del embargo, honorarios y tercerías, regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero el recurso de apelación tendrá efecto devolutivo”.

Las normas de procedimiento sobre medidas cautelares que contiene el Código Procesal Civil y Comercial se encuentran previstas en los siguientes artículos:

- Reglas generales: arts. 195 a 208 del CPCCN
- Embargo preventivo: arts. 209 a 220 del CPCCN
- Secuestro: art. 221 del CPCCN
- Intervención judicial: arts. 222 a 227 del CPCCN
- Inhibición general de bienes y anotación de litis: arts. 228 a 229 del CPCCN

- Prohibición de innovar y de contratar: arts. 230 a 231 del CPCCN
- Medidas cautelares genéricas: arts. 232 a 233 del CPCCN.

La Ley 20.785 es la norma que regula la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en causas penales de competencia de la justicia nacional y federal. En términos generales, el artículo 1° de esta Ley le asigna la responsabilidad sobre los bienes objeto de medidas precautorias a los jueces a cargo de las causas.

Respecto al dinero, títulos y valores secuestrados deben depositarse en bancos públicos, debiendo ser el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en la sucursal del Banco de la Nación Argentina, según la jurisdicción del caso en concreto y anotados a disposición de la causa en la que fueron secuestrados. Según el artículo 3°, último párrafo, estos depósitos de dinero deberán devengar los intereses al tipo bancario correspondiente. Estos intereses deberán quedar a disposición de la causa.

Para el resto de los bienes, el artículo 3° dispone que: *“Tratándose de bienes físicos, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no sea habido, o citado legalmente no compareciere a recibirlos, se procederá de la siguiente manera:*

- a. Si se tratare de cosa perecedera, se dispondrá de inmediato su venta en pública subasta, por intermedio de las instituciones bancarias mencionadas en el artículo precedente, en las cuales se depositará el importe obtenido de la venta;*
- b. Si los bienes secuestrados tuvieren interés científico o cultural, se dispondrá de inmediato su entrega a entidades de reconocidos antecedentes en la materia;*
- c. En los casos de estupefacientes o psicotrópicos, el juzgado determinará la repartición u organismo del Estado Nacional a que serán entregados;*
- d. Tratándose de armas de fuego o explosivos la entrega se hará al Comando de Arsenales del Ejército o a la unidad militar más cercana, según que el asiento del tribunal, se halle en la Capital Federal o en el interior;*
- e. Cuando se tratare de aeronaves, la entrega se hará a la autoridad aeronáutica.*
- f. Si se tratare de cualquier otro bien no especificado en los incisos precedentes transcurridos seis (6) meses desde el día*

del secuestro se dispondrá su venta en pública subasta, a través de las instituciones bancarias mencionadas en el art. 2º, en las que se depositará el importe obtenido de la venta.

En todos los casos, si los bienes secuestrados pudieren sufrir daño o demérito por el solo transcurso del tiempo, las instituciones a las que se hiciere entrega de los mismos podrán disponer de ellos con autorización del tribunal y previa tasación que éste ordenará.

En tal supuesto, aquéllas quedarán obligadas por la suma determinada en la tasación con más los intereses al tipo bancario si, posteriormente, correspondiere la devolución de los bienes a quien acreditar derecho sobre ellos.”

Según el artículo 4º: “Cuando por la naturaleza de los bienes secuestrados no correspondiere su venta ni entrega, transcurrido el plazo establecido en el artículo 6º se dispondrá su destrucción”.

Ahora bien, el artículo 5º establece que: “El remate, entrega o destrucción prescriptos en los artículos precedentes podrán demorarse, mediante auto fundamentado, el tiempo que el tribunal estime necesario”.

En tanto, los artículos 10 bis y 10 ter de la Ley 20.785 regulan cuestiones particulares respecto de aeronaves y automotores.

“ARTICULO 10 bis. - En los supuestos de aeronaves y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellas, el mismo no sea habido o, citado legalmente, no compareciere a recibirlo, regirán las siguientes disposiciones:

a) Los organismos oficiales encargados de su depósito, transcurridos SEIS (6) meses desde el día del secuestro solicitarán al juez que haga saber si existe algún impedimento para su remate.

Si dentro de los DIEZ (10) días de recibido el pedido el juez no hiciere saber su oposición por resolución fundada, el organismo oficial encargado del depósito dispondrá la venta en pública subasta a través de las instituciones bancarias mencionadas en el artículo 2º, en las que se depositará el importe obtenido de la venta.

Si el juez se opusiere al remate, el bien permanecerá en depósito. Cada TRES (3) meses, contados a partir de la negativa que hubiere formulado el juez, se podrá librar un nuevo pedido a los mismos fines y con iguales alcances.

b) El importe obtenido de la venta devengará el interés al tipo bancario correspondiente.

c) Si con posterioridad a la subasta, correspondiere la devolución del bien a quien acreditar derecho sobre el mismo, deberá abonársele el producido de la venta con más los intereses al tipo bancario.”

“ARTICULO 10 ter. - En los supuestos de automotores, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no sea habido o, citado legalmente, no compareciere a recibirlo, transcurridos SEIS (6) meses desde el día del secuestro, o bien en un plazo menor y la autoridad judicial así lo dispusiera, la autoridad encargada de su depósito y custodia procederá a gestionar su descontaminación, compactación y disposición como chatarra. El referido plazo de SEIS (6) meses podrá ser ampliado por el magistrado interviniente por resolución fundada, en la que deberá indicar las razones por las cuales no resulta aplicable el procedimiento de reducción.

Si con posterioridad a la descontaminación, compactación y disposición en calidad de chatarra, correspondiere la devolución del bien a quien acreditare derecho sobre el mismo, deberá abonársele el valor de la chatarra resultante, previa deducción de los importes originados por la descontaminación y compactación.”

Los artículos 3, 4, 5, 10 bis y 10 ter de la Ley 20.785 deben ser interpretados a la luz del artículo 23 del Código Penal que prevé que *“...Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades...”*.

En idéntico sentido, el 15 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia, dictó la Acordada N° 2/2018 (<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=108429>), que regula el régimen de administración y disposición de efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales. En ella se reconoció que en las causas penales es frecuente que se disponga con relación a bienes de cualquier naturaleza que, por distintos motivos, no pueden ser entregados a sus dueños y respecto de los cuales es imperioso asegurar su conservación y preservar su valor económico durante el proceso con vistas al eventual decomiso que se dicte con posterioridad. Y que la custodia y mantenimiento de aquéllos requiere la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas. Por tanto, resulta de toda justicia asignarle a estos bienes una finalidad de utilidad pública de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos.

A esos fines, además de contar con una *"Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal"*, la Corte Suprema creó una comisión judicial para el monitorear el cumplimiento del reglamento y estableció que la disposición de bienes se hará por intermedio de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte.

Siguiendo el criterio de utilidad pública, en diversas causas por hechos de corrupción, los jueces intervinientes han dispuesto la entrega de activos secuestrados a fuerzas de seguridad (embarcaciones y aeronaves) y a la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación (maquinaria vial).

Así a título de ejemplo cabe señalar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, de fecha 15 de abril de 2020, dictada en el marco de la Causa n° 2.627 (CFP 3.017/13), “B., L. A. y otros s/Encubrimiento y otros”, a través de la cual y en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria provocada por el COVID-19, se resolvió conceder distintos bienes embargados a favor del Ejército Argentino, en calidad de depositario judicial y hasta que culmine el proceso judicial (no de manera definitiva), con un fin de utilidad pública y para que se utilicen en el combate contra la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre ellos se destacan 17 contenedores para su utilización como módulos habitacionales, un autoelevador, equipos de protección sanitaria, guantes, mascarillas y otros insumos de resguardo.

En casos más complejos, como por ejemplo, la intervención o la administración de unidades económicas productivas, que involucran a un conjunto de activos, los jueces podrán requerir la asistencia de auxiliares que, con mayor especialización en la administración de las actividades que corresponda, deberán velar por conservar el valor de los activos y la continuidad de la actividad productiva de que se trate.

Cabe destacar en este punto, que la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, creada con el objetivo de desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos y fenómenos criminales, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad económica compleja ha desarrollado y puesto a disposición de los Fiscales una Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos (disponible en <https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2017/09/Gu%C3%ADa-de-Medidas-Cautelares-para-el-Recupero-de-Activos.pdf>), en la cual se abordan los pormenores de la etapa del recupero de activos vinculada con la adopción de medidas cautelares. El documento se propone como una herramienta de trabajo que incluye un análisis teórico y práctico de los múltiples desafíos que importa esta crucial etapa de la estrategia de recupero.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La posibilidad de dictar una medida cautelar tendiente a la designación de un interventor administrador en el marco de un proceso penal ha sido reconocida por la jurisprudencia, que al respecto ha subrayado *“la razonabilidad de la medida a los fines de comprobar el hecho delictuoso”* y *“...a los efectos de hacer cesar las consecuencias del delito investigado y evitar que los perjuicios patrimoniales que se tuvieron prima facie por probados se tornen de imposible reparación”* (CCC, Sala IV, “A., E. J. s/intervención judicial). En sentido similar se ha reconocido su procedencia *“...en el marco de las facultades preventivas de las autoridades de la persecución penal en orden a evitar la consumación de un delito tentado o consecuencias posteriores perniciosas del delito consumado, fines plenamente compatibles con los propósitos de asegurar la correcta averiguación de la verdad...”*, y para salvaguardar los intereses del damnificado que *“...podrían verse perjudicados por la inacción del juez penal que advierte una acción delictiva que podría hallarse en curso de realización...”* (CCCFed., sala II causa 28.276 “Alemany, R. y otro s/intervención judicial”, reg. 302 del 13/5/1997). En el marco de causas vinculadas a corrupción la medida fue ordenada en la ya citada Causa n°3017/13 “Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento” respecto de las principales empresas

vinculadas a la maniobra de lavado de activos.

Con respecto a la prohibición de innovar, podemos citar un caso de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el que se ordenó una medida de no innovar a los efectos de impedir que los activos que se pudieran encontrar en una caja de seguridad fueran sustraídos hasta tanto se registrara su contenido, por considerar que: *“se encontraban activas durante la realización de las maniobras ilícitas e incluso algunas de ellas fueron dadas de alta en dicho marco, por lo que en ellas se podría estar ocultando el producto o provecho del delito investigado”* (Juzg. Fed. de Paso de los Libres, “Av. Posible delito de acción pública - infracción leyes 24.469, 19.365 y art. 303 Código penal”, causa n° FCT 3084/2016, rta: 13/06/2017). La medida también se aplicó para impedir que una empresa distribuya dividendos o que modifique su composición accionaria (Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, “UIF s/ denuncia” (causa Nro. 32191/2013, Incidente N° 28, 03/10/14.).

245. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

La administración y custodia de los bienes secuestrados o afectados a medidas cautelares en procesos penales se encuentra a cargo de los jueces que entienden en las causas en las que aquellas medidas hayan sido ordenadas.

Las cuestiones atinentes a la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en causas penales de competencia de la justicia nacional y federal deben ajustarse a las previsiones de la Ley 20.785, del 11 de octubre de 1974, conforme a las reglas expresadas más arriba.

Dado a que los jueces penales que disponen las medidas precautorias sobre un activo o un conjunto de activos en una causa penal, no necesariamente cuentan con la especialización y los conocimientos necesarios para su correcta conservación y administración, que permita preservar el valor y, en su caso, la continuidad de las actividades productivas en curso, los jueces podrán requerir la asistencia de auxiliares de la justicia que cuenten con mayor especialización en cada caso, quienes actuarán en representación del juez y deberán rendir cuentas respecto de su gestión.

En cambio, en lo que respecta a la administración de los bienes sujetos a las acciones civiles de extinción de dominio (DNU N° 62/2019) se ha optado por asignarle a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo especializado dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la gestión de activos cautelados en estos procesos. Ello permite una administración profesional acorde a la naturaleza de cada tipo de bienes, contando con personal especializado y en condiciones de efectuar una planificación previa a la disposición final de los activos, evaluando costos, riesgos, etc. asegurando que los bienes tengan una correcta preservación durante el proceso para mitigar el riesgo inherente de depreciación del valor y deterioro de los activos en el tiempo.

Por medio del Decreto n° 598/2019, del 29/08/2019, se dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 1º.- Instrúyese a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, para que proceda a la inmediata enajenación de los bienes que ingresen al patrimonio de los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el inciso a. del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, provenientes de decomisos ordenados por resoluciones judiciales, salvo que se disponga un destino específico para su uso y/o utilización.

ARTÍCULO 2º.- En caso que los bienes decomisados se encuentren ubicados en

el extranjero, la disposición de los mismos se realizará adoptando mecanismos idóneos, adaptados a las modalidades del país en que se realice la misma, aplicando sea cual fuera el procedimiento, los principios rectores de publicidad, competencia de precios e igualdad de trato a los oferentes, pudiéndose requerir la intervención de entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que para la mejor y más eficiente gestión de los procedimientos que se sustancien en los términos del artículo 2° del presente, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO podrá requerir al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO la realización de aquellas gestiones y trámites necesarios y conducentes para la enajenación de los bienes ubicados en el extranjero.

ARTÍCULO 4°.- El producido de la venta de bienes que ingresen al patrimonio del Estado Nacional provenientes de decomisos ordenados por resoluciones judiciales, deberá distribuirse de conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

Si. El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO) antes mencionado.

55. Cooperación internacional para fines de decomiso

246. Párrafo 1 del artículo 55

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La ley argentina de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley N° 24.767) y los tratados multilaterales y bilaterales firmados con otras naciones contemplan normas adecuadas para que las autoridades de la República Argentina brinden asistencia jurídica a los fines del embargo preventivo e incautación de bienes.

El trámite de las medidas necesarias para satisfacer los requerimientos de las autoridades extranjeras debe prestarse a la luz del principio general de cooperación establecido en el artículo 1° de la ley 24.767, en el sentido de que “la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél”; requiriendo así mismo que “Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda”.

Los pedidos de cooperación ingresan por vía diplomática (Autoridad Central) y son remitidos para su ejecución al Ministerio Público Fiscal. En caso que sea necesaria la intervención de un Juez, como lo sería en caso de ejecución de una orden de decomiso dictada en el extranjero, el MPF representa el interés por la cooperación y por la ejecución de la orden de decomiso. En estos casos es la autoridad judicial competente la que debe darles intervención a los representantes del Ministerio Público Fiscal. Pero en esos casos serán los

fiscales de la jurisdicción y no la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación quienes ejerzan ese rol.

En virtud de ello, en el trámite interno de la cooperación el MPF tiene un rol fundamental.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es Autoridad de Aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos de América- Ley N° 24.034-. En consecuencia, si se recibiera una solicitud de dicho país librada en el marco de la Convención proveniente de los Estados Unidos de América, se tramitará bajo las previsiones del citado Tratado y de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767, que regula la tramitación interna de la solicitud que ingresa a nuestro país.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha recibido solicitudes de los Estados Unidos que requieran el decomiso de los instrumentos, productos o frutos del delito, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Tratado.

247. Párrafo 2 del artículo 55

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En forma análoga a la respuesta al punto 1, tampoco se han recibido solicitudes de los Estados Unidos que requieran la identificación y embargo preventivo, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 14 del Tratado.

Como se ha mencionado en los comentarios de los artículos precedentes, el Código Penal argentino, en su artículo 23 prevé también el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho. Este concepto fue tradicionalmente equiparado a los instrumentos del delito. Dicha conclusión es coherente con la redacción de este artículo anterior al año 1999 la cual disponía que “La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito...”

Despejando toda duda sobre el alcance de este concepto, el párrafo 9° del artículo 23 del Código Penal, en su actual redacción enumera una serie de bienes o derechos patrimoniales que pueden ser considerados instrumentos o efectos del delito y sobre los que pudiese recaer el decomiso. En ese sentido el párrafo comentado expresa que: “El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.”

Por su parte el art 518 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) en su último párrafo dice que “las medidas cautelares podrán dictarse antes del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen”.

La jurisprudencia de nuestro país ha convalidado la facultad de los jueces de adoptar medidas precautorias sobre los bienes, desde el inicio de las actuaciones, es decir, antes del auto de procesamiento e incluso antes de la

convocatoria a prestar declaración indagatoria, siempre que se encuentren configurados los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

A ello cabe agregar que con el objetivo de desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos y fenómenos criminales, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad económica compleja se creó en el ámbito de la Procuración General Nación la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes que luego fue incorporada a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación (art. 33 inc. g de la Ley 27.148).

Considerando que las posibilidades reales de asegurar activos para su recupero en las causas de corrupción dependen de su previa identificación y localización, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN recaba información y asiste a las Fiscalías en el desarrollo de investigaciones patrimoniales dirigidas a ese fin. Asimismo, se trabaja sobre la información relacionada a las medidas cautelares para asegurar bienes, advirtiendo sobre la necesidad de solicitarlas desde el inicio de las actuaciones, identificando activos concretos y verificando si las medidas han quedado efectivamente trabadas o se han descuidado aspectos formales como su inscripción registral o la notificación al afectado.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Como fue mencionado en el Artículo 51, la **Causa 17.459/2018: "M, H D y otros s/ lavado de activos" (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, Secretaría n° 21)** cuenta con requerimientos de asistencia jurídica internacional tendientes a hacer efectivos en el exterior medidas de afectación sobre una gran cantidad de inmuebles. El juez a cargo de la investigación envió, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como Autoridad Central en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con los Estados Unidos de América -Ley n° 24.034-, dos requerimientos de asistencia jurídica internacional a la Autoridad Central de ese país a fin de asegurar el recupero de una gran cantidad de bienes inmuebles radicados en esa jurisdicción.

248. Párrafo 3 del artículo 55

3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, en relación a los requisitos formales de la solicitud (art. 46.15 de la CNUCC al que refiere el párrafo que se comenta), el art. 69 de la Ley N° 24.767, que regula los requisitos que debe poseer cualquier pedido de asistencia jurídica en materia penal, incluso a los fines de solicitar un decomiso (conforme el art. 97), dispone que la solicitud de asistencia debe formularse por la vía diplomática y que debe contener los siguientes datos: autoridad de la que proviene el pedido; una descripción clara del hecho delictivo que motiva el pedido, con referencias precisas acerca de la fecha, el lugar y circunstancias en que se cometió y los datos personales del autor y la víctima; la tipificación legal y la pena que corresponden al hecho; el objeto de la solicitud y todas las circunstancias cuyo conocimiento sea útil para asegurar la eficacia de la asistencia; los datos personales de los funcionarios y representantes de las partes que hayan sido autorizados por el Estado requirente para participar en los procedimientos solicitados.

Con relación al resto de la información solicitada, debe tenerse presente que, el artículo 2° de la Ley 24.767 establece el principio de subsidiariedad, complementariedad e interpretación entre la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal y los tratados suscriptos por el país, al disponer que: “Si existiera un tratado entre el Estado requirente y la República Argentina, sus normas regirán el trámite de la ayuda. Sin perjuicio de ello, las normas de la presente ley servirán para interpretar el texto de los tratados. En todo lo que no disponga en especial el tratado, se aplicará la presente ley”.

En virtud del principio de subsidiariedad, si existiere Tratado de cooperación que disponga requisitos diferentes a la Ley, habrá que cumplir con los establecidos en el Tratado y la Ley se aplicará en aquello que no disponga (generalmente el procedimiento) y para interpretar al instrumento convencional.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

249. Párrafo 4 del artículo 55

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Sin perjuicio de las previsiones de los artículos 14 y 16 del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos de América- Ley N° 24.034-, el Artículo 1° de Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal establece: “La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél. Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda.

Además, el art. 2 de la Ley N° 24.767 establece el principio de subsidiariedad y complementariedad entre la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal y los tratados suscriptos por el país, es decir, en caso que no exista un tratado -multilateral o bilateral- sus normas regirán el trámite de la ayuda y las normas de la ley interna se aplicarán en aquello que no disponga el Tratado y servirán para interpretar su texto.

Asimismo, en lo que respecta a las medidas de asistencia para la investigación y juzgamiento de delitos, el artículo 73 establece que la legislación argentina regirá las condiciones y formas en que se llevarán a cabo las medidas requeridas, y que si el Estado requirente tuviere interés en una especial condición o forma de tramitación, lo deberá hacer expresamente, en cuyo caso se accederá a la petición siempre que no se vulneren garantías constitucionales.

De igual modo, con relación a la asistencia para el cumplimiento de condenas de decomiso dictadas en el extranjero, el artículo 98 de la Ley 24.767 establece que “*El procedimiento judicial se regirá por las normas de los incidentes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*”; que “*Durante su tramitación podrán adoptarse medidas cautelares*”. Y finalmente que “*Si el Juez dispusiere la ejecución, se procederá según las normas con que ese Código regula la ejecución de sentencias argentinas*”.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

250. Párrafo 5 del artículo 55

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de esta.

¿Cumple su país esta disposición?

(N) No

Proporcione una referencia a la fecha en que se transmitieron estos documentos, así como una descripción de otros documentos que no se hayan transmitido aún.

-

251. Párrafo 6 del artículo 55

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Si no hubiera un tratado pertinente con el Estado Requirente, la solicitud ingresaría a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es decir, por la vía diplomática, y su tramitación interna en nuestro país se regiría por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Artículo 3 de la citada Ley establece que se podrá prestar ayuda a un Estado con los que no nos vincula un Tratado bajo ofrecimiento de reciprocidad de dicho Estado. (Artículo 3- En ausencia de tratado que la prescriba, la ayuda estará subordinada a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad”).

Más allá de eso, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción puede ser empleada como base de derecho para dar curso a los requerimientos de asistencia jurídica internacional en casos por los delitos allí previstos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha interpretado de manera uniforme en numerosos precedentes, entre ellos el caso “Ralph”, ya referenciado.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

252. Párrafo 7 del artículo 55

7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El artículo 3 del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos de América- Ley N° 24.034- prevé como causales potestativas de denegación de la asistencia las siguientes: a) la solicitud se refiere a un delito político o a un delito previsto en el código militar pero no en el derecho penal ordinario, o b) el cumplimiento de la solicitud puede perjudicar la seguridad u otros intereses esenciales similares del Estado requerido. Sin perjuicio de lo expuesto, nuestro país podrá no hacer lugar a la medida si no se brindan información que justifique la adopción de las medidas (Artículo 14 del Tratado).

Ministerio Público Fiscal:

La Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal no establece restricciones para la asistencia jurídica internacional y/o la adopción de medidas cautelares, en función del escaso valor de los bienes. Sin embargo, según el artículo 100 de la Ley 24.767, la República Argentina podrá requerir al Estado requirente que se haga cargo de los gastos extraordinarios que demande la ejecución de una condena de decomiso dictada en el extranjero.

En los supuestos de asistencia para la ejecución de una condena de decomiso, el artículo 95, inciso d, condiciona la viabilidad de la cooperación aplicando mutatis mutandi, las reglas para la extradición en los casos que el delito que motive el pedido de cooperación fuese un delito político y/o el proceso en el que aquella sea solicitada evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el o la religión de las personas involucradas o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio.

En el caso de la cooperación internacional para medidas de investigación y enjuiciamiento, el artículo 68 de dicha ley prevé que, si el requerimiento consiste en una medida de secuestro de bienes, registro domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas, como acciones idóneas para la localización y rastreo de activos, se requerirá que dicho hecho constituya delito en la Argentina. Caso contrario, la cooperación podrá ser denegada.

En similar sentido, el artículo 72 establece que *“Si el cumplimiento del pedido pudiese entorpecer una investigación penal en trámite en la Argentina, se podrá disponer el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la ejecución, de lo que se informara al Estado requirente”*. Por otro lado, según el artículo 80, *“El envío de documentos originales u objetos, podrá condicionarse a la oportuna devolución”*.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

253. Párrafo 8 del artículo 55

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tal como ya se señalara anteriormente, no se han recibido solicitudes de los Estados Unidos requiriendo esta clase de medidas. Sin perjuicio de lo expuesto, es práctica habitual entre las Autoridades Centrales de ambos países intercambiar consultas antes de proceder a realizar cualquier acción que pueda perjudicar la investigación del Estado Requirente.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

254. Párrafo 9 del artículo 55

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El inciso 3 del artículo 14 del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos de América- Ley N° 24.034- prevé expresamente esta cuestión (3. La autoridad central del Estado requerido podrá exigir que el Estado requirente se someta a las condiciones que se estimen necesarias para proteger los intereses de terceras partes en el documento, antecedente o efecto que haya de trasladarse).

Según el artículo 98 de la Ley 24.767, la cooperación internacional a los fines del reconocimiento y ejecución de sentencias de decomiso se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento judicial regido el derecho interno.

En tal sentido, el artículo 23 del Código Penal dispone expresamente, en relación al decomiso, que las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, deben ser decomisadas en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, **exceptuando los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.**

También, la norma habilita el decomiso (y por tanto también las medidas cautelares) contra terceros no legitimados pasivamente en el proceso penal, aún cuando se trate de derechos de terceros a título gratuito. Así, establece que “cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos. Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado a un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste”.

En este caso el legislador optó por dejar de lado la determinación de la buena o mala fe del tercero, ya que la prueba de esta condición subjetiva puede resultar engorrosa.

En cambio, lo que la norma exige a los fines de preservar los derechos de terceros de buena fe, es la condición objetiva de si el acto de posesión, o transferencia de los activos en cuestión se dio a título gratuito u oneroso.

Con ello no se asume que el título gratuito importe una presunción de mala fe,

sino que la fórmula empleada tiende a evitar un nuevo daño o que el decomiso no implique para el tercero un perjuicio concreto, ya que este tercero nunca dio nada a cambio para obtener el bien, así que se asume que nada pierde. Eventualmente el único perjuicio que sufrirá será la imposibilidad de seguir disfrutando de los activos que se decomisen.

Esta línea de interpretación es acorde con lo prescripto, por ejemplo, en los artículos 337 y 339 del Código Civil y Comercial de la Nación. En estos supuestos se prevé que quien obtuvo un bien de buena fe y a título gratuito sólo debe responder en la medida del enriquecimiento, es decir por el bien adquirido y sus frutos.

En esa línea, y analizando los alcances de la reforma se sostuvo que *“...la nueva redacción del art. 23 del C.P., en cuanto admite el decomiso del provecho del delito que hubiese beneficiado a una persona jurídica, cuando los autores o partícipes hubiesen actuado como sus representantes, órganos o mandantes, no se revela violatoria del derecho de propiedad (...). Es que subyace a esta modificación la misma premisa sobre la que se apoyaba la redacción original del art. 23 del Código Penal y que consiste en que la adquisición del derecho de propiedad sólo puede responder a un justo título, mas no a un hecho ilícito . Esta concepción -que deja a resguardo los derechos adquiridos por el tercero de buena fe- no sólo se deriva de los principios generales del derecho y de las disposiciones del Código Civil -por ej., art. 2610 del CC- sino que también se ha positivizado en el ámbito internacional”*.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Según datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal, con estos alcances fue ordenado el decomiso de bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de terceros en el marco de la causa vinculada al “Cártel de Juárez” indicando *“se deberá proceder al decomiso de los siguientes bienes que fueran adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico internacional, destacándose que se encuentran firmes todas las resoluciones por las cuales se dispusiera el rechazo de los pedidos de restitución incoados por quienes figuran como titulares registrales, (...) quienes no pudieron acreditar su legítimo origen, como tampoco, su condición de terceros adquirentes onerosos y de buena fe”*.

255. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

56. Cooperación especial

256. Artículo 56

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará adoptar medidas que le faculden para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resume) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

La República Argentina, a través de las autoridades encargadas de llevar adelante investigaciones penales, forma parte de una serie de redes a través de las cuales se transmite información en forma permanente con otras autoridades de diversos países. En las mismas redes también participan las Autoridades Centrales o Representaciones Diplomáticas.

La República Argentina forma parte de las siguientes redes en materia de cooperación penal:

- Red de Cooperación de la Organización de Estados Americanos.
- IberRed (utilizado para cooperación penal, civil y comercial).
- RRAG de GAFILAT (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT).
- Red Especializada de “Fiscales contra la Corrupción” de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
- Del órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial (EUROJUST). Si bien la Argentina no es un Estado Miembro, participa de esta red como tercero, designando puntos de contacto para la cooperación.

Por otro lado, como fuera previamente mencionado en este Capítulo, corresponde destacar que la República Argentina, a través de su Unidad de Información Financiera (UIF), forma parte del Grupo Egmont, en el marco del cual se realiza un intercambio espontáneo y constante de información referida al lavado de activos y al financiamiento de terrorismo. A través de la Red segura del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) se encuentra facultada a emitir y recibir “divulgaciones espontáneas”, lo que implica compartir de manera informal y confidencial, información que puede ser de interés para la contraparte. En tal sentido, remitimos a lo allí analizado y a las estadísticas allí aportadas, por razones de brevedad y para evitar reiteraciones innecesarias.

También y de forma coordinada, el Ministerio de Economía, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y otros organismos con facultades reguladoras, participan con los Estados Unidos de América del “US-Argentina Dialogue on Illicit Finance (AUDIF)”. Dicho Diálogo tiene por objeto la cooperación para enfrentar las actividades ilícitas financieras. Entre otras iniciativas, se trabaja en el facilitamiento de la cooperación e intercambio de información en casos de criminalidad económica y lavado de activos (test cases).

Asimismo, corresponde señalar que la Policía Federal Argentina es miembro de INTERPOL, a través de un Departamento específico, y consecuentemente de la Red Mundial de Puntos de Contacto sobre Recuperación de Activos.

Como firmante de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la República Argentina es miembro del Working Group on Bribery de la OECD y miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción participan regular y activamente de las reuniones de agencias de cumplimiento de la ley al amparo de este Comité (Law Enforcement Officials Informal Meeting).

A nivel regional, la Argentina preside la red latinoamericana Latin America & Caribbean Anti-Corruption Law Enforcement Network, cuya primera reunión se hizo en Buenos Aires en Septiembre de 2018.

A través de las redes mencionadas, y conforme las condiciones propias de cada una de ellas, se realiza un fluido intercambio de información entre la que se encuentra la vinculada con la comisión de los delitos tipificados en la CNUCC y el recupero su producto.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

257. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

57. Restitución y disposición de activos

258. Párrafo 1 del artículo 57

1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho interno.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

En caso de que no haya un tratado específico en la materia, nuestra legislación interna sobre asistencia mutua legal (Ley N° 24.767) dispone en materia de restitución de bienes decomisados que el dinero o los bienes obtenidos serán depositados a la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el que los transferirá o entregará a las autoridades del Estado requirente debidamente acreditadas (art. 101 de la Ley N° 24.767).

Por lo demás, con respecto a la disposición de los activos, la ley 24.767 adopta la práctica de compartir los bienes, al disponer que la Cancillería puede convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución queden en poder de la Argentina (art. 96).

Según el artículo 97, al Ministerio Público Fiscal le corresponde representar el interés por la ejecución durante el trámite judicial para cumplir con la asistencia internacional.

El artículo 98 establece que el procedimiento judicial para la ejecución del decomiso se registrará por las normas de los incidentes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y durante su tramitación podrán adoptarse medidas cautelares.

El mismo artículo determina que si el Juez dispusiere la ejecución, se procederá según las normas con que ese Código regula la ejecución de sentencias argentinas (artículos 499 a 516 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Las disposiciones previstas para la cooperación internacional a los fines del reconocimiento y ejecución de sentencias de decomiso dictadas en el extranjero son coherentes con el artículo 23 del Código Penal, ya que si bien dispone que los decomisos ordenados en causas penales por tribunales nacionales deben ser en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, el mismo artículo exceptúa los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Es decir que si los bienes obtenidos a partir del hecho ilícito pertenecen a un Estado extranjero nunca será procedente su decomiso, sino que se impone su restitución y/o la reparación a las víctimas del delito.

Al respecto también es preciso señalar, que el artículo 29 del Código Penal recepta los principios de restitución y reparación del daño a la víctima, disponiendo que: *“La sentencia condenatoria podrá ordenar: 1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 3. El pago de las costas”*.

Como ya se informó anteriormente, el artículo 30 del Código Penal es el que establece el orden de prioridad entre la reparación y el decomiso de los instrumentos o el producto del delito, determinando que: *“La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa”*. Y, en caso de que los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas deberán ser satisfechas en el siguiente orden:

1. La indemnización de los daños y perjuicios.
2. El resarcimiento de los gastos del juicio.
3. El decomiso del producto o el provecho del delito.
4. El pago de la multa.

Finalmente el artículo 31 del Código Penal establece que la obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito. Según el artículo 827 del Código Civil y Comercial de la Nación, una obligación con pluralidad de sujetos y originada en una causa única es solidaria cuando su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

En tal sentido, y a modo ilustrativo podemos mencionar la **Causa n°. 1338 caratulada “Bofill, Alejandro Arturo y otros s/inf. art. 174 inc. 5° en función del art. 173 inc. 7° del Código Penal” (conocida como Tandanor)** en la cual, en el mes de septiembre del año en curso (2018), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, condenó a 3 personas como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y a otras 3 como partícipes secundarias. Asimismo, ordenó la inmediata restitución al Estado Nacional Argentino del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN) ubicado en la zona norte de esta Ciudad. Finalmente, también dispuso la reposición al estado anterior de la comisión del delito a fin de retrotraer la situación de dominio del paquete accionario de la sociedad Talleres Navales Dársena

Norte SA al momento anterior al proceso licitatorio e inscribir esas acciones a nombre del Estado Nacional Argentino.

Por su parte en el caso de existir víctimas del delito que deben ser indemnizadas, la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto en varias oportunidades que sus derechos se anteponen al decomiso, así ha expresado que se *“...evidenciaría una situación paradójica donde se da preeminencia a aumentar el patrimonio estatal en detrimento del derecho de las víctimas a ser indemnizadas por los autores responsables. En efecto resulta plausible que el decomiso en favor del Estado determine la insolvencia de los encartados, quienes pueden no disponer de patrimonio para cumplir con las reparaciones que se podrían disponer si, luego de vencer múltiples adversidades y obstáculos, las afectadas reclaman judicialmente en el futuro...”* (Sala II Causa N° CPP 990/2015/TO1/CPC1 “Quiroga, José Luis y otros s/ recurso de casación”. Registro N° 472/17).

259. Párrafo 2 del artículo 57

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describe (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Nuestra legislación interna a partir de la modificación introducida por la Ley N° 25.188 de **“Ética en el ejercicio de la función pública”** establece en el art. 29 inc.1 del Código Penal, que “La sentencia condenatoria podrá ordenar: 1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias...” De este modo se incorpora expresamente a nuestra legislación el principio de “Restitución” y “Reposición al estado anterior a la comisión del delito” como una vía de reparación de los daños ocasionados por el delito, y ninguna disposición normativa excluye de la referida regla a los Estados Extranjeros.

El artículo 23 del Código Penal exceptúa expresamente de la regla del decomiso los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. Es decir que si los bienes obtenidos a partir del hecho ilícito pertenecen a un Estado extranjero nunca será procedente su decomiso, sino que se impone su restitución.

La restitución será procedente tanto respecto de los sujetos declarados penalmente responsables por el delito como con relación a quienes, sin haberlo sido, hubieran receptado el objeto del delito. Categoría esta última que debe entenderse abarcativa de las personas físicas y jurídicas, atendiendo al fin de la norma y ante la inexistencia de un motivo razonable que justifique realizar tal distinción.

El beneficiario de la restitución será quien tuviera legítimo derecho sobre el bien objeto de restitución, sea que se trate de la propia víctima o de un tercero. En ambos casos, por análogas razones, no corresponde diferenciar entre personas físicas y jurídicas ni entre sujetos particulares o públicos.

No necesita petición de parte, puede ser dispuesta de oficio por el juez. Correlativamente, el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para solicitarla, en ejercicio de su función constitucional de actuar en defensa de la legalidad (art. 120 de la C.N.). En otras palabras, la legitimación para peticionar la restitución prevista en el art. 29 del C.P. no presupone ser particular damnificado, ni representar el interés patrimonial del Estado y tampoco haber ejercido la acción civil en la causa penal.

La restitución procede aunque la cosa obtenida por el delito haya sido un bien fungible (dinero).

Por su parte, el art. 403 CPPN dispone expresamente que podrá ordenarse la restitución aunque la acción (civil) no hubiese sido intentada.

En cuanto al orden de preferencia el artículo 30 del mismo cuerpo legal establece que **“La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente: 1. La indemnización de los daños y perjuicios. 2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 4. El pago de la multa”**.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Causa n°. 1338 caratulada “Bofill, Alejandro Arturo y otros s/inf. art. 174 inc. 5° en función del art. 173 inc. 7° del Código Penal” citada en apartados precedentes.

También podemos citar en materia cautelar el precedente en la **Causa N° 6219/01, caratulada “Menem, Carlos Saúl y otros s/ delito de acción pública”**: En la causa, que ya se encuentra en etapa de juicio, se investiga a los funcionarios públicos involucrados en la sustracción del “Predio Ferial de Palermo” del ámbito de la administración pública, mediante su transferencia ilícita a particulares ajenos a la administración y a precio vil. En el mes de septiembre del año en curso (2018) el Tribunal Oral Federal 2 hizo lugar a la medida cautelar de Anotación de Litis del Inmueble solicitada por la titular de la Fiscal General N° 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. La medida procura asegurar al Estado el recupero del bien que ha sido objeto del delito ante el eventual dictado de la sentencia condenatoria (art. 29 CP).

260. Apartado a) del párrafo 3 del artículo 57

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:

a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de

fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tanto el decomiso de los bienes producidos o que resulten ser las ganancias del delito, como así también el principio de restitución o reparación del daño son procedentes para todos los delitos previstos y reprimidos en el Código Penal y en las leyes penales especiales.

Del mismo modo, según los artículos 68 y 95 de la cooperación internacional en materia penal, cuando se trata de medidas de investigación a los fines de la identificación y rastreo de activos, medidas cautelares y/o ejecución de sentencias de decomiso, dicha asistencia es procedente ante cualquiera de los delitos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Es más, para el caso de la asistencia en la investigación y juzgamiento de delitos, el artículo 68 de la Ley 24.767 prevé que *“La asistencia será prestada aun cuando el hecho que la motiva no constituyese delito en la Argentina. No obstante, se requerirá que dicho hecho constituya delito en la Argentina si la asistencia que se requiere consiste en una medida de secuestro de bienes, registro domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas”*.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

261. Apartado b) del párrafo 3 del artículo 57

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:

[...]

b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de los bienes decomisados;

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tal como se indicó en el comentario al párrafo primero, nuestra legislación interna sobre asistencia mutua legal (Ley N° 24.767) dispone en materia de restitución de bienes decomisados que el dinero o los bienes obtenidos serán depositados a la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el que los transferirá o entregará a las autoridades del Estado requirente debidamente acreditadas (art. 101 de la Ley N° 24.767).

El art. 96 de la Ley N° 24.767 dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución, queden en poder de la República Argentina.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

262. Apartado c) del párrafo 3 del artículo 57

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:

[...]

c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tal como se indicó el artículo 23 del Código Penal dispone expresamente, en relación al decomiso, que las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, deben ser decomisadas en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, exceptuando los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Por su parte, de conformidad con el art. 29 del CP, la sentencia condenatoria puede ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias, así como la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba y el pago de las costas.

El orden de preferencia lo establece el artículo 30 del mismo cuerpo legal cuando establece que *“La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente: 1. La indemnización de los daños y perjuicios. 2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 4. El pago de la multa”*.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

En numerosos casos la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto que los derechos de las víctimas del delito a ser indemnizadas se anteponen al decomiso, así ha expresado que se *“...evidenciaría una situación paradójica donde se da preeminencia a aumentar el patrimonio estatal en detrimento del derecho de las víctimas a ser indemnizadas por los autores responsables. En efecto resulta plausible que el decomiso en favor del Estado determine la insolvencia de los encartados, quienes pueden no disponer de patrimonio para*

cumplir con las reparaciones que se podrían disponer si, luego de vencer múltiples adversidades y obstáculos, las afectadas reclaman judicialmente en el futuro...” (Sala II Causa N° CPP 990/2015/TO1/CPC1 “Quiroga, José Luis y otros s/ recurso de casación”. Registro N° 472/17).

263. Párrafo 4 del artículo 57

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

Tal como se mencionó el art. 96 de la Ley N° 24.767 dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución, queden en poder de la República Argentina.

Por su parte, el artículo 100 del mismo cuerpo legal prevé que *“Los gastos extraordinarios que demande la ejecución serán a cargo del Estado requirente”*.

Asimismo, Argentina es parte de diversas Convenciones Internacionales y de Organismos Internacionales que dictan estándares y buenas prácticas en materia de repartición de bienes decomisados entre Estados.

Al respecto, corresponde destacar las más relevantes, además de la propia CNUCC:

A) Convención de Viena (1988)

Artículo 5: DECOMISO

B) Convención de Palermo (2000).

Artículo 12. Decomiso e incautación

Artículo 13. Cooperación internacional para fines de decomiso

Artículo 14. Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados

C) Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999)

Artículo 8

D) Recomendaciones GAFI relacionadas.

(i) Recomendación N° 4. Decomiso y medidas provisionales:

(ii) Recomendación N° 38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso

(iii) Nota interpretativa de las recomendaciones 4 y 38 (decomiso y medidas provisionales)

(iv) Nota interpretativa de la recomendación 38 (asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso)

(v) Recomendación N° 30. Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas

(vi) Nota interpretativa de la recomendación 30 (responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas)

E) Convención de OECD para combatir el soborno transnacional (1997)

Artículo 3 Sanciones

Recomendación XIII.

(ii) Organismos de administración de bienes congelados y decomisados.

(iii) Mecanismos que permitan compartir bienes entre Estados en supuestos de cooperación internacional.

F) Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) 1996

Artículo XV

Medidas sobre bienes

De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

264. Párrafo 5 del artículo 57

5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El art. 96 de la Ley N° 24.767 dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución, queden en poder de la República Argentina.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

265. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

58. Dependencia de inteligencia financiera

266. Artículo 58

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El art. 5° de la Ley 25.246 y modificatorias crea la Unidad de Información Financiera como organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos precedentes (art. 6°).

En este marco, resulta dable señalar que la UIF es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia desde el año 2003, el cual provee una plataforma para el intercambio de información de manera segura, herramienta utilizada para el organismo para intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes extranjeras.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

Estadísticas relativas a intercambio de información por medio de la Red Segura del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (ESW)*:

- SIE (Solicitud de Información Enviada): 188
- SIR (Solicitud de Información Recibida): 83
- DEE (Divulgación Espontánea Enviada): 58
- DER (Divulgación Espontánea Recibida): 202

* Fecha de corte: enero a septiembre 2018.

A su vez, la UIF ha suscripto al 2018, 47 Memorandos de Entendimiento con contrapartes extranjeras con el objetivo de fortalecer el intercambio de información.

267. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

....

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

59. Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

268. Artículo 59

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente capítulo de la Convención.

¿Cumple su país esta disposición?

(Y) Sí

Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno cumplimiento de esta disposición de la Convención.

El 1° de abril de 2019 los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y la República Oriental del Uruguay suscribieron un Acuerdo Marco para la Disposición de Bienes Decomisados, que constituye un significativo avance en la cooperación jurídica internacional.

Se trata del primer acuerdo bilateral que suscribe la República Argentina con el objeto de establecer los mecanismos de cooperación y negociación para la recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional, cometidos en el otro país.

El acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional (<https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-uruguay-suscribieron-acuerdo-marco-para-la-disposicion-de-bienes>).

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina cuenta con la facultad y los mecanismos legales necesarios, que le permiten suscribir convenios y memorandos de entendimiento con Organismos análogos de otros países, con el propósito de lograr un mejor y más ágil intercambio de información, funcionando este sistema del mismo modo analizado respecto de los tratados internacionales de carácter bilateral, pero a nivel de UIF.

Proporcione ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

La UIF Argentina, a fecha de septiembre/2018 suscribió 46 MOU's con sus homólogas extranjeras y organismos multilaterales. En este sentido se remite a lo ya expuesto en el artículo 14, en particular al cuadro con el detalle de los MOUs suscriptos por esta UIF, así como también al detalle aportado en relación a los Convenios de Cooperación firmados por esta UIF con otros organismos gubernamentales como la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Seguridad -entre otros- y los proyectos de cooperación internacional y working groups con organismos como el BID, o países como Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos -entre otros-.

269. Asistencia técnica

Las siguientes preguntas sobre asistencia técnica se hacen en relación con la totalidad del artículo bajo revisión.

Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mejorar la aplicación del artículo objeto de examen y señale los problemas concretos que se le hayan presentado a ese respecto.

Al momento del envío de este informe, no se cuenta con esta información.

¿Necesita asistencia técnica para aplicar este artículo? En caso afirmativo, indique el tipo de asistencia que requeriría. Por ejemplo:

(NO) No se necesita asistencia técnica

¿Se le está prestando ya alguna asistencia técnica? En caso afirmativo, describa en términos generales la naturaleza de la asistencia y proporcione información sobre los donantes.

B. alguna información

B. alguna información

270. Información adicional

Sírvase suministrar toda información adicional que, a su juicio, sea importante que examine en estos momentos la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en relación con diferentes aspectos de la aplicación de la Convención o con dificultades al respecto que no se hayan mencionado *supra*.

Sírvase suministrar toda información adicional que, a su juicio, sea importante que examine en estos momentos la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en relación con diferentes aspectos de la aplicación de la Convención o con dificultades al respecto que no se hayan mencionado *supra*